

ub X-54-146354-2

R.O. 47.829

5-
7D

III

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL

LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DETERMINANTES DE LA
VINCULACIÓN CON EL DERECHO LOCAL

Estudio sobre el Derecho local Altomedieval y el
Derecho local de Aragón, Navarra y Cataluña
(siglos IX-XV)

Trabajo realizado para la obtención
del título de Doctor en Derecho por
la Licenciada D^a Pilar DOMÍNGUEZ
LOZANO, bajo la dirección del Dr.
D. Julio D. González Campos,
Catedrático de D. internacional
privado de la U.A.M.



Madrid, abril de 1986

INDICE

Introducción.

I. LA VECINDAD CIVIL COMO PUNTO DE CONEXION PARA DETERMINAR LA LEY PERSONAL EN LOS CONFLICTOS INTERNOS.

1. La vecindad civil en los artículos 14 al 16 del Código Civil: una noción de reciente historia. 2
2. La vecindad civil: una noción amenazada:
 - A) La vecindad civil y las Comunidades Autónomas. 10
 - B) Vecindad civil o residencia habitual. 14
3. Conclusión: la vecindad civil noción problemática. 16

II. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.

1. Necesidad de una reconstrucción histórica: posibles fases para un estudio del tema. 21
2. Precisión del objeto del presente estudio. 23
3. Metodología del presente estudio. 26

III. SISTEMATICA DEL PRESENTE ESTUDIO. 27

Sección 1ª: EL DERECHO LOCAL ALTOMEDIEVAL (siglos IX al XII).

Capítulo Único: EL DERECHO LOCAL EN LOS SIGLOS IX AL XII EN LOS DIFERENTES REINOS PENINSULARES.

I. INTRODUCCION. 30

II. LAS NOCIONES DE HECHO EN LOS TEXTOS DE LOS SIGLOS IX Y X. . . . 34

III. LOS TEXTOS DE LOS SIGLOS XI Y XII.

1. Los textos del siglo XI y las nociones utilizadas.
 - A) Pobladores, habitantes y hombres del lugar como nociones básicas. 39
 - B) Nociones relativas al conjunto de la población de un determinado lugar. 43
 - C) La noción de vecino y sus caracteres. 43

2. Los textos del siglo XII y las nociones utilizadas.

- A) Pobladores, habitantes y hombres del lugar como nociones básicas. 45
- B) Nociones relativas al conjunto de la población de un determinado lugar. 52
- C) La noción de vecino y sus caracteres. 54

Sección 2ª: EL DERECHO LOCAL DE LOS REINOS (siglos XIII al XV).Capítulo I: EL DERECHO LOCAL DEL REINO DE ARAGON.

- I. INTRODUCCION. 63
- II. EL FUERO DE JACA. 65
- III. EL FUERO DE TERUEL.
 - 1. Introducción. 68
 - 2. Las nociones de hecho. 69
 - 3. Las nociones de carácter indeterminado. 71
 - 4. La noción de vecino y sus diferentes aspectos. 75
 - A) El vecino y el ámbito general de aplicación del Fuero. . 77
 - B) El vecino y la identificación de los miembros de la comunidad municipal. 79
 - C) El vecino como noción relacional. 85
 - D) El vecino como garante de obligaciones. 86

Capítulo II: EL DERECHO LOCAL DEL REINO DE NAVARRA.

- I. INTRODUCCION. 90
- II. EL DERECHO LOCAL DE ESTELLA. (I) EL FUERO DE ESTELLA.
 - 1. Introducción. Las vías de interpretación de los textos. . . 92
 - 2. La interpretación general de las nociones relevantes.
 - A) Las nociones de hecho. Relevancia de las normas sobre competencia judicial. 94
 - B) Las nociones de carácter indeterminado. 101
 - C) La noción de vecino. 102

3. La interpretación comparativa de los textos.

- A) El vecino y el arraigo en la población. 103
- B) El vecino y el proceso de incorporación a la comunidad municipal. 109
- C) El vecino y el problema de la ejecución de las decisiones del juez natural. 111
- D) El vecino como noción sustitutiva de las nociones de hecho. 112

III. EL DERECHO DE ESTELLA. (II) CONCESIONES Y PRIVILEGIOS.

- 1. Las nociones utilizadas. 114
- 2. Interpretación de las nociones empleadas. 116

IV. EL FUERO DE SAN SEBASTIAN Y SUS CONCESIONES.

- 1. Introducción. 120
- 2. Nociones de hecho y nociones indeterminadas. 121
- 3. La noción de vecino. 125
- 4. Las concesiones del Fuero. 126

V. EL DERECHO DE PAMPLONA.

- 1. Introducción. 128
- 2. Concesiones y privilegios. 132
 - A) Textos configuradores del marco jurídico general de los barrios. 134
 - B) Textos determinantes del sometimiento de la ciudad o sus barrios a una autoridad. 143
 - C) Textos reguladores de aspectos internos y organizativos de la ciudad. 150
 - D) Textos relativos a la ordenación de las relaciones entre los barrios. 159
- 3. El Fuero de Pamplona. 177

VI. EL FUERO DE TUDELA. 185

Capítulo III: EL DERECHO LOCAL DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA.

- I. INTRODUCCION. 189

II. LAS CARTAS DE POBLACION Y FRANQUICIA.	192
1. <u>Nociones de hecho.</u>	194
2. <u>Nociones personales referidas a una comunidad local.</u>	202
3. <u>Referencia a criterios personales: domicilio y residencia.</u>	
A) Domicilio.	220
B) Residencia.	228
III. DERECHO LOCAL DE BARCELONA. DERECHO LOCAL DE GERONA.	240
1. <u>Los Usatges de Barcelona.</u>	241
2. <u>Las Costumbres de Gerona.</u>	254
3. <u>La denominada "cláusula de año y día" en los Derechos Locales de Barcelona y Gerona.</u>	259
IV. DERECHO LOCAL DE LERIDA. DERECHO LOCAL DE TORTOSA.	269
1. <u>Las Costumbres de Lérida.</u>	270
2. <u>Las Costumbres de Tortosa.</u>	288

Conclusiones.

I. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXPRESAN LA VINCULACION DE LA PERSONA CON LOS DERECHOS LOCALES.	
1. <u>Población, habitación y moranza en el lugar. Los hombres del lugar.</u>	
A) Población.	300
B) Habitación.	303
C) Moranza.	308
D) Los hombres del lugar.	311
2. <u>Vecinos, conmorantes y cohabitadores.</u>	314
3. <u>Residencia y domicilio en el lugar.</u>	
A) Residencia.	320
B) Domicilio.	322
4. <u>Ciudadano y burgueses.</u>	325

II. LA RELEVANCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL.	328
---	-----

RELACION DE TEXTOS DEL DERECHO LOCAL EXAMINADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.

I. Textos del Derecho Local Altomedieval.	333
II. Textos del Derecho Local de Aragón.	349
III. Textos del Derecho Local de Navarra.	349
IV. Textos del Derecho Local de Cataluña.	358

BIBLIOGRAFIA.

I. Colecciones de textos del Derecho Local de los siglos IX-XV. .	367
II. Obras generales y trabajos monográficos sobre Historia del Derecho Español.	368
III. Obras generales y trabajos monográficos sobre Derecho Inter nacional Privado y Derecho Interregional.	370

Introducción

I. LA VECINDAD CIVIL COMO PUNTO DE CONEXION PARA DETERMINAR LA LEY PERSONAL EN LOS CONFLICTOS INTERNOS.

1. La vecindad civil en los artículos 14 al 16 del Código Civil: una noción de reciente historia.

1. La realidad plurilegislativa o compleja del sistema jurídico español halla su origen en la época medieval; en concreto en el siglo VIII. Y durante los siglos posteriores y a pesar de la sucesión cronológica y evolutiva de diversas realidades, organizaciones y estructuras de carácter político y jurídico, esta situación de complejidad legislativa se ha mantenido como una constante histórica (1).

Así, desde el nacimiento de los Derechos Locales Medievales en las diversas unidades políticas de la Península (como respuesta a unos concretos intereses y necesidades de carácter político, económico y social, y como factor de transformación social y territorial sobre imperativos reconquistadores y repobladores), hasta la realidad actual (marcada por la consagración constitucional de la diversidad jurídica y política); pasando por los esfuerzos históricos de afirmación estricta del valor prioritario y exclusivo de cada uno de los Derechos Territoriales, o de consecución de la unidad jurídica bajo la uniformidad, nuestro sistema no ha perdido su carácter complejo (2).

Esta situación ha comprometido, obviamente, la manifestación legislativa de concretas opciones sobre las vías de determinación del ámbito de vigencia, espacial y personal, de los ordenamientos civiles existentes. La consideración y análisis de cuáles fuesen históricamente esas opciones y cómo se concretasen su régimen y contenido material puede articularse sobre la diferenciación de varias fases relevantes:

(1) En general, sobre los conflictos interlocales, E. VITTA, "Interlocal Conflict of Laws", vol. III, cap. 9 de la International Encyclopedia of comparative law, Tübingen, 1985, y la bibliografía allí indicada. Para España, las referencias de J.D. GONZALEZ CAMPOS, Curso de Derecho Internacional Privado, I (policopiado), Universidad Autónoma de Madrid, 1984, págs. 153 y ss.

(2) C. LASARTE, Autonomías y Derecho Privado en la Constitución Española,

1ª La relativa al período comprendido entre los siglos VIII y XII (Alta Edad Media); 2ª La correspondiente a la consolidación de los Derechos de base territorial, tanto en la vertiente de los Derechos Locales surgidos durante la etapa anterior como en la del nacimiento y desarrollo de los Derechos Territoriales o Generales de cada unidad política; 3ª La de consolidación y predominio del Derecho General de los Reinos, hasta la promulgación de los Decretos de Nueva Planta; 4ª La comprendida entre los Decretos de Nueva Planta y el proceso de codificación unificada que culminaría en la redacción del Código Civil de 1889; 5ª La correspondiente a la elaboración de las sucesivas reformas del Código Civil y 6ª La marcada por la incidencia que sobre la materia tuviera la Constitución de 1978 y el proceso de configuración jurídica de las Comunidades Autónomas.

2. Indudablemente, las fases menos estudiadas y analizadas, al menos desde el prisma de la fijación de los criterios determinantes de la extensión de cada uno de los ordenamientos existentes, han sido las mencionadas en primer y segundo lugar. Siendo, sin embargo y paradójicamente, las etapas a las que con mayor frecuencia se acude para fundamentar prácticamente cualquier argumento a favor o en contra de una concreta opinión sobre la cuestión planteada. Y ello por varias razones: primero, porque el carácter historicista de la diversidad jurídica de nuestro sistema obliga al recurso continuo a los procesos y argumentos de base histórica. Segunda, porque aquéllos fueron los momentos reales del nacimiento de los denominados Derechos Forales. Y tercero, porque la imprecisión e indefinición medievales de los criterios y conceptos jurídicos favorecen interpretaciones polivalentes, si no se procede con anterioridad a una profunda investigación de los factores, ju-

Madrid, 1980. Asimismo, J. DELGADO ECHEVERRÍA, "Los Derechos Civiles Forales en la Constitución", en Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Zaragoza, 1979, págs. 323-352; J.M. PUIG SALELLAS, "La recuperació de l'autonomia legislativa a l'àmbit del dret privat", RJC, 1978, págs. 1055 y ss.; y el examen de L. GARAU JUANEDA, "Comunidades Autónomas y Derecho Interregional", en Constitución, Comunidades Autónomas y Derecho Internacional, Santiago de Compostela, 1982, págs. 135 y ss.; y A. BORRAS RODRIGUEZ, Calificación, Reenvío y Orden Público en el Derecho Interregional Español, Bellaterra, 1984, págs. 10 y ss; y la bibliografía citada en los estudios anteriores.

rídicos o extrajurídicos, que en la Edad Media condicionaron el contendo y aplicación del Derecho (3).

Como habrá ocasión de exponer exhaustivamente a lo largo del presente estudio, el carácter territorial de los Derechos Medievales en los Reinos Peninsulares provocó que los criterios delimitadores del ámbito espacial de su normativa condicionasen y determinasen de manera absoluta cuál era el núcleo personal sometido a ella. Por esto, las nociones personales básicas en la referencia al ámbito personal de aplicación del Derecho implican conceptualmente una clara y concreta vincula-ción persona-territorio, como se verá en las páginas siguientes.

3. Esta caracterización no se verá modificada en la fase síguente. El período de progresivo predominio de los Derechos Generales presentará una coexistencia jurídica entre los Derechos Locales y los Generales marcada por la continuidad en las soluciones de la época anterior; y en el momento en que el Derecho General se impone territorialmente al local, lo único que se favorece es la unidad en la normativa local aplicable en los diversos núcleos integrados en una misma unidad política. De ahí que la noción personal de natural del Reino surja y se generalice, en un principio, como determinante de la aptitud para ocupar un cargo público, exclusivamente y sin afectar a la fijación del sometimiento personal al Derecho (4).

(3) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español, 8ª ed. Madrid, 1981, págs. 138-139. Señala que "El Derecho altomedieval, por su raíz popular, no es un Derecho de un elevado nivel técnico. Por el contrario, tal nivel es muy bajo". En la Baja Edad Media esta situación se modifica por influencia del Derecho Común y el renacimiento de los estudios de Derecho.

(4) Sobre el concepto de "naturaleza", F. DE CASTRO, Derecho Civil de España, t. II, Madrid, 1952, págs. 382-383, y las referencias allí contenidas al Derecho General de Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña. Este autor señala que la naturaleza "dá derecho a los oficios jurisdiccionales y honoríficos y a los beneficios eclesiásticos", diferenciando así al natural del Reino respecto al extranjero. En la tesis doctoral de I. RIBAS ALGUERO (Universidad Autónoma de Barcelona, (1983, inédita), sobre la Delimitación jurídica del concepto de vecindad civil y su problemática actual, se contine abundante

La unidad política bajo la Corona de los Reyes Católicos no supuso la unidad jurídica, y en esta medida no alteraría la situación descrita. En este contexto jurídico se produce el acceso a la Corona Española de Felipe V, y la promulgación de los denominados Decretos de Nueva Planta. Prueba de que en este momento las soluciones jurídicas no se habían visto, con toda probabilidad, alteradas, resulta el hecho de que este mismo monarca, al proceder a la abolición de los Fueros y Privilegios hasta entonces observados en los Reinos de Aragón y Valencia, se dirige a los habitadores, y no a los naturales, de aquellos Reinos.

4. Sin afrontar un estudio en profundidad sobre el tema no puede determinarse cuáles fuesen los condicionantes del proceso que provocó el recurso de la jurisprudencia, al menos y como es bien conocido en el período del siglo XIX inmediatamente anterior y posterior a la elaboración del Código Civil, a los criterios de adquisición de la naturaleza para determinar el Derecho aplicable a las cuestiones pertenecientes al estatuto personal (5). Pero, en cualquier caso, podría señalarse como hipótesis de trabajo: 1. La consideración del valor relevante que el es

referencia a los textos sobre la condición de natural en los antiguos Reinos en págs. 6-38, aunque esta noción resulte irrelevante en la consideración del concepto de vecindad civil. En la publicación de este trabajo: La vecindad civil: problemática en torno a su régimen jurídico y a su prueba, Barcelona, 1984, se omiten las consideración y referencias realizadas en torno a la noción de natural del Reino. En particular, sobre Aragón, J. LALINDE ABADIA, "De la nacionalidad aragonesa a la regionalidad", RJC, t. 72, año LXXII, núm. 3, 1973, págs. 537 y ss.; sobre Cataluña, E. ROCA I TRIAS, "Un de Catalanus quasi in Cathalonia stans - La condición de catalán en el Derecho Histórico -", RJC, t. 77, año LXXVII, núm. 1, 1978, págs. 7 y ss.

- (5) La posición de la jurisprudencia es contradictoria. Así, mientras la sentencia T.S. (sala 1ª) de 14 de diciembre de 1901 aplica el Derecho Histórico de Aragón para determinar la condición de natural de aquel Reino, en cambio la sentencia T.S. (sala 1ª) de 7 de febrero de 1899 recurre al Código de Partida y a la Novísima Recopilación para determinar la condición de natural de Navarra, y no a las normas de Derecho histórico de este Reino. Vid. J.D. GONZALEZ CAMPOS, Curso, cit. en la nota núm. 1, págs. 162-165. En E. ROCA I

tablecimiento, en 1711, de la unidad en la organización judicial tuvo en el recurso jurisprudencial a los criterios de naturaleza para determinar la aplicación personal de uno u otro de los ordenamientos existentes, en la medida en que la fijación de la noción personal de natural siempre respondió a criterios definidos legalmente; y 2. el análisis de las construcciones doctrinales, sus influencias y objetivos (6).

5. La noción jurídica de vecindad había nacido en el ámbito local-municipal, como referencia a la vida de relación existente entre los miembros de una misma comunidad local. La vecindad aludía a la concreta integración personal en esa comunidad. Y éste es el carácter con el que la noción estrena tratamiento legal positivo en el momento del inicio del proceso codificador. En este sentido, mientras la vecindad se mantuvo en los estrictos límites del contexto jurídico municipal no se planteó problema o polémica alguna.

En efecto, la diversa regulación que la noción tuvo en la normativa de régimen local, tanto en la incluida en textos jurídicos municipales como en la incorporada a los diversos proyectos del Código Civil, no representó sino la plasmación de diversas opciones legislativas para una determinada y conveniente ordenación de la vida local. Así, desde la Real Orden de 20 de agosto de 1849 (provisional hasta la promulgación del Código Civil), hasta la Ley de Régimen Local de 1955, e incluso hasta la actual Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, pasando por los textos de las Leyes Municipales de 21 de octubre de 1868, de 20 de agosto de 1870 y de 2 de octubre de 1877, se han visto concretadas legalmente, con mayor o menor acierto técnico y

TRIAS, op. cit., en la nota núm. 4, págs. 41-42, con referencia a Cataluña, afirma que el Derecho histórico de este Principado continuó vigente "hasta la promulgación del Código Civil".

- (6) Al respecto, es significativo que la opinión de E. ROCA I TRIAS, cit. en la nota anterior, se apoye en la Memoria de DURAN I BAS (Vid. op. cit. en la nota núm. 5, pág. 42).

con mayor o menor oportunidad y conveniencia jurídica, las nociones de residente, transeunte, vecino y domiciliado; estableciéndose diversos criterios sobre las condiciones de residencia exigibles y sobre el requisito de la inscripción en el padrón municipal (7).

Pero el planteamiento de lo que ahora podría denominarse problema de la vecindad civil tiene su origen, no en el proceso legislativo local-municipal aludido, sino en el desarrollo de un proceso legislativo civil de carácter paralelo en la materia (8). Su origen concreto se encuentra en el texto de la primera redacción del Código Civil, de 9 de octubre de 1888; el artículo 15, al recoger los criterios unilaterales de sometimiento personal a la normativa del Código en materia de estatuto personal, aludía en su número 3º a quienes "procediendo de provincias o territorios forales, hubieren ganado vecindad en otros, sujetos al Derecho Común". Los largo y complejos debates que en las Cortes se sucedieron en torno al contenido y redacción de este precepto pusieron de relieve las coordenadas del desacuerdo; primero, la derivada de la ausencia de un criterio semejante en los Derecho Forales que funcionase como determinante de la sumisión personal a los mismos; segundo, el necesario recurso a la noción de vecindad recogida en el artículo 12 de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 (por ser la única vecindad existente en el Derecho Español) para dotar de contenido concreto a la conexión del artículo 15 del Código; tercero, la consideración de la inconveniencia de recurrir a un criterio de estas características para determinar el sometimiento personal al Código Civil, o a cualquiera de los Derechos Forales; y cuarto, la crítica del carácter unilateral de la formulación.

El resultado de toda la confrontación parlamentaria (ambigua y confusa) en cuanto a la precisión de los objetivos, y superficial en lo

(7) Para la noción de vecindad en el Derecho español anterior al Código Civil vid. M. COCA PAYERAS, "Vecindad administrativa y vecindad civil. Génesis de un concepto legal", RJC, 1981, núm. 1, págs. 135-144.

(8) Vid. M. COCA PAYERAS, op. cit., en la nota anterior, págs. 144 y ss., quien estudia detenidamente la noción de vecindad en la primera redacción del Código Civil, recogiendo los debates en el Senado y en el Congreso.

que al planteamiento del auténtico problema de Derecho Interregional se refiere) fue la modificación del contenido del artículo 15 del Código Civil por la Comisión General de Codificación (9). Modificación que su puso la incorporación de una definición ad hoc de la vecindad. Así se produjo el nacimiento de la, posteriormente, denominada vecindad civil. Si se nos permitiese tal calificativo, podría ahora afirmarse que la vecindad civil, como punto de conexión en Derecho Interregional Español, surgió como una noción viciada; en la medida en que fue el producto "político" de la confusión parlamentaria, el resultado de un "malentendido", pues nació para resolver un planteamiento técnico de conflicto de leyes interno que nadie se planteó. Por ello, M.Coca Payeras ha podido afirmar que "el concepto aparece de rebote" (10), y el Prof. F. de Castro pudo definir la vecindad civil como "término arbitrario elegido por el legislador para denominar la condición de la persona que, respecto a las relaciones jurídicas del estatuto personal, determina respectivamente la aplicación del régimen de las disposiciones del Código civil y la de cada uno de los regímenes forales" (11). La vecindad civil aparece, pues, como uno de los tres criterios determinantes del sometimiento personal a cada uno de los ordenamientos existentes, en materias de estatuto personal; y su contenido se basa sobre la consideración del tiempo de residencia, matizada por el posible recurso a opciones manifestadas en concretas declaraciones de voluntad.

Desde ese momento, puede diferenciarse, conceptualmente, entre vecindad civil y vecindad administrativa. Esta diferenciación aparece, por consiguiente, como una solución terminológica a un problema planteado, al parecer, terminológicamente por el empleo de la expresión vecindad;

(9) Vid. M. COCA PAYERAS, op. cit. en la nota núm. 7 págs. 174-175.

(10) Vid. M. COCA PAYERAS, op. cit. en la nota núm. 7, pág. 175.

(11) F. DE CASTRO, op. cit. en la nota núm. 4, pág. 470, quien, con referencia a la génesis de la noción, habla de una "comedia de equívocos".

ya que ésta respondía a una noción cuyo contenido no sólo no era unívoco en los diversos ordenamientos coexistentes, sino ni siquiera en las diversas vertientes normativas del propio Derecho del Estado: desde la vertiente municipal (artículo 12 de la Ley Municipal de 1877) hasta la Constitucional (el artículo 1, 4º de la Constitución de 1876 establecía que eran españoles los que, sin carta de naturaleza, hubiesen ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía).

Así, el estatuto personal en Derecho Interregional quedó determinado, conforme a la redacción del artículo 15 del Código Civil de 1889, sobre el juego de tres criterios: ius sanguinis, ius soli + opción y vecindad civil, resultando el precepto "de recíproca aplicación" a todos los territorios de diversa legislación civil. Y ésta será la situación legal de la cuestión hasta la realización de la Reforma del Título Preliminar del Código Civil en 1974.

6. A raíz de la consagración de esta Reforma por Decreto 1836/1974 de 31 de mayo, la vecindad civil se convierte en la única conexión que fija y determina el sometimiento personal a uno de los Derechos Civiles que coexisten en España (12). Se diseña un régimen complejo y mixto, en torno al ius sanguinis y al ius soli, de sujeción a los diversos ordenamientos, englobado bajo la denominación de una noción única: la vecindad civil (13). Y ello supone, con respecto a la situación del anti-

(12) Vid. R. BERCOVITZ y RODRIGUEZ-CANO, "Comentario al artículo 14 del C.c.", en Comentarios a las Reformas del Código Civil, de edit. TECNOS, vol. I, Madrid, 1977, págs. 703 y ss. El mismo autor, "Comentario al artículo 14 del C.c.", en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, de EDESA, t. I, Madrid, 1978, págs. 478 y ss.; J. SAPENA TOMAS, "Vecindad civil y conflictos interregionales", en Curso Monográfico sobre la Ley de bases para la Modificación del Título preliminar del Código Civil, Valencia, 1975, págs. 228 y ss.

(13) El hecho de que la vecindad civil sea el único criterio para determinar la vinculación con los Derechos Civiles en la Reforma de 1974 es subrayado pro M. COCA PAYERAS, op. cit., en la nota núm 7, págs. 175-176.

guo artículo 15, la ampliación del contenido y régimen de la noción. El sistema ahora configurado aparece caracterizado por el recurso preferente al ius sanguinis, matizado por una cierta consideración del ius soli, y por el juego de posibles opciones, y, finalmente, desvirtuado por un proceso de cierta rigidez y automatismo basado en la residencia; todo ello considerado bajo la unidad terminológica de vecindad civil. Conforme al contenido de los artículos 14.1, 16.1.1^a y 15.3, la noción se configura como único determinante de la solución de los conflictos internos de leyes en materia de estatuto personal, tanto en los supuestos de conflictos de primer orden como en los de segundo (en la medida en que también condiciona y define la dependencia personal con relación a una comarca o localidad con especificidad civil propia (14).

2. La vecindad civil: una noción amenazada.

A) La vecindad civil y las Comunidades Autónomas.

1. La propia estructura y formulación de los artículos 14-16 del Código Civil, tras la reforma de 1974, manifiestan el carácter unitario y general de la noción de vecindad civil. Pues la determinación de su régimen y de la función que desempeña en el proceso de aplicación de los diversos ordenamientos civiles coexistentes, así como la operatividad generalizada de la noción con idéntico carácter en todos ellos, obligaría a mantener cualquier tipo de polémica sobre la cuestión en los estrictos límites de la crítica técnica y política al régimen de la conexión y a su efectiva y conveniente aplicación. Sin embargo, la vecindad civil aparece hoy como una noción problemática en Derecho Español por la concurrencia de determinadas razones y circunstancias que afectan, no sólo al régimen y aplicación de la noción, sino a su propia subsistencia.

2. En efecto, la vecindad civil no es una conexión ni unitaria ni general. Puesto que ha sufrido dos importantes procesos de ruptura. El

(14) El examen de los artículos 14 y 15 del Código Civil queda fuera del marco del presente estudio. Vid., fundamentalmente, las obras citadas en la nota núm. 12.

primero se produjo con motivo de la promulgación de la Compilación de Derecho civil foral de Navarra, por Ley de prerrogativa del Jefe del Estado, de 1 de marzo de 1973; ya que sus leyes 11-16 determinan unilateralmente la regulación del régimen sobre la condición foral de navarro, tanto en el caso de las personas físicas como en el de las personas jurídicas (15). El segundo deriva del proceso de concreción positiva del Estado de las Autonomías, surgido de la Constitución de 1978, en los diversos Estatutos de las Comunidades Autónomas existentes y sobre el análisis y contenido de este segundo supuesto incide la tendencia doctrinal, a la que se aludirá posteriormente, de decantación de la vecindad civil como una subnacionalidad.

3. En lo que se refiere al segundo de los procesos indicados, las diferencias comenzaron a surgir ya con el contenido del texto Constitucional. La cuestión se centró, inicialmente, en determinar si la competencia legislativa en materia de vecindad civil correspondía única y exclusivamente al Estado o podía ser atribuida a las Comunidades Autónomas con Derecho Foral propio (16). El artículo 149.1,8 de la Constitución hace expreso reconocimiento de la realidad jurídica foral, otorgando competencias a las Comunidades con Derecho Civil propio en lo relativo a su conservación, modificación y desarrollo. Esta formulación constitucional plantea problemas interpretativos tanto en lo que a la determinación

(15) Vid. R. BERCOVITZ y RODRIGUEZ-CANO, "La vecindad civil en los estatutos de las Comunidades Autónomas", RJC, 1981, núm. 2, págs. 366 y ss.; Para J.D. GONZALEZ CAMPOS, Curso, cit. en la nota núm. 1, pág. 177, los artículos 11-16 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra entrañaron "una quiebra importante" de la uniformidad de la noción, que se ha agrandado con la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

(16) El problema fue objeto de examen en la ponencia sobre "Vecindad Civil" del Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos Civiles Territoriales en la Constitución (Zaragoza, 29 de octubre - 1 de noviembre 1981), págs. 17-30. El Congreso se inclinó, en sus conclusiones 6ª y 7ª, hacia la competencia exclusiva del Estado en esta materia, señalando la necesidad de regular mediante ley general, válida para todo el territorio español, la vecindad civil.

de la vigencia espacial y temporal de los Derechos Forales se refiere, como en lo relativo a las posibilidades de actuación material sobre el contenido del mismo por parte de los órganos legislativos de la Comunidad Autónoma (17). Junto a este problema se plantea otro, de estricto Derecho Interregional, pues el mismo precepto constitucional establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación relativa a la regulación y solución de los denominados "conflictos de leyes". En este sentido, la consideración de la vecindad civil como punto de conexión en Derecho Interregional español en materia de estatuto personal, obligaría a afirmar la competencia exclusiva del Estado en lo que a la legislación sobre el régimen y contenido de la noción se refiere.

Sin embargo, una nueva problemática, en la materia, se ha planteado en una segunda fase del proceso: la elaboración y promulgación de los Estatutos de Autonomía. Estos cuerpos legales introducen un nuevo concepto de adscripción personal, denominado en todos ellos condición política, y que se vincula a la vecindad administrativa (18). Los problemas que plantea la superposición de estos diversos criterios han llevado a la doctrina a mantener diversas posturas: 1) Unificación de criterios, 2) Mantenimiento de la situación actual, y 3) No unificación; pero sí acercamiento de los conceptos. Se ha creado, así, una situación

(17) Vid. la ponencia sobre el "Artículo 149.1,8 de la Constitución" del Congreso de Zaragoza de 1981. Y las referencias doctrinales contenidas en la nota núm. 2.

(18) M. COCA PAYERAS "Condición política, vecindad administrativa y vecindad civil balear (En torno a los arts. 6º y 7º del Estatuto de Autonomía)", Cuadernos de la Facultad de Derecho, Palma de Mallorca, 1985, págs. 9-50. Este autor señala que sólo el Estatuto de La Rioja, en su artículo 6.1, alude a la "residencia administrativa" en un Municipio de la Comunidad, en lugar de a la "vecindad administrativa", y sustituye la "condición política" por la "condición de riojano".

de desajuste legal, provocado por la mutua implicación práctica y conceptual de tres nociones jurídicas diversas y diferenciables: vecindad civil, vecindad administrativa, condición política. La relevancia de la situación se concreta, especialmente, en el hecho de que los artículos 7.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y el 6.2. del Estatuto de Baleares establezcan el sometimiento al Derecho Civil Catalán o Balear de los extranjeros que adquieran la nacionalidad española mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña o Baleares, respectivamente. De esta manera se deroga, en relación a estas dos Comunidades Autónomas el artículo 15.1 del Código Civil. Sin embargo, el aspecto más cuestionable de la solución no radica en el hecho de la derogación mencionada, sino especialmente en los problemas de ajuste legal y aplicación práctica que provoca (19).

4. En esta fase de promulgación de los Estatutos de Autonomía se ha consagrado, además, el elemento de fraccionamiento de la noción de vecindad civil que, como ya se ha indicado, incorporó el texto de la Compilación de Navarra de 1973. En efecto, el proceso autonómico de esta Comunidad se ha caracterizado singularmente por el reconocimiento implícito de una situación política y jurídica especial, al recurrirse, en su caso, no a la formalización de un Estatuto de Autonomía sino a la promulgación de una Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (de 10 de agosto de 1982); confirmando este texto, en su artículo 5.3, la regulación del régimen de la condición civil foral de navarro conforme a lo establecido en la Compilación del Derecho Foral de Navarra (20).

(19) Vid. al respecto R. BERCOVITZ y RODRIGUEZ CANO, "Vecindad civil y nacionalidad", ADC, t. XXXVI, 1983, especialmente págs. 1155-1157.

(20) Vid. J.D. GONZALEZ CAMPOS, Curso, cit. en la nota núm. 1, pág. 177. El artículo 5.3. de la citada Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, dispone que "la adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la condición civil foral de Navarra se regirá por lo establecido en la Copilación".

B) Vecindad civil o residencia habitual.

1. Hoy parece evidente la necesidad de reformar el régimen de la conexión. La deficiencia normativa de los artículos 14 y 15 del Código Civil viene siendo puesta de manifiesto reiteradamente por la doctrina científica y la nueva realidad del sistema jurídico urge una profunda revisión del tema. Ello ha constituido un motivo de constante preocupación y atención por parte de la doctrina y los prácticos del Derecho, así como por la Comisión General de Codificación.

Existe un acuerdo unánime sobre la aceptación de esta premisa: la urgencia de la reforma. Pero sin embargo, no es posible alcanzar un acuerdo semejante sobre el contenido de la misma. Las posturas podrían, inicialmente, reducirse a dos: la sustitución de la noción, y el mantenimiento de ésta con un régimen reformado de adquisición y pérdida.

2. La primera de las posiciones considera conveniente la implantación de una conexión alternativa, en concreto la residencia habitual. A favor de esta sustitución se argumenta que la residencia habitual aparece como conexión alternativa en el ámbito de la nacionalidad, que el sistema presentaría mayor conformidad con la Constitución, y se produciría un acercamiento a la noción de condición política y a las nociones de Derecho Fiscal. Además, se favorecerían resultados más acordes con la realidad histórica de los diversos Derechos Civiles de nuestro sistema, tendente a la consideración de criterios (jurídicos o de hecho) más cercanos al domicilio.

A favor de la segunda de las posiciones indicadas, el mantenimiento de la noción, se han pronunciado, sin embargo, las "Jornadas de Tossa de 1980" y el "Congreso de Zaragoza de 1981" (21). Esta posición parte de la relevancia de los criterios de ius sanguinis y ius soli, pero se diversifica en opiniones distintas a la hora de establecer en qué ha de consistir la reforma del régimen fundamentado en la existencia de residencia. Pues frente a la opinión de que ha de favorecerse la inte-

(21) Vid. R. BERCOVITZ y RODRIGUEZ-CANO, op. cit., en la nota núm. 15 y las referencias en la nota núm. 16 a la ponencia sobre "Vecindad Civil" del Congreso de Zaragoza de 1981. En el mismo sentido L. GARAU JUANEDA, op. cit. en la nota núm. 2, págs. 154-155.

gración y el arraigo en la comunidad humana del lugar de residencia y, consiguientemente, disminuir los plazos exigibles para el cambio de vecindad civil, se mantiene aquélla en virtud de la cual ha de provocarse la permanencia y continuidad de los vínculos con la comunidad de origen y, consiguientemente, aumentar los plazos de residencia exigibles para el cambio de vecindad civil. En todo caso, existe unanimidad en la valoración de un sistema amplio de opciones, para alcanzar, en la medida de lo posible, la voluntariedad de cualquier cambio.

3. En este contexto la Sección 1ª de la Comisión General de Codificación abrió en abril de 1981 un proceso de estudio, análisis y confrontación de las posibilidades y conveniencias jurídicas de modificación del Título Preliminar del Código Civil, para ajustar su contenido a la nueva realidad Constitucional. Se afrontó la necesidad de reforma del régimen de la vecindad civil, especialmente de las disposiciones cuyo contenido había devenido, al menos, de "dudosa constitucionalidad"; y se propuso la sustitución de esta conexión por la de la residencia habitual (22), siendo finalmente rechazada la alternativa (23). En junio de 1983 se alcanzó la redacción de un anteproyecto de reforma de algunos artículos del Título Preliminar del Código Civil, entre ellos los relativos a la vecindad civil como conexión básica en el sistema español de Derecho Interregional; estableciéndose un régimen basado en el ius soli, pero desvirtuado por un sistema de posibles opciones de gran complejidad (24).

(22) La propuesta de redacción del artículo 14.1 formulada por el vocal de la Sección 1ª J.D. GONZALEZ CAMPOS, de 27 de mayo de 1981, disponía que "la sujeción a uno de los Derechos Civiles coexistentes en el territorio español se determina por la residencia habitual. El cambio de residencia habitual no afectará a los derechos de terceros adquiridos de conformidad con la ley personal anterior".

(23) Vid. el apéndice a la ponencia sobre "Vecindad Civil" del Congreso de Zaragoza de 1981, redactado por el Prof. Lacruz Berdejo, para una actitud crítica respecto a la sustitución de la vecindad civil por la residencia habitual; quien alude a que se crearía una vecindad "mobile, qual piuma al vento".

(24) Vid. el Proyecto de Reforma del Título Preliminar del Código Civil (junio - 1983) en Bol. Inf. M.J. núm. 1045, 25 de diciembre de 1985, págs. 81-83.

3. Conclusión: la vecindad civil: noción problemática.

1. Junto a la realidad examinada, como situación actual de la noción de vecindad civil, es preciso señalar la concurrencia de diversos factores que inciden sobre la consideración y valoración real de la conexión. Son factores de índole muy diversa y de difícil apreciación global; pero la influencia de todos ellos ha convertido a la vecindad civil en una noción claramente problemática.

En el análisis de estos diversos aspectos podría distinguirse entre: 1º una dimensión política del problema, 2º una dimensión sociológica, y 3º una dimensión estrictamente jurídica.

2. La dimensión política del problema se configura en torno a la ya mencionada consideración de la vecindad civil como una subnacionalidad (25). En efecto, desde su consagración en el Código Civil hasta hoy, la noción se ha ido decantando como una nacionalidad de segundo grado, o, en palabras de A. Celaya, como "una pequeña nacionalidad dentro de la nacionalidad" (26). En efecto, se ha dotado a la vecindad de un régimen paralelo al de la nacionalidad, sustentado por los mismos princi-

(25) E. PEREZ VERA, Derecho Internacional Privado. Parte especial, Madrid, 1980, pág. 91, afirma que "la vecindad civil va a desempeñar en el seno del Estado español una función similar a la de la nacionalidad en el ámbito internacional". La exposición de motivos del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, de Reforma del Título Preliminar del Código Civil indicó que "criterios procedentes de ésta (la nacionalidad) informan la atribución y la adquisición de la vecindad civil". No obstante, como ha mostrado E. PEREZ VERA, *op. cit.*, págs. 91-97, no existe una total sincronización entre vecindad y nacionalidad.

La Circular de la D.G.R.N. de 6 de noviembre de 1980, aunque pronto fue corregida por otra de 26 de noviembre del mismo año, parecía inclinarse hacia la consideración de una subnacionalidad, vid. sobre este tema J.C. FERNANDEZ ROZAS, "Nacionalidad, vecindad civil y vecindad administrativa: consideraciones sobre el desarrollo constitucional", REDI, vol. XXXIII, núm. 1, 1981, págs. 141-159.

(26) A. CELAYA IBARRA, "Comentario al artículo 5º de la Compilación de Vizcaya y Alava", en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. XXVI, Madrid, 1979, pág. 66.

pios reguladores; favoreciéndose, de este modo, la identificación de la vecindad civil con una ciudadanía regional desde concretas opciones y objetivos políticos. Se trata, en definitiva, de justificar y afianzar la consideración de cada comunidad y territorio foral como una organización política autónoma, distinta y diferenciable del resto. En este contexto, el Derecho Civil propio se convierte, deliberadamente, en uno de los factores más importantes de diferenciación e identidad de carácter regionalista o nacionalista, según los casos (27).

Desde esta consideración, adquieren relevancia y un gran valor significativo afirmaciones como la realizada por el presidente de las casas regionales de Aragón cuando, en febrero de 1985, declaró que los emigrantes aragoneses repartidos por toda España reclaman el derecho "a mantener o recobrar la ciudadanía civil aragonesa y poder regirnos por nuestro Derecho Foral" (28).

3. En la consideración de la dimensión sociológica, destacan dos aspectos de importancia; el primero, se vincula directamente con lo expuesto en el análisis de la dimensión política de la cuestión, y radica en el arraigo y contenido del sentimiento regional, que convierte a la vecindad civil en esencial factor de identidad regional; y el segundo, hace referencia al desarrollo económico y al signo y sentido de las corrientes migratorias internas.

Así, el análisis cuantitativo de las migraciones interiores españolas revela que son, precisamente, las regiones con saldos migratorios negativos las que defienden la necesidad de favorecer la conservación

(27) El Prof. LACRUZ BERDEJO en op. cit. en la nota núm 23, pág. 6, afirma en este sentido que "reconocemos la conveniencia de integrar en las respectivas comunidades regionales a cuantos allí van a vivir y quieren ser integrados, pero no creemos en una integración forzada y sorpresiva, que además llevaría consigo, no ya sólo la ruptura de vínculos con la comunidad de origen, sino, consecuentemente, el reconocimiento de la debilidad, insignificancia e insustancialidad de los Derechos forales españoles".

(28) Declaraciones recogidas en El País, lunes 4 de febrero de 1985, pág. 22, bajo el singular título de "El presidente de las casas regionales de Aragón reclama derechos forales para los emigrantes".

de la vecindad civil de origen como factor de vinculación y enlace permanente con la comunidad propia (por ser la de origen). Mientras que las regiones con saldos migratorios positivos afirman la necesidad de dar prioridad a la función integradora de la vecindad civil, en la medida en que la comunidad propia es más la de la residencia (cuando existe un concreto grado de incorporación y asimilación) que la del origen. Esta relación se pone en evidencia al considerar los saldos migratorios de las regiones aforadas durante un período tan representativo económicamente como el de los años 1962-1965 (29):

- a) Galicia: - emigrantes 68.174.
 - inmigrantes 27.192.
 - saldo negativo.
- b) Cantábrico (Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipuzcoa):
 - emigrantes 165.826.
 - inmigrantes 229.144.
 - saldo positivo.
- c) Ebro Occidental (Álava, Navarra, Logroño):
 - emigrantes 63.088.
 - inmigrantes 68.917.
 - saldo positivo.
- d) Ebro Oriental (Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida):
 - emigrantes 109.191.
 - inmigrantes 97.777.
 - saldo negativo.
- e) Nordeste (Gerona, Barcelona, Tarragona, Baleares):
 - emigrantes 169.523.
 - inmigrantes 604.319.
 - saldo positivo.

Los datos más significativos son los correspondientes a las regiones de Aragón y Cataluña; pues las particularidades jurídicas de El

(29) Según datos del Instituto Nacional de Estadística, analizados por A. GARCIA BARBANCHO, Las migraciones interiores españolas en 1961-70.

País Vasco (por el carácter territorialmente limitado de su Derecho civil propio), de Navarra (por la específica valoración de su régimen "Paccionado"), de Galicia (por la limitación material del contenido de su Derecho Civil Foral) y de Baleares (por su participación jurídica y cultural en el sistema catalán), confieren relevancia y fuerza prioritarias a otro tipo de influencias, impidiendo la consideración de los datos señalados con carácter puro y exclusivo.

La consideración de esta dimensión sociológica muestra el desplazamiento de la cuestión hacia factores extra-jurídicos; pues la consideración de cuál fuese la conexión más apropiada y más efectiva en materia de estatuto personal en Derecho Interregional Español pasa, en cualquier caso, a un segundo plano.

4. En lo que a la dimensión jurídica se refiere, el punto de análisis más importante es el de la consideración de la vecindad civil como concepto jurídico y su adecuación al nuevo marco constitucional. En primer lugar, los artículos 14 y 32.1 de la Constitución de 1978 han incidido directamente sobre el artículo 14.4 del Código Civil, que deviene inconstitucional o, al menos, de muy dudosa constitucionalidad (30). Si mantiene la derogación automática del precepto por virtud del mencionado artículo 14 de la Constitución, en relación con el párrafo 3º de su disposición derogatoria, será preciso recurrir a las vías de autointegración del sistema; pudiéndose, en tal caso, afirmar que ninguno de los cónyuges verá alterada su vecindad civil por razón del matrimonio y que ante un supuesto de matrimonio entre personas con diversa vecindad civil habrá de admitirse la posibilidad de la doble vecindad de los hijos, y el recurso a la residencia habitual como conexión alternativa de nuestro sistema de Derecho Internacional Privado en materia de estatuto

(30) A favor de la inconstitucionalidad del artículo 14.4 del C.c., L. GARAU JUANEDA, op. cit. en la nota núm. 2, pág. 154; R. BERCOVITZ Y RODRIGUEZ-CANÓ, op. cit. en la nota núm. 19, pág. 1151; y M. ALBALADEJO, Derecho Civil, I, vol. 1º, 10ª ed., Barcelona, 1985, págs. 317-318, quien entiende que ha sido doblemente derogado por el artículo 21.1 del C.c. tras la Reforma de 1975 y por el artículo 14 de la Constitución.

personal. Si se considera, sin embargo, que la derogación automática no se ha producido, será preciso afirmar, en cualquier caso, la necesaria reforma de la norma para conseguir su adecuación a la realidad constitucional(31).

También se ha puesto en duda la capacidad del artículo 15.1 del Código Civil para encajar en el nuevo marco jurídico configurado por el texto constitucional. Esta norma recoge un criterio claramente centralista y de excepcionalidad respecto a cada uno de los Derechos Civiles Forales que coexisten en España; criterio, por consiguiente, opuesto a la igualdad de trato entre los diversos ordenamientos civiles existentes que la Constitución define (32).

Al margen de los problemas jurídicos estrictamente constitucionales que la noción y su régimen plantean, destacan en la consideración de la dimensión jurídica actual de la conexión dos elementos problemáticos: la efectividad del sistema de opciones y declaraciones y las dificultades probatorias de la concurrencia de una determinada vecindad civil en una persona en un momento concreto (33). La práctica demuestra la ausencia de opciones y declaraciones, conforme al sistema creado en el artículo 14 del Código Civil, en el régimen de modificación o conservación de la vecindad civil; no existe, por tanto, en esta materia una clara conciencia social ni un conocimiento suficiente del funcionamiento del sistema jurídico. Por ello, puede considerarse carente de realismo

(31) Vid. las consideraciones de R. BERCOVITZ Y RODRIGUEZ-CANO, op. cit. en la nota núm. 19, págs. 1159 y ss., quien se inclina por acudir a la vecindad civil del domicilio a la del lugar de nacimiento del menor, si uno u otro se hallan en España.

(32) Vid. los comentarios de R. BERCOVITZ Y RODRIGUEZ-CANO en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, cit. en la nota núm. 12, págs. 503 y ss., y en Comentarios a las Reformas del Código Civil, cit. en la nota núm. 12, págs. 718 y ss. Y L. GARAU JUANEDA, op. cit. en la nota núm. 2, págs. 152 y ss.

(33) Vid. J. PERE Y RALUY, "La prueba de la vecindad civil", RJC, 1970, págs. 159-173; I. RIBAS ALGUERO, La vecindad civil: problemática en torno a su régimen jurídico y a su prueba, Barcelona, 1984, págs. 255-275.

el Anteproyecto de Reforma del Título Preliminar de la Sección 1ª de la Comisión General de Codificación, al fundamentar el régimen de la vecindad civil sobre un complejo sistema de opciones y declaraciones.

Al encontrarse el fundamento real del sistema en el juego del ius sanguinis y la modificación automática por residencia continuada de 10 años, las dificultades probatorias de la vecindad civil que una persona ostenta se centra, esencialmente, en la necesidad teórica de remontarse infinitamente en el análisis de las vicisitudes de la realidad jurídica de los ascendientes en materia de vecindad civil. De la existencia y constatación de estas dificultades se deriva el establecimiento de presunciones legales sobre la determinación de la conexión (artículo 14.5 del Código Civil, artículo 68 de la Ley de Registro Civil). Por otra parte, la misma existencia de semejante sistema de presunciones revela la escasa efectividad jurídica de la regulación del régimen de adquisición y pérdida de la vecindad civil.

II. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.

1. Necesidad de una reconstrucción histórica: posibles fases para un estudio del tema.

1. Como ya se indicó anteriormente, el origen historicista del carácter plurilegislativo y complejo del sistema jurídico español obliga a recurrir constantemente a los elementos determinantes de su evolución histórica. Esta tendencia general se concreta de forma significativa en el proceso de creación y consolidación de la noción de vecindad civil. Así, es necesario tener presente que la gran polémica parlamentaria surgida en torno al texto del artículo 15 del Código Civil en su redacción originaria de 1888 vino provocada por el desconocimiento, por parte de los denominados Derechos Históricos, de la institución de vecindad que en el proyecto se creaba. La gran oposición de los diputados navarros, por ejemplo, en aquel momento al empleo del término vecindad derivaba de la existencia en Derecho navarro de la institución

de la vecindad forana, que nada tenía que ver con los criterios de sometimiento personal al Derecho Civil navarro (34).

Cualquier propuesta de reforma o sustitución de la conexión se enfrenta, también en la actualidad, a contrapropuestas y oposiciones amparadas en argumentos supuestamente históricos, destinados a fundamentar el arraigo de la noción; arraigo que, como ha quedado expuesto, tiene su origen en los últimos años del siglo XIX.

Estos planteamientos de carácter recurrente justifican la necesidad de proceder a la reconstrucción histórica del tema de la determinación del sometimiento personal a cada uno de los ordenamientos existentes en España. Quizá la realización de esta tarea permita afrontar con menos prejuicios la necesaria reforma de la materia; desmitificando todo aquello que convierte a la vecindad civil en la noción "intocable" del Derecho Interregional Español; y favoreciendo la consideración prioritaria del efectivo cumplimiento de los valores consagrados constitucionalmente, y de la real satisfacción de las necesidades jurídicas de la solución de los conflictos de leyes internos. Quizá ello contribuya también, a la estricta consideración de la vecindad civil como punto de conexión, poniendo de relieve su dudosa condición de estado civil de la persona, dado lo limitado de su alcance (35).

2. La reconstrucción histórica de la cuestión podría articularse sobre la consideración de las siguientes fases del estudio: 1. El Derecho Local de los siglos IX a XV, donde se hallarán los criterios personales originales de sometimiento a los Derechos de base territorial,

(34) Vid. las intervenciones en el Senado de los Sres. ESCUDERO y PASO Y DELGADO, y en el Congreso del Marqués de Vadillo, con referencia a la Memoria que comprende los principios e instituciones del Derecho Civil de Navarra de A. MORALES GÓMEZ (Pamplona, 1884). Citadas por M. COCA PAYERAS, op. cit. en la nota núm. 7, págs. 149-157. Vid. asimismo, en el período actual V. LACARRA, Instituciones de Derecho Civil Navarro, Pamplona, 1965, págs. 77 y ss., sobre las Vecindades foranas".

(35) Vid. F. DE CASTRO, Derecho Civil de España, t. II, Madrid, 1952, pág. 76, donde considera que la vecindad civil "puede también considerarse estado civil en tanto en cuanto determina la capacidad

2. El Derecho General de los Reinos en los siglos XIII al XVIII, donde se encuentra origen la noción de natural del Reino que tanta importancia alcanzará en las construcciones jurisprudenciales y doctrinales posteriores, y 3. El Derecho del Estado liberal hasta la elaboración del Código Civil de 1889, período en que sería relevante la consideración de la actitud general del fenómeno codificador hacia el Derecho Foral, así como de las posiciones adoptadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior a la vigencia del Código al determinar la condición de aforado o no en los supuestos de fijación de la ley personal, y de las actitudes de la doctrina foralista ante el propio proceso codificador.

2. Precisión del objeto del presente estudio.

1. El estudio realizado cubrirá la primera de las fases mencionadas en el apartado anterior, es decir el análisis del Derecho Local de los siglos IX a XV. En un planteamiento global de la investigación sobre la reconstrucción histórica de los criterios jurídicos de sometimiento personal a los diversos ordenamientos que coexisten en la Península durante este período, se abren dos vías de estudio:

- La de los Derechos personales y su aplicación en la Península, pues, con independencia de la polémica sobre la personalidad o territorialidad del Derecho Visigodo, el período de transformación jurídica que el siglo VIII abre para el territorio peninsular presenta algunos ejemplos claros de vigencia del principio de personalidad del Derecho (36). Entre ellos el de la aplicación del Liber Iudiciorum

de obrar de la persona, conforme a las reglas del Derecho interprovincial", y la afirmación en la pág. 471 donde se admite que "la vecindad civil es una condición de la persona, que si bien no reúne las notas propias del estado civil, puede afectar indirectamente al estado civil de la persona, por lo que también ha de constar en el Registro Civil". Vid. sobre el tema en la doctrina civilista las referencias contenidas en I. RIBAS ALGUERO, La vecindad civil: problemática en torno a su régimen jurídico y a su prueba, Barcelona, 1984, págs. 9 y ss.

(36) Sobre el tema de la personalidad del Derecho en la Edad Media, vid. con carácter general el estudio clásico de STOUFF, "Etude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares

como Derecho personal de los Hispani en la Septimania y Cataluña, o la aplicación de este mismo cuerpo legal entre los mozárabes de Al-Andalus, o el peculiar sistema jurídico de la ciudad de Toledo, o el supuesto de aplicación del Derecho coránico entre los moros de Ascó (37); y

jusqu'au XII^e siècle", Traducción italiana en *Diritto Internazionale*, 1967, págs. 80-134; y los más recientes de S.L. GUTERMAN, "The principle of the personality of law in the early middle ages: a chapter in the evolution of Western legal institutions and ideas", *U. Miami L.R.*, vol. 21, 1966, págs. 261-345, junto a E.M. MEIJERS, "L'Histoire des principes fondamentaux du Droit International Privé à partir du Moyen Age, spécialement dans l'Europe Occidentale", *Recueil des Cours*, t. 49, 1934 - III, págs. 549-566.

Sobre la polémica en torno a la personalidad del Derecho en la Monarquía visigoda, vid. F. TOMAS Y VALIENTE, *Manual de Historia del Derecho Español*, 3^a ed. Madrid, 1981, págs. 105-107, y las referencias doctrinales allí contenidas; V.L. SIMO SANTONJA, *Aportación al estudio de los estatutarios españoles*, Valencia, 1959, págs. 29-33 y 40-41.

- (37) Sobre la aplicación del *Liber Iudiciorum* como Derecho personal de los hispani en la Septimania y Cataluña en los siglos VIII-IX, vid. A. IGLESIA FERREIROS, "La creación del Derecho en Cataluña", *AHDE*, 1977, págs. 99-423, especialmente en págs. 103-113. Sobre la aplicación del *Liber Iudiciorum* a los mozárabes en Al-Andalus, F. TOMAS Y VALIENTE, *op. cit.* en la nota anterior, pág. 127. Respecto a la situación en Toledo en los siglos XIII-XV, vid. M.L. ALONSO, "La perduración del Fuero Juzgo y el Derecho de los castellanos de Toledo", *AHDE*, 1978, págs. 335-377, con aportaciones documentales llenas de interés sobre el sistema de competencia judicial. Sobre la aplicación del Derecho coránico como ley personal de los moros en los territorios reconquistados, vid. J.M. FONT RIUS, "La Carta de la Seguridad de Ramón Berenguer IV a las morerías de Ascó y Ribera del Ebro (siglo XII)", en *Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval*, Barcelona, 1985, págs. 561-576.

- La de los Derechos de base territorial, pues éste es, entre los periodos de la Historia del Derecho Internacional Privado, el de la territorialidad del Derecho (38), y porque los textos de Derecho Local Medieval de los Reinos Peninsulares constituyen el auténtico origen de los denominados Derechos Forales.

Esta segunda vertiente ha sido la elegida como concreto objeto del presente estudio. Sobre todo, por tratarse del proceso jurídico-histórico más condicionante de la actual configuración compleja del sistema jurídico español.

2. Dentro del Derecho Local de los siglos IX a XV existen dos núcleos diferenciados, que han sido objeto de distinto tratamiento: 1. El Derecho Local Altomedieval, que cubre el periodo comprendido entre los siglos IX y XII, y 2. El Derecho Local Bajomedieval, que cubre el periodo comprendido entre los siglos XIII y XV.

En el análisis del Derecho Local Altomedieval se toman en consideración textos de los diversos Reinos Peninsulares, sin establecer distinción espacial alguna. En efecto, se ha considerado que las diferencias existentes entre los diversos cuerpos legales de carácter local, durante la Alta Edad Media, no responden a la consideración de realidades diversas en cada uno de los Reinos, sino más bien a criterios cronológicos; por ello, se ha diferenciado, exclusivamente, entre dos bloques de textos agrupados cronológicamente: el primero abarca los siglos IX y X, y el segundo los siglos XI y XII.

En el análisis del Derecho Local Bajomedieval de los siglos XIII a XV, se ha procedido al examen de los textos, agrupados geográficamente (39). Pues, en este periodo pueden apreciarse diferencias jurídicas relevantes entre los diversos Reinos Peninsulares. Por otra parte, se

(38) Sobre la territorialidad del Derecho y la aparición de la Ley Local, siguen conservando plena vigencia los estudios de E.M. MEIJERS, *op. cit.* en la nota núm. 36, págs. 567-591 y en *Etudes D'Histoire du Droit International Privé*, París, 1967. Sobre la Ley Local, vid. M. AGUILAR NAVARRO, *Derecho Internacional Privado*, vol. I, t. I, Madrid, 1970, págs. 166-168.

(39) Sobre las colecciones de textos utilizadas, vid. la bibliografía

ha llevado a cabo una limitación espacial del objeto de estudio, pues si bien se incluyen Aragón, Navarra y Cataluña, se excluyen Castilla, Valencia, Mallorca y País Vasco. Semejante delimitación espacial responde a dos tipos de razones: una de carácter general, y otra de carácter particular. Con carácter general se optó por la limitación ante el volumen de textos que habrían de ser examinados y analizados; volumen que excedía las posibilidades de realización de una tesis y un estudio en profundidad del tema. Con carácter particular se ha excluido la consideración del País Vasco por su situación particular de relación y absorción por el Reino de Castilla, la de Mallorca porque su Derecho responde a la extensión territorial del Derecho Catalán, la de Valencia por su realidad jurídica compleja en relación al Reino Aragonés y al Principado Catalán, y la de Castilla porque la complejidad y riqueza jurídica del Reino así como la relevancia que la normativa castellana adquirió posteriormente en la historia del Derecho Español, obligan a un estudio propio y singularizado.

3. Metodología del presente estudio.

1. El estudio se ha centrado en el análisis directo de los textos del Derecho Local. No se incorporan, sin embargo, materiales relativos a la aplicación del Derecho, porque éstos no han sido puestos de relieve y porque su determinación y localización exigirían una tarea de investigación histórica que no se ha llevado a cabo (40).

La necesidad de situar los textos en la situación real del Derecho en cada período y lugar, obliga a hacer referencia, aunque sea brevemente, a los presupuestos generales a los que aquéllos responden. Así, se alude al fenómeno de la Repoblación como causa determinante del localismo jurídico; ya se tratase de Repoblación oficial o espontánea, re-

aneja al presente estudio, 1. "Colecciones de textos y documentos".

(40) Sobre la necesidad de aprehender un ordenamiento jurídico tanto en los textos y fuentes como en la aplicación del Derecho, vid. las observaciones de H. COING, Las tareas del historiador del derecho (reflexiones metodológicas) Sevilla, 1977, págs. 25 y ss. En el mismo sentido F. TOMAS Y VALIENTE, op. cit. en la nota núm. 36, pág. 65.

gía o señorial. También se hace referencia al proceso de formación del régimen municipal; obviamente, su consideración se hace por vía de alusión general, sin ser objeto de un examen particular en cada Reino, por manifiesta imposibilidad, aunque se subrayan respecto al Principado Catalán ciertas diferencias en la materia entre la Cataluña Nueva y la Vieja conforme a las precisiones realizadas por el Prof. J.M. Font Rius.

2. El concreto examen de los textos se ha llevado a cabo del modo siguiente: se ha otorgado primacía a la redacción del texto como marco de análisis de las nociones que expresan vinculación de la persona con el Derecho establecido. La comparación de las redacciones de versiones sucesivas de un mismo texto, así como la consideración del contenido de los documentos de extensión espacial de cada texto, se han tomado en consideración como elementos que corroboran o modifican los análisis realizados. En segundo lugar, dentro de cada texto se han localizado las expresiones cuyo significado determina una concreta vinculación persona-territorio; identificándolas, fundamentalmente, en torno a las acciones de población, habitación y moranza; cada noción ha sido analizada en su contexto, para poder determinar su significado y contenido reales, bien en sí mismas bien en relación a otras nociones empleadas o a aspectos concretos de la vida jurídica. En tercer y último lugar, se ha concretado el resultado en conclusiones derivadas del proceso de inducción de los datos aportados, considerando cada noción en los diversos Reinos y períodos examinados.

III. SISTEMATICA DEL PRESENTE ESTUDIO.

1. El estudio se ha sistematizado procediendo a la diferenciación de dos secciones. La Sección 1ª incluye el análisis del Derecho Local Altomedieval, en un capítulo único, donde se establecen dos bloques cronológicos pero no geográficos: el primero abarca la consideración de los textos pertenecientes a los siglos IX y X, y el segundo incluye el análisis de los textos procedentes de los siglos XI y XII. La Sección 2ª recoge el examen del Derecho Local Bajomedieval, distribuido en tres capítulos

que, respondiendo a criterios geográficos, incluyen la consideración de los textos configuradores del Derecho Local Bajomedieval de Aragón, del Reino de Navarra y del Principado de Cataluña, respectivamente. Por Último, se incluye la formulación de las Conclusiones derivadas de los análisis anteriores, procediéndose a la inducción material del contenido y régimen de cada una de las nociones personales que los textos emplean en la determinación de su ámbito de vigencia subjetiva.

Sección 1ª:

EL DERECHO LOCAL ALTOMEDIEVAL
(siglos IX al XII)

Capítulo Único:

El Derecho local en los siglos IX
al XII en los diferentes Reinos
peninsulares.

Capítulo único

EL DERECHO LOCAL EN LOS SIGLOS IX AL XII EN LOS DIFERENTES REINOS PENINSULARES

1. INTRODUCCION.

1. A finales del siglo VII, desde la muerte del rey Recesvinto en el año 672, el sistema visigodo se desquebrajaba por las luchas sucesorias, por el recurso a vanos intentos de alcanzar la unidad bajo la Monarquía; muestra de ello fue la promulgación del Liber Iudiciorum (hacia la unidad política por la unidad jurídica). Pero la situación global de derrumbamiento político y social resultaba ya irreversible. Y en este contexto general se produjo la intervención musulmana que desembocó en la invasión del territorio peninsular (1).

El desencadenamiento de una reacción neogótica cristiana de resistencia efectiva a la ocupación islámica tuvo su origen en zonas del norte de la Península. Zonas septentrionales que, históricamente, se han caracterizado por su falta de permeabilidad ante cualquier tipo de influencia cultural o jurídica; pues fueron comunidades que se mantuvieron especialmente intactas ante los intentos de romanización, primero, y frente al neogoticismo, después (2).

Esta situación histórica determinó una evolución jurídica singular, que respondía a concretos intereses militares, políticos y económicos, así como a una clara intención de consolidar cualquier dato diferenciador, que en el Derecho se concretó en una vuelta hacia elementos jurídicos visigóticos y hacia elaboraciones y desarrollos jurídicos originales.

(1) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 3ª ed., 1981, págs. 113-114 (en adelante F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981); E. GACTO FERNANDEZ, J.A. ALEJANDRE GARCIA, J.M. GARCIA MARIN, El Derecho Histórico de los Pueblos de España, Madrid, 1981, pág. 123 (en adelante E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982).

(2) J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica al Derecho Español, Barcelona, 2ª ed., 1978, pág. 96 (en adelante J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978); F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 114.

2. En efecto, estos factores, junto a la estructura dominadora del Islam (que difiere absolutamente de la romana y de la germana, caracterizándose por la consolidación de un imperio sin aspiraciones uniformistas), provocaron la configuración del Derecho Altomedieval en base a la diversidad jurídica. Los historiadores del Derecho coinciden, ciertamente, en afirmar este hecho. Así A. García Gallo habla en relación con este período de la diversidad de Derechos en la Península Ibérica (3), J. Lalinde alude a una profunda dispersión normativa (4), y F. Tomás y Valiente a un fenómeno general de diversificación del Derecho (5).

La diversidad jurídica se manifiesta, en primer término y como ya se ha destacado en páginas anteriores, en la coexistencia dentro de un mismo territorio de distintos Derechos de base personal (6) (atendiendo a los factores religión, procedencia, clase social). Pero en un segundo aspecto el que mayor interés suscita en el marco del presente estudio: la pluralidad de ordenamientos nos sitúa ante distintos Derechos Locales (7), con diferente ámbito o esfera de vigencia espacial, de conformidad con la dispersión de fuentes existente.

(3) A. GARCIA GALLO, Manual de Historia del Derecho Español I, Madrid, 7ª ed., 1977, pág. 74.

(4) J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, págs. 82 y ss.

(5) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 116.

(6) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, págs. 128-132; J.M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho Español. Parte General, Madrid, 1973, págs. 305-318, 375-380 (en adelante J.M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho Español, 1973); J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, págs. 77-79, 82-83, 99-100; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, págs. 126-127.

(7) J.M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho Español, 1973, págs. 354-375; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, págs. 140-153; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, págs. 179-204; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, págs. 85-99.

3. Entre los elementos de análisis en la consideración de los Derechos Locales resulta incuestionable el carácter decisivo que en su formación y contenido ostentó el proceso de repoblación (8). Efectivamente, los orígenes y condicionamientos del Derecho Local Altomedieval se corresponden, en gran medida, con los factores que determinaron los objetivos y carácter de la repoblación. Las diferencias entre los ordenamientos de los diferentes núcleos peninsulares, la complejidad de las fuerzas y realidades que incidieron sobre su formación, contenido y aplicación, derivan de la propia acumulación de datos condicionantes del proceso repoblador.

Todas estas peculiaridades configurarían el Derecho de cada uno de los distintos núcleos territoriales. Pero a pesar de las divergencias existentes entre unos y otros Derechos Locales, aparecen ciertas tendencias jurídicas que podrían considerarse como generales. Puede señalarse como nota más acusada del Derecho Altomedieval el predominio del Derecho Privilegiado Local sobre el Territorial (9), y ello ha cuestionado en algún momento la posible existencia de un Derecho General conformado por el texto del Liber Iudiciorum (10).

Efectivamente, si algo caracteriza a los Fueros breves y Cartas Pueblas o de Población durante la Alta Edad Media es su consideración como Derecho Privilegiado. Este elemento adquiere relevancia esencial como punto de partida de cualquier análisis de estos textos, sin olvidar que su razón de ser y su origen están estrechamente vinculados al proceso repoblador, cuyos objetivos y procedimientos se han señalado. Se trata, siguiendo a J. Cerdá, de "documentos que encierran una concepción realizada por el rey o señor a las gentes que van a poblar, o a una población ya existente, con ánimo de favorecerla" (11).

(8) J.A. GARCIA DE CORTAZAR y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII-XV, Barcelona, 1985, págs. 15-18, 94-115, 147-156, 166-187, 204-225; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, págs. 118-125; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, págs. 135-146.

(9) J.M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho Español, 1873, págs. 348 y ss; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, págs. 135-146.

(10) J.M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho Español, 1973, págs. 353-354; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, págs. 118-125; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, págs. 154-174; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 83; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 17-18.

(11) J. CERDA, voz "Fueros Municipales", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Edt. Seix, pág. 398.

En este marco, halla explicación que el contenido de los textos analizados se dirigiese más a la resolución de cuestiones de Derecho Público que de Derecho Privado. Ciertamente, y aunque tal distinción era desconocida para el Derecho Medieval, las preocupaciones esenciales de los Fueros y Cartas Pueblas se centraban en resolver la distribución de las tierras, el uso de bienes aprovechables por toda la comunidad local, la defensa, y, sobre todo, las obligaciones tributarias y jurisdiccionales. En este sentido no resulta, pues, extraño que los textos no afrontasen, en muchos casos, cuestiones jurídico-privadas, y que cuando se ha defendido el carácter del Liber Iudiciorum como Derecho General se haya encontrado base, entre otros datos, en la continuidad de su aplicación en muchas zonas peninsulares en materia de Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, esencialmente (12).

4. Al intentar una definición estrictamente jurídica de este período, ha de señalarse que la diversidad jurídica deriva de una compleja valoración y consideración (política, económica, bélica y jurídica) de la realidad de los diferentes territorios peninsulares. De manera que los concretos y distintos intereses que conflúan sobre cada territorio originaban un particularismo de base territorial, condicionante de un diverso tratamiento jurídico. De ahí que resulte terminológicamente más apropiado, y más gráfico, emplear la calificación de localismo jurídico que la de particularismo de base territorial; aunque ambas formulaciones respondan y aludan, en cualquier caso, a una misma realidad.

5. En lo que al concreto examen de los textos jurídicos de este período se refiere, podría optarse por realizar un análisis atendiendo a criterios y distinciones de carácter geográfico, pero parece más adecuado proceder a un estudio cronológico que cubra espacialmente todos los Reinos Peninsulares. Las diferencias entre unos y otros textos locales responden, efectivamente, menos a razones de ubicación espacial y más al proceso de evolución del régimen de organización e institucional-

(12) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 129; A. IGLESIA FERRERIRROS, "La creación del Derecho en Cataluña", AHDE, 47, 1977, págs. 93-423.

lización de cada comunidad local. Si bien es cierto, por otra parte, que se aprecian variantes entre los Fueros y Cartas de las distintas zonas territoriales; variantes que responden, precisamente, a la diversa importancia y al diferente desarrollo que los distintos territorios mantuvieron a lo largo del proceso reconquistador, de la labor repobladora, y de la maduración y consolidación del régimen local. Así, en la zona más septentrional de la Península (13) los textos locales presentan peculiaridades por corresponder a territorios cuya reconquista no fue prácticamente necesaria, en que la despoblación obedecía a razones particulares (14), y en que la concesión de privilegios, en un principio, carecía de sentido dado su alejamiento de la frontera. Igualmente peculiares resultan los textos de los territorios del sur de la Península (15), aunque por razones muy distintas: su tardía y lenta incorporación a los Reinos cristianos, ante la dificultad de su reconquista; proceso paralelo al que experimentaron los territorios del Levante Peninsular.

II. LAS NOCIONES DE HECHO EN LOS TEXTOS DE LOS SIGLOS IX Y X.

1. En los textos pertenecientes al siglo IX no se incluyen términos como los de vecindad, domicilio o naturaleza, sino nociones de hecho referidas a los habitantes de un determinado lugar. Ello resulta explicable, de un lado, en atención a que estos textos no constituyen una ordenación jurídica muy extensa de la vida local sino preceptos muy simples, atribuyendo privilegios a los pobladores de un determinado lugar. De otro, porque estos textos se vinculan con la finalidad general de la Reconquista de crear unos núcleos de población, con el establecimiento en ellos de nuevos habitantes.

(13) J.A. GARCIA DE CORTAZAR y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Barcelona, 1985, págs. 43-80.

(14) J.A. GARCIA DE CORTAZAR y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, págs. 48-59.

(15) J.A. GARCIA DE CORTAZAR y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, págs. 163-236.

De este modo, la determinación del ámbito de aplicación del derecho local necesariamente se vincula con la delimitación de los beneficiarios de los privilegios atribuidos a un lugar o población; delimitación que se lleva a cabo de forma muy flexible. Así, la Donación y Fueros de Valpuesta, en Asturias, otorgada por el Rey Alfonso el Casto el 21 de diciembre del 804 (16) al establecer las exenciones tributarias y de responsabilidad se refiere a "... clerici Ecclesia, et laici, qui ibi fuerint populati...". En la misma línea, los Fueros de Brañosera (Castilla), dados por el Conde Muño Nuñez el 15 de octubre del 824 (17) y sus posteriores confirmaciones resultan aplicables "ad eos qui venerint ad populandum ad villa Brania Ossaria" y "omes de villa Brania Ossaria".

Se trata de dos formulaciones que pueden no suponer ninguna diferencia de apreciación o quizá recojan dos núcleos de personas: los que lleguen a poblar la villa (siendo indiferente su procedencia) y los naturales de la citada villa (omes de villa Brania Ossaria). Lo más probable es que la distinción existiese, pero careciese prácticamente de relevancia, pues evidentemente los Fueros no podían destinarse a los naturales de la tierra ya que la situación de despoblación, y la consiguiente necesidad de fomentar la repoblación, hace que la noción de naturaleza sea precisamente la menos relevante y la más inadecuada para delimitar el ámbito personal de aplicación de los Derechos Locales. Lo que el texto parece querer cubrir es, simplemente, el núcleo de pobladores presentes y el de pobladores futuros, refiriéndose a los primeros como hombres de la villa y a los últimos como aquellos que viniesen a poblar la villa. Siendo, pues, de aplicación los Fueros a los que allí se asentasen.

2. En el texto de las Donaciones y Privilegios concedidos por el rey D. Ordoño I el 20 de abril del 857 a la Santa Iglesia de Oviedo (18)

(16) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas, t.I, Madrid, 1847, págs. 13-15 (en adelante T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t.I)

(17) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 16-18.

(18) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 19-24.

se utiliza, para designar a los destinatarios de tales privilegios, el término habitans; y se concede la supresión de ciertos procedimientos procesales y medios de prueba, así como la exención de ciertos gravámenes a "...omnis homo habitans in hereditate S. Salvatoris tam servus, quam liber...". Esta misma noción personal aparece empleada en el texto de la Capítular en que el Emperador Carlomagno tomó bajo su protección en el año 801 a gotos sive ispanos intra Barchinonam famosi nominis civitatem vel terracium castellum quohabitanes (19). Cuando el rey Carlos el Calvo confirmó el 11 de junio del año 844 el contenido de aquella Capítular, así como el de otra promulgada en términos semejantes por Luis el Piadoso, a la ciudad de Barcelona y al castillo de Tarrasa, extendiendo territorialmente su vigencia a todo el Condado de Barcelona, nuevamente determina el ámbito de aplicación personal del privilegio mediante el término quohabitanes; más representativo resulta, incluso, que al fijar la extensión espacial de la norma se emplee la fórmula his omnibus qui infra eundem comitatum Barchinonam Hispani extra civitatem quoque consistunt, pues con la incorporación de la expresión verbal consistunt se está haciendo clara referencia a los establecidos en el territorio condal (20).

Tanto la noción de habitante, ahora analizada, como la de poblador, mencionada más arriba, aluden a una situación fáctica de asentamiento, prescindiendo de otro tipo de consideraciones.

3. A la vista de los textos municipales del siglo X se puede afirmar la práctica continuidad de los datos resaltados con respecto a los documentos del siglo anterior.

Así, en el texto de la Donación del Monasterio de Javilla en el año 941 al abad y monges del de Cardeña por los Condes Fernán González,

(19) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, I-textos. Introducción. Diplomático. Presentación Monográfico-Local e Índices, Madrid-Barcelona, 1969, pág. 3 (en adelante J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I).

(20) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 4-6; A.GARCIA GALLÓ, Manual de Historia del Derecho Español II, Madrid, 9ª ed. 1982, doc. 728, págs. 462-467.

Doña Sancha su mujer, y sus hijos (21), se otorga facultad al abad para poblar las tierras del Monasterio de hombres de otras villas y de otros Reinos, concediéndoles la libertad si se trata de siervos o familiares de criación. De manera que todos los privilegios recogidos en el documento van dirigidos a las personas que pueblen esas tierras.

Igualmente, en la Declaración de los Fueros de S. Zadornin, Berbeja y Barrio hecha el 29 de noviembre del 955 en presencia del Conde Fernán González, se hace referencia al sometimiento al Fuero en régimen de igualdad de todos los habitantes: "... nos omnes qui sumus de concilio de Berbeia et de Barrio, et de Sancti Saturnino, varones et mulieres, senices et iuvenes, maximos et minimos, totos una pariter qui sumus habitantes, villanos et infanzones de Berbeia et de Barrio, et de Sancti Saturnini..." (22).

En el Fuero de Castrojeriz de 974 se utilizan las nociones ya analizadas: varones de Castro, homines de Castro, illos de Castro. Repitiéndose, por tanto, la sumisión al Fuero de los pobladores de las heredades de Castrojeriz (23). Ninguna novedad terminológica puede apreciarse en el texto de la Carta de Población y Franquicias que el Obispo de Barcelona concedió al Castillo de Montmell el 17 de abril del 974, pues el privilegio se dirigió a los habitadores presentes y futuros del lugar (24). Asimismo, la Carta de Población de Cardona, otorgada por Borrell, conde de Barcelona, el 23 de abril del 986, establece que quedan sometidos a su ordenación omnes abitadores (25).

(21) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 25-26.

(22) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I., págs. 31-32.

(23) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 37-42.

(24) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 11-12.

(25) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 51; J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 14-18; E. GACTO FERNÁNDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 21. Se trata de un texto confirmatorio de la Carta de Población otorgada al lugar por Vifredo el Velloso en el siglo IX; J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 8-9.

4. Es de resaltar, por otra parte que al menos en un texto de este siglo se recoge una variante: los Fueros de Melgar de Suso dados por Fernán Armentales, y aprobados por Garci Fernández, conde de Castilla, en 950 (26) recogen la noción de vecino. Se puede observar que dicha noción se utiliza de forma relacional. En efecto, parece carecer de contenido propio, pues sólo se habla de vecino cuando se hace alusión a posibles relaciones entre moradores o entre uno de éstos y el Concejo. Dos veces aparece esta noción a lo largo del texto: la primera para recoger una obligación de la que el morador estaba exento durante el primer año, exención que se establece en oposición a la conducta exigida al resto de los miembros de la comunidad ("Ningun ome de estas villas que casa pusiere fasta un año, non fagan facendera con sus vecinos á señor"). La segunda, para negar la responsabilidad del Concejo frente a una demanda por homicidio supuestamente cometido por un vecino, siendo necesario que el demandante incorpore a la demanda el nombre del supuesto culpable ("Et si algun demandar á concejo de estas villas omecillo, non responda por vecino et fijo de vecino é demanda aquel ficiere por nombre").

La interpretación relacional del término vecino otorga a la noción un contenido que, referido al establecimiento de relaciones internas entre miembros de la comunidad local, implica gran proximidad conceptual a otras nociones; como la de cohabitantes incluida en el texto, ya mencionado, de la Carta de Población otorgada al Castillo de Montmell por el Obispo de Barcelona el 17 de abril del 974 (27); o la de commorantes incorporada en la Carta de Población y Franquicias que el 6 de mayo del 990 concedió al Castillo de Bell el Obispo de Barcelona (28).

(26) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I. págs. 27-30.

(27) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 11-12.

(28) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 19.

III. LOS TEXTOS DE LOS SIGLOS XI Y XII.

1. Los textos del siglo XI y las nociones utilizadas.

A) *Pobladores, habitantes y hombres del lugar como nociones básicas.*

1. A lo largo del siglo XI, el panorama jurídico de las localidades que se van incorporando a los Reinos y Condados Hispanos varía. La complejidad de los textos forales aumenta y aparecen nociones y conceptos, diferenciables unos de otros, cuya interpretación se ve dificultada por la ausencia de expresión escrita de sus contenidos y regímenes. Al igual que en los siglos anteriores, como ya hemos puesto de relieve, muchos textos utilizan categorías de adscripción personal a un territorio, y, consiguientemente, a sus fueros, claramente cualificables como "categorías o nociones de hecho"; tales como habitadores, moradores, pobladores, hombres de,...

Los Fueros de Nave de Albura confirmados en tiempos de D. Sancho, Conde de Castilla, en 1012 (29) recogen privilegios concedidos a la villa "... ex quo fuit aedificata..."; tratándose, pues, claramente, de privilegios de población. La Carta de Población de Villanueva de Pampaneto, otorgada en el año 1032 por el rey de Navarra D. Sancho el Mayor, se dirige a "... populationem quam ficimus... in Monasterium Sancti Fructuosi quod dicitur Pampaneto..." (30). Vemos, por tanto, repetida la fórmula de los Fueros de Nave Albura, para aplicar privilegios concedidos por causa de repoblación. La Donación de varias heredades hechas por el conde de Castilla D. Sancho al Monasterio de San Salvador de Oña en el año 1011 (31), recogen privilegios dirigidos a los habitadores de esas tierras (32).

(29) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 58-59.

(30) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I. págs. 183-184.

(31) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I. págs. 56-57.

(32) Igualmente, el Conde de Barcelona Berenguer Ramón I otorgó Carta de Franquicias el 8 de enero de 1025 a vobis omnibus habitantibus

2. Gran importancia presentan, dentro de este primer grupo de textos forales del siglo XI, los "Decreta Alfonsi Regis et Geloyre Regine", derivados de la celebración del Concilio de León de 1020 (33), en los cuales se utiliza exclusivamente la noción de moradores al fijar los destinatarios del Derecho Local que se crea, estableciéndose en el Decretum número XX una verdadera declaración del núcleo personal sometido al Fuero y de las verdaderas razones de que ese ámbito personal de aplicación se determinase de tal forma y no de otra: "Establecemos que

Barchinonam civitatem sive eius suburbium et omnem Barchinonensem comitatum (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 28-29). La Carta de Franquicias otorgada el 2 de mayo de 1049 por Arnaldo Mir de Tost a San Julián de Règula se dirige ad omnibus hominibus habitantibus qui sun et erunt in villa Sancti Iuliani (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 43-44). Y, también la Carta de Franquicias que el 10 de enero de 1068 otorgó el Conde de Urgel al Valle de Lord alude a habitantes iamdicte vallis (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 57-58). Los Fueros de los lugares sometidos a la jurisdicción del Monasterio de Cardena, concedidos por D. Fernando I el 17 de febrero del 1039, se refieren a habitantes (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 187-188). Los Privilegios concedidos al Monasterio de San Andrés por el Obispo de Nájera D. Gómez, tienen por destinatarios a los habitantes presentes y futuros: "... omnibus qui inneodem loco habitaturi sunt ... ita ut omnis homo qui pro amore Dei in hoc loco venerit ..." (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 232). Tanto los Fueros de Alberguería de Burgos, concedidos por el rey D. Alfonso VI en 1085 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 263-264) como los Fueros y Privilegios de los clérigos de la Catedral de Astorga, otorgados por el mismo rey en 1087 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 321-323), así como los del Monasterio de San Juan de la Peña, concedidos en 1090 por el rey de Aragón y Navarra D. Sancho Ramírez (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 324-327) van dirigidos a los habitantes de aquellas tierras.

(33) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 60-88.

la cibdat de Leon que fu despoblada é presa de moros en tiempo del Rey don Vermudo mio padre, que se poble por estos fueros de susodichos, é que sean ganados é tenudos firmemiente en todos tiempos, é que nunca sean crebantados. Mandamos que todo ome quier forero, quier non ó bibe re heredit ayena, que venga á morar á León, que non lo saquen ende" (34).

En esta misma línea de utilización de nociones de hecho, el Privilegio de franquezas concedido en 1036 a Santa Licinia por el Conde Ermengol y su mujer la Condesa Costanza va dirigido a "vobis fideles nostros homines de Santa Licinia"; terminología que, como ya hemos indicado, no se separa de la continua construcción fáctica hasta aquí resalta da. Este es el único texto altomedieval de los analizados que recoge la noción de naturaleza; y lo hace al ordenar que los capellanes de la iglesia de Sancta Maria de Sancta Licinia sean presbíteros naturales de Sancta Licinia (35).

(34) Emplean también la noción de morantes la Carta de Población que el Conde de Cerdaña concedió a Villafranca de Conflent entre los años 1088 y 1092, según J.M. Font Rius, o en 1075, según T. Muñoz y Romero (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 69-70; T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 279-280); y los Fueros y Privilegios de Santa María del Puerto dados por D. García, rey de Navarra y de Castilla, el 8 de abril de 1042, haciendo expresa referencia a la acción de habitar y morar (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 189-196); y el texto del Concilio de Coyanza de 1050 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 208-218).

(35) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 185-186; J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 34-35. La noción hombres de también aparece empleada en la Carta de Franquicias que el Conde de Urgel concedió a Valle de Lord el 10 de enero de 1068 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 57-58), en la Carta de Franquicias concedida por Gerardo Poncio a Ager en 1079 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 71-72 y Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II, Madrid-Barcelona, 1983, pág. 658 - en adelante J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II -), la Carta de Población de San Anacleto, dada en el año 1065 por el Obispo de Nájera D. Gómez (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 233-234). El texto de los Fueros y Privilegios de la ciudad de Burgos, así como los concedidos a las villas sujetas a dicha ciudad por el rey D. Alfonso VI en el año 1073 utilizan expresiones como las siguientes: "... tam modo vobis qui populantes estis ad illos qui venientes in illas villas populaturi essent ..."

Igualmente, la Carta de Población de Longares, dada en el año de 1063 por el Obispo de Nájera D. Gomez y el prior y monjes del Monasterio de Albelda (36), determina su aplicación a los populatores de Longares, población sometida a la jurisdicción del Monasterio de Albelda (37).

Junto a estas nociones básicas enmarcadas en consideraciones fácticas, ha de señalarse que algunos textos al determinar el núcleo subjetivo de aplicación de sus normas y privilegios emplean fórmulas verbales directamente referidas a la mera presencia o estancia en el lugar. Así, el texto de la donación del castillo de San Vicente que el abad de San Cugat del Vallés realizó a Ramón Maguer y su familia el 13 de enero de 1082 hace alusión, en algunos de sus preceptos, a la regulación de ciertas relaciones y acciones jurídicas de hominibus qui supradicto castro steterint (38). El mismo tipo de formulación se emplea en el texto de la Carta de Franquicias que la Condesa de Pallars y la abadesa de Santa Cecilia de Elins concedieron el 18 de abril de 1085 a Castelló (39).

(referente, pues, a pobladores presentes y futuros), "... vos hominibus de foro de Burgos ...", "... vobis hominibus ... qui illas villas populates estis ..." (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 256-258). El Fuero de Valle es otorgado en 1094 por el Conde D. Ramón a los barones de Valle (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 332-333).

(36) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 230-231.

(37) Los Privilegios de Santa María de Alquezar son otorgados por D. Sancho Ramírez, rey de Aragón y Navarra, en 1069 y 1075 a populatoribus de Alquezar (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 246-253).

(38) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 63-64.

(39) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 68.

B) Nociones relativas al conjunto de la población de un determinado lugar.

1. Un segundo grupo de textos forales del siglo XI estaría compuesto por documentos que, siguiendo la técnica utilizada por la práctica totalidad de los analizados hasta ahora (esto es, dirigirse a colectividades creadas en torno a una Iglesia, Monasterio o Localidad, refiriéndose directamente a la Iglesia, Monasterio o Concejo como sujetos destinatarios del Derecho fijado), se diferencian de éstos en que en ningún momento se refieren expresamente al núcleo personal afectado por el Derecho que el correspondiente texto crea.

Así, el Privilegio concedido por D. Fernando I el 19 de marzo de 1045 al Monasterio de Santa Juliana (40), se dirige a la comunidad monacal que en él moraba. Y exactamente la misma fórmula se utiliza en el texto de la Donación de Villafria y Orbaneja hecha al Monasterio de Cardeña y los Fueros otorgados a estas mismas tierras por D. Fernando I en el año 1045 (41). Lo mismo se puede apreciar en el texto de los Privilegios del Monasterio de San Martín de Tera (Obispado de Astorga) concedidos en el año 1063 por D. Fernando I (42). Por su parte, el Fuero de Santa Cristina, otorgado por el mismo monarca un año antes, está referido a ... vobis concilio de Sancta Christina... (43).

C) La noción de vecino y sus caracteres.

1. Mucha más relevancia presenta, sin embargo, un tercer grupo de textos municipales de este siglo, constituido por aquellos documentos que incorporan la noción de vecino. Se trata de textos que continúan utilizando nociones de hecho para delimitar la aplicación personal de los privilegios, mediante el uso de los consabidos términos habitadores, hombres de..., pobladores. Junto a tales nociones recogen la

(40) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 197-202.

(41) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 203-207.

(42) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 227-229.

(43) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 222-223.

de vecindad, siendo preciso adelantar que la incorporación de la misma no supone en ningún momento una alteración de las fórmulas hasta entonces seguidas para determinar el ámbito personal afectado por el nuevo Derecho.

Dentro de este tercer grupo, podemos distinguir, a su vez, cierto número de textos municipales que recogen la noción de vecindad con carácter relativo; es decir, textos que, al igual que otros anteriormente analizados, se refieren al vecino para designar a uno de los moradores en el momento en que entre en situación de relación con otro miembro de su propia comunidad municipal, o bien hacen referencia genérica a los vecinos en oposición a quien no forme parte de dicha comunidad. Parece, pues, que en estos documentos la vecindad no supondría ninguna cualificación en relación a la moranza: es vecino el morador, y cualquier morador, que se encuentre en situación en que precise ser identificado como miembro activo de la comunidad municipal. Entre estos textos podemos citar: los Fueros de Villavicencio (44), el Fuero de Nájera (45), el Fuero de Jaca otorgado en el año 1064 por el rey D. Sancho Ramírez (46), y el Fuero dado por D. Alfonso VI a la villa de Sahagún en el año 1084 (47).

2. Esta interpretación se ve claramente ratificada por el examen de tres Fueros posteriores, todos ellos de la década de los 90 del siglo XI: El Fuero de Arguedas concedido en el año 1092 por D. Sancho Ramírez rey de Aragón y Navarra (48), el Fuero de Logroño dado en 1095 por el rey D. Alfonso VI (49), y el Fuero de Miranda de Ebro concedido por el mismo monarca en el año 1099 (50). En efecto, estos textos, más ela

(44) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 171-174.

(45) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 287-298.

(46) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 235-238; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 72.

(47) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 301-306.

(48) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 329-331.

(49) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 334-343.

(50) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 344-353.

borados que todos los anteriores, ordenan la prueba en juicio mediante pobladores con casa y heredad en la villa; cualificación que se repite a la hora de exigir fiadores al demandante extraño. Decimos que estos fueros apoyan la tesis de que la vecindad no supone cualificación alguna sino una posición de relación entre pobladores o una identificación del morador como miembro de la comunidad municipal, porque cuando el juicio es promovido por hombre de fuera frente a poblador se exige la prueba por testigos que sean vecinos con casa y heredad en la villa, y lo mismo sucede en los supuestos en que al querellante extraño se le impone la obligación de presentar fiadores. Sin embargo, cuando el pleito se plantea entre miembros de la misma colectividad pobladora, los testigos han de ser pobladores con casa y heredad en la villa.

Evidentemente la cualidad de vecino con casa y heredad y la de poblador con casa y heredad recaían en las mismas personas, pues la cualificación radica en ser propietario de casa y heredad pero no en la cualidad de poblador o vecino. La vecindad no sería, por tanto, más que la relación existente entre pobladores por su cualidad de moradores de un mismo lugar, así como la expresión de su identidad en cuanto comunidad municipal frente a los extraños a la misma.

2. Los textos del siglo XII y las nociones utilizadas.

A) Pobladores, habitantes y hombres del lugar como nociones básicas.

1. El análisis de los textos municipales del siglo XII, aunque no aporta ninguna novedad al esquema estructurado de conformidad con los textos de siglos anteriores, sí ofrece la posibilidad de reflexionar sobre algunos datos que, en principio, podrían revelarse incomprensibles y de difícil encaje en el entramado jurídico que hasta aquí se ha analizado. Datos que, adecuadamente interpretados, pueden dar cuerpo a una sólida consideración de la naturaleza de la vecindad durante este período jurídico-histórico.

2. En efecto, también durante este siglo podemos distinguir tres grupos de textos forales. Un primer grupo lo constituirían aquellos

fueros que utilizan, exclusivamente, nociones de las que hemos calificado como de hecho para delimitar el ámbito personal de su aplicación. Así, los Fueros de Belorado de 1116, concedidos por el rey D. Alonso I el Batallador (51), se refieren a moradores y pobladores, estableciendo que: "Et qui morador, vel poblador, fuerit in Bilforad, francos, et castellanos, caballarios, atque villanos, unum forum habeant ...". Los Fueros de Tudela, Cervera y Galipíezo concedidos por el mismo monarca en 1117 (52) van dirigidos a "... omnibus populatoribus in Tutela, et habitantibus in ea, ac etiam in Cervera, et Gallipienzo ...". Igualmente, el Privilegio concedido en el año 1118 por la reina Dña. Urraca (53), otorgando a los hombres de Burgos que no fuesen jueces contra su voluntad, se refiere textualmente a vobis fidelibus hominibus de Burgos.

En la misma línea, el Privilegio del rey D. Alfonso VII otorgado en 1124 en el que confirma y adiciona los Fueros de Burgos (54), hace alusión, al igual que otros textos analizados, a la extensión del Fuero a todos los que en un momento u otro habitasen la ciudad, recogiendo un término expresamente referido al hecho de la conmoranza: "... vobis omnibus in Burgos commorantibus tam praesentibus, quam futuris.". Nuevamente, cabría señalar que, lingüísticamente analizado, el término conmoranza sería una noción muy próxima a la de vecindad; puesto que ambos hacen referencia a una situación de relación entre personas que encuentra su base en el hecho de morar en un mismo lugar, constituyendo una misma comunidad (55).

De igual manera se expresan los Fueros de Encisa, concedidos por el rey D. Alonso I el Batallador en 1129 (56), cuando recogen términos como populadores de Encisa, hominem de Encisa. También el Fuero de la villa de Roa de 1143 (57),

(51) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 410-412.

(52) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 418-419.

(53) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 265.

(54) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 266.

(55) También emplean la noción personal conmorantes la Carta de Población concedida a Balaguer por Ennengo VI el 29 de junio de 1118 (J.M. FONT RIUS, Cartas de población y Franquicia de Cataluña I, págs. 84-86) y la Carta de Franquicias que Ramón Berenguer IV otorgó a las parroquias de S. Pedro de Osor, Santa Cruz de Horta y San Daniel de Manfre el 21 de Enero de 1144 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 99-100).

(56) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 472-473.

(57) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 544-545.

otorgado por D. Alfonso VII, tiene por destinatarios a omnibus populato-
ribus de Roa praesentibus et venturis (58).

- (58) También pertenecerían a este primer grupo de textos jurídicos locales del siglo XII que emplean nociones personales de hecho para designar su ámbito subjetivo de aplicación, los siguientes (incorporando términos como morador, poblador, habitador, hombre de): el Privilegio de Población de Barbastro otorgado por D. Pedro I de Aragón en 1100 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 354-356), la Confirmación y Adiciones de los antiguos Fueros de León y Carrión hechas por la reina Doña Urraca el 29 de septiembre de 1109 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 96-98), la Carta de Población de Agramunt concedida por Armengol y Dulcia, Condes de Urgel en 1113 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 400-402), el Fuero del Burgo Nuevo de Alquézar otorgado por Alonso el Batallador en febrero de 1114 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 254-255), la Donación de Puig Giró realizada el 8 de diciembre de 1098-1114 por el Conde de Pallars Jussá a Sicarda y su hijo (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 72-73), la Carta de Franquicias otorgada a Cardona por el abad de San Vicente de Cardona entre 1102 y 1125 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 74-75), la Carta de Franquicias concedida por el Conde de Barcelona al castillo de Olérdola el 26 de noviembre de 1108 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 76-78), la Carta de Franquicias otorgada a Torre Susana por el Conde de Barcelona el 25 de noviembre de 1109 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 78-79), la Carta de franquicias concedida por el Conde de Barcelona a Tárrega el 5 de febrero de 1116 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 81), la Confirmación de los Privilegios de Barbastro por Alonso I el Batallador alrededor de 1115 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 357-358), la Carta de Población de Belchite otorgada por el mismo monarca en 1116 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 413-414), el Fuero otorgado en 1118 por D. Alfonso VII a los mozárabes, castellanos y francos de Toledo (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 363-369), el Fuero de Zaragoza concedido por Alonso I el Batallador alrededor de 1118 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, ppágs. 448-450; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 76), los Fueros de Funes, Marcilla y Peñalen otorgados por el mismo monarca en 1120 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 427-428), el Fuero de Sangüesa concedido también por el monarca anterior en 1122 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 429-430), el Fuero de Cabanillas concedido por Alonso I el Batallador en 1124 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 444), el Fuero de Araicel otorgado por el mismo rey en 1125 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 445), la Carta de Franquicias otorgada por el príncipe de Tarragona a esta ciudad y su término alrededor de 1129 y su confirmación en 1149 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 89-90), el Fuero de Escalona concedido, por mandato de Alfonso VII,

El análisis de las nociones personales empleadas por los textos

por Diego y Domingo Alvarez en 1130 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 485-489), las Franquezas otorgadas en el mismo año a Cacabelos por Alfonso VII (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 493-494), la Carta de Población concedida al Aiguair por el Conde de Barcelona entre 1131 y 1162 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 90-91), el Fuero de Asín otorgado por Alfonso I el Batallador en 1132 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 505-506), la Carta de Población de Artasona concedida por el mismo monarca en febrero de 1134 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 512-513), el Privilegio del rey D. Alfonso VII eximiendo a los mozárabes, castellanos y francos de Toledo de portazgo y alexor, en 1137 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 375-376), el Fuero de Calatalifa otorgado por el mismo rey en 1141 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 532-533), la Carta de Población otorgada a Codalet por el abad de Cuixá, el Conde de Barcelona y otros magnates en 1142 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 96-97), la Donación de Puig Ricarta realizada por el abad de San Cugat del Vallés el 28 de enero de 1145 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 101), la Carta de Población de Almenar otorgada por Ramón Berenguer IV el 13 de abril de 1147 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 104-105), el Convenio propuesto por el Conde de Tarragona al Obispo Tarraconense sobre el dominio de la ciudad y su término el 4 de enero de 1148 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 107-108), la Donación de la ciudad y término de Tarragona por el Obispo al Príncipe del lugar el 9 de febrero de 1149 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 111-113), la Donación del cerro de Mangons por Poncio de Timor a los hermanos Vilafranca y Om el 9 de abril de 1149 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 114-115), la Carta de Franquicias de Tarragona de 3 de septiembre de 1149 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 118-119), la Carta de Población otorgada a Tortosa por Ramón Berenguer IV el 30 de noviembre de 1149 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 121-124), la Carta de Población de Santa Linya (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 128-129), la Donación de una heredad de Castellidans realizada por el comendador templario de Gardeny a los hermanos Ferrer el 25 de agosto de 1151 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 139), Carta de Población otorgada por Ramón Berenguer IV a Vimbodí el 30 de noviembre de 1151 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 140-141), la Carta de Población otorgada por Ermengol VII y otros señores del lugar a Abella el 30 de agosto de 1157 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 158), el Privilegio otorgado por Alfonso VIII concediendo a los hombres de Burgos en 1157 que el Concejo no respondiese de los homicidios que se cometiesen en ciudad y su término sino sólo aquél que lo cometiese (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t.I, pág. 268),

al referirse a los sujetos destinatarios de sus normas,

la Carta de Población otorgada por Gerberto de Angelola y otros a Avinavita el 24 de abril de 1158 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 160-161), la Carta de Franquicias otorgada por el abad de Ripoll a Tossa el 11 de diciembre de 1158 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 164), la Carta de Población de Prades concedida por el Conde de Barcelona en mayo de 1159 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 165-166), la Carta de Población de las villas de Bràfim de 10 de septiembre de 1159 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 167), la Carta de Población de Avinselo concedida por el Maestre del Temple en marzo de 1161 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 169), la Carta de Franquicias otorgada a Barcelona por Alfonso I el 7 de febrero de 1163 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 173-174), la Carta de Población del "puig" de Cabot de 31 de marzo de 1164 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 180-181), la Carta de Población de Villa Constantina de 13 de mayo de 1164 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 182-183), la Carta de Población de Horta de enero de 1165 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 184-185), la Carta de Población de Ulidemolins de 31 de enero de 1166 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 186), la Carta de Población de Alforja de 11 de enero de 1170 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, págs. 194-195), la Donación de Escornalbou por Alfonso I a Juan de San Boy alrededor de 1170 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 196-197), la Carta de Población de Alguaire de 1 de febrero de 1174 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 207-208), la Carta de Población de Balaguer de 13 de julio de 1174 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 208-210), la Carta de Población de Castellblanch de 13 de noviembre de 1174 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 211-213), la Carta de Población de Vilanova de Prades de enero de 1175 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 214-215), la Confirmación de los Fueros de Toledo realizada por Alfonso VIII en 1176 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 380-383), el Privilegio de exención a los collazos de la Iglesia de Toledo de fosadera, facendera, pecho y servicio y fonsado, salvo cuando el rey fuera personalmente al ejército (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 386-387), la Confirmación de los Fueros de Lugo realizada en 1177 por Fernando II de León (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 433-434), el Fuero de Castrotorafe concedido por Pedro Fernandez, Maestre de Santiago, y confirmado por Fernando II de León en 1178 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 482-483), la Avenencia entre la Orden de Santiago y el concejo de Castrotorafe sobre los Fueros del Lugar, aprobada por Fernando II (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 484), la Carta de Población de Cambrils otorga

así como el examen de los caracteres de este empleo, han de

da por Alfonso I en 1178-1188 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 218, idem II, pág. 663), la Carta de Población de Montroig del 13 de agosto de 1180 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 220-221), la Carta de Población de la villa de Ejea otorgada en 1180 por Alonso I el Batallador (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 299-300), la Donación del lugar de Ortó a Pedro de Bellester el 10 de febrero de 1181 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 224-225), la Carta de Franquicias otorgada a San Feliú de Guíxols por su abad el 1 de junio de 1181 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 225-227), la Carta de Población de Riu de Algars y Batea de 30 de Octubre de 1181 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 227-229), la Carta de Franquicias otorgada por el rey a Puigcerdá el 31 de Octubre de 1181 (J. M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, págs. 231-232), la Carta de Franquicias confirmadora de la anterior concedida por el mismo monarca en junio de 1182 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 233-234), la Carta de Población de Belcaire de fecha anterior al 25 de enero de 1183 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 235), la Carta de Población de Reus de 5 de agosto de 1183 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 236), la Carta de Franquicias de Maranges y Gerul de 27 de enero de 1184 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 237), la Carta de Población de Vilosell de mayo de 1184 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, pág. 239), la Carta de Población de Vilagràsa de abril de 1185 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 243-244), la Carta de Población otorgada por Alfonso I a Sampedor entre 1190 y 1192 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 254-255), la Carta de Población otorgada a Creixell por el Obispo de Barcelona el 22 de marzo de 1190 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 255-256), la Donación de Montsant efectuada por Doña Sancha a favor de los hermanos Navarra el 26 de mayo de 1190 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 257), la Carta de Población de Torreblanca de 13 de octubre de 1190 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 259), el Fuero de Santa Cera otorgado por Sancho el Sabio en 1191 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 397), la Donación de Vilafranca del Panadès por Alfonso I a cuatro caballeros en mayo de 1191 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, pág. 260), la Carta de Población de Gandesa de 13 de marzo de 1192 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 264-266), la Carta de confirmación y adición de la concesión anterior en abril de 1194 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 270-271), la Carta de Población del alodio de Castellet de julio de 1194 (J.M. FONT RIUS,

concluirse con la referencia a determinadas expresiones contenidas en textos catalanes de la época. En efecto, existen algunas formulaciones que, mediante calificaciones personales (59) o ex-

Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 273-274), la Carta de Franquicias concedida a Tarragona por el rey y el paborde de la Iglesia de Tarragona en julio de 1194 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 274-275), la Carta de Población de Cabra de octubre de 1194 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 275-276), el Privilegio del rey Alfonso VIII concediendo en 1194 al Hospital de San Pedro de Barriobas los Fueros de los collazos de Burgos (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 269), la Carta de Franquicias concedida por Pedro de Castelló a la villa de Solsona el 27 de diciembre de 1195 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 278-281), la Carta de Franquicias de Castelló de 9 de enero de 1196 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 281), la Carta de Población de Pinell de 1198 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 285), la Carta de Franquicias otorgada por el Conde de Urgel a Agramunt el 27 de febrero de 1198 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 286-287; *idem* II, pág. 667; A. GARCIA GALLO, Manual de Historia del Derecho II, Madrid, 9ª ed., 1982, doc. 301, pág. 194), y la Carta de Población de Rufeá de 19 de mayo de 1199 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 288-289).

- (59) La Donación de un cerro sobre Capellades al Monasterio de San Cugat del Vallés alude a hominibus ibi permanentibus (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 106-107), la Carta de Población de Lérida de enero de 1150 se dirige, junto a habitantes y pobladores a los statores (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 129-132), también el texto de la Carta de Población de Vilafranca otorgada por el Conde de Barcelona el 23 de agosto de 1151 incorpora, junto a otras nociones personales de hecho ya analizadas, la de statores (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 138), la misma terminología emplea la Carta de Población de Ciurana de 29 de abril de 1153 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 147-149), y la Carta de Población de Cambrils de 5 de febrero de 1155 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 150-151), y la Carta de Población de Dos Aguas y Vilaverde de 29 de abril de 1155 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 153-154), y la Carta de Población otorgada a Agramunt por el Conde de Urgel el 13 de Noviembre de 1163 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, págs. 176-178; T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 400-402, donde se recoge como fecha de concesión el año 1113), y la Carta de Población otorgada por el mismo soberano a Manuguens en diciembre de 1163 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 179-180), y la Carta de Población

presiones verbales (60), aluden a una situación de simple permanencia o presencia en el lugar. Se trata en realidad de alusiones a una vinculación directa entre la persona y la tierra que ocupa, habita y trabaja. En este sentido, se explica la incorporación de tales alusiones a los textos de Cataluña, pues en ningún otro territorio como en éste se estableció una relación jurídica persona-territorio profundamente integrada en un sistema feudal de dependencias.

B) Nociones relativas al conjunto de la población de un determinado lugar.

1. Un segundo grupo estaría integrado por aquellos textos que, al expresar a quién van dirigidos, lo hacen utilizando nociones colecti

de Falset de 5 de mayo de 1191 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 263), y la Carta de Población concedida por el Maestre del Temple el 10 de enero de 1192 a Horta (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, págs. 263-264)

(60) La Carta de Franquicias de Tarragona de 3 de septiembre de 1149 se refiere a los habitantes qui assidue steterint in ipsa civitate vel in territorio eiusdem civitatis (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 119-120), la fórmula de aceptación de la Donación de un alodio que Ramón de Cervera realizó el 22 de marzo de 1166 expresa que nos tres populatores firmamus ista carta per nos et per alios qui sunt et no sunt hic (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 187-188) y la Donación de Rocabruna realizada por el Arzobispo de Tarragona y el rey en favor de Pedro de Vilagrasa el 16 de noviembre de 1171 establece el requisito de assiduam habitationem y hace referencia a los hombres qui ibi erunt vel habitabunt (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 200-201), y la Carta de Franquicias de Verdú de 18 de septiembre de 1184 se refiere a Qualicumque homo vel femina qui stet in villa de Verdú (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. 241).

vas, con referencia directa a las comunidades municipales; articulando un criterio de sometimiento al Fuero en razón a la vinculación y pertenencia a dicha comunidad. Realmente, el resultado último en la determinación del ámbito personal de aplicación es el mismo que en el grupo de textos analizado anteriormente, puesto que toda persona integrada de hecho en esa comunidad (ya se haga alusión a ella en virtud de su creación en torno a una Iglesia o Monasterio, o por referencia a su Concejo) va a quedar sometida al Derecho contenido en el texto foral correspondiente. No obstante, la diferencia entre este segundo grupo de textos y el anterior radica precisamente en que los documentos ahora analizados no recogen en ningún momento o lugar la mención expresa de las personas a quienes el Fuero resulta aplicable.

2. Así, la Confirmación de los Fueros de León hecha por la reina Dña. Urraca el 10 de septiembre de 1109 (61) se dirige a "... vobis Legionensi Concilio, clericis et laicis, tam illis qui intus in civitate morantur, quam foris ..."; si ponemos en relación esta formulación con la utilizada por el texto foral confirmado por el que ahora analizamos (los Decreta Alfonsi Regis et Geloyre Regine de 1020) (62), podemos concluir que el Derecho creado por estos Fueros resultaba aplicable a todos los moradores de la ciudad y sus afueras. Exactamente la misma fórmula utiliza el texto del Fuero de Castrotorafe otorgado por D. Alfonso VII en 1129 (63), al referirse a "... vobis Concilio de Castrototaf...". De igual forma, el Privilegio concedido a Burgos por el mismo monarca en 1168 eximiendo de la pena o calumnia por los homicidios casuales (64), se dirige a "... vobis universo Burgensi concilio praesenti atque futuro, et universae generationi vestrae ...".

Que la utilización de esta fórmula no supone, en definitiva, ninguna variación en la determinación del núcleo personal sometido al Fuero, lo prueba la individualización que encierra el pronombre "vobis". Lo cual presupone que estos textos lo único que hacían era tomar en consideración la asamblea universal que integraban todos los moradores de

(61) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 94-95.

(62) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 60-88.

(63) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 480-481.

(64) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 267.

una población.

En este mismo grupo quedan integrados, por otra parte, los Fueros y Privilegios otorgados por Alfonso VII al Monasterio de Cillaperil en 1110 (65), que utilizan una fórmula que expresamente establece como destinatario del Fuero al Monasterio y como beneficiaria de los privilegios establecidos a la comunidad creada en torno a él: "... ad suum proprium Monasterium qui vocatur Ciellaperilla de Eguina, et ad suum Abatem qui est Dominus Marinus, et ad suam societatem et omnibus sanctis Dei qui sunt istius loci ...". Por último, las Franquezas concedidas en 1130 a la población gallega de Cacabelos por el rey Alfonso VII (66), lo fueron a la villa colectivamente considerada: "... facio chartam contractionis de villa vostra vocata Cacabelos ...".

C) La noción de vecino y sus caracteres.

1. Un tercer grupo incluiría aquellos textos que, de una u otra forma y con mayor o menor dedicación, utilizan el término vecino. Y es en este tercer grupo donde se plantean las cuestiones de mayor interés en relación a la presente investigación. En primer lugar, hay que destacar que la noción vecino aparece en los fueros con menor frecuencia que en el siglo anterior. Este dato, puede tener varias explicaciones; pero, en principio, todas ellas quedan relegadas al campo de las meras especulaciones, puesto que durante el siglo XII no se produce ningún cambio históricamente relevante que haga pensar en una alteración de los propósitos y contenidos jurídicos.

En efecto, la menor utilización del término podría deberse a su consolidación. La noción habría adquirido un contenido propio, de identificación y conocimiento inmediatos para todos los pobladores, resultando superflua su utilización en Fueros nuevos de zonas ya privilegiadas por Fueros anteriores. Pero esta hipótesis debe ser excluida por

(65) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 398-399.

(66) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 493-494.

varias razones. En primer lugar, no existe una correlación entre la utilización o no de la noción y la calificación de los textos como nove dosos o de confirmación y adición; de manera que tanto textos confirma dores o modifica dores de fueros ya existentes como textos que conceden por primera vez un estatuto privilegiado a un determinado territorio, recogen la noción de vecindad, y de igual modo, textos de uno y otro ca rácter no incluyen dicha noción. Por otra parte, y en segundo lugar, los propios textos demuestran que las nociones perfectamente consolidadas durante la Alta Edad Media son nociones fácticas cuya utilización se repite sin cesar en los Fueros; y las disposiciones contenidas en es tos son prácticamente siempre las mismas, y donde en otros fueros anteriores se utilizaba el término vecino ahora se utilizan nociones de hecho como hombres de, o pobladores.

Es curioso, en este sentido, comprobar que, precisamente, los Fueros que al analizar los textos del siglo anterior aparecían como ejemplo de utilización del término vecindad con carácter relativo, ahora podrían tomarse como ejemplificadores de una práctica muy diferente. Así, mientras que el Fuero de Sahagún concedido en 1084 (67) recogía la noción de vecino, los Fueros concedidos a esta misma villa en 1110 por D. Diego Abad del Monasterio (68) no utilizan tal concepto en ningún momento, refiriéndose "... ad vos homines de poblacione, tam illis qui populant ibi, quam illi qui venerint ad populandum ...". Así mismo, mientras que el Fuero de Jaca de 1064 (69) utilizaba la noción, la Confirmación del mismo en 1134 realizada por el rey de Aragón D. Ramiro el Monge y la concesión a los habitantes de Jaca de las franquezas de los burgueses de Montpelier y la exención de lezda (70) se dirigen a "... vobis omnibus hominibus de Jacca ...", sin embargo en el texto de las adiciones realizadas a este Fuero por el mismo monarca (71) vuelve

(67) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 301-306.

(68) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 307-308.

(69) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 235-238.

(70) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 239-240.

(71) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 241-242.

a aparecer el término con el carácter relacional ya analizado, y finalmente en el Privilegio concedido por el rey D. Alonso II en 1187 confirmando y adicionando las costumbres y Fueros de Jaca (72) desaparece nuevamente esa terminología y se hace uso exclusivamente de la noción homines de Jaca. Igualmente, en el texto de la Concordia otorgada en 1156 entre el Abad de Sahagún y Dña. Maria Gomez y sus hijos sobre el señorío de Villavicencio, en la que se adicionan y modifican los Fueros de la villa (73), se utiliza exclusivamente el término habitadores y desaparece la noción de vecino utilizada en el texto de los Fueros de Villavicencio concedidos en el siglo anterior.

2. Una vez desechada la explicación de la consolidación de la noción, podría buscarse una explicación geográfica: el término vecino se utilizaría en textos de unos Reinos y no en los de otros. Pero esta hipótesis tampoco alcanza confirmación, pues habiendo comparado los Fueros entre sí atendiendo a su pertenencia a uno u otro Reino o Condado Peninsular, no se ha podido derivar ninguna conclusión clara, ni encontrar hilo conductor alguno o regla jurídica de carácter general. Dentro de un mismo Reino o Condado, y lo mismo sucede en todos ellos, unos textos recogen la noción y otros no; ni siquiera presentan homogeneidad, en este aspecto, los textos concedidos por un mismo monarca.

Los Fueros y Privilegios concedidos a los Mozárabes de la ciudad de Toledo por el rey D. Alfonso VI en 1101 (74) utilizan la noción vicinus al ordenar que el poblador en Toledo venda heredad en Toledo sólo a poblador, y el vecino sólo a vecino (75), la misma disposición se re

(72) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 243-245; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 73.

(73) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 175-177.

(74) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 360-362.

(75) Del contenido del texto puede desprenderse que el término populatores alude simultaneamente a las nociones poblador y vecino. Pues la segunda parte del precepto mencionado, al hacer referencia al contenido de la primera parte se refiere exclusivamente a populatores, mientras que aquella regulaba un mismo comportamiento refiriéndose textualmente a poblador, primero, y a vecino, después: Et vendat

pite en la confirmación de los citados Fueros por D. Alfonso VII en 1155 (76); y se completa con la prohibición de que nadie tenga heredad en Toledo sino quien allí more con hijos y esposa, contenida en el Fuero concedido a Mozárabes, Castellanos y Francos de Toledo por el citado D. Alfonso VII en 1118 (77). Relacionando estas disposiciones vemos como la vecindad continua siendo una noción que implica el hecho de la moranza, dotada de cierta estabilidad y permanencia, y de la integración en la comunidad; estabilidad y permanencia, también contenidas en la noción de moranza, que no suponen en ningún momento una cualificación; e integración que implica un estado de vida en relación fáctica (caracterización no incluida, sin embargo, en las nociones de moranza o habitanza) con los demás miembros de la comunidad y con las instituciones municipales, aún incipientes en muchos casos.

Los Fueros de Caparroso dados en 1102 por el rey D. Pedro Sánchez de Navarra (78) y el Fuero de Santa Cara otorgado por el mismo monarca alrededor de esa misma fecha (79), contienen la noción de vecino al hacer referencia a situaciones de relación entre pobladores de la misma localidad (80).

populator ad populatorem, et vicinus ad vicinum, sed non volo ut aliquis de ipsos populatores vendat cortes, aut haereditates ad nullo comite vel potestate. (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 362).

(76) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 377-379.

(77) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 363-369.

(78) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 390-393.

(79) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 394-396.

(80) Y exactamente lo mismo sucede con los Fueros concedidos en 1113 a los pueblos del Obispado de Compostela por su titular D. Diego Gelmirez (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 403-409), los Pactos otorgados en 1115 entre el rey Alonso I el Batallador y los moros de Tudela al tiempo de su conquista (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 415-417), el Fuero concedido por el mismo monarca a la ciudad de Zaragoza en 1119 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 451-453), los Fueros de Medinaceli otorgados por el

3. Es importante destacar que en los textos de este siglo se comprueba la desaparición de una fórmula tan repetida en los del siglo anterior como era la exigencia de que la prueba en un litigio se realizase mediante pobladores con casa y heredad o vecinos con casa y heredad. En efecto, en ninguno de los textos ahora analizados se recoge tal fórmula, simplemente se exige que los testigos sean homines de, vecinos o filos de vecinos, vecinos, pero en ningún caso se establece la cualificación de la propiedad. Si bien es cierto que la práctica totalidad de

Concejo de la villa con el beneplácito del mencionado rey alrededor de 1124 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 435-443), los Privilegios concedidos a Orense por su Obispo D. Diego III entre 1112 y 1126 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 499-500), los Fueros que D. Alonso I el Batallador otorgó a Tudela en 1127 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 420-422), el Fuero concedido por el mismo monarca en 1129 al barrio de San Saturnino (o San Cernin) de Pamplona (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 478-479; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 74), el Fuero otorgado por el mismo a Calatayud en 1131 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 457-458; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 68-78), el Fuero concedido por el mismo monarca a Marañón (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 495-498), el otorgado a los mozárabes de Mallén en 1132 por el citado rey (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 503-504), el Fuero de Guadalajara concedido por el rey Alfonso VI en 1133 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 507-511), el Fuero de Balbás otorgado por Alfonso VII en 1135 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 514-517), el de Lara concedido por el mismo monarca en el mismo año (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 518-524), el otorgado por el mismo rey en 1139 al Castillo de Aurelia (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 525-528), el Privilegio otorgado en 1140 por el mismo haciendo donación al Obispo D. Bernardo y canónigos de la Iglesia de Sigüenza los pobladores de la misma, a los que concede el Fuero de Medinaceli en 1140 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 529-531), el Fuero de Daroca otorgado por el Conde de Barcelona D. Berenguer en noviembre de 1142 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 534-543), el Fuero de Peralta concedido en 1144 por el rey de Navarra D. García (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 546-550), los Fueros otorgados a los burgueses de Sahagún por D. Alfonso VII y el abad D. Domingo en 1152 (T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 309-312), la Carta de Población concedida por Alfonso I a Torre de Mirón Torbavi el 3 de octubre de 1173 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 205-206), la Carta de Población de Tossa de 10 de Mayo de 1187 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 250-251), y la Carta de Población de Horta de 10 de enero de 1192 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 263-264).

los textos que incluyen la noción de vecino, la utilizan a la hora de fijar quién debe actuar de testigo o fiador.

De difícil interpretación, al menos en principio, parece el precepto recogido, en esta materia, en los Fueros de Medinaceli otorgados por el Concejo de la villa con el beneplácito de D. Alonso I el Batallador alrededor de 1124: "Por toda debda, ó plecto, que demandaren de V mencales arriba, si fuere en vila, firme con tres vecinos, ó filos de vecinos, en el aldea con dos; et de V mencales aiuso, firme con tres moradores en vila, et den aldea con dos: ierno de vecino firme como filo de vecino"(81). Se trata de un texto que parece establecer una clara y tajante distinción entre la noción de vecino y la de morador, con lo que se vería afectada la interpretación mantenida, a la vista de los demás textos forales analizados, en el sentido de que la vecindad no era en este tiempo sino una noción carente de contenido y régimen jurídico propios utilizada para hacer referencia al morador cuando se encuentra en situación de relación con los demás miembros de su comunidad o cuando resulta preciso identificarle, individual o colectivamente, frente al extraño a la misma; y sería necesario, por otro lado, aceptar que la vecindad aportaría un contenido propio y diferenciable del de la moranza o habitanza.

Pero, cabe otra interpretación mucho más coherente con la general regulación contenida en los Fueros de esta época y que, incluso, refrenda la posición hasta ahora mantenida. Es necesario considerar, en primer lugar, que tanto la villa como la aldea pertenecían a un mismo término municipal, pero una y otra contaban con Concejos propios. Así, los citados Fueros de Medinaceli recogen el siguiente precepto, que citamos a título de ejemplo: "Qui fuere á poblacion, ó exier de término de viyla, venga al conceylo de la viyla ó del aldea sabado á vespervas, ó domingo á misa, et diga: dexo mi heredit á este mio parient en comenda, et qual que ora viniere ayla sua heredit salva. Qui esto non ficiere, el tenedor firmar podiere que ayno et dia fue tenedor desa heredit, nol

(81) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 438.

responda deyla" (82). De manera que, si bien tanto los moradores de la villa como los de la aldea lo son de un mismo término municipal, ninguno puede ser a la vez vecino de la villa y de la aldea, pues sólo podrá mantener relaciones de vecindad con aquellos otros moradores que, como él, lo sean de la villa o de la aldea.

Por ello, la interpretación adecuada del texto que analizamos nos lleva a considerar que si la deuda presentaba una entidad considerable (... V mencales arriba ...) se exige que los testigos tengan una mayor vinculación con la comunidad concreta de la villa o de la aldea respectivamente; vinculación que no es, en definitiva, sino el morar en villa o aldea, puesto que las relaciones de vecindad nacerán con respecto a quienes compartan la moranza en uno de los dos lugares. Pero si la deuda es de menor entidad (...V mencales aiuso ...), bastará con que el testigo sea morador del término municipal, independientemente de que more en villa o aldea.

4. Para terminar la consideración de los textos forales del siglo XII, es preciso destacar que se constata una mayor frecuencia en la utilización de expresiones como vecino de la villa o vecino de esta población. En efecto, mientras que en textos anteriores raramente se utiliza la noción de vecindad directamente vinculada a la concreta localidad, ahora es muy frecuente.

Igualmente, es ahora cuando por primera vez encontramos el adverbio vecinalmente, alusivo a la manera de resolver los pleitos entre vecinos: "... mando vobis quod habeatis vestros iudicios inter vos ipsos vicinalmente et directamente ante mean iustitiam, qui fuerit ibi per me." (Fuero otorgado a la ciudad de Zaragoza por D. Alonso I el Batallador en 1119)(83), "Similiter mando vobis quod abeatis vestros iudicios inter vos vicinalmente, et directamente ante meam justitiam qui fuerit ibi per mé. " (Fueros que el rey D. Alonso I el Batallador concedió a Tudela en 1127)(84), y el mismo precepto, aunque con distinta terminología

(82) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 437.

(83) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 452; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 76-77.

(84) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 421.

gía recoge el Fuero concedido por el mismo monarca en 1132 a los mozárabes de Mallen: "... et quod habeatis totos vuestros judicios ad vestram portam cum totos vestros vicinos ..." (85).

También por primera vez aparece la noción de hacer vecindad "... nec faciant vicinitatem in alio loco ..." (Fuero concedido en 1126 por Alfonso VII al barrio de San Martín de Madrid) (86), o hacerse vecino ("Et homine qui venerit ē fecerit se vicino in Maraione ..."; Fuero concedido a Marañón por D. Alonso I el Batallador) (87).

Asimismo hay algunos Fueros que, junto a categorías fácticas e incluso junto a la noción de vecindad, incorporan la de ciudadano: el Fuero concedido en 1118 a los Mozárabes, Castellanos y Francos de la Ciudad de Toledo por D. Alfonso VII (88), los Privilegios concedidos a Orense entre 1112 y 1126 por su obispo D. Diego III (89), los Fueros otorgados a esta misma población por D. Alfonso VII en 1131 (90), el Fuero concedido por este mismo monarca al Castillo de Aurelia en 1139 (91), y la confirmación de los Fueros de Toledo realizada por D. Alfonso VIII en 1176 (92). De la lectura de estos textos no se desprende una caracterización autónoma de la noción de ciudadanía; si tenemos en cuenta la diferente configuración medieval de villas y ciudades y la utilización en estos Fueros de nociones de hecho para determinar el ámbito personal de aplicación de sus preceptos, nada añade el término ciudadano al análisis que hasta aquí se ha llevado a cabo.

(85) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 504.

(86) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 446.

(87) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 496.

(88) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 363.

(89) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 500.

(90) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 501-502.

(91) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 527 (emplea el término para referirse a los ciudadanos de Toledo).

(92) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 380-383.

Sección 2ª:

EL DERECHO LOCAL DE LOS REINOS

(siglos XIII al XV)

Capítulo I:

El Derecho local del Reino de Aragón.

Capítulo II:

El Derecho Local del Reino de Navarra

Capítulo III:

El Derecho local del Principado de
Cataluña.

Capítulo I

EL DERECHO LOCAL DEL REINO DE ARAGON

I. INTRODUCCION.

1. La superación de las circunstancias políticas y sociales que habían determinado la caracterización del Derecho Local Altomedieval de los territorios Peninsulares en torno a la diversidad jurídica, provoca a lo largo de la Baja Edad Media una evolución de carácter territorialista (1). Si bien es cierto que este proceso puede ser considerado como general, también lo es que en cada uno de los núcleos políticos de la Península adquiere rasgos diversos.

El desarrollo jurídico del Reino Aragonés durante esta época presenta una clara tendencia continuista con respecto a las soluciones y principios planteados por su Derecho Altomedieval. Las necesarias modificaciones y el desarrollo técnico propio de la superación de sistemas primitivos de Derecho se producen en Aragón sin que surjan conflictos o enfrentamientos, ni jurídicos ni extra-jurídicos. Esta situación se explica por el hecho de que el monarca aragonés, con independencia de su creciente poder político y normativo, siempre fue considerado como una institución garante del respeto y cumplimiento del Derecho. Derecho que, nacido consuetudinariamente en las comunidades locales, no podía sino ser Derecho Local. De esta manera, en el Reino nunca se planteó oposición entre el Derecho nacido de la comunidad popular y el Derecho nacido del poder real (2).

(1) "Derechos Territoriales en el sentido, no de que alcancen vigencia de un modo uniforme y excluyente en todo el territorio del reino o principado, sino de que habrán de fundar un orden territorial en dicho ámbito al vincular a la generalidad de las jurisdicciones existentes en él (señoríos nobiliarios, señoríos eclesiásticos, ciudades principales, otras corporaciones... cuyos respectivos derechos pueden al mismo tiempo desarrollarse). ..." (B. CLAVERO, Temas de Historia del Derecho: Derecho de los Reinos, Sevilla, 1980, pág. 13)

(2) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 209.

2. Tres son, a juicio de J. Lalinde, los focos jurídicos de Aragón durante esta época: el creado en torno al Derecho jacetano, el configurado por los privilegios de la comarca de Sobrarbe, y el propio de la zona fronteriza (3). Pero, en el contexto del análisis actual, interesa destacar dos núcleos de especial influencia y extensión (bien espacial, bien temporal): el constituido por el Derecho de Jaca y el configurado en torno a las peculiaridades jurídicas de la zona fronteriza ("la Extremadura"). El Derecho de Jaca, en un permanente proceso de extensión territorial, termina condicionando y definiendo el Derecho de la práctica totalidad del Reino, hasta convertirse en el Derecho comarcal inspirador del Derecho General Aragonés (4); que se concretaría en la redacción, por Vidal Canellas, del Código de Huesca de 1247.

Por otra parte, la línea jurídica específica de un territorio fronterizo se caracteriza por derivar un Derecho fuertemente privilegiado. Y en el Reino de Aragón el Fuero de Teruel constituyó el máximo exponente de este tipo de Derecho Privilegiado, manteniéndose en vigor hasta, prácticamente, el siglo XVII, en concreto hasta el año 1598 (5).

La armonía del proceso deriva, pues, de que en este Reino la creación del Derecho General tenga su origen en la territorialización de un texto foral local. Porque el Código de Huesca no es sino el Fuero de Jaca, penetrado moderada y sistemáticamente de elementos procedentes del Derecho Romano-Canónico. Por otra parte, la promulgación oficial de este cuerpo legal general y su extensión a todo el Reino por el monarca Jaime I en 1247, no provocaron la abolición de los Derechos Locales; aunque sí su práctica desaparición, en la medida en que el carácter consuetudinario, tradicional y "localista" del contenido de aquél hizo, en muchos casos, innecesaria la aplicación de éstos (6).

(3) J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, págs. 146-150; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 184.

(4) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, págs. 328-329.

(5) J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 150; B. CLAVERO, Temas de Historia del Derecho: Derecho de los Reinos, Sevilla, 1980, págs. 338-339; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 211.

(6) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 211.

II. EL FUERO DE JACA.

1. A pesar de tratarse de un texto altomedieval, y por ello analizado debidamente con anterioridad al tratar del Derecho Municipal de la Alta Edad Media, resulta imprescindible su consideración en este momento a causa de la fuerza y vigencia que el mencionado texto adquirió en la estructura jurídica aragonesa de la Baja Edad Media.

2. El Fuero de Jaca (7) fue concedido en 1064 por Sancho Ramirez para favorecer la población de la villa y convertirla en ciudad. El texto del Fuero centra su ámbito personal de aplicación en todos aquéllos que poblasen Jaca; reproduciendo, por tanto, como se pudo concluir del exámen de los textos altomedievales, la vinculación de la conexión determinante de la aplicación del Derecho con el dato fáctico de la población o habitación.

3. Junto a la alusión a la población, el Fuero se refiere en cuatro ocasiones a los vecinos. La primera al establecer la pena para el poblador ("... aliquis ex vobis ...") que portase armas contra vecino suyo; la segunda al fijar el castigo de quien entrase "iratus" en casa de su vecino; la tercera al exigir el permiso o consentimiento de seis mejores vecinos de Jaca para que el merino del Rey pueda cobrar multa a hombre de Jaca; y la cuarta al hacer referencia a quien prende sarraceno de su vecino. Se trata, por tanto de una utilización del término vecino que en manera alguna revela un contenido jurídico capaz de descubrir una nueva categoría municipal condicionante de la situación de la persona frente al Fuero y frente a la comunidad municipal. Sólo puede afirmarse que la noción de vecino y vecindad aluden a situaciones de relación entre miembros de la comunidad; referencia que, por otra parte, se pone de manifiesto sintacticamente en el empleo de adjetivos posesivos (su vecino). Y, en segundo lugar se aprecia, igualmente, la utilización del término con función identificadora de la propia comunidad municipal por alusión a sus miembros: vecinos de Jaca.

(7) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, pág. 235-238; M. NOLHO, El Fuero de Jaca, Zaragoza, 1964, págs. 3-5.

4. La apreciación de posteriores confirmaciones y revisiones del Fuero de Jaca en modo alguno altera las consideraciones anteriores.

Así, en 1134 el rey D. Ramiro el Monge confirma el Fuero a todos los hombres de Jaca, y les concede las franquicias de los burgueses de Montpellier y la exención de lezda otorgándoles aquella mejor libertad, que tienen aquellos burgueses de Montpellier. Y es tal, que cualquiera que tenga casa en el Burgo de Montpellier, y allí hiciese residencia de pecunia, o de algún negocio, que no pague lezda alguna por causa de aquellas cosas que allí llevase de algún lugar (8). En referencia que José M^a Lacarra y Angel J. Martín Duque hacena este texto (9) parece desprenderse una interpretación en virtud de la cual, del hecho de que la exención se conceda a quien tuviese casa y allí estableciese residencia se concluye que la vecindad se adquiría por el cúmulo de esas dos condiciones. Tal interpretación en modo alguno deriva del texto arriba transcrito, y solamente podría encontrar apoyo si se pudiese, con carácter general, llegar a concluir que en los textos forales de la Edad Media la vecindad supusiese una cualificación de la condición de poblador que resultase, por otra parte, determinante a la hora de establecer el ámbito personal de aplicación de los privilegios, especialmente tributarios, establecidos en el Derecho Municipal de la época. Pero, a la luz de los textos hasta ahora consultados, y en ningún caso en lo que a la Alta Edad Media se refiere, no es posible fijar semejante conclusión. En este sentido, y en el corolario de las apreciaciones hechas como resultado de la investigación realizada, presenta utilidad la consideración del texto de confirmación y adición por D. Ramiro el Monge incluido en el Libro de la Cadena de la Ciudad de Jaca: si pobladores aquí viesen, y casa tuviesen, y residencia hiciesen, tengan esta libertad (la exención de lezda). Que si alguno tuviese casa en Jaca por mal ingenio, y no quisiera allí hacer residencia, de ningún modo tenga esta libertad (10).

(8) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, págs. 239-240.

(9) J.M. LACARRA y A.J. MARTÍN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 51.

(10) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, pág. 242.

Por último, destacar, continuando con el intento de clarificar lo que la vecindad pudiese, jurídicamente, suponer en los textos municipales aplicados durante la Baja Edad Media, que el documento del Privilegio del rey de Aragón Alonso II de 1187 confirmando y adicionando las costumbres y fueros de Jaca presenta como adición un extracto de los fueros dados en septiembre de 1238 por el Concejo de Jaca con motivo de establecer prohibición de portar armas en el interior de la ciudad (11). En dicho texto se contiene una referencia digna de ser destacada en relación al tema que nos ocupa: Que si mata á vecino de Jaca ó habitador, pague 400 S, 200 á los jurados y 200 al mas pariente del muerto. En efecto, resulta, en el contexto jurídico medieval, revelador el establecimiento de una multa de igual cuantía para quien mate vecino o habitador; de manera que, si bien la utilización de la conjunción o podría interpretarse como prueba de identificación entre ambas nociones, mucho más importante resulta (sobre todo si se tiene en cuenta la imposibilidad de fundamentar interpretaciones jurídicas en el empleo del lenguaje medieval, frecuentemente alejado del empleado modernamente en los textos legales) constatar que, aún en el supuesto de que otras circunstancias pudiesen conducir a la consideración cualificada de la vecindad, el establecimiento de la citada multa niega la mejor condición del vecino sobre el poblador en lo relativo a la aplicación de los fueros y privilegios.

5. Teniendo en cuenta que la fecha de promulgación del Código de Huesca responde al año 1247, puede apreciarse que el proceso de extensión y generalización del Fuero de Jaca en el Reino de Aragón se produjo tempranamente y con rapidez. En efecto, la paulatina territorialización del texto, desde el siglo XI al XIII, provocó la elaboración de recopilaciones privadas del Derecho jacetano. Tal evolución determinó que las versiones bajomedievales del Fuero, ya privadas ya oficiales, respondiesen, en muchas ocasiones, a realidades diversas a la pura localización del Derecho de Jaca; y ello condicionó la formulación de su contenido, no sólo en cuanto a las cláusulas de concesión y sanción, sino también en lo que a la propia normativa se refiere.

(11) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, pág. 245.

En cualquier caso, las redacciones aragonesas del Fuero de Jaca realizadas durante el siglo XIII y contenidas, actualmente, en manuscritos del siglo XIV, recogen la noción de vecino reiterando el esquema de interpretación que el texto del año 1064 revelaba; el término vecino hace referencia a los sujetos de las situaciones de relación jurídica planteadas entre miembros de una misma comunidad local y derivadas de la participación en una vida de proximidad organizada (12), así como a los miembros de esa comunidad, individual o colectivamente considerados, al pretender su identificación frente a los extraños (13).

III. EL FUERO DE TERUEL.

1. Introducción.

1. El Fuero de Teruel fue concedido por el rey D. Alfonso en 1176 y puede ser considerado, según se señalaba anteriormente, como el texto de mayor valor ejemplificador en la consideración del Derecho Local Aragonés Bajo-Medieval.

Como base del examen que sigue a estas líneas se ha tomado la publicación del texto realizada por Max Gorosch en 1950 (14) tomando como fundamento el texto contenido en el "Código Turolense", cuyo manuscrito data de la segunda mitad del siglo XIII (15).

2. Nuevamente, repitiendo la estructura habitual, es el encabezamiento del texto el que recoge el ámbito de aplicación de sus normas:

(12) M. MOLHO, *op. cit.*, págs. 36 (26), 39 (33), 46 (43), 74(112), 116 (203), 143 (271) y 155 (300) (Los números colocados entre paréntesis corresponden a los preceptos que se citan).

(13) M. MOLHO, *op. cit.*, págs. 33 (20), 67 (93), 86 (141), 140 (262) y 169 (49) (Los números colocados entre paréntesis corresponden a los preceptos que se citan).

(14) M. GOROSCH, *El Fuero de Teruel*, Estocolmo, 1950 (en adelante se citarán entre paréntesis los números de los preceptos del Fuero tras la referencia a las páginas).

(15) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 12-15 y 19-21.

"... fago et pueblo una villa en el lugar el qual dizen Teruel. E todos vinjentes habitantes et pobladores que habiten alli más se guros et más volonterosos, et los otros que hy desseyen venir, esta aquesta carta de población et de costumbre et de franqueza les fago et les otorgo et todas aquellas cosas que hy son scriptas et serán serán d'aquí adelant por mj et por todos mjs successors, valederas fidel mientre por todos tienpos. Otrosí do et otorgo a los dichos pobladores todos aquellos fueros et todas las buenas costumbres las quales a mj demandarán et a provecho d'ellos d'aquí adelant podrán demandar por alguna manera." (16).

Efectivamente, desde el punto de vista territorial el Fuero se concedía, y consiguientemente resultaba de aplicación, a "el lugar que dizen Teruel", donde se hacía y poblaba una villa; y desde el punto de vista personal los preceptos se dirigían a todos aquéllos que poblasen el mencionado lugar. De manera que, al establecerse una conexión personal directamente vinculada al hecho de la población, se establece, igualmente, la yuxtaposición persona-territorio a la hora de fijar la esfera de aplicación del Derecho Municipal: los moradores son destinatarios de los privilegios en su condición, específicamente, de pobladores de ese concreto territorio y en tanto en cuanto dichos privilegios se concedan y reconozcan a la localidad.

2. Las nociones de hecho.

1. El Fuero de Teruel utiliza, en las referencias determinantes de su esfera de aplicación personal, términos de hecho vinculados de forma incuestionable con el elemento fáctico del asentamiento en el lugar.

En este sentido, parece ser el término poblador el empleado con carácter general para designar a las personas destinatarias del Derecho contenido en el texto, en la medida en que es la noción que se utiliza en todos aquellos preceptos que pudieran ser considerados como configuradores del marco general y programático del Derecho privilegiado consagrado en el Fuero; preceptos que, por otra parte, se hallan especial, aunque no exclusivamente, incluidos en los números iniciales del texto.

(16) M. GORDSCH, op. cit., pág. 94 (1).

Así: 1º) Son los pobladores los depositarios y guardianes del propio Fuero (17); 2º) Son también ellos, los pobladores presentes y futuros, quienes reciben las heredades, tierras y pertenencias contenidas dentro de los términos de Teruel (18); 3º) Son ellos igualmente los destinatarios de las garantías de quietud, seguridad y exención establecidas, con carácter general, sobre los bienes que allí poseyesen (19); 4º) Son considerados sujetos de los beneficios y obligaciones personales consagrados (20); 5º) Son los obligados por un cierto deber de conducta frente a la comunidad municipal globalmente considerada (21).

2. Únicamente en dos ocasiones utiliza el Fuero la noción de habitador, la primera al establecer la posibilidad de prestar fianza de salvo por sí y por todos los parientes que en término de Teruel fueren habitantes (22), y la segunda al fijar la obligación de los habitadores de las casas de atender al cuidado del fuego de su casa (23). Puede concluirse, pues, que el elemento común a ambas nociones, poblador y habitador, es la nota fáctica de la presencia cualificada por un cierto asentamiento: en el primer caso garantizado por el ánimo repoblador; y en el segundo, por el ánimo de habitación que se manifiesta en la existencia de hogar. Esta cualificación diferenciada del asentamiento constituirá, precisamente, la justificación del uso en unas ocasiones del término poblador y en otras del término habitador: la población constituye la propia razón de ser del Fuero y en esa medida el núcleo poblador es el destinatario del Derecho privilegiado que el Fuero incorpora; pero, por otra parte, a la hora de regular determinados aspectos de la organización cotidiana de la vida en Teruel destaca la consideración del poblador como habitador; aludiéndose, por tanto al mismo núcleo personal pero considerando diversas facetas de la estructura y contenido de la organización municipal.

(17) M. GOROSCH, op. cit., pág. 94 (1) y 96 (2).

(18) M. GOROSCH, op. cit., pág. 94-96 (2).

(19) M. GOROSCH, op. cit., pág. 95-96 (2).

(20) M. GOROSCH, op. cit., pág. 97 (5) y 104 (25).

(21) M. GOROSCH, op. cit., pág. 258 (396), 391 (771) y 392 (775).

(22) M. GOROSCH, op. cit., pág. 110 (46).

(23) M. GOROSCH, op. cit., pág. 321 (570).

3. Las nociones de carácter indeterminado.

1. Esta interpretación adquiere un valor instrumental a la hora de explicar la utilización, en algunos párrafos del texto, de términos, igualmente carentes de caracterización jurídica, tan generales e indefinidos como "qual quiere que" (24), "alguno" (25), u "omne" (26). En

(24) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 103 (22), 106 (30), 108 (37 y 39), 120 (68), 126 (86), 127 (87), 135 (112), 143 (131), 150 (146), 151 (147 y 149), 159 (167), 161 (168), 166 (180 y 181), 173 (199, 200 y 201), 174 (203), 175 (205), 176 (206 y 207), 177 (208), 179 (212 y 213), 183 (224), 185 (227 y 228), 186 (232), 187 (233, 234 y 235), 188 (237), 192 (247), 197 (259), 200 (263), 201 (266), 204 (269), 205 (273), 209 (283), 210 (284 y 285), 211 (286 y 288), 212 (289), 213 (292 y 293), 214 (294, 295 y 296), 215 (297 y 299), 216 (301), 217 (303), 221 (311), 224 (317), 226 (321), 227 (322 y 323), 229 (317 y 318), 230 (330), 231 (335), 234 (341), 236 (343), 237 (345, 346 y 347), 238 (348, 349), 239 (352), 240 (354), 241 (356), 242 (360), 243 (363 y 364), 244 (367), 245 (369), 246 (371), 247 (372), 251 (382), 252 (383), 253 (386), 254 (388), 256 (391), 257 (393), 259 (397 y 398 bis), 263 (404 y 405), 264 (407 y 409), 267 (415), 269 (418), 286 (453), 287 (454), 292 (467 y 469), 293 (470, 471 y 472), 294 (474 y 475), 295 (476), 296 (478, 479 y 480), 297 (481, 483 y 484), 298 (487 y 489), 299 (490, 491 y 493), 301 (498, 499 y 500), 302 (501, 502, 503 y 504), 303 (505, 506, 507 y 508), 304 (509 y 510), 305 (513, 514 y 515), 306 (516), 307 (521 y 522), 308 (526 y 527), 309 (529, 530 y 531), 310 (532 y 533), 311 (536), 322 (573), 329 (595), 330 (596 y 597), 331 (599, 600, 601 y 602), 332 (603), 333 (605), 334 (609 y 611), 335 (612), 337 (618, 619 y 620), 338 (621 y 622), 339 (625 y 626), 340 (627), 342 (631), 345 (641, 642 y 643), 346 (645, 646 y 647), 348 (652 y 655), 349 (658 y 659), 350 (661 y 662), 351 (663), 352 (669), 353 (670), 359 (688), 368 (713), 369 (715 y 716), 371 (721), 376 (733 y 734), 377 (740), 378 (744), 379 (747), 391 (771), 393 (778), 393-394 (779), 395 (781 y 782).

(25) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 111 (47), 124 (80), 135 (111), 151 (148), 152 (152), 157 (164), 167 (182), 198 (260), 207 (278), 211 (287), 212 (290), 215 (298), 216-217 (302), 217 (304), 217-218 (305), 223 (315 y 316), 228 (324), 229-230 (329), 230 (332), 231 (334), 232 (337), 241 (358), 245 (368), 248 (375 y 376), 254 (387), 255 (389), 256 (390 y 392), 257 (394), 262 (403), 263 (406), 264 (408), 270 (423), 294 (473), 295 (477), 297 (482), 298 (488), 304 (511), 305 (512), 307 (523), 311 (535), 321 (571), 339 (624), 341 (628 y 629), 342 (630 y 632), 344 (638), 345 (640), 346 (644), 347 (648), 348 (651, 653 y 654), 349 (656 y 657), 350 (660), 351 (664 y 665), 352 (668), 353 (671 y 672), 354 (674 y 675), 367 (712), 372 (722), 373 (723), 377 (738, 739 y 741), 378 (743 y 745), 379 (748), 391 (772 y 773).

(26) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 97 (6), 98 (8 y 9), 101 (18), 104 (25), 117 (57), 133 (105), 151 (150), 218 (306), 307 (520).

efecto, todo intento interpretativo del uso de tales nociones queda necesariamente condicionado, en primer lugar, por la determinación, con carácter general, de los ámbitos personal y territorial de aplicación del Derecho contenido en el Fuero; y, en segundo lugar, por la naturaleza jurídica del contenido de cada uno de los preceptos.

2. Así, es preciso diferenciar entre aquellos preceptos que incorporan un contenido jurídico cuyo carácter obliga a su aplicación conforme a criterios de conexión territoriales, y aquéllos otros que, independientemente de los términos que utilicen para designar a los destinatarios de su contenido, precisan una reinterpretación; siendo necesario buscar fuera de la norma los criterios personales a los que ésta remite a través de la consignación de nociones generales e indefinidas. En ocasiones la diferenciación no admite duda, pues el propio sentido del precepto inclina, necesariamente, a una concreta interpretación. Y en este supuesto se encuentran aquellas disposiciones de carácter eminentemente penal (27), ya que tal normativa exige una aplicación de carácter territorial. Lo mismo sucede con los preceptos sobre procedimiento (28): en todo caso en que las autoridades jurisdiccionales del

(27) M. GOROSCH, op. cit., pág. 101(18), 103(22), 106(30), 108(37 y 39), 111(47), 166(180), 207(278), 209(283), 210(284 y 285), 211(286 y 288), 263(404), 286(453), 287(454), 292(467), 293(470, 471 y 472), 294(473 y 474), 295(476 y 477), 296(478, 479 y 480), 297(481, 482, 483, 484 y 485), 298(487, 488 y 489), 299(490 y 493), 301(498, 499 y 500), 302(501, 502, 503 y 504), 303(505, 506, 507 y 508), 305(512, 513, 514 y 514), 306(516), 307(523), 308(527), 309(531), 349(657), 354(674), 376(734), 377(740), 393(778), 395(781).

(28) M. GOROSCH, op. cit., pág. 120(68), 127(87), 157(164), 158(165), 166(181), 167(182), 176(206 y 207), 177(208), 183(224), 185(227 y 228), 186(232), 187(233 y 234), 192(247), 194(251), 195(253), 197(259), 198(260), 200(263), 201(266), 204(269), 205(273), 207(278), 211(287), 299(491), 342(630), 371(721), 378(745).

lugar conociesen en un conflicto, fuese entre miembros de la comunidad municipal o no, sería de aplicación la normativa procedimental y competencial contenida en el Fuero. De tal forma que, en estos casos la utilización de términos indefinidos al aludir a las personas obligadas por el precepto queda plenamente justificada, en la medida en que la determinación personal no resulta ni necesaria ni jurídicamente relevante.

Igualmente, deben considerarse de aplicación territorial ciertas normas reguladoras del derecho de propiedad y de la responsabilidad civil por daños (29); pues no era precisa la residencia ni el arraigo para poder gozar de propiedades en el término municipal, si bien es la comunidad de pobladores la depositaria del mismo, e incluso el Fuero recoge expresamente el derecho del propietario de bienes raíces a morar en otro lugar, fuera de Teruel (30). Lo mismo sucede con otro tipo de preceptos: aquéllos que al regular ciertos aspectos de la vida municipal cotidiana incorporan penas pecuniarias, multas, a determinadas conductas que podrían ser calificadas como contrarias, o al menos peligrosas, al orden e intereses de la comunidad (31). Consiguientemente, también

(29) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 187(235), 188(237), 212(290), 215(298), 216-217(302), 217(304), 217-218(305), 223(315 y 316), 224(317), 227(322), 228(324), 237(346 y 347), 238(348 y 349), 239(352), 240(354), 241(358), 243(364), 245(368 y 369), 248(376), 250(380), 251(382), 252(383), 253(386), 254(387 y 388), 255(389), 256(391 y 392), 257(393 y 394), 262(403), 263(405 y 406), 264(407, 408 y 409), 304(511), 307(520 y 521), 309(530), 310(532), 311(536), 339(626), 340(627), 341(628 y 629), 342(631 y 632), 344(638), 345(640, 641, 642, 643), 346(644, 645, 646 y 647), 347(648), 348(651, 652, 653 y 654), 349(656 y 659), 350(660), 351(663 y 664), 352(668 y 669), 353(670, 671 y 672), 354(675), 359(688), 368(713), 369(715 y 716), 371(721), 372(722), 373(723), 376(733), 377(738, 739 y 741), 379(747).

(30) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 251, número 382: "Atorgo a uos encara que qual quiere que raíz aurã, aya la aquélla firme et estable por fer d'ella a su propia uoluntad, o sea sano o enfermo, o si quiere yr a morar a otro lugar...".

(31) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 143(131), 151(147, 148 y 149), 152(152), 212(298), 213(292 y 293), 214(294, 295 y 296), 215(297 y 299), 216(301), 226(321), 227(323), 228(324 y 326), 229(328), 229-230(329), 230(330 y 332), 231(334 y 335), 232(337), 234(341), 236(343), 237(345), 241(356), 242(360), 243(363), 244(367), 246(371), 248(375), 308(526), 321(571), 339(624), 348(655), 350(661 y 662), 351(665), 367(712), 378(743 y 744), 393-394(779), 395(782).

en estos casos resulta adecuada, y en tal medida justificada, la utilización de alusiones personales indeterminadas.

3. Sin embargo, junto a estos preceptos cuyo contenido jurídico explica y justifica el empleo de términos, de referencia personal, indefinidos, destacan otros cuyo tenor obliga a la reinterpretación de dichas nociones, en la medida en que la reglamentación jurídica en ellos contenida implica la relevancia del núcleo personal afectado. De tal manera que, en estos casos, el uso de nociones personales indeterminadas no halla justificación y plantea grandes dificultades de interpretación y delimitación.

En este punto, resultan relevantes dos tipos de normas: primero, aquéllas que, regulando determinadas conductas de relevancia comunitaria, imponen una obligación de comportamiento; obligación sólo exigible a los moradores en la medida en que la conducta contemplada necesariamente implica la residencia o habitación en el lugar (32). Segundo, aquéllas que crean un régimen regulador de determinadas relaciones, especialmente familiares y sucesorias (aunque no exclusivamente), que implican un vínculo de carácter personal (33). Podría argumentarse que el primer tipo de normas citado emplea nociones personales indeterminadas porque regula conductas que, si bien implican la morada, adquieren relevancia para el Fuero no en base a esa circunstancia sino en base a la trascendencia comunitaria del comportamiento contemplado. Sin embargo, la interpretación del segundo tipo de normas citado exige la previa delimitación del ámbito personal afectado por su contenido: tomando como punto de partida la necesidad del establecimiento de una conexión vinculada al ámbito personal, y teniendo en cuenta el análisis hasta ahora hecho del Fuero de Teruel ha de considerarse como conclusión, al menos provisionalmente, que la conexión utilizada por el texto era la población.

(32) M. GOROSCH, op. cit., pág. 217(303), 310(533), 391(771).

(33) M. GOROSCH, op. cit., pág. 267(415), 269(418), 270(423), 294(475).

4. En resumen, la utilización de términos indefinidos, alusivos al ámbito personal de aplicación de las normas, no responde a razones técnicas ni estrictamente jurídicas; lo que no resulta llamativo al considerar la ambigüedad jurídica de los textos medievales. La interpretación de estas nociones se halla enlazada a la naturaleza del contenido del precepto y, así, aparecerán dotadas de valor universal cuando la naturaleza territorial del precepto lo aconseje; sin embargo, cuando la naturaleza del precepto precise una vinculación jurídica de carácter personal, habrá de entenderse en principio, que los destinatarios de la norma son los pobladores (moradores/habitadores) del término de Teruel, y sólo serán precisas matizaciones y restricciones cuando claramente se derive de la finalidad y tenor del precepto (34). Así, resulta evidente la concreción del término cuando el texto hace referencia, por ejemplo, a todo omne que portiello de conceio terná (35), pues en este caso será preciso recurrir no a la noción fáctica de poblador, in genere, si no a la configurada por el propio Fuero al establecer quien podía ocupar oficio concejil.

4. La noción de vecino y sus diferentes aspectos.

1. Junto a este tipo de nociones, encuadrables en lo que podría considerarse, indiscutiblemente, una terminología de hecho, el Fuero de Teruel utiliza en numerosas ocasiones el concepto de vecino. El análisis necesario para la determinación de cuáles sean el contenido y la naturaleza de tal noción presenta la dificultad que se deriva de la

(34) M. GOROSCH, op. cit. pág 198(261), 199(262), 200-201(265), 202(267), 206(275), 207(279), 311(535), 322(573), 329(592), 330(596, 597 y 598), 331(599, 600, 601 y 602), 333 (605), 334(609), 337(619).

(35) M. GOROSCH, op. cit. pág. 117, número 57: "Decabo mando que todo omne que portiello de conceio terná, en aquel anno non pida nada en la uilla ni en las aldeas, et el que pidiere pierda el portiello e peche el sennor rey mil sueldos. Et esto pongan en la iura quando iuraren por portiello recibir."

ausencia de sistemática y de la utilización del término para la expresión de realidades jurídicas diferentes. En cualquier caso, y a pesar de ello, es posible realizar una ordenación valorativa de los preceptos del Fuero que emplean la noción de vecino.

En efecto, pueden distinguirse cuatro grandes grupos de normas que incorporan el término. En primer lugar, aquéllas que hacen referencia al vecino en la determinación general del ámbito personal de aplicación del Fuero, presentándolo como noción cercana a la de poblador (36). En segundo lugar, aquel grupo integrado por los preceptos que utilizan el término al buscar la identificación de los miembros de la comunidad municipal de Teruel frente a los que no lo son (37). En tercer lugar, hay normas que incorporan la noción al referirse a situaciones de relación entre miembros de la comunidad municipal (38). Y por último, existe un grupo de preceptos que exigen la presencia o actuación del vecino para garantizar el cumplimiento de fases y formas procedimentales y, de esta manera, asegurar el resultado perseguido por la norma (39).

(36) M. GOROSCH, op. cit., pág. 96(2), 97(5).

(37) M. GOROSCH, op. cit., pág. 98(7), 100(16), 105(26), 107(34), 108(38), 109(44), 110(45), 114(51), 115(53), 119(64), 139(120), 143(132), 147-148-149(141), 149(143), 312(539 y 540), 314(545, 546 y 547), 318(562), 320(569), 374(726), 396(784), 397(787).

(38) M. GOROSCH, op. cit., pág. 99(10), 106(29), 112(48), 212(289), 217(302 y 303), 234(341), 243(362 y 363), 264(409), 310(573), 339(626), 373(722), 394(780).

(39) M. GOROSCH, op. cit., pág. 102(19), 106(31), 109(43), 112(48), 123(75), 124(77), 131(98), 132(101), 133(104), 136(112 y 113), 138(116), 142(130), 143(131), 144(134), 149(142), 153(153, 154 y 155), 154(156, 157 y 159), 155(161), 159-160(167, 166(179), 172(196), 174(201), 179(213 y 214), 180(216), 187(234), 188(237), 188-189(238), 190(242), 209(283), 210(284 y 285), 215(297 y 298), 218(305), 223(315), 226(321), 227(323), 237(345, 346 y 347), 238(348), 239(352), 241(356, 357 y 358), 242(359 y 360), 243(364), 244(366 y 367), 245(367, 368 y 369), 246(370), 247(373), 248(374 y 375), 249(376), 251(362), 252(384), 253(385), 254(387), 255(389), 257(392 y 394), 259(397, 398 y 398 bis), 260-261(400), 261(401), 264(408), 273(429), 280(440), 290(462), 295(476), 296(477 y 478), 297(484), 301(498 y 500), 302(501, 502 y 503), 303(504, 505, 506 y 507), 304(508), 307(522), 308(526), 309(527), 310(532), 320(567), 330(597), 331(599 y 601), 337(617 y 618), 340(626), 350(659 y 660), 359(688), 365(707), 366(708), 368(712), 369-370(716), 371(718 y 719), 373(722 y 723), 376(733), 377(741) y 395(782).

A) El vecino y el ámbito general de aplicación del Fuero.

1. El primer grupo contiene normas que, pertenecientes a la parte inicial del texto, incorporan concesiones privilegiadas propias del Derecho Municipal medieval. En este sentido, dos son los preceptos que al hacer alusión a los dos conceptos (poblador, vecino) parecen establecer un régimen de asimilación entre ellos. Así, en el número 2, al fijar los límites del término de Teruel, se hace concesión del mismo, en exención y seguridad, a todos los vecinos y pobladores de Teruel (40):

-
- (40) M. GOROSCH, *op. cit.*, pág. 94-96, número 2: "In primis, los pobladores de Teruel que agora son et que después uernán, do et otorgo estos dius scriptos términos líberos et francos et quitos por todos tienpos, es assaber: del Poyo de Sant Genés entroa Signa, et de Signa entroa la Sierra de Rochas; et de allí adelant entroa Motorrita, et de Motorrita a la Talaya de Visiedo, et de la Talaya de Visiedo a la Talaya de Reyello, et de allí adelant assín como ua la Sierra de Cerberuela entroa'l molino de Marquo las Parras, et assín como tiene la sierra que es entre las Cueuas et la Ranbla, et ixe entre Portiel Ruujo et Fuent Ferrada por el Collado adelant assín como ujerten las aguas al Collado, entroa Torreçíella et a Fuent Ferrada, et de allí adelant entroa Segura et a Ujlla Nueva por medio el mont, et ixe al Moral, la qual es toda nuestra, et de allí adelant al ual que es dicho del Cogorro, por la sierra asuso entroa la Cannada de Armiellas, et ixe a la Sierra de Alcofol et al Cabaço del Pozuelo, et de allí adelant por el ual entroa'l Ujllar de Iunqueras et por la Sierra de cprtes entroa Ouonciello et por la sierra que ixe a la Penna del Cueruo, et por las Cueuas de Sancto Domingo, que son nuestras, et assín como ixe a la Fuent del Sanlze et al Ujllar Ruujo et al Poyo de Peydro Ximeno et a la Penna del Çit entroa la Sierra de Utriellas, assín como departe el término de Alcanniz, et de allí adelant a Penna Golosa entroa en Arenoso et a Mont Algaraf et a la Lacaua de Xerica et a Bexix et a los Rodenales et a la Talaya de Santa María de Albarazín, et torna se al Poyo de Sant Genés. Que los auant dichos pobladores de Teruel estos dichos términos ayan con todas sus entradas et sus perenencias yermas et pobladas, planos et montannas et yeruas et fustes et aguas et ríos et fuentes et algepçares et pedreras, con todas sus entradas et sus exidas ayan por todos tienpos francos, líberos et quitos en sus propias heredades, ont d'aquí adelant hagan a sus propias uoluntades, ellos et sus filios e todo los omnes de lur generaciön por todos tienpos sin fin; empero, salua la fial dat mja et de toda mj deradraría por todos los siglos, assín como conujene. Mas es assaber que en estos términos retengo a mj senno río Santa Olaia con todos sus términos et sus derechos. Aquestos sobre dichos moiones atodos los uezinos et a los pobladores de Teruel sean saluos e seguros en todas cosas que dentro d'ellos conte xiesse, et defiendan assín como los suyos propios. Decabo do et atorgo a los dichos pobladores todos los dius scriptos fueron et costumbres las quales a mj demandaren et a prouecho d'ellos d'aquí adelant demandar podrán por alguna manera".

y en el número 5 se exime de hueste y fonsado no regios a los pobladores y vecinos de Teruel (41).

Considerando el carácter del contenido de los preceptos, puede argumentarse la identificación de ambas nociones recurriendo a la interpretación que ya se hizo al analizar la utilización del término poblador; de tal manera que, aún en el supuesto de que se admitiese la caracterización de la vecindad con un contenido propio y definido jurídicamente, sería obligado reconocer que la inclusión de tal criterio junto al de poblador no añade elemento alguno a la noción determinante del ámbito personal de aplicación del Fuero; pues la constante utilización del concepto de poblador - criterio en cualquier caso más amplio que el de vecindad - condiciona la fijación de la esfera personal de aplicación, que siempre quedará vinculada necesaria y exclusivamente al hecho de la población (entendiendo la población, como ya se indicó, como la presencia cualificada por el asentamiento derivado del ánimo repoblador).

2. Junto a este argumento, que hace derivar la asimilación de ambos conceptos de la naturaleza del contenido de los preceptos analizados, existen razones que apoyan semejante conclusión atendiendo a la propia estructura de las normas. Primero, en el texto del número 2 se lee: "... Aquestos sobre dichos moiones atodos los üezinos et a los pobladores de Teruel sean saluos e seguros en todas cosas que dentro d'ellos contexiesse, et defiendan assín como los suyos propios. Decabo do et otorgo a los dichos pobladores todos los dius scriptos fueros et costunbres..."; Segundo, en el número 5, copiado en el Manuscrito del Código Turolense (segunda mitad del siglo XIII) se lee: "Decabo mando que los pobladores et los üezinos de Teruel non uayan en huest ni en fonsado si non con mñ, Rey,...", mientras que en el texto del mismo pre

(41) M. GOROSCH, op. cit., pág. 97, número 5: "Decabo mando que los pobladores et los uezinos de Teruel non uayan en huest ni en fonsado si non con mñ, Rey, a canpal bataia a fuero d'estremadura, o a camiento de castiello, con pan e con biuandas, segunt uotuntat del sennor rey. Todo cauallero que en fonsado o en apellido de conceio non fuere, peche V sueldos, et el peón II sueldos et medio."

cepto incluido en el Manuscrito del Códice Matritense (siglo XIV) se dice: "Decabo mando que los pobladores de Teruel non uayan en huest ni en fonsado si non con m^j Rey,..."(42).

Por consiguiente, puede concluirse que en este primer grupo de normas que incorporan la noción de vecino, el Fuero asimila tal concepto al de poblador. De tal forma que la vecindad goza, al igual que la moranza o la población, de un componente fáctico que resulta jurídicamente determinante.

B) El vecino y la identificación de los miembros de la comunidad municipal.

1. Analizar el segundo de los grupos de normas enumerados, plantea la dificultad adicional de introducir un nuevo elemento capaz de convertir cualquier intento interpretativo en un círculo vicioso. En efecto, en este caso no se trata ya de normas configuradoras de un marco general de aplicación del Fuero que puedan interpretarse a la luz de los objetivos y fórmulas generales de concesión de los Derechos Privilegiados, sino de normas reguladoras de concretos comportamientos e instituciones jurídicas determinadas. De tal manera que la interpretación del contenido regulador de la norma vendrá condicionado por la amplitud o restricción con que se aprecie la esfera personal afectada por el precepto; e igualmente la determinación de dicha esfera personal que dará afectada por el carácter e interpretación que se conceda al contenido regulador de la norma. En este sentido, si se toma como ejemplo el número 53 del Fuero:

"Mando encara que el sennor de la villa ni el alcayat non prenga algún uezino sin iúdez, maguera que el uezino por propia colonia o por debdo sea uençido. Et es assaber que, después que el uezi- no preso fuere por colonia en la qual el palacio aya su derecho, el sennor de la villa ni su omne non tenga preso aquel uezino, si non el iúdez. Qual derecho es que, después que el iúdez noueno ent prende, tenga el iúdez el preso en su poder e curie lo fasta que pague todo lo que fuere a pagar. Et assaber que qual quiere alcayat que de Teruel fuere aya poder de poner merino qual a él plazrá, sacado uecino de Teruel, que non lo pueda seer. Estas cosas son de los derechos del alcayat e non otras, segunt del fuero." (43).

(42)M. GOROSCH, op. cit. pág. 97: nota al número 5 (2).

(43)M. GOROSCH, op. cit. pag. 114-115, número 53.

en la medida en que se determine quiénes eran considerados vecinos, podrá precisarse el contenido de las facultades y autoridad del Señor de la villa, de los Alcaldes y de los Jueces. Y, viceversa, en la medida en que se concrete el contenido jurisdiccional de las autoridades citadas, podrá determinarse qué personas quedaban sometidas a estas jurisdicciones y en qué consistía la categoría de vecindad.

2. Para la superación de esta dificultad es necesario un intento de análisis que permita, sin perder de vista en ningún momento la esfera personal de aplicación general del Fuero, apreciar la naturaleza jurídica del contenido de cada norma y establecer los elementos característicos del mismo para precisar en cada caso la amplitud personal lógica de la normativa creada por el texto foral.

En esta línea de interpretación, resulta de gran relevancia la consideración y análisis de dos normas de naturaleza fiscal contenidas en el Fuero. Sobre todo, por tratarse de un tipo de normas que se repite con similar contenido, e idéntica finalidad, en muchos textos municipales medievales, como ya se apreciará más adelante en el estudio de los textos de otros Reinos peninsulares. Normas cuyo contenido ha servido, además, de fundamento a algunos autores para sostener que la vecindad de los textos municipales cualificaba la morada, haciendo de los vecinos los beneficiarios en plenitud de los privilegios establecidos por el Fuero.

Así, el número 6 del Fuero de Teruel establece

"Decabo mando que todo omne que en la uilla de Teruel casa poblada toujere et allí morare non peche en njnguna pecha. Mas es assaber que los aldeanos deuen pechar cada anno al sennor rey o ad aquel que por él la uilla toujere IIII: o mil sueldos et non más, segunt del fuero; e al iúdez por su soldada mil sueldos et el beynteno de los auant dichos IIII: o mil sueldos, que deue recibir el iúdez segunt del fuero; al escriuano C sueldos; a los alcaldes CCCC sueldos; a los andadores CC sueldos; al sayón LX sueldos; al uezadero CL sueldos; a nuef uelas a cada uno LXXX sueldos, que montan DCCXX sueldos; a dos sobreuelas CXX sueldos; et la soldada de los ataiadores, si menester fuere; et en la necessitat de los muros e de las puertas de la uilla, quando abiniere; et en cauallos, si segundt fuero de Teruel murieren. ... Et es assaber que los aldeanos non son tenidos por derecho nin por fuero pechar otras cosas si non las de suso auant dichas. Más empero,

quando el sennor rey de Aragón vernã, quanto los bonos omnes de Teruel con otorgamientoe con conseio de los proomnes de las aldeas al sennor rey prometieren, los auant dichos aldeanos lo den dar et pagar." (44).

Y el número 7 de dicho texto completa:

"Mas assaber es que aquel uezino que casa poblada toujere en la villa primera mientre por un anno, non peche, si prouar lo pudiere con dos uezinos, assín como es fuero de Teruel; si non, peche en su aldea. Et ésta es la probación que todo omne que muger oujere, deve tener casa poblada con su muger, mas si muger non oujere, tenga casa poblada con su fija, si la oujere, o con alguna parienta; et esto prouando con dos uezinos más cercanos de su casa, primera mientre iurando sobre la cruz y los IIII:os euangelios, en estí caso non peche; si non, peche en el aldea que soujere, sin pleyto." (45).

El carácter general de la redacción del primer texto parece verse limitado por el más restrictivo del segundo; pues mientras en aquél se establece la exención para todo hombre que en la villa de Teruel tuviere casa poblada y allí morase, en éste se utiliza el término vecino y la exigencia de un tiempo mínimo de población: un año. Con base en estos datos se ha interpretado en algunas ocasiones (46) que el destinatario del privilegio era el vecino de la villa e, igualmente, se ha planteado si los requisitos de la exención constituían las condiciones de acceso a la vecindad; lo cual, en el caso concreto del Fuero de Teruel llevaría a considerar que la adquisición de la vecindad se producía por tener casa poblada en la villa y residir allí durante un año. Pero, con tal interpretación no sólo se rompe el carácter general del tenor literal del primer precepto, sino que se imposibilita la realización de la finalidad esencial perseguida por el establecimiento del privilegio y por la específica regulación en materia fiscal.

(44) M. GOROSCH, op. cit., pág. 97-98, número 6.

(45) M. GOROSCH, op. cit., pág. 98, número 7.

(46) A. GARCIA ULECIA, Los factores de diferenciación entre las personas en los Fueros de la Extremadura castellano-aragonesa, Sevilla, 1975, pág. 48-53. Al analizar los aspectos fiscales en un intento diferenciador, según los Fueros, de los vecinos frente a quien carece de vecindad, A. García Ulecia parte de la noción de vecino como concepto delimitador de la aplicación del Derecho contenido en el Fuero; pero, sin embargo, continuamente, en la interpretación de los textos mencionados equipara de manera sistemática términos diferentes: "hombres de...", "pobladores de ...", "vecinos de...".

3. Mucho más correcto parece buscar una explicación que satisfaga la ratio de la norma. En primer lugar, ha de admitirse la exención con la amplitud que su formulación en el número 6 del Fuero establece: el dato determinante del goce del privilegio es el tener casa poblada en la villa y morar allí, de manera que los destinatarios de la norma son claramente los pobladores/moradores, y no los vecinos. En efecto, este tipo de normativa se justifica por la intención de aplicar el Derecho Privilegiado a quien acudiese a poblar el lugar con ánimo de permanencia y asentamiento, favoreciéndose así la repoblación en los territorios en que la misma interesaba. En este sentido, el privilegio no se concedía a los aldeanos, pues lo que interesaba era poblar la nueva villa que el propio Fuero fundaba, como ya se vio en el encabezamiento del texto; mientras que el resto del término municipal de Teruel carece de semejante incentivo y se constituye en el eje tributario sustentador de la economía municipal y garantía económica de la organización concejil, en la medida en que eran los aldeanos los obligados a la retribución de los oficios (portiellos) municipales.

En este marco, cobra sentido el contenido del número 7 del Fuero: su única razón de ser es evitar el fraude tributario. En efecto, el Fuero concede la exención a todos los pobladores de la villa, por el mero hecho de la morada, pero busca garantizar que los obligados a tributar no gocen fraudulentamente de la exención; y, así establece unas condiciones aplicables únicamente a éstos últimos, pero en ningún caso exigibles a quienes primariamente son beneficiarios del derecho por mandato del propio Fuero. De tal manera que la norma de este número 7 pretende impedir que el aldeano, pechero, mediante la adquisición de casa en la villa intente eludir el pago del tributo.

Con tal interpretación se justifica, además, plenamente la utilización, en esta última norma, de la noción de vecino. Pues, el precepto se está refiriendo, obviamente, a alguien ya arraigado en el término municipal, en concreto en alguna aldea. Se trata de un aldeano, de un morador de la aldea, de un vecino de la aldea, ya que sólo éste es susceptible de cometer fraude.

4. Por tanto, puede concluirse que, a efectos tributarios, la exención no dependía de la vecindad, sino de la conexión que vinculaba

al morador con el territorio, en la medida en que los beneficiarios del privilegio lo eran en su condición de moradores de un determinado territorio: la villa de Teruel. De tal forma que estos preceptos al aludir a los vecinos lo hacen otorgando al término el sentido de miembros de una comunidad, ya sea de la comunidad municipal de la villa o de la de cualquiera de las aldeas pertenecientes al término municipal de Teruel; lo cual se pone de relieve, en lo que a la comunidad de la villa se refiere, en el hecho de que la norma utilice la noción de vecindad para hacer referencia a la necesidad de probar la tenencia de casa poblada en la villa y el plazo mínimo de población con dos vecinos más cercanos de su casa, ya que se trata de una expresión claramente alusiva a las relaciones de vecindad como relaciones entre personas que comparten la vida municipal cotidiana (47).

5. En este sentido, es relevante la toma en consideración de otros preceptos del Fuero de Teruel que, al aludir al régimen tributario expuesto, se refieren indistintamente a cualquiera de las nociones fácticas usuales (habitantes, moradores, pobladores, hombres de) y a la noción de vecino. Así el número 56 establece: "... Et esto es establecido por todos tiempos, por que los omnes de la uilla de Teruel non son tenidos de pechar por derecho alguna cosa."(48); mientras que el número 774 afirma: "... que los uezinos habitantes en la uilla de Teruel non son tenjdos de pechar."(49). Esta oposición de términos en normas cuyo contenido expresa una misma realidad jurídica y un mismo imperativo obliga a excluir la consideración de la vecindad como noción autónoma y jurídicamente definida.

Dentro de este segundo grupo de normas que utilizan la noción de vecino al buscar la identificación de los miembros de la comunidad municipal de Teruel frente a los que no lo son, se encuentran numerosos preceptos cuyos destinatarios son los vecinos de Teruel(50). Se trata de

(47) Vid. una interpretación diferente, si bien abierta, en A. GARCIA ULECIA, op. cit., pág. 51-52.

(48) M. GOROSCH, op. cit., pág. 116, número 56.

(49) M. GOROSCH, op. cit., pág. 392, número 774.

(50) M. GOROSCH, op. cit., pág. 100(16), 105(26), 109(44), 110(45), 114(51), 115(53), 139(120), ~~147-148-149~~(141), 312(539), 314(545), 374(727), 396(784), 397(787).

normas que introducen la noción de vecino para aludir, claramente, al núcleo personal general afectado por el Fuero, al núcleo poblador del término municipal. En efecto ha de entenderse que estas normas resultan de aplicación a los vecinos del término municipal, porque ninguna de ellas introduce diferenciación entre alusiones a los vecinos de la villa o a los vecinos de las aldeas y porque la naturaleza de la regulación en ellas contenida no induce a una interpretación diferente que incline a considerar su aplicación exclusiva en la villa o en las aldeas.

6. En este punto del análisis, a la hora de resaltar la configuración, en el Fuero de Teruel, de la vecindad como categoría identificadora del miembro de la comunidad frente al que no lo es, resulta muy esclarecedora la lectura de ciertos preceptos que oponen la cualidad de vecino a la de extraño o no conocido. Esta oposición se presenta siempre de forma tan amplia que obliga a la consideración de la vecindad como categoría general y no residual. Así, el número 64 del Fuero establece:

"La elección fecha e de todo el pueblo confirmada, el iúdez et el escriuano e los alcaldes et el almutaça et encara el sayón iuren en conceio sobre la cruz e los IIII:º euangelios que por temor de persona ni por uergüença ni por amor de parientes o de amigos o de uezinos o de estrannos ni por pregaria ni por precio que yo non quebrante el fuero nin lexe la carrera derecha." Los andadores iuren en conceio o en la corth de los alcaldes, e non es a pensar si no n que iuren." (51).

Y el número 132 afirma:

"Mando encara que el sayón d'esta uilla que sea iurado sobre la cruz e los IIII:º euangelios que sea fidel en todas cosas a los ricos e a los pobres e a los uezinos et a los estrannos e a los iudíos et encara a los moros. ..." (52).

Por último, el número 569 dice:

"... Sea encara en el fuero de Teruel que, después que el conceio fuere exido de la uilla, todos los non conocidos de la uilla de Teruel sean echados. Después del sol puesto, si las uelas o las roldas alguno andando de noch por las calles trobaren non leuando

(51) M. GOROSCH, op. cit., pág. 119, número 64.

(52) M. GOROSCH, op. cit., pág. 143, número 132.

fuego, las curias todas las uestiduras prengan et mētanlo en la presón del concejo fasta la mannyana. Mas ala mannyana denlo en concejo. Et si uezino o fijo de uezino fuere, esnudo sea en concejo et suelto; mas si por aventura non conoscido fuere, sea enforcado." (53).

En caso de admitirse que la vecindad no es, en el Fuero de Teruel, una mera noción fáctica, sino jurídicamente definida por el texto como una residencia cualificada, habría de admitirse, igualmente, que las normas anteriormente transcritas excluyen a los "residentes" al utilizar el término "vecino". Tal interpretación es, sin embargo, incoherente con el texto de los preceptos, sobre todo en el caso del número 569; pues ello supondría colocar a los supuestos residentes-no vecinos entre los no conocidos. De manera que, necesariamente, ha de considerarse la vecindad como un concepto amplio, integrante, en este caso, de la terminología de contenido fáctico utilizada en otras ocasiones por el fuero; y ello conlleva la negativa a restringir el contenido de la noción de vecindad frente al de nociones como morada, población o habitación.

C) El vecino como noción relacional.

1. Examinando los preceptos que emplean el término vecino, existe en tercer lugar un grupo de normas que introducen la noción con carácter relacional. Esta caracterización ya nos es conocida, puesto que desde el análisis de los textos del Derecho local en la Alta Edad Media se ha aludido a este empleo del término: el concepto de vecindad se utiliza relacionamente cuando mediante su empleo se alude a las relaciones existentes entre miembros de una misma comunidad. En este sentido, el término integra su caracterización etimológica significada por la cercanía y la relación a que ésta obliga en la vida diaria de una comunidad organizada.

Así, es fácil detectar este uso de la noción cuando la norma se refiere igualmente al concepto de "colindante"(54), o "asulcano"(55);

(53) M. GOROSCH, op. cit., pág. 320, número 569.

(54) M. GOROSCH, op. cit., pág. 243(363).

(55) M. GOROSCH, op. cit., pág. 243(362).

así como cuando se introduce el empleo de posesivos (56), que carecería de sentido en el caso de la utilización de la categoría de vecindad con carácter jurídicamente autónomo y absoluto.

En esta línea y con este sentido halla explicación el empleo del adjetivo vecinal para referirse a una casa cercana:

"Otrosi, qual quiere que de caýda de alguna casa o de biga o de paret o encendimiento de la uezinal casa se tenbrã, amuestre lo al sennor de aquellas casas con el iudez e con los alcaldes o en conceio, que eche aquella paret o que endreçe labiga o que curie aquella casa que non faga danno por alguna manera. ..." (número 289) (57).

y el de vecindad para aludir al entorno poblado:

"... Mas otra baticanbra que a ojo de cal non fuere, si la fedor a la cal o a la uezindat yxiere, el sennor de la baticanbra sea amonestado que uñede la fedor. ..." (número 533) (58).

De manera que, la consignación de palabras derivadas de una misma raíz para hacer referencia a realidades no personales pone de manifiesto el carácter relativo y el empleo relacional del término en los casos aludidos.

D) El vecino como garante de obligaciones.

1. Para finalizar el examen de las normas del Fuero de Teruel que aluden, de una u otra forma, a los vecinos, es preciso analizar aquellas que exigen la presencia o actuación de éstos en determinadas fases y formas procedimentales. Se trata de una normativa reguladora de procedimientos de garantía (fianza, juramento, presencia como testigo, prenda, firma, testimonio, prueba en general) que en manera alguna predetermina el ámbito personal de aplicación de los preceptos que sustantivamente contemplen aquellos actos, hechos que constituyan el objeto último de la finalidad perseguida por la determinación de cada procedimiento y de cada garantía.

(56) M. GOROSCH, op. cit., pág. 373(722), 394(780).

(57) M. GOROSCH, op. cit., pág. 212, número 289.

(58) M. GOROSCH, op. cit., pág. 310, número 533.

Por ejemplo, cuando el número 159 establece:

"Que si alguno de los contensores ya aplazado assi como es dicho al plazo non ujniere, peche V sueldos al iudez et al querelloso, si uençido fuere con aquellos dos uezinos delant los cuales fué aplazado como el fuero manda o enuidado. Mas quando qual quiere aplazado uerna el plazo, tenidas las razones de la una e de la otra part, los alcaldes iudguen les esti fuero. E si por auentura ad alguno de los peyteantes non plugiere aquel iudicio de los alcaldes, apelle se a la corth del día uiermes. Empero, si el peyndrado se apellarã, non le sean rendidos los pennos. Mas si el peyndrador se apellarã, los pennos sean sueltos." (59)

Con ello, está introduciendo un precepto procesal, aplicable a los litigantes (contensores); litigantes cuya caracterización dependerá de las conexiones personales determinantes de la competencia de las autoridades judiciales de Teruel. En este sentido, y como ya se analizó al examinar el carácter territorial de muchos preceptos que utilizaban términos generales e indefinidos al fijar su esfera personal de aplicación, la norma es aplicable, una vez fijada la competencia, independiente de la presencia o ausencia en los litigantes de vínculos (personales o territoriales) con Teruel. Otra cosa es que el fuero exija, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales, que el emplazamiento se realice con dos vecinos como testigos. Será, pues, en éstos en quienes deberán concurrir las notas caracterizadoras de la vecindad.

2. Entre las normas de este tipo se encuentra el precepto más relevante en la búsqueda de una posible noción jurídica de vecindad en el Fuero de Teruel. Se trata del número 233, cuyo texto establece:

"Otrosí, qual qujere que firmas deurã recebir et las desecharã, ellos estando conuenjbles, caya del peyto. Mas el que deurã firmar et las firmas al día del paço non podrá auer como el fuero manda, caya del pleyto. Mas a saber es qu'el fuero manda et los stablimjentos del derecho que los uezinos de la ujlla et los fijos de los uezinos firmen contra otro uezino, segunt del fuero. Los uezinos clamanos todos los de la ujlla asín como los de las aldeas que en el padron del concejo serán escriptos, o son uezinos en alguna collación d'esta ujlla, et mando qu'éstos tales firmen contra otro uezino o contra qual quiere otro, segunto del fuero." (60).

(59) M. GOROSCH, op. cit., pág. 154, número 159.

(60) M. GOROSCH, op. cit., pág. 187, número 233.

La normativa procesal contenida en el fuero exige que los testigos juradores (siempre que su presencia sea preceptiva) fuesen vecinos. Y, al hilo de tal exigencia, el número 233 especifica quiénes son vecinos, considerando definitivo el hecho de la inscripción en el padrón del concejo o de la correspondiente collación. Pero semejante explicación en modo alguno resuelve el problema interpretativo planteado, pues si bien parece claro que era considerado vecino quien como tal estuviese inscrito, ¿qué condiciones o circunstancias determinaban la inclusión o exclusión en el padrón? La respuesta a tal cuestión pasa, necesariamente, por el intento de una interpretación integradora de los preceptos que el fuero dedica a la determinación, función, finalidad y funcionamiento del padrón.

En este sentido, el número 13 establece la prohibición de recaudar tributos de quien no se encontrase inscrito en el padrón (61); y, en tal medida ha de entenderse que el padrón era esencialmente un censo tributario, que incluiría las calificaciones y clasificaciones necesarias para que el cogedor (recaudador de tributos) procediese a la identificación de los titulares de la obligación o de la exención de tributar. De manera que, si bien todos los obligados a tributar debían constar en el censo, no todos los censados eran titulares de la obligación tributaria.

Como ya se apreció en el análisis de los números 6 y 7 del Fuero, la exención tributaria correspondía a quien en la villa tuviese casa poblada y allí morase, mientras que la obligación de tributar correspondía a los aldeanos. Para determinar qué circunstancias fijaban la condición de aldeano, y por tanto la de pechero, puede recurrirse al contenido del número 15: "Et es assaber que, si algún aldeano en dos aldeas de nuestro término oujere heredades, peche en aquella aldea en la qual toujere la muger el mayor tienpo"(62). De donde se deduce que,

(61) M. GOROSCH, op. cit., pág. 99-100, número 13: "E si el cogedor pecha de alguro otro cogiere si non de aquel que faziere escripto en el padrón, dupple la aquélla al querelloso e peche I morauedís alfonsí al iúdez et a los alcaldes. Decabo, si el cogedor que el padrón de concejo toujere et alguna cosa mudare o annadiere, peche X morauedís alfonsís et el danno duplado, si prouado'l fuere".

(62) M. GOROSCH, op. cit., pág. 100, número 15.

independientemente de la propiedad, el aldeano lo era de donde hiciese población y morada; pues ya se apreció como el hecho relevante para la prueba de la población y de la morada en la villa, exigible para el reconocimiento de la exención, era la determinación de la residencia de la familia (mujer, en su caso, o hija, o parienta próxima - número 7 -) susceptible del establecimiento de hogar (de ahí la exclusiva referencia a miembros femeninos).

3. De la coordinación de estos datos puede concluirse que el acceso al censo exigía los requisitos de población y morada, pues de ello dependía tanto la exención como la obligación tributaria: al padrón de la villa accederían los pobladores/moradores en ella y ello determinaría el reconocimiento de la exención; al padrón de las aldeas accederían los pobladores/moradores en ellas y ello determinaría la obligación tributaria. Por tanto, y para concluir, la vecindad participaría de la nota fáctica determinadora del ámbito general de aplicación personal del Fuero de Teruel.

Capítulo II

EL DERECHO LOCAL DEL REINO DE NAVARRA

I. INTRODUCCION.

1. Desde una experiencia en la que el pueblo navarro consideraba el Derecho como factor de defensa y consolidación de su propia independencia e identidad, el proceso de formación y elaboración jurídicas condiciona y determina el sistema y la estructura del poder político. De esta manera, el frecuente sometimiento de Navarra al poder de monarcas extraños, forzó la búsqueda de la independencia y la defensa en pureza de la personalidad popular en vías extra-políticas; así, el Derecho Local Navarro nace, sea cual sea el origen de la normativa concreta, como decisión y manifestación del poder de la comunidad local; y, desde la fuerza de las formaciones municipales, se impone al soberano como delimitación y conformación de su propio poder sobre la población.

2. En este contexto, el Reino de Navarra vive, durante el período histórico bajomedieval, una evolución jurídica de carácter prácticamente lineal. En efecto, la general tendencia que, ya desde finales de la Alta Edad Media y a lo largo de toda la Baja, provocó la búsqueda, por diversas vías en los distintos núcleos políticos de la Península, de Derechos Territoriales, revistió en Navarra un marcado carácter tradicional y consuetudinario. Asistiéndose a un proceso de positivación jurídica, que concluirá en el siglo XIV con la elaboración de un texto unificado: el Fuero General de Navarra.

El espíritu informador de esta labor unificadora determinó la constitución del Fuero General como texto compilador de la normativa vigente en el Reino, bien plasmada por escrito (e incorporada por los textos locales: Fuero de Jaca, Fuero de Tudela, etc.) o no; provocando gran cercanía material entre el Derecho General y los Derechos Locales, y asegurando la continuidad con respecto a la situación jurídica del territorio durante el período anterior, tanto en lo relativo al contenido de la regulación concreta como a la caracterización general político-

jurídica (1).

De tal manera que, independientemente de la explicación que se ofrezca a esta situación de coexistencia jurídica (2), el Derecho territorial no sustituyó, ni general ni predominantemente, a los Derechos Locales Navarros durante la Baja Edad Media; resultando incuestionable la fuerza, vigencia y desarrollo que éstos alcanzaron durante los siglos XIII, XIV y XV (3).

3. Ya en el momento de concesión de los primeros privilegios locales altomedievales en Navarra, cuando se perseguía una distribución territorial apta para cubrir determinados intereses militares, políticos y económicos, y para asegurar, paralelamente, la compensación de poderes y jurisdicciones, el Derecho Local Navarro vivió la influencia, y práctica asimilación, del Derecho Local Aragonés.

Y, ahora, durante la Baja Edad Media, cuando los objetivos de política legislativa han variado y el poder real tiende a fortalecerse frente a los restantes poderes en presencia, el Derecho Local Navarro continúa siendo tributario del Aragonés, especial y directamente del Derecho de Jaca.

Así, los textos más representativos del Derecho Local Navarro Bajomedieval, cuya vigencia más se dilata espacial y temporalmente, son textos vinculados, al menos en principio, al Fuero de Jaca, en cualquier

(1) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 158.

(2) "La supervivencia del Derecho Local en Navarra es de carácter vital, como consecuencia de lo incompleto y arcaico de su ordenamiento territorial". J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 158; "La vigencia del Fuero General de Navarra no tendió a suprimir los Fueros Municipales, sino más bien a completarlos". F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 207.

(3) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 158; J. M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho Español, 1973; pág. 468.

ra de sus redacciones (4). En este sentido, el Fuero de Estella, en sus diversas versiones, no es sino una adaptación del Fuero de Jaca; y el proceso de evolución, desarrollo y modificación del Derecho de Estella no supone sino un proceso de independización de éste con respecto al Derecho jacetano, manteniendo, siempre y en cualquier caso, sus principios informadores e instituciones básicas. Asimismo, el Fuero de San Sebastián, en cuanto extensión territorial del Fuero de Estella, provocó la aplicación de la normativa de Jaca en tierras vascas. Por último, también el Fuero de Pamplona supone la vigencia del Fuero de Jaca en el territorio pamplonés, si bien con las peculiaridades de vigencia del Derecho provocadas por la especial situación política y jurisdiccional de la ciudad y sus barrios.

Por otra parte, en el examen del Derecho Local Navarro durante la Baja Edad Media sobresalen algunos otros textos de origen jurídico diverso al jacetano; entre los cuales el Fuero de Tudela adquirió, por su extensión territorial y temporal, una mayor importancia y representatividad.

II. EL DERECHO DE ESTELLA. (1) EL FUERO DE ESTELLA.

1. Introducción. Las vías de interpretación de los textos.

1. El Rey Sancho Ramírez, que ocupando el trono aragonés había otorgado en 1064 fuero a la ciudad de Jaca, concede en 1090, siendo ya monarca de Navarra, este mismo fuero a Estella, villa navarra fundada en torno a la edificación de un castillo en el marco de la decisión real de constituir una población franca en Lizarra (5).

(4) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206-208; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, págs. 185-186, 188-189; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 158; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 74-75, 79-80.

(5) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 185 y 188; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 74 y 79; J.M. LACARRA (con la colaboración de A.J. Martín Duque), Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1: Estella-San Sebastián, Pamplona 1969, págs. 17-20; (en adelante J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1).

No se conoce el texto del fuero correspondiente al otorgamiento de 1090 sino en la medida en que fue posteriormente incorporado al fuero concedido a la villa en 1164 por Sancho el Sabio. Este último texto no supone ya una mera transcripción del Derecho de 1090, sino que también asume Derecho configurado en esos más de 70 años; de manera que, aquella misma fecha, 1164, marca el momento en que el Fuero de Estella adquiere independencia con respecto al Derecho de Jaca (6).

2. El análisis de las diversas versiones del Fuero de Estella que han sido examinadas (7), conduce, como detalladamente quedará expuesto, al establecimiento de dos vías interpretativas: una de carácter general, y otra de carácter comparativo.

Una interpretación general, que obliga a dirigir el estudio de cada texto a la determinación de las nociones relevantes a la hora de fijar los ámbitos personal y territorial de aplicación del Derecho contenido en el Fuero, así como de las razones justificativas de la utilización de unos u otros términos o de unas u otras nociones. En segundo

(6) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, págs. 185 y 188; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 79-80; J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 17-22.

(7) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1 (Recoge dos versiones latinas: la del texto de 1164 otorgado por Sancho el Sabio de la que se conocen tres manuscritos fragmentarios, a saber a) el conservado en el Archivo Municipal de Estella (siglo XII), b) el conservado en la Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York (siglo XIII), y c) el conservado en el Archivo General de Navarra (siglo XIII); y la del Proyecto de Reforma elaborado en el siglo XIII, contenido en el manuscrito del siglo XIII conservado en el Archivo Municipal de Estella. La edición recoge, además, dos versiones romances: la del texto contenido en manuscrito, que se conservaba en el Archivo Municipal de Huarte Araquil, y en manuscrito del siglo XV-XVI conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, y, finalmente, en manuscrito conservado en los Archives Nationales de París; y la del texto contenido en manuscrito del siglo XIV conservado en la Biblioteca de Palacio de Madrid (hoy en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca).), págs. 31-34 y 85-230.

lugar, una interpretación comparativa que, tomando como base las variantes existentes entre los diversos textos, permita establecer el contenido y relevancia jurídicos que las mismas poseen en el marco de la investigación de las nociones utilizadas por el Fuero para determinar su ámbito de aplicación

2. La interpretación general de las nociones relevantes.

A) Las nociones de hecho. Relevancia de las normas sobre competencia judicial.

1. En la redacción de las diversas versiones, se utilizan tres tipos de nociones al referirse a las personas que aparecen como destinatarias de los preceptos. En primer lugar, se utilizan nociones de hecho, que parecen prescindir de cualquier caracterización jurídica, y constituyen términos de vinculación entre el elemento personal y el elemento territorial para la aplicación del fuero. Así ocurre con los encabezamientos, en cuanto textos determinantes del origen y destino de los preceptos incorporados al fuero, que no presentan diversificación en el empleo de las nociones y terminología utilizadas al hacer referencia al territorio y a las personas afectadas por la concesión. Ello se evidencia examinando los textos:

1. Encabezamiento correspondiente a la concesión realizada en 1164 por Sancho el Sabio: "Hec est carta auctoritatis et confirmationis quam facio ego Sancius rex, filius regis Garsie, uobis omnibus hominibus de Stella, tam maioribus quam minoribus, presentibus et futuris. Placuit mihi liti animo et spontanea voluntate, propter servicium quod mihi fecistis et facitis quotidie, dono et concedo vobis et successoribus vestris illos bonos foros quos Sancius rex concessit et dedit antecessoribus vestris quando populavit Stellam. ..." (8)

2. Encabezamiento correspondiente al texto de la reforma realizada en el siglo XIII, que no alcanzaría sanción real, ni, por consiguiente, vigencia:(9) ... Hec est carta auctoritatis et confirmationis quam ego Theobauldus, Dei gratia rex Navarre, Campanie et Brie comes palatinus, facio uobis omnibus hominibus de Stella,

(8) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 87.

(9) F.TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206; J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 22-24.

tam maioribus quam minoribus, presentibus et futuris. Placet mihi libenti animo et spontanea uoluntate, et propter serui-cium quod mihi fecistis et facistis cotidie, quod ego dono et concedo uobis et successoribus uestris illos bonos foros quos Sancius rex, cui requies sit, dedit antecessoribus uestris quando populauit Stellam. ... (10).

3. Encabezamiento correspondiente al texto de una redacción roman-ce incorporada en manuscritos que datan de los siglos XIV, XV y XVI: "...Esta es carta d'autoritat et de confirmation que io Sancho, rey de Nauarra, filltz del rey don Garcia, fay a totz los omnes d'Estela, als qui son presentz et als qui son per uenir. Per lo bon seruiçi que uos me faitz totz dies, de bons uoluntat donei e aytorguey als omnes d'Estela, als qui son e seran, aquels bons fors que dona lo rey don Sancho als poblados de l'Estela quant primerament la pobla. ..." (11).
4. Encabezamiento correspondiente al texto de una redacción roman-ce incorporada en manuscrito que data del siglo XIV: "... Hec est carta auctoritatis et confirmationis quam ego Sancius rex, filius regis Garsie, fatio uobis omnibus hominibus de Estella, tam maioribus quam minoribus, presentibus et futuris. Placuit mihi libenti animo et spontanea uoluntate, et propter seruitium quod mihi fecistis et facitis cotidie, dono et concedo uobis et succesoribus uestris illos bonos foros quos Sancius rex, cui requies sit, dedit antecessoribus uestris quando populauit Ste-llam. ..." (12).

En efecto, las cuatro redacciones emplean la misma terminología para definir y delimitar, con carácter general, el ámbito personal de aplicación del Fuero: hombres de Estella. Noción que, igualmente, utilizan las fórmulas finales de los textos en la sanción, confirmación, data y firma del Fuero (13). De tal manera que puede señalarse que son, precisamente, nociones fácticas (hombres de Estella, en concreto) las incorporadas con carácter exclusivo por el Fuero en la parte de su texto propiamente específica en lo que a la determinación del ámbito afectado se refiere: fórmulas de encabezamiento y sanción.

2. Gran relevancia presenta la consideración y análisis de otro

(10) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 87.

(11) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 153.

(12) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 153.

(13) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 148 y 229.

sector normativo cuyas disposiciones generales emplean, asimismo, la noción hombres de Estella. Se trata de los preceptos de determinación global de la competencia judicial y su exclusividad. En efecto, el fuero consagra un sistema de competencia exclusiva, obligando a los hombres de Estella a pleitear en todo caso ante la autoridad judicial de su villa, tanto al intervenir en el litigio en calidad de demandante como al hacerlo en calidad de demandado:

Nº 10, Libro I, de la redacción de 1164: "1. Et nullus ex omnibus hominibus de Estella, fuisset ad iudicium in ullo loco, - nisi intra in Stella.
2. Et si homo de Stella fuerit inventus foras in aliquo loco, - et ullus homo de foris habuerit rancura de illo, veniat cum eo ad Stella, et accipiat directum ad forum Stella, quia non debet recipere iudicium de arcaldis - de foras." (14).

Nº 10, Libro I de la redacción recogida en manuscritos de los siglos XIV, XV, y XVI: "1. E -- nuill omne d'Estela non uaya fora d'Estela a iugament.

2. E si omne d'Estela es fora - d'Estela en algun loc, et algun omne de fora a rancura d'el, -- uenguen entrans a l'Estela, et prenga lo clamant dreyt al for d'Estela, quar l'omne d'Estela non deu recebre iugament dels - arcaldes de fora." (16).

Nº 10, Libro I, de la redacción del siglo XIII: "1. Et nullus - ex omnibus hominibus de Stella fuisset ad iudicium in aliquo - loco, nisi intus in Stella.
2. Et si homo de Stella fuerit inuentus foras in aliquo loco, et aliquis homo de foris habuerit rancuram de illo, ueniat - cum eo ad Stellam, quia non debet recipere iudicium de arcaldis de foris." (15).

Nº 21 y 22, Libro I de la redacción romance recogida en manuscrito del siglo XIV: "21. E -- nuyll de tox los omnes de Estela fos a iudici a ningun logar, si non dinz en Estela.

22. E si omne de Estela es trobat de foras en algun logar, e algun omne de foras aura rancura d'el, uenga con el a Estela et prenga dreit al for d'Estela, que non deu recebre iudici dels arcaldes de foras." (17).

El carácter especialmente privilegiado del Fuero de Estella, como Derecho propio de una comunidad franca, (18), explica esta exclusividad;

(14) J. M. LACARRA, Fueros de Navarra I, Fueros derivados de Jaca 1, pág. 91.

(15) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I, Fueros derivados de Jaca 1, pág. 91.

(16) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I, Fueros derivados de Jaca 1, págs. 158-159.

(17) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I, Fueros derivados de Jaca 1, págs. 158-159.

(18) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág 185; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 74; J.M. LACARRA, Fueros de Navarra, Fueros derivados de Jaca 1, págs. 18-19.

en la medida en que para garantizar el goce de los privilegios por parte de los hombres de Estella es preciso asegurar la aplicación del Fuero en los pleitos en que sean parte. De ahí, que se preceptúe el planteamiento del litigio ante su juez natural (alcalde de Estella) y se aluda expresamente (salvo en el caso del proyecto de reforma del siglo XIII) a su solución conforme al fuero de Estella. Planteamiento que, por otra parte, responde al sistema propio de un Derecho poco evolucionado como el medieval en lo que a la reglamentación de situaciones jurídicas no homogéneas se refiere: plena correlación entre el juez competente y el Derecho aplicable, en la medida en que cada juez sólo aplica su propio Derecho.

3. En este punto del análisis y con el fin de determinar quiénes quedaban naturalmente sometidos a la autoridad judicial de los alcaldes de Estella, resultaría de gran importancia poder fijar cuáles eran las notas que, conforme al Fuero, caracterizaban a un hombre como hombre de Estella. En este sentido, la interpretación comprensiva de los textos de los encabezamientos y de los de las fórmulas finales de sanción y confirmación parece aportar datos de relevancia. En efecto, y como ya se señaló, el texto de los encabezamientos utiliza exclusivamente la noción de hombre de Estella al referirse a los destinatarios del Fuero, sin aludir al hecho de la población más que al mencionar la concesión originaria del Fuero a la villa por Sancho Ramírez en 1090; sin embargo, las fórmulas de sanción sí añaden el dato de la población incorporándolo a la propia descripción del ámbito personal de extensión del Fuero:

1. Texto correspondiente a la concesión de 1164: "Hoc suprascriptum forum uel donatium dono uobis et concedo et confirmo omnibus hominibus de Estella, tan maioribus quam minoris, tan futuris quam presentibus, et filiis hac filiabus uestris, siue uestre generationi et omni uestre posteritati, uel uestris sucesoribus qui in Estella populauerint,..." (19).

(El texto correspondiente al proyecto de reforma del Fuero en el siglo XIII carece de esta fórmula final, puesto que nunca llegó a ser sancionado por el rey).

(19) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca I, pág. 148.

2. Texto correspondiente a la versión romance que aparece recogida en manuscritos de los siglos XIV, XV, XVI: "Aquetz fors que son devant escrutz doney e oltreyey et confermey a totz los omnes d'Estela, als mayors et als menors, als qui son presentz et qui son per venir, et a lurs filltz et a lures filles que en l'Estela poblaran,..." (20).
3. Texto correspondiente a la versión romance incorporada a un manuscrito del siglo XIV: "Hoc suprascriptum forum uel donatium dono uobis et concedo et confirmo omnibus hominibus de Stella, tam maioribus quam minoribus, quam presentis et futuris, et filiis hac filiabus uestris, siue uestre generationi et omni uestre posteritati, uel uestris successoribus que in Stella populauerint, ..." (21).

Por lo tanto, si bien la redacción de dichas fórmulas plantea dudas sobre si el requisito de la población se exige a todas las personas mencionadas como destinatarias del Fuero o exclusivamente a las citadas en último lugar: descendientes de los hombres de Estella; parece que ha de entenderse referido y exigible a todos ellos; en primer lugar porque la forma verbal utilizada es un pretérito, y en segundo lugar porque resulta incuestionable que esos descendientes de los hombres de Estella, precisarán, en cualquier caso, poblar en Estella para quedar sometidos al Derecho privilegiado del Fuero. Con lo cual, y prescindiendo de los posibles vínculos de ius sanguinis, aquellos descendientes se colocarían en la misma posición jurídica (en la que aparece la población como factor dominante) que habían ostentado los originales destinatarios del Fuero: los pobladores de Estella, según la concesión de 1090. De tal manera que el énfasis continua, permanentemente, puesto en el elemento poblador, pareciendo adecuado interpretar el término hombres de Estella como una noción cercana a las de residencia y domicilio. Concluyendo que, también en el Fuero de Estella, la noción de juez natural queda vinculada a la de juez del domicilio.

Dejando aparte los preceptos ya analizados, son pocos y de escasa relevancia los supuestos en que el Fuero vuelve a emplear la noción examinada. Así sólo en cuatro ocasiones más, a lo largo del texto, se uti-

(20) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 229.

(21) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 229.

liza la noción hombres de Estella: 1.- para hacer referencia al carácter franco de cualquier propiedad adquirida por hombre de Estella, si bien la noción sólo es utilizada en una de las redacciones analizadas, manteniendo las otras tres el empleo de términos personales indeterminados (22); 2.- al exigir, en determinado delito, el testimonio de hombres de Estella, en este caso como en el anterior únicamente una de las redacciones emplea el término, siendo diversa, aunque formal pero no sustancialmente, la terminología asumida por las otras tres: testimonis d'Estela, testes Stellenses, y testes Estella (23); 3.- al prohibir al merino recibir multa de hombre de Estella sin declaración favorable de seis vecinos (24); y 4.- al fijar la prohibición de que hombre de Estella tenga falsa medida o falso peso, tampoco en este caso se halla la noción en las cuatro redacciones, tan sólo uno de los textos la utiliza, mientras que los otros tres, nuevamente, emplean nociones indeterminadas (25).

4. Si bien la noción hasta ahora analizada es, entre los términos de hecho, la más frecuentemente empleada por el Fuero, no es la única. Así, en varias ocasiones, como ya se examinó al analizar las fórmulas de sanción del Fuero en un intento de concretar el posible contenido del término hombre de Estella, los textos aluden a los pobladores de Estella; en concreto, y como se verá detenidamente al proceder a una interpretación comparativa de las diversas redacciones, se hace referencia a la población en los preceptos reguladores del proceso de incorporación a la comunidad municipal de Estella (26).

(22) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs 88 y 154.

(23) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs 90 y 157.

(24) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs 90 y 158.

(25) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs 91 y 100.

(26) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs 91, 159; y 107.

Unicamente en dos ocasiones, y no en las cuatro redacciones examinadas, el Fuero utiliza la noción de burgués para aludir, claramente, al miembro de la comunidad franco-burguesa de Estella, excluyéndose el resto del término municipal, en su relación con otro miembro de la misma (27).

5. Por último, y para concluir el examen de la "terminología de hecho" empleada por el Fuero de Estella en sus diversas versiones, sólo resta analizar los casos y preceptos en que el texto pretende, por oposición y contraste, identificar el núcleo personal sometido al Fuero. En esta línea, pueden destacarse aquellos supuestos en que la noción hombre de fuera se opone expresamente a otra (28), y aquellos otros casos en que tal contraste expreso no se produce (29). Cuando la oposición no es expresa, habrá de procederse a una reinterpretación de los términos; reinterpretación que no puede consistir sino en la confrontación, por contraste, entre la noción hombre de fuera y la de hombre de Estella (en su caracterización como criterio básico en la fijación del ámbito personal de aplicación del Fuero).

Semejante solución interpretativa cuenta, además, con el apoyo que se deriva del hecho de que en aquellos supuestos en que la oposición entre los términos es expresa, el texto la establece entre hombre de fuera, por un lado, y hombre de Estella (30) u hombre de la villa (31), por otro. Y, si bien técnicamente podrían establecerse diferencias entre las nociones hombre de Estella y hombre de la villa, considerando aquella más amplia (en cuanto referida al término municipal en su integridad)

(27) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 144, 226; 139 y 220.

(28) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 91, 158-159; 91-92, 159-160.

(29) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 88, 155; 134, 213-214, 220-221; 140, 221; y 141, 223.

(30) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 91, 158-159.

(31) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 91-92, 159-160.

y ésta más estricta (en cuanto referida exclusivamente al originario núcleo burgués de Estella); tal diferenciación carecería, en este caso, de relevancia porque, desde el primitivo núcleo de población (San Martín de Estella), la progresiva expansión del asentamiento vivió una práctica identificación entre villa y término municipal, con la consiguiente uniformidad jurídica por medio de paulatinas concesiones del mismo Fuero a los diversos burgos y barrios (32). De ahí que, tampoco revista gran importancia, a los efectos que nos ocupan, la especificación, ya aludida con anterioridad, del término burgués frente a los términos relativos al resto de los estellenses, o a éstos en su totalidad.

B) Las nociones de carácter indeterminado.

1. En segundo lugar, y con carácter general, el Fuero emplea nociones indeterminadas. Se trata, como ya se ha apreciado en alguna otra ocasión, de la utilización de términos que en absoluto predeterminan un contenido o una significación que definan y caractericen a los destinatarios de la norma. Términos como nullus-ningun-nengun (33), homo-omne (34), quis-algun (35), aliquis (36), quicumque-qui-que-qual-que (37), qui (38). Analizando detenidamente los supuestos en que el

(32) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 18-19.

(33) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 89, 155; 91, 159; 142, 224.

(34) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 88, 154-155; 91, 159; 96, 166; 127, 205; 142, 224.

(35) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 93, 161; 94, 162; 94, 163; 95, 164; 95, 165; 99, 169; 105, 178, 105, 179; 107, 180; 128, 206; 128, 207; 129, 208; 130, 209; 131; 131, 210; 132, 210-211.

(36) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 89, 155; 90, 157; 90, 158; 91, 159; 93, 161; 94, 163; 95, 165; 110, 185; 123, 200-201; 138, 219.

(37) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 117, 193; 133, 211-212; 139, 219; 139, 220; 139, 220.

(38) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 140-221.

texto emplea este tipo de terminología, no es posible fijar reglas generales de interpretación que justifiquen su utilización. Efectivamente, si bien es cierto que tales nociones aparecen en muchos preceptos que incorporan Derecho cuya aplicación sería, en principio, lógica y estrictamente territorial (lo cual explicaría semejante redacción), no es menos cierto que aparecen igualmente empleadas en normas cuya aplicación podría ser, conforme a las nociones tradicionalmente asumidas, extraterritorial; imposibilidad que se ve confirmada si a ello se añade, además, que en muchos casos lo que en una versión del Fuero aparece referido mediante términos indefinidos, en otra, u otras, lo hace mediante las que se han considerado nociones de hecho, o, incluso, mediante nociones que pueden precisar una cierta determinación jurídica.

Es preciso, por tanto, concluir la necesidad de proceder en tales supuestos a la reinterpretación de los términos; considerando en atención al propio contenido y finalidad de cada norma, que en algunos casos harán referencia a cualquier persona que quede obligada por conexión territorial a la normativa del Fuero, mientras que en otros incorporarán las referencias generales del Fuero en la determinación de su ámbito personal de aplicación; y, por último, en otros podrán, incluso, hacer referencia a personas que, sin encontrarse en ninguno de los anteriores supuestos, puedan quedar indirectamente vinculadas al Derecho de Estella.

La misma solución interpretativa ha de considerarse en el caso de otros términos que, sin ser morfológicamente indefinidos, precisan identificación. Así, cuando el texto se refiere a: el marido, la mujer, los hijos, el ladrón, el raptor, el deudor, etc., habrá de determinarse la concreta caracterización que ha de concurrir, junto a esa situación o status, en la persona o en la relación, para justificar la aplicación del Fuero.

C) La noción de vecino.

1. En tercer lugar, las diferentes redacciones utilizan la noción de vecino. El empleo de este término resulta señaladamente divergente en cada uno de los textos analizados. En efecto, si bien la utilización de las nociones hasta ahora examinadas había presentado práctica

coincidencia en la redacción de los diversos textos, el uso del término vecino encuentra profundas diferencias de una versión a otra. La existencia de tales diferencias obliga a cuestionar el propio contenido de la noción, así como su función y funcionamiento, en el intento de establecer una cierta definición jurídica del término; si bien, en lo que a su empleo textual se refiere, es claro que la noción de vecino alude, como ya se ha puesto de relieve en otras ocasiones, a tres realidades diversas: 1.- a los miembros de la comunidad municipal en cuanto tales (39), 2.- a cada uno de estos miembros en su relación con los demás (40), y 3.- al arraigo como garantía de una conducta recta en actuaciones procesales y negociaciales de confianza (41).

Esta misma problemática creada por el desigual empleo de la noción de vecino en las distintas redacciones del Fuero, sobre todo en relación con el uso de las denominadas nociones indeterminadas, justifica el proceder a una interpretación comparativa de los textos, para poder delimitar, en el contexto de la investigación planteada, el contenido, función y finalidad de las distintas nociones.

3. La interpretación comparativa de los textos.

A) El vecino y el arraigo en la población.

1. En primer lugar, existen algunos preceptos de los que, en atención a su conforme o diversa redacción en las diferentes versiones del Fuero, pueden inducirse, de manera más o menos nítida, los perfiles de la noción de vecindad. Así, en esta línea, es importante el análisis

(39) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 159; 103, 175; 111; 89, 156; 90-91, 158.

(40) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 90, 157; 90, 158; 95, 164; 95; 103, 175; 111.

(41) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 88; 90-91, 158; 103, 175; 109, 183-184; 110; 111; 147.

de dos preceptos del texto, en los que al emplear el término vecindad, el Fuero no lo hace aludiendo a una cualidad personal, sino al conjunto de prestaciones de naturaleza municipal cuyo cumplimiento obligaba a los miembros de la comunidad:

Texto de 1164 - Libro II: "15.- Vidua totam uicinitatem faciat excepto oste.

16. 1- Si quis ex populatoribus uillam causa stacionis uenerit, et domum locauerit, annum et diem unum ab omnibus uicinitatibus immunis permanebit.

2. Sed ex inde in antea, ost et uicinitatem faciet, et deinde quasi unum ex aliis uicinis, pro uicino illum teneant." (42)

Texto de la Reforma proyectada en el s. XIII - Libro II:- "16. Vidua faciat totam uicinitatem excepto exercitu.

17. 1- Qicumque uoluerit populare in Stella et esse uicinus Stelle, hoc faciat cum consensu et uoluntate prepositi et arcaldi et iuratorum Stella. Et si domum conduxerit, in primo anno sit immunis ab omni uicinitate facienda.

2- Sed ex illo anno in antea, faciat plenariam uicinitatem tanquam uicinus, et habeant eum pro uicino sicut alios uicinus" (43)

Texto incorporado a manuscritos de los siglos XIV, XV y XVI. -- Libro II: "15 (67). La uidoa aura a far tot uezinesc, foras que no yra en ost.

16 (68). 1- Si algun poblador uen a la uila per estar an e dia, sera quiti de far uezinesc.

2- Mas d'aqui en auant fara tot uezinesc, et sera tengut per uezin assi como un dels altres uezins." (44)

Texto incorporado a manuscrito del siglo XIV. Libro II:- (60). La uida faga tot uezinesch si non solament de la ost.

(61). (1)- Si algun des poblados uendra en la uila per cosa de stament, et logua casa an et dia, sera quiti de tota uezintat.

(2)- Mas d'ali auant ost e uezinesch faga, et d'aqui adeuant tengan-lo per uezin asi com un altre dels altres uezins." (45)

(42) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 106-107.

(43) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 106-107.

(44) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 180.

(45) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 180.

En los textos se manifiesta claramente la naturaleza de la vecindad y el significado de hacer vecindad en cuanto sometimiento a obligaciones tributarias (ya de carácter personal, ya de carácter real). Pero su mayor relevancia deriva del hecho de incorporar una serie de condiciones o requisitos cuyo cumplimiento hará que el poblador sea asimilado a los otros vecinos; Semejante redacción puede llevar a inducir que los aludidos requisitos fuesen los datos conformadores de la noción de vecino; pudiéndose, pues, interpretar que el vecino fuera un poblador cualificado, y que esta cualificación por el tiempo de residencia (año y día) supusiera la plena incorporación del morador a la comunidad municipal. Pero, sin embargo, del resto de las normas del Fuero no puede deducirse esta consideración, puesto que las garantías y presupuestos de aplicación de los preceptos dependen, en cada uno de los supuestos en que se incorpora el término vecino, de datos diferentes. No existe, pues, una consideración unitaria que permita fijar un contenido concreto de la noción de vecino y establecer con carácter general la identificación entre miembro de pleno derecho de la comunidad municipal y vecino. De manera que es preciso interpretar que tales condiciones y requisitos actúan como presupuestos de aplicación de la norma pero no como determinantes de la condición de vecino.

2. Así, en los preceptos analizados, puede concluirse que tanto el requisito de alquilar una casa, como el hacerlo por año y día, como, sobre todo, el de la apreciación de un cierto animus residendi ("causa stacionis", "per cosa de stament") funcionan como presupuestos de aplicación de la norma concreta, pero no como configuradores de la condición de vecino. Tal conclusión alcanza, además, mayor coherencia si se toma en consideración el propio carácter de cada una de las condiciones, por un lado, y los objetivos perseguidos por el precepto, por otro. En efecto, la exigencia de tener casa en alquiler (salvo en el tercero de los textos) obliga a entender que la exención no resultaría aplicable a aquellos pobladores que fuesen propietarios de la casa que ocupan; de manera que, si bien la incorporación de la exención responde al intento de favorecer el asentamiento para, así, intentar cubrir el objetivo de consolidar el establecimiento de una población franca, el Fuero considera que el asentamiento está suficientemente garantizado en

el caso del propietario por la misma existencia de la propiedad, mientras que en el supuesto del no-propietario esa garantía puede proporcionarla la exigencia de un cierto tiempo de residencia (en el entendimiento de que durante ese tiempo no se vean modificadas el resto de las condiciones establecidas por la norma).

O, lo que es lo mismo: en el caso del poblador-propietario el Fuero considera que el animus residendi queda explicitado en la adquisición de la propiedad, mientras que en el supuesto del poblador-no propietario la explicitación del citado ánimo se encuentra en la moranza por un tiempo mínimo, considerado suficientemente relevante. Y, de esta forma, cuando, posteriormente, una vez cumplida y superada tal situación, el texto asimila al poblador destinatario de la norma con el resto de los vecinos, lo único que está haciendo es reconocer el cumplimiento de un proceso de integración en la comunidad; de ahí que el precepto, como sucedía en otros muchos supuestos y textos ya examinados, utilice el término vecino, en la medida en que está haciendo alusión al poblador en cuanto miembro de esa concreta comunidad, susceptible de ser identificado y diferenciado frente a todos aquellos que no pertenecen a ella.

3. Por tanto, la cualidad de vecino quedará vinculada, en cualquier caso, al grado de arraigo e integración en el grupo; integración y arraigo que se apreciarán, en los diversos supuestos, de conformidad con índices diversos. Por ejemplo, cuando al establecerse la prohibición de proceder a duelo con hombres de fuera, e imponer la obligatoriedad de recurrir a la prueba mediante testigos, el Fuero exige en su redacción de 1164 que los testigos sean un navarro y un franco (46), y esta misma es la exigencia contenida en los correspondientes preceptos de las redacciones romances del siglo XIV (47). Sin embargo, el texto

(46) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 88.

(47) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 155.

del proyecto de reforma del Fuero elaborado en el siglo XIII especifica las condiciones que han de concurrir, además, en la persona de los testigos, añadiendo: que el testigo franco ha de ser vecino de Estella, y de condición tal que no esté obligado a prestaciones por villanía a señor alguno, salvo censo; y que el testigo navarro proceda de un cierto territorio y tenga "fuego" y "mesa" (48). Cuando la norma se refiere a la ausencia de obligaciones por villanía, salvo censo (seguramente haciendo referencia al censo en su sentido de pago debido por razón de alquiler), está exigiendo que el testigo además de ser poblador franco en Estella disponga de bienes inmuebles en calidad de propietario o, al menos, en calidad de arrendatario. En cuanto a las condiciones que han de concurrir en el navarro para poder actuar como testigo, parece lógico que el texto no utilice el término vecino de Estella, en la medida en que al navarro no le estaba permitido poblar sino en alguno de los burgos y barrios de Estella; si bien, la vinculación territorial cuya exigencia queda incluida en el caso del testigo franco en la expresión vecino de Estella, resulta igualmente requerida en la persona del testigo navarro al exigir el texto que este proceda, precisamente, del territorio de vigencia del Fuero de Estella; y también en este caso, el Fuero busca la garantía del arraigo al requerir la calidad de propietario mediante una redacción tan expresiva: "... et debet habere ignem suum et mensam suam".

4. En este intento de ilustrar el uso, por parte del Fuero, de diferentes indicadores en la apreciación y valoración del arraigo, puede resultar de interés la consideración de otra norma muy cercana a la que acaba de analizarse. Efectivamente, cuando el Fuero regula la posibilidad y procedimiento de los pleitos entre francos y navarros vuelve a exigir, también ahora en los textos de las cuatro redacciones examinadas, el carácter mixto de los testigos: uno franco y uno navarro. Pero, nuevamente aparecen diferencias entre las diversas versiones a la hora de fijar su caracterización: en primer lugar, mientras el texto de

(48) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 88.

1164 y los preceptos correspondientes a las redacciones romances del siglo XIV exigen que el testigo franco sea de ciudad o burgo real y no de villa de fuera (49) la redacción del intento reformador del siglo XIII se refiere al mismo exigiendo que sea vecino de Estella (50); y así, comparando los textos, puede concluirse que el testigo franco debía proceder, no de cualquier ciudad o burgo real, sino, precisamente, de ciudad o burgo perteneciente a Estella; en segundo lugar, mientras que en las cuatro redacciones se exige que el testigo navarro sea procedente del territorio de vigencia del Fuero de Estella y que cuente con "fuego propio" y "mesa propia", no se aprecia tal unanimidad con respecto a la caracterización no-territorial del testigo franco, pues únicamente el texto del siglo XIII establece que éste ha de ser de condición tal que no esté obligado a prestación alguna por razón de villanía, salvo censo, y que tenga casa.

Como último dato ejemplificador, sólo señalar que, cuando la redacción del siglo XIII, y únicamente ésta, establece que quien es dispuesto por fianza bajo firma del rey debe ser vecino, tener casa y disponer, en bienes muebles o inmuebles, de prendas cuyo valor alcance, por los menos, los 60 sueldos (51) está aludiendo a las condiciones exigibles para establecer fianza, pero no a las condiciones de acceso a la vecindad.

En definitiva, resulta imposible determinar cuáles fuesen los contenidos y regímenes propios de la noción de vecino, pues el único dato que puede inducirse como constante en todos los preceptos que utilizan la noción es el de la pertenencia a la comunidad municipal en calidad de poblador/morador; y cualquier otro elemento que pueda, en principio, aparecer como configurador de la noción ha de ser interpretado

(49) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 141-142, 223.

(50) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 141-142.

(51) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 147.

finalmente, como determinador de aquella realidad personal regulada o aludida por la norma, convirtiéndose así en presupuesto de aplicación de la misma o en elemento incorporado a su supuesto de hecho.

B) El vecino y el proceso de incorporación a la comunidad municipal.

1. En segundo lugar, en un intento de determinación de los contenidos, funciones y regímenes de funcionamiento de las diversas nociones personales utilizadas por el Fuero mediante la realización de un examen comparativo de sus diversos textos, es importante analizar la normativa reguladora del proceso de incorporación (que no integración) a la comunidad municipal de Estella. Como puede apreciarse en el Libro II del Fuero, en el texto correspondiente a los números 16.1 de la redacción de 1164, 17.1 del Proyecto de Reforma realizado en el siglo XIII, 16 (68).1 del texto romance incluido en manuscritos de los siglos XIV, XV y XVI, y (61).1 de la redacción romance utilizada en textos del siglo XIV (transcritos supra), únicamente el segundo de los textos mencionados introduce en la norma la exigencia de que cualquiera que quisiese poblar en Estella y ser vecino de Estella contase con el consenso y la voluntad conforme de "prepositus", "arcaldus" e "iuratores" de Estella. La inclusión de semejante mandato sorprende, no sólo por carecer de precedente o paralelo normativos en el resto de las versiones del Fuero, sino sobre todo porque, en principio, las limitaciones y restricciones a la posibilidad de poblar en Estella sólo existían con respecto a los navarros (y, puede entenderse, lógicamente, que se extenderían a los "no francos" en general). En efecto la voluntad e iniciativa reales de constituir una población franca en Estella explican la prohibición, primero, y las restricciones, después, a la presencia de pobladores "no francos":

Texto de 1164. Libro I.: "13. Et quod ullus navarrus vel -- presbiter de foras non possit populare in Stella sine volun

Texto correspondiente a la Reforma proyectada en el s. XIII. Libro I: "13. Et quod ullus -- nauarrus vel presbiter de foras

tate regis et omnium Stellen-
sium". (52).

non possit populare in Stella -
sine uoluntate regis et arcaldi
et prepositi et juratorum Ste-
lle." (53).

Texto incorporado a manuscri-
tos de los siglos XIV, XV y
XVI. Libro I: "13. (4). - -
Nuill nauarr o preste de fo-
ra non puyasca poblar en l'Es-
tela sen la uoluntat del rey
et de totz los uezins d'Este-
la." (54).

Texto incorporado a manuscrito-
del siglo XIV. Libro I: "(25).
E que nauarr o preste de foras-
non puisca poblar en Estela sen
la uoluntat del rei o de toz --
los de Estela." (55).

2. Dos son los datos a destacar en la interpretación derivada de la comparación de los textos: en primer lugar, se aprecia que en tres de las versiones examinadas parece establecerse la equiparación entre los términos "omnium Stellensium", "tutz los uezins d'Estela" y "toz los de Estela"; y, en segundo lugar, el texto del siglo XIII parece sustituir la voluntad de la comunidad municipal en su totalidad por la de sus representantes, responsables de la organización municipal. La primera de las apreciaciones obliga a considerar como acertada la afirmación, repetidamente sostenida a la luz de los textos jurídicos ya examinados, de que la vecindad queda caracterizada como una noción fáctica, en la que el factor determinante es el de la moranza (entendida como población con ánimo de estabilización y arraigo); y esta misma conclusión se deriva de la consideración integrada del precepto, ahora analizado, contenido en el nº 13 del Libro I de la redacción correspondiente al proyecto de reforma elaborado en el siglo XIII, y del examinado más arriba correspondiente al nº 17.1 del Libro II del mismo texto, en la medida en que lo que en uno aparece como procedimiento para acceder a la población en Estella en el otro lo hace como fórmula de acceso a la población y a la vecindad en Estella.

(52) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 91.

(53) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 91.

(54) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 159.

(55) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 159.

En cuanto al segundo de los datos resaltados, es decir la sustitución en el texto del siglo XIII de la voluntad de la comunidad por la de sus representantes, pudiese, quizá, responder a un momento de mayor complejidad en la organización de la comunidad municipal derivada del crecimiento del municipio y del perfeccionamiento paulatino de los instrumentos jurídicos y estructurales.

C) El vecino y el problema de la ejecución de las decisiones del juez natural.

1. En tercer lugar, la cercanía conceptual entre las nociones de vecino y hombre de, a la hora de determinar el ámbito personal de aplicación del Derecho contenido en el Fuero de Estella, puede apreciarse en la consideración de que si aquella exclusividad, ya analizada, en la determinación de la competencia judicial y de la jurisdicción del juez de Estella en su condición de "juez natural" vinculaba a los hombres de Estella; otra exclusividad, ahora en el ámbito jurisdiccional de la ejecución de lo juzgado, se ejerce sobre las relaciones litigiosas existentes entre vecinos:

Número 70 del Libro II de la redacción de 1164: "Forum est quod nullus uicinus accipiat loger de suo uicino per ullum iudicium quod habeant inter se, exceptis iusticiis de uilla, quia rex perdidit inde suum directum, et uilla perdit suum forum, et pauper homo perdit suum iudicium; et si potest probari uicinus quod accipit loger de suo uicino per ullum iudicium, debet caloniam regi LX solidos." (56).

(La redacción correspondiente al proyecto del siglo XIII carece del precepto examinado).

Número 70 (85) del Libro II del texto romance encontrado en manuscritos procedentes de los siglos XIV, XV y XVI: "For es que l'un uezin del altre non prenga loguer per playt que ayen entre si, fores les iusticies de la uila, quar lo rey perdria son dreyt, et si dines prenissen la uila perdria son for, et lo pobre ome perdria son dreyt; et si pot estre prouat que l'un uezin del altre y a pris loguer per plait ningun, LX soltz deu de calonia." (57)

(56) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 145.

(57) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 227-228.

Número (38) del Libro II del texto romance incorporado a manuscrito del siglo XIV: "For es que null uezin non prengua loguer de son altre uezin per iudici que aia etre els, si non las iusticias de la uila, quar lo rei ne pert son dreit, e la uila en pert son for, e lo pobre omne en pert son iudici; e si pot estre pro-uat que lo uezin prenga loguer de son uezin per algun iudici, deu calonia al rei LX^s sols." (58)

De manera tal que el Fuero no contempla más ejecución que la derivada del cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales de la villa en virtud de la competencia que el propio Fuero les concede.

D) El vecino como noción sustitutiva de las nociones de hecho.

1. En cuarto y último lugar, para concluir esta visión comparativa de las cuatro redacciones analizadas, señalar que, quizá, el dato más relevante que puede extraerse de esta labor comparada radique en apreciar la reiteración y generalidad con que se procede, a lo largo del texto del Proyecto Reformador del siglo XIII, a la adición o sustitución por el empleo del término vecino de todas aquellas alegaciones personales que en las normas de las otras tres redacciones (sin excepción) aparecían incorporadas mediante la utilización de nociones indefinidas o indeterminadas, e incluso, de nociones de hecho (59).

En efecto, puede apreciarse que, de forma casi sistemática, cuando la redacción de 1164 y las redacciones romances emplean el término "algún", el texto del siglo XIII se refiere a "algún vecino de Estella"; o, cuando la referencia es a "algún hombre", éste alude, igualmente a "algún vecino de Estella" o a "algún hombre vecino de Estella"; si la alusión es a "franco", el texto del siglo XIII emplea los términos

(58) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 145.

(59) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 106, 179; 109, 183-184; 109, 184; 110, 185; 111, 185; 111, 186; 112, 187; 113, 188; 115, 191; 118, 194; 119, 196; 120, 196; 122, 199; 124, 202; 125, 202; 130, 208; 131, 210; 132, 210; 132, 210; 132, 211; 133, 212; 134, 213; 135, 215; 136, 216; 137, 217; 140, 221; 141, 223; 141-142, 223; 142, 224; 143, 225; 144, 226.

"franco vecino de Estella"; de igual manera, cuando se hace referencia al "testigo", la citada redacción habla de "testigo vecino de Estella"; y si la norma se destina a "algún cristiano", el Proyecto de Reforma hace referencia a "algún cristiano vecino de Estella"; o cuando el precepto se dirige a "burgués", haciendo referencia a los moradores de los burgos de la población de Estella, el texto del siglo XIII vuelve a hacer alusión a "vecino de Estella".

Así, mientras las versiones del siglo XIV y siguientes reproducen fielmente el texto de 1164, como éste había, igualmente, hecho en relación a la primitiva concesión del año 1090, el Proyecto elaborado en el siglo XIII se separa, ciertamente, de aquél. Sería necesario, pues, llegar a determinar si semejante diferenciación es, únicamente, de carácter terminológico o si, además, presenta naturaleza sustancial. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que fue, precisamente, este texto del siglo XIII el único de los cuatro analizados que en ningún momento llegó a entrar en vigor; lo que obliga a entender que, aún en el supuesto de que las diferencias entre los textos fuesen jurídicamente sustanciales, no llegaron a modificar la realidad legal y organizativa del municipio. En segundo lugar, la propia caracterización que de la vecindad, hasta el momento ha sido elaborada en base al contenido de los textos analizados, conduce a considerar que, probablemente, la proliferación del término en el Proyecto aludido responda a la experiencia de una nueva fase de la vida municipal, en la que la población (en cuanto física y material ocupación de territorios) pierde relevancia en favor del progreso organizativo y de la consideración prioritaria del arraigo; de ahí que, aunque la diferenciación sea puramente terminológica, en la medida en que el vecino es el poblador-miembro de una concreta e identificable comunidad municipal, la noción de vecino presenta ciertas connotaciones de integración, estabilidad y arraigo de que carece la de poblador; y sea este dato el que convierta la vecindad en noción preferente para la versión considerada, si bien no añade nuevas consideraciones ni matizaciones relevantes en la determinación jurídica del ámbito personal de aplicación del Derecho incorporado.

III. EL DERECHO DE ESTELLA. (II) CONCESIONES Y PRIVILEGIOS.

1. Las nociones utilizadas.

1. La normativa complementaria del Derecho de Estella, que, en torno al Fuero, consolida la realidad jurídica de la localidad, prácticamente reproduce el esquema de interpretación hasta ahora elaborado al determinar el núcleo personal destinatario de la concesión.

En este sentido, los textos que extienden el Fuero de Estella, mediante otorgamientos, a diversas localidades navarras, por un lado, y a las sucesivas adiciones y ampliaciones de la población de Estella, por otro, establecen la concesión aludiendo, de forma unánime, a los pobladores del lugar. Así, ésta es la terminología utilizada en el otorgamiento del Fuero de Estella por Alfonso I el Batallador a Puente la Reina en junio de 1122 (60), y en la concesión del mismo texto a Olite por García Ramírez el Restaurador en 1147 (61), en iguales términos y haciendo referencia a los pobladores presentes y futuros, queda redactado el texto de concesión y confirmación del Fuero de Estella a Monreal en 1149 por el citado monarca (62). Ninguna novedad presentan, en este sentido, el texto de concesión del aludido Fuero al Parral de San Miguel de Estella por Sancho el Sabio en marzo de 1187 (63), ni el otorgamiento realizado por el mismo soberano al Arenal de Estella en junio de 1188 (64). Exactamente la misma terminología incorporan las redacciones de las concesiones realizadas, ya en el siglo siguiente, por Teobaldo II a Tiebas el 23 de enero de 1264 (65) y a Torralba el 27 de fe-

(60) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 55.

(61) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 56-57.

(62) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 58.

(63) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 59.

(64) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 60.

(65) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 62-63.

brero del mismo año (66).

2. Esta unanimidad terminológica, apreciada en los textos de concesión del Fuero, no se mantiene, sin embargo, en las concesiones de Privilegios. Las redacciones de los Privilegios otorgados a la población de Estella durante la segunda mitad del siglo XIII y la primera del siglo XIV presentan diferencias en el empleo y la aplicación de los términos personales de referencia; en efecto, estos textos utilizan preferentemente, aunque no exclusivamente, la noción de vecino al determinar quiénes sean los destinatarios de la normativa privilegiada que incorporan. De manera que ciertos textos, como aquél que recoge la concesión por Teobaldo II, el 23 de abril de 1266, de exculpación en la comisión de "homicidios casuales", se dirigen a los vecinos de Estella; en concreto, este privilegio quedó establecido para los vecinos, presentes y futuros, de Estella en los supuestos de homicidios casuales entre vecinos (67). Sin embargo, existen otros textos cuya fórmula de concesión se dirige a la comunidad municipal globalmente considerada, bien mediante referencia directa a la misma, bien mediante referencias indirectas por alusión a sus legales representantes; se trata de textos que, además, utilizan las denominadas "nociones de hecho" cuando su regulación es dirigida individualmente a miembros de la comunidad; éste es, por ejemplo, el caso del texto de juramento de fueros y privilegios realizado el 11 de marzo de 1271 por Enrique I, que se dirige a "... nuestros amados naturales fideles el alcalde et los jurados et el concejo, et a todo el pueblo de toda la villa de Esteylla, a los que agora son et seran en toda la nuestra vida,...", refiriéndose particularmente a "... omne ni ninguna muger de toda la villa de Estella..." (68); la misma fórmula emplea, prácticamente, la redacción del compromiso asumido

(66) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 62-63.

(67) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 63.

(68) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 65-66 ; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206.

por Luis Hutin el 8 de noviembre de 1307 de respetar y mantener los fue-
ros, privilegios y costumbres de Estella: "... dilectis et fidelibus
nostris alcaldo, juratis, concilio totisque populatoribus ville nostre
Stelle..." (69)

2. Interpretación de las nociones empleadas.

1. La terminología empleada por estos textos supone, pues, una reiteración en las consideraciones ya realizadas: al determinar el ámbito general de aplicación personal del Derecho continúan empleándose nociones fácticas alusivas a la relación persona-territorio, y el exámen de los supuestos en que los diversos textos utilizan la noción de vecino no posibilita la determinación de su contenido y régimen en cuanto noción jurídica autónoma. Resultando, por otra parte, significativo que las alusiones al vecino aparezcan en los textos de concesión de privilegios a Estella, pero no en los de concesión del Fuero a otros núcleos de población (ya en la propia localidad de Estella, ya fuera de la misma).

En la búsqueda de los posibles contenido y régimen de la vecindad (en cuanto condición personal, y no tributaria) sí puede, sin embargo, resultar de gran utilidad el análisis de la terminología empleada por los textos (siglo XIV) que aprueban y regulan la aplicación de la ordenanza de "quien mate, muera". En efecto, fue el 8 de junio de 1310 cuando, por primera vez, el gobernador Enguerrand de Villiers aprueba con vigencia de cinco años esta ordenanza del concejo de Estella (70); a tal aprobación siguieron numerosas concesiones de prórroga de vigencia del precepto: el 25 de marzo de 1315 Miles de Noyers y Alfonso de Robray establecen una prórroga de cinco años (71), el 16 de mayo de 1320 Joffre de Moretayna lo hace por otros cinco años más (72), el

(69) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 68; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206.

(70) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 69.

(71) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 71

(72) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 72-73.

25 de mayo de 1322 es nuevamente Alfonso de Robray quien confirma la vigencia de la ordenanza en documento que recoge, sin embargo, la aprobación de un acuerdo específico tras la comisión de homicidio entre vecinos (73), es este mismo gobernador quien fija nueva prórroga de la vigencia de la norma por cinco años el 14 de mayo de 1325 (74), el 23 de mayo de 1332 Enrique de Sully accede a la aplicación de la ordenanza durante 30 años más (75), y, finalmente, Carlos II establece prórroga de 39 años el 5 de marzo de 1365 (76).

Varios datos adquieren relevancia en el análisis y comparación de estos textos. En primer lugar, la ordenanza, de carácter penal, condena a muerte y pena pecuniaria al vecino de Estella que cometiese homicidio en la persona de otro vecino. Podría decirse que éste es el supuesto general contemplado por la normativa a lo largo de las sucesivas prórrogas y formulaciones; pero, en segundo lugar, los textos de las renovaciones realizadas en los años 1325 y 1332 establecen algunas matizaciones que suponen la incorporación de algunos supuestos particulares de carácter excepcional. En efecto, el texto de 1325 exceptúa de la aplicación de la ordenanza cuatro casos concretos: el homicidio cometido por vecino de Estella en la persona de otro vecino que hubiese sido, con anterioridad, encartado como autor de la muerte de algún vecino de Estella; el homicidio cometido por vecino de Estella en la persona de otro vecino, cuando éste último hubiese sido requerido de tregua por los jurados y, desobedeciendo el requerimiento, hubiese provocado la reacción de aquél que, finalmente, le procuró la muerte; el homicidio cometido por vecino de Estella en la persona de capellán o clérigo, que no fuese vecino de Estella conforme al Fuero; y, el homicidio cometido por vecino de Estella en la persona de "estagant e habitant" en la villa, que no fuese vecino de Estella conforme al Fuero. El planteamiento y redacción de las dos últimas excepciones aludidas,

(73) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 73-74.

(74) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 76-77.

(75) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 78-79.

(76) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 80-82.

crean problemas interpretativos: así, cuando el texto se refiere a capellán o clérigo que no ostente la misma condición que el vecino autor de la muerte, cabe plantearse a qué tipo de condición está aludiéndose, ¿se trata de la condición vecino-no vecino, o de la condición social ostentada por cada uno de ellos?, y cuando se hace referencia al hijo de capellán o clérigo que no sea vecino de Estella ¿a quién se está atribuyendo la ausencia de tal condición, al hijo de capellán o clérigo o al propio capellán o clérigo?, y cuando la redacción opone "estagant e habitant" a vecino de Estella ¿en qué datos, concretos y relevantes, está fijando la diferencia?.

2. Con los datos que proporciona la lectura y análisis de los textos, no puede alcanzarse una respuesta coherente, que brinde la posibilidad de una interpretación integradora de las nociones y preceptos, a las cuestiones planteadas. En primer lugar, si se admite, sin más, que de los supuestos excepcionales contemplados en el texto de 1325, los dos primeros contemplan casos de muerte de un vecino provocada por otro vecino de Estella, y los dos segundos aluden a supuestos de muerte provocada por vecino de Estella a un no-vecino, sería preciso concluir que únicamente los dos primeros de los supuestos establecidos son realmente excepciones. En efecto, teniendo en cuenta que el supuesto básico que provocó tanto la primitiva elaboración de la ordenanza, como sus sucesivas confirmaciones y prórrogas de vigencia, fue el homicidio entre vecinos de Estella, cualquier supuesto que no se halle, en principio, incluido en esta formulación quedaría excluido de la normativa creada por la ordenanza, careciendo de sentido su explicitación como supuesto de excepción frente al básico. En segundo lugar, cuando en el texto de estas dos últimas excepciones se alude al acceso a la vecindad conforme al uso de Estella, se está haciendo, sin duda, referencia al procedimiento de admisión en la comunidad municipal, regulado por el Fuero; en este sentido, cuando el 5 de octubre de 1269 Teobaldo II (el mismo monarca que asumió la labor de redacción de un proyecto de reforma del Fuero de Estella de 1164, como ya se ha analizado al tratar minuciosamente del contenido del mismo) interpretó para los francos de Estella algunos de los preceptos del Fuero, consideró que "... tod homne ho

muyller qui queira venir poblar en Esteylla, que vienga al prevost et al alcalde et a los jurados, et con plazenteria de eyllos que sea vezino como el fuero manda. ..." (77); de manera que el acceso a la vecindad es, ni más ni menos que, el acceso a la población, y parece, además, que en este momento el cumplimiento de semejante procedimiento es preceptivo, no ya únicamente para los no-francos, sino para cualquiera que pretenda poblar en Estella; ¿cómo, pues, el texto de prórroga de 1325 distingue entre "estagant e habitant", por un lado, y vecino, por otro, si el procedimiento para acceder a la vecindad es el procedimiento para acceder a la población?, ¿se refiere el texto, únicamente, a quienes mo rasen en Estella sin autorización para ello?

Quizá deba entenderse que, en estas dos excepciones, el texto contempla situaciones cercanas a la vecindad, haciendo manifestación de su exclusión de la normativa contenida en la ordenanza, precisamente por no tratarse de un supuesto de homicidio entre vecinos. La única ma tización, al supuesto de base de la ordenanza, contenida en el texto de concesión de prórroga de 1332, no presenta carácter de excepción sino que supone la extensión de la norma en el espacio; en efecto, el texto considera que la normativa contenida en la ordenanza se aplicará a los supuestos de homicidio entre vecinos, incluso cuando el hecho tenga lugar fuera de la villa de Estella, o fuera del Reino navarro. La necesaria especificación deriva, pues, en este caso, no de la condición de la persona afectada, sino de la consideración del lugar donde el hecho se produjo.

Finalmente, destacar que, en el análisis de este tipo de textos, vuelve a manifestarse la cercanía conceptual de la noción de vecindad y de las demás nociones, repetidamente calificadas como "nociones de hecho", utilizadas en la determinación del ámbito personal de aplicación del Derecho. Así, el texto de la confirmación de la ordenanza de "quien mate, muera" realizada el 5 de marzo de 1365 por Carlos II, prorrogando

(77) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 64-65.

su vigencia por 39 años más, al hacer referencia a las personas obligadas por la normativa contenida en la misma, emplea el término "hombres de Estella".

IV. EL FUERO DE SAN SEBASTIAN Y SUS CONCESIONES.

1. Introducción.

1. El Fuero de San Sebastián alcanza relevancia en cuanto texto que, redactado conforme al contenido del Fuero de Estella, asumió y significó la extensión del Derecho de Jaca en Guipuzcoa (78).

Su concesión fue realizada por el rey navarro Sancho el Sabio, probablemente en torno al año 1180; siendo objeto de sucesivas confirmaciones, a cargo, ya, de monarcas castellanos: el 16 de agosto de 1202 recibe confirmación del Alfonso VIII, el 14 de abril de 1403 de Enrique III, y el 15 de junio de 1457, de Enrique IV (79).

El análisis material de sus disposiciones, en la medida en que reproduce el contenido del Fuero de Estella, no aporta novedad alguna a no ser la incorporación de normas reguladoras de la actividad marítima y la adaptación a ésta de ciertos preceptos estellenses (80). No obstante, puede resultar, sin embargo, de utilidad el examen de la terminología empleada por el texto del Fuero de San Sebastián en la fijación de su ámbito personal de aplicación; puesto que si, en relación al tex-

(78) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 28; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, pág. 189; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 80-81.

(79) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 28-29, 34-44; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, pág. 189; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 80-81.

(80) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 28-31; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 189; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 80-81.

to del Fuero de Estella, alguna diferencia terminológica se apreciase, ésta sería tanto más relevante, a efectos de la investigación planteada, cuanto menor fuese la diferencia material del contenido de los preceptos.

2. Nociones de hecho y nociones indeterminadas.

1. En este sentido, puede apreciarse una correspondencia prácticamente total, entre los textos del Fuero de San Sebastián y del Fuero de Estella, en lo que se refiere al empleo de las denominadas nociones personales indeterminadas, por un lado, y nociones de hecho, por otro.

Como en otros supuestos ya planteados y sin seguir una sistemática apreciable, el Fuero de San Sebastián emplea nociones personales indeterminadas tanto en preceptos de naturaleza, en principio, extraterritorial como en preceptos de carácter, en principio, estrictamente territorial. En efecto, ésta es la terminología utilizada en algunas normas sobre reconocimiento y ejecución de obligaciones contraídas, en las que al menos una de las partes obligadas pertenezca a la comunidad municipal de San Sebastián (81); sobre relaciones de familia y derechos sucesorios (inter vivos o mortis causa) (82). E, igualmente, en normas de carácter penal (83); sobre proceso, procedimiento y garantía (84); sobre reconocimiento y protección del derecho de propiedad (85); y en preceptos sobre organización y defensa de los intereses propios de la comunidad municipal (86). En cualquier caso, será necesario proceder

(81) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 273 y 283.

(82) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 277-281.

(83) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 273-276, 277.

(84) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 271, 281, 283.

(85) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 270, 272-277, 281.

(86) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 270, 271, 273.

en tales supuestos a una reinterpretación de las nociones a la luz del contenido y contexto de cada norma, pues es preciso recordar, no sólo que la propia naturaleza del Derecho Medieval Local de los Reinos Peninsulares obliga a mantener como hilo conductor de su vigencia y aplicación la vinculación, referencia y estricta dependencia del elemento personal en relación con el territorial; sino también las categorías que, con carácter general, establezca el texto en la fijación de sus ámbitos de aplicación.

Mayor relevancia presenta, sin embargo, la consideración del empleo que el texto del Fuero de San Sebastián hace de las, denominadas, nociones fácticas o de hecho. En este sentido, es la noción de poblador la más utilizada y la empleada con mayor precisión a la hora de delimitar el núcleo personal afectado por el Derecho del Fuero. En efecto, son los pobladores de San Sebastián quienes reciben el compromiso regio de la liberación de malos fueros y malas costumbres (87); son, igualmente, ellos quienes reciben la donación de los territorios de realengo que constituirán el término municipal de San Sebastián (88), a los pobladores de San Sebastián se conceden, además, los beneficios fiscales reconocidos por el texto, consistentes en la exención de lezda cuando el transporte de mercancías, dirigidas a la venta o al consumo directo, tenga como destino San Sebastián (89), por una parte, y en el reco-

(87) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 269.

(88) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 271.

(89) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 269-270. Es de resaltar, en lo que a la exención de lezda concedida a los pobladores de San Sebastián se refiere, que la afirmación realizada, en este sentido, por J.M. Lacarra carece de fundamento alguno conforme al texto del Fuero de San Sebastián. En efecto, en ningún momento se establece la exigencia de ser vecino con casa habitada en la población, como J.M. Lacarra sostiene, para gozar de la exención; salvo que se considere que el poblador de San Sebastián se identifica, a efectos del Derecho aplicable, con la noción de vecino con casa habitada en la población. En esta misma línea, tampoco pueda, a la luz del texto del Fuero guipuzcoano, afirmarse que la noción opuesta, correlativamente, a la de extraneus sea la de vecino, como dicho autor afirma. (Vid. pág. 29 de la obra citada).

nocimiento de la liberalidad sobre la adquisición de propiedad inmueble, en cualquier caso y lugar (90), por otra; son, asimismo, ellos los sujetos en plenitud a las obligaciones y derechos propios del desarrollo de la vida de la comunidad municipal: los comprometidos y afectados en el ejercicio de los oficios municipales (91), los llamados a ocupar la propiedad en la prestación de servicios prioritariamente comunitarios (92), los ejecutores de las actividades comerciales y profesionales cuya regulación asume el Fuero (93), y, finalmente, a los pobladores reconoce el Fuero el privilegio de ser demandados, con carácter de exclusividad, en San Sebastián y recibir juicio, en cualquier parte del reino que se encuentren, conforme al Fuero de San Sebastián (94).

Pero no es el término poblador el único, entre las nociones de hecho, empleado por el texto del Fuero. Así, delimitando el marco jurídico de la determinación del ámbito personal de aplicación del Fuero, éste utiliza la noción de hombre de San Sebastián; el examen de los supuestos en que este término aparece obliga a descartar la existencia de cualquier nota diferenciadora entre esta noción y la de poblador; parece indiscutible el carácter indiscriminado con que el texto hace uso de ambas nociones. Así, los hombres de San Sebastián son los destinatarios de ciertos preceptos que no pueden interpretarse sino complementariamente con otras normas dirigidas a los pobladores de San Sebastián, como ya se ha analizado; por ejemplo, el Fuero completa la regulación de los criterios de determinación de la competencia judicial estableciendo para los hombres de San Sebastián la obligación de pleitear en esta localidad, y no en otro lugar diferente (95); igualmente, se establece que si

(90) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 271.

(91) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 286.

(92) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 270.

(93) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 281.

(94) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 271 y 286.

(95) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 273.

surgiese, fuera de San Sebastián, una obligación en virtud de la cual un extraño (hombre de fuera) promoviese litigio frente a un hombre de San Sebastián, el pleito habrá de ser planteado ante el alcalde de esta localidad y apreciado y conocido conforme al Fuero de la misma (96). De igual manera, la autoridad y competencias del merino del rey en San Sebastián se establecen y reconocen con referencia a los hombres de San Sebastián (97). Y, por último, cerrando el círculo del análisis sobre la posible identificación de ambas nociones, resulta necesario resaltar la redacción del encabezamiento del Fuero: "... facio omnibus hominibus tam maioribus quam minoribus, presentibus et futuris, qui populati sunt et in antea populabuntur in Sancto Sebastiano. Placet michi libenti animo et spontanea voluntate, quod dono et concedo vobis et successoribus vestris bonos foros et bonas costumias. ..." (98).

Estableciéndose, pues, un innegable recurso a nociones de hecho, que permite afirmar que el ámbito personal de aplicación del Fuero de San Sebastián ha de quedar, con carácter general, definido en torno a las nociones fácticas de población y vinculación (en virtud del dato de la población, precisamente) con la tierra perteneciente al municipio de San Sebastián. Recurso cuya utilización, por otra parte, se ve nuevamente confirmado al constatar que las nociones que el texto del Fuero emplea para hacer alusión a aquellas personas que no quedan sometidas al Derecho en él contenido, precisamente por no concurrir en ellas las cualidades de la población y la vinculación a la tierra, son, igualmente, nociones fácticas: "extraneus homo" (99) y "homo de foris" (100). Nociones de hecho que el texto, paralelamente, opone a aquéllas otras

(96) J. M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 273.

(97) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 273.

(98) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 269.

(99) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 270.

(100) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 272, 273.

que configuraron el carácter de las personas afectadas y obligadas por el Derecho del Fuero: "populator" y "homo de Sancto Sebastiano".

El análisis hasta aquí efectuado muestra que la correspondencia de contenidos entre las normas del Fuero de Estella y las, respectivas, del Fuero de San Sebastián encuentra confirmación paralela en lo que a la terminología empleada se refiere. Aquellos preceptos que en las redacciones del Fuero de Estella, especialmente la de 1164 y las procedentes de los siglos XIV y siguientes, empleaban nociones personales de hecho aparecen prácticamente reproducidos en el Fuero de San Sebastián incorporando, igualmente, nociones fácticas; si bien, la coincidencia en el carácter de la noción no siempre implica la reproducción de términos idénticos.

3. La noción de vecino.

1. Sin embargo, esta relación e identificación entre el Fuero de Estella y el de San Sebastián, aparecen mucho más matizadas en lo relativo a la utilización de la noción de vecino. El texto del Fuero guipuzcoano incorpora en ocho ocasiones, únicamente, tal terminología; se trata, además, de supuestos fácilmente calificables, en la medida en que el término aparece utilizado para hacer alusión a las relaciones surgidas entre miembros de la comunidad, en unos casos, o para identificar a éstos frente a quienes no pertenecen a ella, en otros. En primer lugar, efectivamente, cuando el texto fija sanción para quien porta arma contra su vecino (101), o para quien irrumpe por la fuerza en casa de su vecino o hace uso de ésta sin su autorización (102), o para quien poda árbol de su vecino (103), así como cuando exige que la situación de "necesidad" de la viuda, a efectos, de las particiones sucesorias, sea apreciada por parientes y vecinos (104), está haciendo alusión a situaciones de relación (en base a la cercanía derivada de la población en un mismo territorio) entre miembros de la comunidad municipal y utilizando la noción de vecindad, como en otras muchas ocasiones y textos,

(101) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 273.

(102) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 273.

(103) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 275.

(104) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 280.

con carácter relacional. En segundo lugar, cuando el Fuero exige la actuación de un número determinado de vecinos para que, en nombre de la comunidad municipal, refrenden, controlen y participen en la decisión adoptada por una autoridad local (105), así como cuando condiciona la población de "clérigos" y "navarros" en San Sebastián a la voluntad del rey y al acuerdo de todos los vecinos (106); está regulando la actuación de los miembros de la comunidad en cuanto tales, para garantizar mediante acciones de control, el carácter comunitario de ciertas decisiones o actos, así como para asegurar el "status" de miembro perteneciente a la comunidad frente a quien es extraño a la misma.

Realmente, existe identidad o correspondencia de contenido y terminología entre estos supuestos del Fuero de San Sebastián, que incorporan la noción de vecino, y otros tantos examinados en el texto del Fuero de Estella. Pero, precisamente aquellas normas cuyo contenido y redacción plantearon, en el estudio del Fuero Estellense realizado más arriba, problemas interpretativos y posibilidades en la búsqueda de un contenido y un régimen jurídicos concretos para la noción de vecindad; precisamente esos preceptos no aparecen reproducidos, ni en contenido ni en terminología, en el Fuero de San Sebastián.

2. Tales consideraciones ponen de manifiesto, al menos, que en ningún caso puede ser interpretada la vecindad, a la luz de los textos locales medievales navarros, como la condición y cualidad de carácter personal determinante del ámbito de aplicación del Derecho contenido en los Fueros de este Reino ahora analizados.

4. Las concesiones del Fuero.

1. El Fuero de San Sebastián pronto fue otorgado a otras localidades costeras. Sin duda, no sólo el carácter privilegiado de su contenido, sino también y especialmente su adaptación a la realidad del comercio marítimo y a la necesaria reglamentación portuaria, fueron las

(105) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 272, 273.

(106) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 271.

razones que motivaron tan rápida expansión por tierras del litoral cantábrico. Entre las concesiones del Fuero de San Sebastián (Fuenterrabía, Guetaria, Motrico, San Vicente de la Barquera, Oyarzun, Zarauz, Zumaya, Usúrbil, Orio) destaca la que realizase Alfonso VIII a la villa de Guetaria (107).

En efecto, fue este monarca castellano quien, el 1 de septiembre de 1209 otorgó el Fuero de San Sebastián a "... vobis meis populatibus de Guetaria presentibus et futuris,..." (108). La primera confirmación de esta concesión fue realizada por el rey Alfonso XI el 11 de abril de 1332 a "... la dicha villa de Guetaria et vezinos et moradores d'ella,..." (109). Posteriormente fue el monarca, también castellano, Juan I quien el 15 de noviembre de 1379 reafirmó la confirmación de los privilegios, a petición de "... el concejo et pobladores, vezinos et moradores en la dicha villa de Guetaria..." y con la intención de "... fazer vien et mercet a la dicha villa de Guetaria, e al concejo et vezinos et moradores et pobladores que agora son e seran de aqui adelante,..." (110). Finalmente, la última confirmación del Fuero fue la concedida por el rey Juan II el 12 de julio de 1426, quien, igualmente, a solicitud de "... el dicho concejo et pobladores, vezinos et moradores en la villa de Guetaria..." tuvo a bien firmar la confirmación de los privilegios a favor de "... la dicha villa de Guetaria et vezinos et moradores et pobladores d'ella,..." (111).

2. Una vez más, pues, los textos no ofrecen una regulación del contenido o funcionamiento de la noción de vecino, careciéndose, de es-

(107) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 189; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 80-81; J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 31, 34-39.

(108) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 35.

(109) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 36.

(110) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, págs. 36-37.

(111) J.M. LACARRA, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1, pág. 39.

ta manera, de una definición o determinación jurídico-positiva de lo que la vecindad fuese. En cualquier caso, los textos muestran claramente la consideración e incorporación de esta noción entre otras, tan indiscutiblemente fácticas, como las de poblador y morador. Establecer, con base en los textos, criterios diferenciadores entre las tres nociones no es posible; pero, obviamente, fuese cual fuese el posible carácter de tales criterios, lo que sin duda se deriva del exámen realizado es la configuración del ámbito personal de aplicación de este Derecho Local en base a criterios referidos a la ocupación de la tierra con ánimo poblador-morador; o lo que es lo mismo, la vinculación persona-territorio caracterizada por ciertos elementos (ocupación, población, arraigo suficiente, estructura y organización municipal) que la convierten en una vinculación residente-localidad.

V. EL DERECHO DE PAMPLONA.

1. Introducción.

1. A lo largo de la Baja Edad Media la realidad política y organizativa de Pamplona, en el contexto del Reino Navarro, aparece marcada por la confluencia de intereses diversos. Intereses que configuran singularmente la ciudad en torno a una convivencia tensa y, en ocasiones, a una abierta confrontación que opone, por una parte, el poder real al episcopal y, por otra, a las comunidades de los diferentes barrios. Semejante situación forzosamente había de condicionar y matizar la evolución jurídica de la ciudad y los criterios básicos y definidores de su Derecho.

El primitivo núcleo urbano pamplonés constituía una villa de señorío eclesiástico (112). Lo que no impedía que sus habitantes quedasen sometidos a un estatuto mixto, en la medida en que, mientras la titularidad territorial de la villa recaía íntegramente sobre el Obispo de Pamplona, la vinculación de carácter personal adquirió una doble vertiente: en primer lugar, vinculación al Obispo, en cuanto señor local,

(112) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2; Pamplona, 1975, págs. 18-20 y 109-113. (En adelante, J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros de Jaca 2).

derivada de la vinculación existente a la tierra que se habita; en segundo lugar, vinculación al Rey en calidad de súbditos-habitantes del Reino, con las especificidades jurídicas y sociales propias de la pertenencia a determinado grupo o clase (113).

La consideración y voluntad de provocar el incremento de la población obligaba a su fomento e incentivación mediante la concesión de ciertos privilegios, de los que los villanos (pobladores del núcleo urbano originario, posteriormente conocido como Navarrería) carecían. Consecuentemente, a finales del siglo XI se crea el Burgo Nuevo o Burgo de San Saturnino, también conocido como Burgo de San Cernin (114), que quedó constituido como una comunidad franca, fuertemente privilegiada (115); negándose, en principio, a los navarros la posibilidad del establecimiento (116). Esta caracterización privilegiada queda jurídicamente confirmada cuando en 1129 Alfonso el Batallador, siguiendo una política instaurada y practicada ya por Sancho Ramírez, concede el Fuero de Jaca al Burgo de San Saturnino, acudiendo a un procedimiento de concesión general y referida, en el sentido de que al acto y documento de concesión no se incorpora de manera expresa la normativa del Fuero concedido, sino que se establece el general sometimiento al Derecho que rige entre los pobladores de Jaca (117). De esta forma, el Derecho franco de Pam-

(113) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 19.

(114) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 21-22.

(115) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 22-23.

(116) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 24.

(117) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 22-27 y 117-123; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 158; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 206; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 186; T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 478-479; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 74.

plona quedaría definitivamente vinculado y condicionado a las evoluciones, modificaciones e interpretaciones que en Jaca determinasen, en cada momento, el Derecho vigente (118).

Por esta vía se provocó - como, por otra parte, se pretendía - un evidente distanciamiento jurídico entre los dos barrios de la ciudad. Lo cual no era sino manifestación de la búsqueda de determinados objetivos presididos por la intención de crear una comunidad capaz de garantizar el progreso y el desarrollo comercial de la ciudad, de un lado, y la de asegurar determinados ingresos y cierta soberanía en la detentación del señorío, de otro.

Posteriormente, cuando el crecimiento del burgo obliga a su ampliación, nuevamente se optó, no por la identificación o asimilación de estatutos y la constitución de una única comunidad municipal, sino por la construcción de un nuevo barrio. Nuevo en cuanto a su ubicación, organización y régimen. Así, en la segunda mitad del siglo XII se funda la Población de San Nicolás, con un estatuto jurídico intermedio entre el Burgo de San Saturnino y la Navarrería y con una población mixta: francos y navarros libres, asume un régimen jurídico de carácter franco y privilegiado derivado, igualmente, del Derecho jacetano (119).

2. A finales del siglo XII surgen - y paulatinamente se agudizan - las tensiones entre los barrios, como consecuencia de la nueva situación provocada por la fundación de la Población. En efecto, el disfrute de privilegios ha dejado de ser monopolio del Burgo, que ahora opta por mantener posiciones inflexibles frente a los navarros, en un intento de extremar las diferencias y hacer patente cualquier nota identificadora (120). De esta manera comienza una larga serie de enfrenta-

(118) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 55-63 y 235-237; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, pág. 186; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 75; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 207.

(119) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 27; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 186.

(120) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 28 y 134-135.

mientos entre las tres comunidades. Se trata, en definitiva, de tensiones que, durante mucho tiempo, se concretan en sucesivas confrontaciones de carácter circunstancial; todo ello en el, a veces amplio a veces estrecho, ámbito de los privilegios (121). En esta misma línea, la situación se ve agravada como consecuencia de la concesión que, del Derecho Privilegiado vigente en el resto de la ciudad, hace en 1189 el rey Sancho el Sabio a la Navarrería; en la medida en que tal concesión supone la práctica equiparación jurídica de los tres barrios (122).

A partir de este momento, los barrios (que desde el siglo XIII no serán ya tres, sino cuatro, tras la fundación del Burgo de San Miguel, junto a la Navarrería) (123) se ocuparán en provocaciones y réplicas sucesivas y recíprocas, en las que las posiciones de aliados y enemigos se ven ocupadas de forma diversa en cada circunstancia. La Corona adopta actitudes diferentes: intentando a veces equilibrar la situación, o, en otros casos, tomando claramente partido por alguno de los contendientes y los intentos de consagrar pactos y acuerdos conciliadores nunca lograron pleno éxito (124).

Las luchas y confrontaciones de carácter violento alcanzaron fin cuando en 1276 se produce la total destrucción de la Navarrería y el

(121) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 31-37, 141-147, 151-157, 171-176, 178-179, 182-191, 209-211, 232-234, 238-247, 249-250 y 266-271.

(122) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 55 y 137-140; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, pág. 186; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 74-75.

(123) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 30.

(124) Vid. nota nº 121.

Burgo de San Miguel (125). Pero quedaban pendientes, sin embargo, importantes cuestiones litigiosas que enfrentarían continuamente a los barrios, hasta el siglo XV. En efecto, tampoco resultó pacífico el período comprendido entre 1276 y 1423, pues las dificultades y diferencias no sólo habían surgido entre las diversas comunidades municipales de la ciudad, sino también entre la Corona Navarra y el Obispado Pamplonés (126). Son, precisamente, las diferencias entre los dos poderes lo que provoca el retraso en el comienzo de las obras de reconstrucción de la Navarrería y el Burgo de San Miguel hasta 1323 (127), cuando la oposición entre el Monarca y el Obispo con referencia a la potestad jurisdiccional e impositiva sobre la ciudad había sido superada, tras la renuncia en 1319 por parte de la Iglesia a la soberanía y titularidad temporal en Pamplona.

De tal manera que, desde la primera mitad del siglo XIV, no existe entre los cuatro barrios de la ciudad más diferenciación que la fijada por la delimitación de cada término municipal: cada barrio constituía un municipio diferenciado, pero existía unidad jurídica bajo el Derecho de Jaca y unidad política de sometimiento a un mismo y único poder, el poder real. Por otra parte, la unidad municipal se alcanzaría en 1423 mediante la promulgación del denominado "Privilegio de la Unión" (128).

2. Concesiones y privilegios.

1. El particular juego de intereses y tensiones que se acaba de exponer, quizá motivado por tratarse de la única ciudad del Reino Navarro Bajo-Medieval junto a su singular configuración y evolución derivada de este hecho, justifican las notas generales que destacan en el

(125) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 30 y 36.

(126) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 38-44, 137-140, 168-169, 192-208, 211-220 y 222-224.

(127) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 44-46.

(128) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros de-

análisis y caracterización del Derecho de Pamplona en este período. En efecto, los textos que contienen la concreta normativa del Derecho de Jaca, aparecen en la realidad jurídica de Pamplona como puntos de referencia, resultando esencial su análisis en una consideración material del Derecho de la ciudad, pero de muy poca relevancia a la hora de concretar las notas determinantes de su ámbito personal de aplicación. Así, no es casual que las versiones existentes del Fuero de Pamplona carezcan de encabezamiento y sanción, faltando, de esta manera, la explicitación con carácter general de quiénes fuesen los destinatarios del mismo. En definitiva, en la medida en que la realidad jurídico-política y estructural de la ciudad quedó configurada en cada momento de acuerdo al contenido de los numerosos actos de concesión otorgados a los diversos barrios, son tales actos los que, dirigiéndose a una concreta realidad territorial y personal, permiten establecer los ámbitos de aplicación de los privilegios en ellos contenidos y del Derecho de Jaca, continuamente referido y conformado como Derecho de Pamplona.

De forma que son, precisamente, los textos de las Concesiones y Privilegios los únicos que permiten la reconstrucción y seguimiento del proceso jurídico y político vivido por la ciudad de Pamplona durante este período. "Concesiones" y "Privilegios" que, respondiendo en cada momento a concretas necesidades e intereses, determinan qué Derecho se aplica en la ciudad, quiénes quedarán sometidos al mismo, cuáles serán los derechos y obligaciones de cada comunidad y frente a qué poder habrá de hacerse valer su realización.

2. En este sentido, y atendiendo al carácter del contenido de los citados textos, puede establecerse entre los mismos una clasificación material en cuatro grupos: en primer lugar se encontrarán aquellas "Concesiones y "Privilegios" que configuran el marco jurídico general de los barrios, al determinar la vigencia de un específico Fuero o de una concreta normativa privilegiada; en segundo lugar, se aludiría a los textos relativos a la determinación del sometimiento a una autori-

rivados de Jaca 2, pág. 37; J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica, 1978, pág. 158.

dad, especialmente en materia jurisdiccional y tributaria, y de titularidad de la soberanía sobre la ciudad de Pamplona; en tercer lugar quedarían los textos reguladores de aspectos internos y organizativos de cada comunidad, o de la ciudad unitariamente considerada; finalmente, un cuarto grupo incluiría los textos relativos a la ordenación de las relaciones entre las comunidades municipales.

A) Textos configuradores del marco jurídico general de los barrios.

1. La consideración de los textos pertenecientes a este primer grupo muestra, como se ha constatado repetidamente en análisis anteriores, la utilización, en primer lugar, de nociones personales de hecho.

Así, cuando Alfonso el Batallador otorga, en septiembre de 1129, el Derecho de Jaca al Burgo de San Saturnino de Pamplona, se dirige a todos los francos que pueblen el lugar (129); de tal manera que la figura del destinatario de la concesión queda configurada con base en dos elementos de diversa naturaleza: el carácter franco de su condición personal (convirtiendo, así, en elemento material con proyección social una consideración alusiva al origen geográfico-natural), y el dato fáctico del asentamiento con ánimo poblador (trabándose, nuevamente, la relación persona-territorio en el momento de determinar el ámbito personal de aplicación del Derecho Local, en la medida en que la población en el Burgo de San Saturnino estaba reservada a los francos). Por otra parte, el hecho de que el texto acuda a una terminología igualmente fáctica (hombres de esta población, en una ocasión, y pobladores, en otra) (130) cuando se pretende la alusión a la comunidad municipal globalmente considerada, pone claramente de manifiesto la fundamentación de la organización y estructura municipales en el dato fáctico de la ocupación del territorio.

(129) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 117-123; T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t.I, págs. 478-479.

(130) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 119.

También ha de ser incluida entre las nociones personales de hecho la terminología empleada por los textos confirmadores de esta concesión. Pues, el término burgueses, utilizado, sin excepción, en los actos de confirmación del Fuero de Jaca y de la normativa privilegiada de carácter específico, otorgados repetidamente al Burgo de San Saturni no de Pamplona (en 1155-1156 y 1158 por el rey Sancho el Sabio, y el 9 de febrero de 1238 por Teobaldo I) (131), ha de ser considerado mediante una interpretación integradora con el texto de concesión; en efecto, la noción de burgués no puede ser interpretada sino como asimilable a la de franco poblador del burgo; en la medida en que, mientras la concesión se realiza en un momento de población inicial incentivada, careciéndose, por tanto, de una previa estructuración municipal, la confirmación, sin embargo, se lleva a cabo en un momento diferente, en concreto en un momento en que la existencia de un cierto aparato interno de organización municipal permite hacer referencia con propiedad al burgo, a la comunidad burguesa, y al burgués como miembro de ésta en cuanto poblador de aquél. Y ésta es, igualmente, la interpretación que ha de mantenerse con respecto a la terminología burgueses et francos de Pamplona, empleada para designar los beneficiarios del privilegio de libre circulación por Valcarlos en el texto de confirmación del mismo, otorgado por el monarca Felipe III el 15 de abril de 1329 (132). Asimismo, cuando, el 12 de octubre de 1253, el rey castellano Alfonso X el Sabio decide otorgar su protección personal al Burgo de San Saturni no de Pamplona, lo hace refiriéndose concretamente a todos los omnes del burgo de Sant Cernin de Pamplona (133).

En este mismo sentido se expresa un texto que, como ya quedó apuntado, resultó de gran relevancia para toda la ciudad en la medida en que, al suponer el sometimiento del barrio de la Navarrería al Derecho

(131) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 127-129 y 147.

(132) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 227-228.

(133) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 148-149.

de Jaca, provocó la unidad jurídica de Pamplona. Efectivamente, fue en 1189 cuando el monarca navarro Sancho el Sabio concedió a omnibus nauarris in prefata ciuitate habitantibus, et omnibus quicumque et undecumque usque ad finem seculi ad populandum eam uenerint et ibi populauerint el Derecho otorgado a los burgueses de burgo Sancti Saturnini Pampilone (134). Se trata de una construcción sumamente representativa, al emplear el verbo populo en dos acepciones matizadamente diversas, si bien cercanas; así, al establecer como destinatarios de la concesión a los habitantes navarros de Pamplona, se está utilizando, evidentemente, una noción personal determinada de carácter fáctico, e igual condición presenta la noción del habitante futuro, también aludido por el texto en calidad de destinatario de la concesión, al referirse a él como quien acuda a poblar y pueble. De esta manera, se está exigiendo no sólo la ocupación del territorio con ánimo poblador sino también la población efectiva, pudiéndose interpretar esta última noción como referida al asentamiento cualificado por la integración personal en el territorio y en la comunidad. Finalmente, resulta destacable en el análisis de este texto el hecho de que al hacer alusión a la determinación de la soberanía jurisdiccional del Obispo de Pamplona sobre toda la ciudad, la referencia a quiénes quedasen sometidos a la misma se dirige textualmente a hominibus habitantibus in tota Pampilonensi ciuitate.

Igualmente, y en lo que al barrio de la Navarrería se refiere, el proceso típico del fenómeno repoblador volvió a repetirse cuando, tras la destrucción del barrio en 1276, se procedió a su reconstrucción en 1323. Así, no resulta extraño que el texto de la concesión a la Navarrería del Fuero de Jaca y de concretas exenciones impositivas, realizada por el rey Carlos I en Junio de 1324 (135), sea un texto que reproduzca las características de concesiones que, respondiendo a necesidades estrictamente repobladoras, resultaban propias de épocas anteriores. Se trata de un texto que emplea, exclusivamente, nociones perso-

(134) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 137-140.

(135) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 222-224.

nales de carácter fáctico, tanto al proceder con carácter general a la concesión de Derecho (Populatoribus eiusdem ciuitatis concedentes ut habeant forum lacce, et in suis causis et iudiciis vtantur eodem.) como al realizar el concreto otorgamiento de ciertas exenciones tributarias (eximiéndose de pagar peaje y lezda durante diez años a dicti populatores).

Por último, también es éste el tipo de terminología empleado en algunos textos que, al incluir concesiones o confirmaciones de cierta normativa configuradora del estatuto jurídico global de la ciudad pamplonesa, resultan aplicables a sus cuatro barrios. Así, por juramento realizado el 1 de marzo de 1271 el monarca navarro Enrique I garantiza que ningún hombre o mujer de toda la villa de Pamplona será apresado o sus bienes embargados, mientras presente fiador (136). E, igualmente, la concesión, realizada en Febrero de 1382 por el rey Carlos II, del privilegio de celebración de Feria anual y de aplicación de determinadas franquicias, se dirigió textualmente a ciudadanos y populares del burgo, población y Navarrería (137).

2. En segundo lugar, ha de considerarse la terminología empleada por aquellos textos que, utilizando una vía indirecta de designación del ámbito personal de aplicación del Derecho por ellos incorporado, se dirigen a la comunidad municipal de forma colectiva, bien realizando una consideración global de sus miembros, bien refiriéndose a las personas representativas de la comunidad. De tal manera que lo realmente esencial sería determinar, a través de reinterpretaciones de las nociones personales empleadas en otros textos, los requisitos y caracterización que habrían de confluír en una persona para su consideración como integrante de una concreta comunidad municipal. Así, la jura del Derecho de la ciudad realizada por el rey Enrique I el 1 de Marzo de 1271 (138)

(136) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 179-180.

(137) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 258-262.

(138) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 179-180.

y la concesión de protección personal y confirmación del estatuto jurídico de Pamplona realizados por el mismo monarca el 23 de Mayo de 1272 (139) quedan referidos a los veint iurados et todo el pueblo de toda la villa de Pomplona, a los qui agora son et seran d'aqui adelant. En esta misma línea, el documento que recoge las conversaciones habidas en Junio de 1301 entre los veinte jurados de la ciudad y el Obispo de Pamplona (140) incorpora la promesa realizada por éste a aquéllos, en su calidad de representantes de todo el pueblo pamplonés, de no alterar el estatuto jurídico de la ciudad; promesa que se dirigió al pueblo de la ciudad. Igualmente, las dos concesiones de exención de lezda sobre el pescado seco y la carne, realizadas por los reyes Felipe III y doña Juana de Navarra el 26 de diciembre de 1330 (141), tienen por destinatarios a los de la vniuerssidad, qui agora son et a los qui seran d'aqui adelant, de cada uno de los barrios de la ciudad de Pamplona.

3. Por último, ha de analizarse el empleo, en estos textos, de nociones de carácter personal que pudiesen, al menos en principio, incorporar un cierto contenido jurídico, aproximándose a las que podrían denominarse nociones de derecho y alejándose de las que han sido calificadas como nociones de hecho. En esta línea destaca la inclusión de la noción de vecino, cuyo contenido resulta difícilmente determinable en base a la letra de los textos analizados. En efecto, ninguno de ellos contiene definición alguna de la noción ni regulación de cuál fuese su régimen y a la hora de intentar determinar los perfiles de la institución, únicamente uno de los textos presenta datos de cierta relevancia para ello. Se trata de la concesión que del Fuero de Jaca hiciese el rey Alfonso el Batallador al Burgo de San Saturnino de Pamplona en 1129 (142).

(139) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 181.

(140) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 205-206.

(141) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 228-230.

(142) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 117-123; T. MUNOZ ROMERO, Colección, t-I, págs. 478-479.

En el citado texto, al regular el contenido del oficio de almirante se exige que sea desempeñado por un vecino de la población, por designación episcopal, y se establece el sometimiento de los pobladores del Burgo a su actuación en el ámbito de sus competencias (Et quod populatoris istos non sint districtos neque faciant directum nisi per admiratum quem miserit episcopus; et admiratum quod sit uicinum de ista popolatione.). Igualmente, al fijar el procedimiento de elección del alcalde del Burgo se establece que los pobladores del mismo designarán a tres de sus vecinos y el Obispo hará el nombramiento de alcalde eligiendo a uno de los propuestos (Et populatoris istos quod eligant tre bonos homines suos uicinos, et episcopus accipiat unum et ille sit alcaidus.). La contraposición poblador-vecino planteada en ambas disposiciones habrá de resolverse a favor de la asimilación entre las dos nociones; en efecto, en la primera de las normas, al no haber elección del almirante por los pobladores entre ellos mismos, sino la mera designación del Obispo, el empleo del término vecino de esta población queda justificado en virtud de la necesaria identificación como miembro de la comunidad municipal del así designado, derivándose la asimilación de las nociones del hecho de que la comunidad municipal no fuese sino una comunidad de pobladores del Burgo, tal y como el propio encabezamiento del texto, analizado más arriba, indicaba; asimismo, en la segunda de las normas se está empleando el término vecino con carácter relaciona, pues al vincular tal noción a la de poblador mediante la utilización de un adjetivo posesivo se está aludiendo, evidentemente, al hecho de que cada poblador es vecino para los demás en la medida en que uno y otros están compartiendo la pertenencia a la misma comunidad municipal en virtud de su residencia e integración.

También emplea el término vecino en cuanto noción identificadora de la condición de miembro de una determinada comunidad, aunque sin dejar de aludir a una misma situación de hecho, el documento que recoge lo tratado y acordado en la entrevista realizada entre el Obispo de Pamplona y los veinte jurados de la ciudad el 26 de junio de 1301 (143), estableciendo como garantía del control y actuación de dos de los testigos *comparecientes su condición de vecinos*. En este mismo sentido ha de interpretarse, también la terminología empleada en el documento de 26 de marzo de 1281 de reconocimiento del rey Alfonso X, frente a su Reino de Castilla, del privilegio por él concedido a los mercaderes de

(143) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 205-206.

Pamplona de libre circulación por tierras castellanas (144); en efecto, cuando el texto establece las garantías y control del cumplimiento del privilegio, exigiendo de los mencionados mercaderes el estar en posesión de carta del concejo de Pamplona en como son vezinos end, está regulando la manera de asegurar la realización de la finalidad perseguida por la norma mediante la comprobación de la pertenencia del mercader a la comunidad municipal de la ciudad de Pamplona; y en esta medida, la certificación exigida lo será de residencia, morada, habitación, etc., dependiendo del concreto contenido que se reconozca a la condición de vecino en cuanto miembro de una determinada comunidad, cuya máxima representación queda atribuida al concejo municipal.

Tanto la concesión de exención de peaje durante dos años a los mercaderes de Pamplona realizada por la reina Juana el 22 de enero de 1372 (145), como la confirmación por Carlos III de determinadas ordenanzas sobre la comercialización del vino en la ciudad pamplonesa el 11 de diciembre de 1387 (146), y el acto de sometimiento de toda la ciudad al Fuero General de Navarra otorgado por el mismo monarca el 11 de septiembre de 1423 (147), emplean el término vecino continuamente vinculado a la noción de habitante. En ocasiones ambos términos aparecen relacionados por conjunciones copulativas, lo cual indicaría, al menos sintácticamente, la diferenciación de las nociones y la alusión a dos colectivos municipales diversos; otras veces, los términos aparecen unidos, de manera tal que parecen condicionarse recíprocamente configurando terceras nociones más restrictivas, en la medida en que la diferen-

(144) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 183-184.

(145) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 256-257.

(146) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 262-266.

(147) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 277-279.

ciación de ambas instituciones y su vinculación supondría la posible existencia de vecinos habitantes, vecinos no habitantes, habitantes vecinos y habitantes no vecinos; y, finalmente, en otros casos, a lo largo de la formulación de una misma norma parecen emplearse indistintamente ambos términos, pues su empleo se realiza separadamente en la regulación de un mismo derecho o una misma obligación. Es preciso, por tanto, concluir la imposibilidad de alcanzar, con los datos que estos textos aportan, la inducción del contenido y caracterización de la noción de vecino.

Sin embargo, a los efectos de la investigación planteada, resulta esencial el análisis del contenido de la, ya aludida, concesión del Fuero General de Navarra a la ciudad de Pamplona; pues, al determinarse el ámbito personal de aplicación del Derecho otorgado, se hace referencia a vecinos y habitantes de Pamplona, presentes y futuros; de tal manera que, si bien la fórmula utilizada obliga a la consideración de ambos términos como nociones diferenciadas, al ser la noción de habitante en cualquier caso más amplia que la de vecino, es preciso concluir que el criterio personal de aplicación es un criterio esencialmente fáctico (148).

Igualmente importante y esclarecedora puede resultar la consideración del sentido con que se emplea la noción de vecindad. Pues, en efecto, el término no alude, como cabría pensar, a la cualidad personal del vecino, sino al conjunto de obligaciones tributarias de carácter municipal. En este sentido, y aunque sólo sea por razones de proximidad etimológica entre los términos vecino y vecindad, parece esencial comprobar que, cuando el rey Carlos I concede Fuero y exenciones a la Navarrería en Junio de 1324 para favorecer su repoblación (149), alude a los habitantes de la villa, y no a los vecinos, al hacer referencia a la obligación de vecindad: Volumus insuper et de gratia eis concedimus,

(148) J.M. LACARRA y A.J. MARTÍN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 278.

(149) J.M. LACARRA y A.J. MARTÍN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 222-224.

quod dicti populatorum et habitatores possint claudere et firmare ciuitatem muro lapideo uel alio modo meliori quo poterint; et quod omnes habitantes ibidem, domos habentes seu vicinitatem facientes, cuiuscunque conditionis sint, teneantur ponere et soluere pro domibus quas in dicta ciuitate possidebunt, in dicta clausura et refeccione poncium, foncium et itinerum, et in expensis seu missis pro vtilitate communi dicte ciuitatis faciendis (150). De esta manera, puede, asimismo, concluirse que la comunidad municipal era una comunidad de habitantes y pobladores, en la medida en que ellos quedaban obligados a cubrir los gastos de la reconstrucción del barrio y de su protección y mejora, conforme a sus propiedades en el mismo y a la, consiguiente, imposición tributaria.

4. Por último, otra de las nociones personales de posible contenido jurídico, empleada por los textos, es la de natural. Sólo en dos ocasiones aparece recogido el término; se trata del acto en que Enrique I jura el 1 de Marzo de 1271 mantener los fueros, privilegios y costumbres de Pamplona (151), y aquél en que el mismo monarca concede su personal y real protección a la ciudad el 23 de Mayo de 1272 (152), cuyos encabezamientos y sanciones se dirigen a nuestros amados naturales fieles los veint jurados et todo el pueblo de toda la villa de Pomplona. Teniendo en cuenta que parte de la ciudad pamplonesa era poblada exclusivamente por francos y que los jurados de los barrios de la ciudad así configurados eran, igualmente, francos, al menos originariamente, es importante destacar que, cuando en los textos se alude a los veinte jurados de la ciudad como naturales del monarca navarro, no puede estar haciéndose referencia a la naturaleza derivada del origen (ya sea por nacimiento en el Reino o por transmisión ius-sanguinis), sino a la derivada de la moranza en la tierra navarra; apareciendo, pues, el término natural como una noción cercana a la de súbdito (también empleada para

(150) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 223.

(151) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 179-180.

(152) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 181.

aludir a los ciudadanos y pobladores pamploneses en la concesión de franquicias y privilegio de celebración de una feria anual, otorgada en febrero de 1382 por el rey Carlos II (153)), en cuanto vinculación a un señor natural: el rey navarro.

B) Textos determinantes del sometimiento de la ciudad o sus barrios a una autoridad.

1. La misma estructura terminológica aparece, también incorporada a este grupo de textos. En efecto, son, en primer lugar, nociones de hecho las que aparecen configurando el núcleo personal de sometimiento al Derecho creado.

En este sentido, ninguna novedad, digna de destacarse, presenta el contenido de los textos que, al regular el ejercicio de la autoridad, jurisdiccional y tributaria, y la titularidad soberana sobre la ciudad de Pamplona o cada uno de sus barrios, hacen alusión al marco subjetivo de sometimiento a semejante poder utilizando términos genéricos matizados por referencias territoriales, tales como omne de (154), omnes et muylleses, los qui agora hy son et los que d'aquí adelant hy seran (155), omne/femina de (156), bons omnes de (157), persona de (158), personas habitancium in (159). Idéntica calificación precisa la utilización de

-
- (153) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 258-262.
- (154) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 109-113, 159-160, 162-164, 204 y 211-214.
- (155) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 148-150.
- (156) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 152-153.
- (157) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 155-156.
- (158) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 204.
- (159) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 192-203.

términos personales de carácter abstracto cuya concreción sólo deriva del establecimiento de una cierta vinculación a la localidad, tales como los de (160).

Por otra parte, esas notas de género y abstracción atribuidas a los términos anteriores, desaparecen en otras nociones personales que, utilizadas en este grupo de textos, participan sin embargo del carácter fáctico de aquéllos. En efecto, cuando se emplea la noción de habitor-habitans-abitant (161) o la de poblador (162) la propia terminología hace referencia a una acción (la de establecer habitación, y la de la ocupación pobladora de la tierra) y a un status personal (en correspondencia a la acción desarrollada) que, entrañando una directa y concreta vinculación a cierto territorio, excluye cualquier consideración de origen que pudiese, en el caso de los términos analizados con anterioridad, hacerse derivar del empleo de la preposición de y, de este modo, matizar y condicionar su configuración fáctica.

Sí merece, sin embargo, ser destacado que en uno de los textos en que aparece la noción de habitante como determinante del ámbito personal de aplicación de su normativa, se utiliza, en contraposición a la misma, el término forano. Se trata del acuerdo firmado en Diciembre de 1290 por el rey Felipe I el Hermoso, el Obispo Miguel, el arcediano de la tabla y el hospitalero de la Iglesia de Pamplona, sobre el establecimiento de la jurisdicción compartida en los cuatro barrios de la ciudad (163). La utilización contrapuesta de ambos términos indica que, también en este caso y en la medida en que el extraño a la comunidad municipal lo es por oposición comparativa al habitante de la ciudad, la comunidad municipal lo es bajo la consideración de comunidad de habitantes.

(160) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 158-160, 165-166, y 168-169.

(161) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 192-203, 211-214, 216-220, y 234-235.

(162) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 234-235.

(163) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 192-203.

Igualmente destacable resulta, en el texto de solicitud a Bonifacio VIII por parte de la ciudad de Pamplona de mediación ante las autoridades eclesiásticas del lugar para evitar los efectos perjudiciales del acuerdo jurisdiccional adoptado en 1290, el empleo de la noción de incola al hacerse referencia a los habitantes pamploneses en cuanto afectados por el mencionado acuerdo y sus consecuencias (164).

Por último, también la noción de burgués, que aparece recogida en alguno de estos textos (165), ha de ser incluida entre la terminología de hecho; puesto que su utilización no responde sino a la necesaria identificación de los miembros de la comunidad del Burgo de San Saturni no frente al resto de los habitantes de la ciudad, y ello por ocupar el status más privilegiado y específico de todos ellos. Así, y en cuanto que burgués es el habitantes del Burgo, la caracterización del término continúa siendo fáctica.

2. En segundo lugar, el empleo de las referencias colectivas a las comunidades municipales por parte de los textos ahora examinados, resulta muy representativo; en el sentido de que tanto la letra de los textos como su contenido y finalidad muestran claramente la oportunidad de esas referencias y la configuración de los órganos o colectividades aludidos.

Así, los actos de concesión de protección especial otorgados a la Población de San Nicolás de Pamplona el 13 de julio de 1251 por el rey Teobaldo I (166), y el 27 de Noviembre de 1253 por el monarca Teobaldo II (167) se dirigen a todo el conceyllo de la población de Sant

(164) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 208.

(165) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 192-203.

(166) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 148.

(167) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 149-150.

Nicholau de Pomplona, omnes et muylleres, los qui agora hy son et los que d'aqui adelant hy seran. El destino del privilegio queda, de este modo, centrado territorialmente en la Población de San Nicolás y subjetivamente en el conjunto de personas que en la misma se encuentren; y son, precisamente, esas personas quienes, constituyendo relaciones de comunidad, conforman la asamblea municipal. El texto, por otra parte, pone de manifiesto la evidente fundamentación fáctica de las nociones globales empleadas para hacer alusión al elemento humano del municipio en su conjunto.

En este contexto cobra, pues, pleno sentido que las solicitudes de apertura de investigación acerca de la justicia o injusticia de ciertas decisiones y actuaciones de monarcas anteriores, sobre los diversos núcleos pamploneses, partan de los representantes de los concejos; así como que, consiguientemente, las comunicaciones de los dictámenes elaborados al respecto vayan, asimismo, dirigidas a los concejos en cuanto asambleas municipales (168). Y, para finalizar, idéntica función y finalidad cumple el empleo del término vniversitas; en efecto, de los jurados y universidad de la ciudad de Pamplona partió la petición a Bonifacio VIII, en 1301, de hacer mediar su autoridad en orden a conseguir de las autoridades eclesiásticas de la ciudad las alegaciones y replanteamiento del acuerdo jurisdiccional firmado en 1290 con el poder real (169).

3. Tampoco con base en los textos ahora examinados es posible confirmar el grado de elaboración jurídica y la determinación en Derecho del contenido de aquellas nociones, tales como la vecindad o la naturaleza, que parecen separarse de cualquier delimitación conceptual estrictamente fáctica. En efecto, los textos no ofrecen elementos que permitan deducir hasta qué punto la noción de vecino se asimila, acerca o aleja a la de poblador o habitante; e igualmente difícil resulta determinar si la noción de natural queda esencialmente caracterizada por índices personales o territoriales.

(168) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 155-159, 163-164, y 166-167.

(169) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 207-208.

En cualquier caso, el término vecino es incorporado con un evidente sentido de identificación; las relaciones establecidas entre los habitantes o pobladores de una misma localidad son relaciones de vecindad, en virtud de las cuales queda determinado quién sea miembro de esa comunidad surgida de la cohabitación y quién resulte un extraño a la misma. Este es el sentido en que se emplea la noción en el dictamen que se elabora el 17 de julio de 1254 considerando injusta la exigencia de peaje a los vecinos de la Población de San Nicolás de Pamplona mantenida durante los, anteriores, reinados de Sancho el Fuerte y Teobaldo I (170); así como en el ya analizado acuerdo de jurisdicción compartida realizado en diciembre de 1290 entre el rey Felipe I, el Obispo de Pamplona, el arcediano y el hospitalero de la misma ciudad (171).

Cuando el dictamen confeccionado, en Julio de 1254, por orden de Teobaldo II no considera conforme a Derecho cierta actuación del monarca Teobaldo I sobre el Burgo de San Saturnino de Pamplona y establece: "E que lo rei non deu auer casa en lur vila, puis nengun omne non hi deu auer casa sens lur voluntat si vezin de la vila non fus."... "Et donames per iudici que d'aqui en auant lo rei ni nengun altre per el ni per razon d'el, non les faga enparança nenguna en lur vila, ni nengun omne non aya casa en lur vila sens lur voluntat, si doncs lur vezin non era; car nengun per dreit non deu far enparança en lur vila, for l'ami-rat qui hi sera per lo bispe, et aquo al iuiament del alcalde." (172) está haciéndose alusión al régimen específico de población y admisión en una localidad franca. En efecto, el Burgo de San Saturnino de Pamplona quedó fundado y configurado como un burgo franco y en cuanto comunidad privilegiada vivió un estatuto selectivo de población. Así, en

(170) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 156-157.

(171) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 192-203.

(172) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 161.

la concesión del Fuero de Jaca a sus francos por Alfonso el Batallador en Septiembre de 1129, se prohibió poblar entre ellos a los navarros, aunque fuesen clérigo, militar o infanzón ("Et nullus homo non populet inter uos nec navarro neque clerico, neque milite neque ullo infancone") (173); y se fijó un estatuto único para todos sus pobladores ("Et nullo homine qui populauerit cum uos, quod sic faciat quomodo feceritis unoquoque de uobis.") (174), lo cual obliga a negar en lo que al ámbito personal de aplicación del ordenamiento jurídico general del Burgo se refiere, la diferenciación cualitativa o material entre los vecinos y otros posibles colectivos municipales. De tal manera que cuando el texto de 1254 se refiere a la imposibilidad de tener casa en la localidad sin la concurrencia de la voluntad de los burgueses, salvo que se sea vecino, está respondiendo al proceso propio de incorporación a una comunidad burguesa franca: en primer lugar, se precisa la voluntad comunitaria de admisión para poblar, y sólo tras la manifestación de esta voluntad y el acto de ocupación se puede tener casa en el burgo; si bien, una vez cumplida la fase de admisión e incorporación a la comunidad, ninguna otra voluntad o autorización complementaria se precisa para tener casa en la villa; de ahí que, en la medida en que la autorización lo es para la población pero no para, complementaria y posteriormente, ser vecino, éste deba quedar asimilado al poblador integrado en la comunidad.

Esta concreta caracterización de la noción de vecino justifica su utilización, en algunos textos como el del acta notarial de requerimiento por el portero real al almirante de la Población de San Nicolás

(173) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 118; T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t.I, pág. 478.

(174) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 118; T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t.I, pág. 478.

para que no ejerza funciones en el área jurisdiccional del preboste de la Navarrería de 21 de junio de 1325 (175), a la hora de identificar y establecer garantías en la actuación de los testigos comparecientes a un acto.

Finalmente y como ya se ha destacado en anteriores análisis, el empleo de la noción de vecino junto a otras nociones indudablemente fácticas (habitantes, pobladores) en los encabezamientos y sanciones de los textos, a la hora de determinar el núcleo personal general afectado por la normativa por ellos incorporada, manifiesta la configuración del ámbito personal de aplicación del Derecho Local sobre criterios de hecho, básicamente. Así, por acto otorgado el 14 de julio de 1342, el Arzobispo de Sens concede su especial protección a los vecinos, habitantes y pobladores, presentes y futuros, de la Navarrería de Pamplona (176).

En lo que al concepto de naturaleza se refiere, únicamente puede destacarse la vinculación personal al monarca que entraña semejante noción. En efecto, en el texto de concesión de protección personal y real por Teobaldo II a la Población de San Nicolás de Pamplona, de 27 de Noviembre de 1253 (177), se emplea el término natural para aludir a todo súbdito del rey que, en cuanto tal y en la medida en que el monarca se obligaba y comprometía de forma personal, quedaba asimismo obligado y comprometido en la tarea de guarda y defensa de la localidad de la Población, de sus hombres y mujeres, y de sus bienes.

(175) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 226-227.

(176) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 234-235.

(177) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 149-150.

C) Textos reguladores de aspectos internos y organizativos de la ciudad.

1. La distinción establecida en el apartado anterior entre tres categorías diversas de nociones personales de hecho considerando como no comunes a todas ellas su naturaleza fáctica y su delimitación mediante referencias territoriales vuelve a cobrar validez en el actual análisis.

En efecto, cuando la identificación de algunos de los testigos en el acto de nombramiento y jura de alcalde, almirante y baile del Burgo de San Saturnino el 22 de Febrero de 1256, se realiza mediante el empleo de una terminología personal abstracta: "don A.C., M.C., M. de C., del Burgo de San Cernin", "don M. d'U., M.M., de la Población de San Nicolás", "don D. de E., S. de A., de la Navarrería", (178) se está haciendo referencia a la pertenencia de cada uno de ellos a alguno de los municipios de Pamplona, de manera que no se alude sino a su procedencia territorial inmediata en su condición de miembros de una concreta comunidad municipal pamplonesa.

La misma función cumple el uso de este tipo de terminología en el acto en que, el 14 de julio y el 13 de agosto de 1346, el Gobernador de Navarra ordena a los jurados de la ciudad que presten el tradicional juramento (179); y en este sentido se alude al hecho de que la prestación y el acto de la pretendida jura constituya la base del tradicional pacto habido entre los del Burgo de San Cernin y los de la Población de San Nicolás (180). La asimilación, e incluso identificación, de estos términos de carácter abstracto con la, ya analizada, terminología personal genérica queda confirmada cuando, en el acta de quejas presentada por el Burgo de San Saturnino al Gobernador de Navarra el 25 de Agosto de 1346 ante la negativa de los jurados de la Población a prestar el mencionado juramento (181), se realiza el mismo tipo de referencias personales em-

(178) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 168-169.

(179) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 238-241.

(180) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 238 y 240.

(181) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 241-247.

pleando, ahora, los términos homes del dicto burgo y gentes de la dicta villa. Aún cabe formular un paso más en el proceso interpretativo de este tipo de terminología, que permita construir, definitivamente, la reducción conceptual de todos estos términos a una sola categoría identificable con la de poblador-morador-habitante; efectivamente, el acta ahora analizado recoge, asimismo, alusiones a estos colectivos municipales mediante términos de hecho referidos a la ocupación del territorio y asentamiento en él, así como a la integración en el grupo humano que comparte tal situación: burzeses et francos del burgo de Sant Cernin de Pamplona (182), habitantes de la dicta villa (183).

Para finalizar el exámen de las nociones personales de hecho incluidas en los textos pertenecientes a este grupo, sólo interesa destacar que, el emplearse el término cives en la determinación de los destinatarios del permiso concedido por Felipe I, mediante mandato de ejecución al Gobernador de Navarra, el 23 de abril de 1290, para el disfrute de los pastos en las condiciones acostumbradas con anterioridad a la destrucción del Barrio de la Navarrería (184), se está aludiendo a todos aquellos que, perteneciendo a cualquiera de los barrios pamploneses, constituyen, por ello, la población de la ciudad de Pamplona. En el mismo sentido, el empleo de nociones tales como populadores (185), habitadores-habitantes (186), moradores (187), adquiere coherencia ante la

(182) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 242.

(183) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 243.

(184) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 191.

(185) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 220-221.

(186) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 220-221, 241-247, y 250-252.

(187) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 250-252.

consideración de que la esencial preocupación de ciertos textos resida en la consolidación de la repoblación, en concreto de la repoblación del Barrio de la Navarrería en el contexto del proceso iniciado con su reconstrucción; se trata de la solicitud al rey, entre Mayo de 1322 y el mismo mes del año 1324, de privilegios por parte de los repobladores del mencionado barrio (188); así como del otorgamiento a éste el 5 de diciembre de 1366 por parte del rey Carlos II de la liberación de los censos adeudados, con el fin de aumentar la, insuficiente, población de la Navarrería (189). Igualmente, cuando este mismo monarca, el 13 de febrero de 1369, ordena al procurador y oficiales reales que cumplan y respeten los fueros y privilegios de Pamplona (190), lo hace, en respuesta a las quejas formuladas por las villas pamplonesas, aludiendo a las víctimas de la gestión de aquéllos mediante los términos gentes de las dictas buenas villas y gentes de nuestra villa y ciudad de Pomplona.

2. El análisis de los textos que emplean nociones de referencia colectiva al elemento humano de cada uno de los municipios de Pamplona, revela diversos usos terminológicos de la realidad personal municipal como unidad. De tal manera que, aludiéndose a una misma colectividad humana, se emplean términos diferentes: destacándose, en algunos casos, los rasgos organizativos, y, en otros, la caracterización puramente fáctica.

En efecto, no cabe duda de que los términos alcalde y jurado incorporan nociones con un contenido estrictamente jurídico, singularmente identificables en determinadas personas, y configuradas por concretas posiciones, funciones y cargos en el seno de la organización municipal. Pero, igualmente evidente resulta que, cuando tales nociones se emplean junto a otras de referencia colectiva, pasan a construir una fórmula de expresión del ámbito personal de aplicación en la que se fija una clara distinción: por una parte, las personas que ejercen di-

(188) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 220-221.

(189) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 250-252.

(190) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 254-255.

chos cargos municipales aparecen como destinatarios del acto en su calidad de autoridades responsables de parte de la actividad municipal, pero, por otra parte, las personas destinatarias de la normativa contenida en el texto serán aquéllas que aparezcan integradas en la referencia colectiva aludida. Así, la confirmación el 10 de noviembre de 1255 del juramento prestado por los enviados de la Población de San Nicolás al rey Teobaldo II es realizada por los jurados et tot el coceillo de la poblacion de Sant Nicholau de Pamplona (191); el acto de mandato de prestación de juramento realizado por el Gobernador de Navarra, Juan de Conflant, el 13 de Agosto de 1346, a los veinte jurados entrantes de Pamplona alude a las universidades del burgo y la población al hacer referencia a los males que, para ambos barrios, podrían derivarse de la negativa de aquéllos a la jura (192); en el acta notarial de las quejas presentadas, el 25 de agosto de 1346, por el Burgo de San Saturnino al Gobernador de Navarra en relación con la negativa de los jurados de la Población a prestar juramento, se alude a una carta del mencionado Gobernador dirigida a nos amez et feauls l'arcalde, les jurez et la vniuersite du borc de Sant Cernin de Pampalona, y en la respuesta formulada por aquél se afirma que vniuersitat es pueblo (193); en la concesión, el 15 de abril de 1355, por el rey Carlos II de la exención provisional durante dos años al Burgo de San Saturnino y a la Población de San Nicolás del pago por homicidio cuando no se realizase la entrega de los homicidas a los oficiales reales en el plazo fijado se hace referencia a que la obligación de pago en tal supuesto correspondía al conçeýllo, siendo éste quien, consiguientemente, solicitó la concesión real del privilegio (194); el 16 de junio de 1358 el infante de Navarra don Luis se dirige al alcalde, a los jurados et conçejo de la vniuersitat de Sant Nicolas de Pomplona, para, a petición del alcalde, jurados et conçeillo del Burgo de Sant Cernin de Pomplona, ordenar la inmediata

(191) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 167-168.

(192) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 239-241.

(193) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 241-247.

(194) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 247-248.

reunión en veintena de los alcaldes y jurados de ambos barrios y, así, conseguir nuevamente la tradicional constitución de un solo concejo y una única universidad (195); el 6 de diciembre de 1368 el monarca Carlos II concede, a solicitud de los jurados, pueblos et vniuersitat de la Navarrería de Pomplona, el perdón de las cantidades adeudadas por este barrio en calidad de contribución por los fuegos no declarados y descubiertos por los comisarios regios (196); y el 12 de diciembre de 1421 Carlos III promulga una ordenanza sobre treguas entre las comunidades de la Navarrería, el Burgo y la Población de Pamplona, cuyo cumplimiento y ejecución encomienda a los alcaldes et jurados et vniuersidades del burgo, poblacion et Navarrería de nuestra dicta ciubdat de Pomplona. (197).

De manera que las alusiones terminológicas de carácter colectivo son, pues, tres: concejo, universidad y pueblo. Teniendo en cuenta el contenido material de los textos aludidos y de sus referencias personales, así como el, prácticamente indiscriminado uso que de las mismas se realiza, y la identificación textual, entre universidad y pueblo, puede concluirse que en los tres casos se está aludiendo a un mismo grupo o colectivo, mediante diversos términos, dependiendo del elemento configurador del grupo que, en cada caso, convenga destacar. En efecto, el término concejo es utilizado en aquellos supuestos en que se precisa la referencia a la organización de carácter asambleario de los miembros de la comunidad municipal en cuanto pobladores del término; la noción de universidad se emplea para aludir al colectivo trabado por la unidad derivada de la convivencia y las relaciones entre los pobladores, interesando, por tanto, una referencia de carácter esencialmente personal;

(195) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 249-250.

(196) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 253-254.

(197) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 276-277.

y, por último, el término pueblo parece emplearse en alusiones caracterizadas territorialmente, en relación al status derivado del asentamiento efectuado por los pobladores.

3. La determinación de la posición que ocupase el vecino en el seno de cada comunidad municipal pamplonesa, pasa por la necesaria configuración del contenido e identidad de la noción; mas, en la medida en que ello no es posible a través de la consulta directa de los textos, resulta obligada la inversión de las líneas de consideración, de tal manera que si del análisis textual y comparativo de la letra de aquéllos puede hacerse derivar la posición jurídica y social del vecino de Pamplona, podrá afrontarse la elaboración de la noción de vecino en cuanto institución jurídica.

En este sentido, los textos permiten, en primer lugar, calificar al vecino por su pertenencia e integración en el grupo. Así, en el momento histórico en que el Burgo de San Saturnino opta por mantener posturas restrictivas frente a los navarros, como consecuencia de la situación derivada de la creación de la Población de San Nicolás como comunidad mixta (francos y navarros libres) jurídicamente privilegiada (concesión del Derecho de Jaca), se compromete en la aplicación de una política de selección estricta de la población, decidiéndose en agosto de 1180 la expulsión de todos los navarros, excepto aquéllos que a los burgueses-francos complaciese retener como vecinos y estuviesen inscritos en la carta de los burgueses, si bien, y en cualquier caso, los vecinos navarros gozarían de inferior status jurídico y profesional que los francos (198). En la medida en que la población de los navarros en el Burgo siempre estuvo sometida, como en el resto de las localidades francas, a la voluntad de los pobladores francos, puede concluirse que se trata de expulsar o retener a los pobladores navarros que se considerase oportuno; de tal manera que semejante retención supondría el mantenimiento en la población, y, por tanto, el navarro poblador del

(198) J.M. LACARRA y A.J. MARTÍN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 134-135.

Burgo es burgués por razón del lugar en que mora (al igual que el poblador franco) y es, asimismo, vecino por razón de la integración en la comunidad y de las relaciones derivadas de la conmoranza. En el contexto de tal interpretación se justifica el contenido y naturaleza de la sanción impuesta a quien incumpliese la normativa municipal sobre la población y el status del navarro en el Burgo: "Et si aliquis uicinus de prefato burgo Sancti Seturnini hoc sacramentum disrumperit, domus eius destruatut et a uilla et consorcio predictorum burgensium eiciatur." (199)

El empleo del término en la confirmación del juramento prestado por los enviados por la Población de San Nicolás a Teobaldo II que, el 10 de noviembre de 1255, realizan los jurados y concejo de la misma, no ofrece duda alguna en lo que a su naturaleza se refiere; pues, efectivamente, la expresión nostros amados parientes et amigos, vezinos et compainneros jurados revela un evidente uso relacional del término (200).

Por otra parte, los textos relativos a la situación de quiebra, ya aludida, de las relaciones entre los barrios de San Saturnino y San Nicolás, que se produjo como consecuencia de la negativa de los jurados de la Población de San Nicolás a prestar, junto a los del Burgo, el tradicional juramento, aluden a los veinte jurados bajo su condición de vezinos de Pamplona (201); y ello supone, una vez más, la consideración individualizada de un miembro de la comunidad; pues, teniendo en cuenta que la ciudad de Pamplona estaba integrada por varios términos municipales, habrá de rechazarse cualquier caracterización de la noción de vecino que implique una estricta y rigurosa vinculación jurídica a un término municipal. En otras palabras: si se considera la noción de vecino como una institución de Derecho que supone cierta incorporación, jurídicamente definida y condicionada, al término municipal, no podría hacerse referencia con propiedad al vecino de Pamplona, puesto que la ciudad

(199) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 135.

(200) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 167-168.

(201) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 238-241.

pamplonesa no se correspondía con un único y concreto término municipal; sólo en la medida en que se rodee la noción de notas fácticas y comunitariamente integradoras, podrá interpretarse que quien pertenece a una concreta comunidad municipal (y en tal sentido es vecino del término) pertenece, asimismo, a cualquier comunidad con base territorial (en este caso, la de la ciudad de Pamplona) en que aquélla quede incluida e integrada. Y, en este sentido, resulta coherente que en el acta notarial de las quejas elevadas al Gobernador de Navarra por el Burgo de San Saturnino, el 25 de agosto de 1346, en relación a la tan citada negativa de los jurados de la Población a prestar juramento, los representantes del Burgo se refieran mediante la expresión vezinos nuestros, con claro sentido relacional y en el contexto de una comunidad más limitada: la comunidad municipal de los burgueses de San Cernin, a dos mandatarios de este barrio que, con anterioridad y en idéntica misión, habían sido enviados ante el Gobernador don Juan de Conflant (202).

También reviste carácter relacional, como se desprende tanto del contenido material del texto como de la forma sintáctica empleada (utilización de un adjetivo posesivo), el uso que del término vecino se hace en el acto, de 13 de febrero de 1369, del mandato del rey Carlos II a los oficiales reales de Pamplona para que respeten y cumplan el contenido de la normativa privilegiada de la ciudad. En efecto, los representantes pamploneses se habían quejado al monarca de los agravios recibidos, del procurador y los oficiales reales, por lures vezinos (203).

En lo que se refiere a la posible utilización de la noción analizada en el momento de determinar con carácter general el ámbito personal de aplicación de una concreta normativa, resulta de interés el análisis de dos textos. En primer lugar, la concesión, el 14 de diciembre de 1369, por la reina Juana a los barrios de San Saturnino y San Nico-

(202) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 241-247.

(203) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 254-255.

lãs del privilegio de descarga de pescado fresco en lugar diferente de la "carnicería" de la Navarrería, alude a que los jurados y el concejo y universidad del Burgo y la Población habían solicitado de la reina tal privilegio para los vezinos et habitantes de los dictos logares, et quoalessquiere otras personas por razon de dicto logar; y la fórmula de la sanción real de la concesión del privilegio se dirige a las gentes de los dictos burgo et poblacion, et quoalessquiere otra perssona qui trayra pescado fresco de mar o de agoa dulz (204). Es preciso, pues, identificar ambas fórmulas en referencia, lógicamente, a un mismo colectivo humano; de tal manera que el ámbito personal de aplicación del Derecho local queda delimitado en torno a criterios fácticos, y la noción de vecino, nuevamente, se configura como noción cercana a las denominadas nociones personales de hecho.

Proximidad conceptual que vuelve a manifestarse, en segundo lugar, en el texto de la orden de Carlos III a los alcaldes y jurados de los tres barrios de la ciudad de Pamplona, el 12 de diciembre de 1421, para que se atiendan recíprocamente en las peticiones de tregua en casos de agresión entre miembros de distintos municipios pamploneses. En efecto, el texto recoge el mandato regio tomando como pretexto la exposición de un supuesto concreto en el que los agresores eran vezinos et habitantes en el burgo de nuestra ciubdat de Pomplona y la víctima era vezino et morador en la Navarrería de nuestra dicta ciubdat (205).

Por último, y en relación a la incorporación de nociones que expresan una cierta vinculación personal a la figura del Rey navarro, ha de concluirse que en tales supuestos la terminología alude a una posición personal condicionada por criterios especialmente territoriales. Así, cuando el 10 de Noviembre de 1255, los jurados y el concejo de San Nicolás de Pamplona confirman el juramento de fidelidad al Rey de Navarra realizado por sus enviados a Teobaldo II y afirman que le obedecerán como a rei et a nostro sinner natural (206), se está haciendo alu-

(204) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 255-256.

(205) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 276-277.

(206) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 167-168.

sión a una forma de naturaleza derivada de la pertenencia a una comunidad municipal, y, por tanto, de base territorial, organizada y fundamentada sobre su inclusión en el Reino. Y en la medida en que, según los datos hasta ahora manejados, esa pertenencia quedaba cifrada en criterios fácticos de asentamiento e integración, el rey aparece como señor natural de quienes realizasen el acto de población y asumisen el status de la integración. Idéntica interpretación se deriva de la caracterización de súbdito que del morador hace el texto en que, el 5 de diciembre de 1366, Carlos II exime a la Navarrería de los censos que adeudaba y dispone que éstos sean adquiridos por quienes venían abonándolos y su importe sea destinado a las obras de fortificación de la ciudad: los nuestros subditos qui moran en eilla et los qui verran morar et poblar (207).

D) Textos relativos a la ordenación de las relaciones entre los barrios.

1. El esquema terminológico que, con caracteres prácticamente idénticos, ha venido repitiéndose en el exámen de todos los textos de privilegios y concesiones a los barrios pamploneses, se reproduce nuevamente en el análisis de los comprendidos en este cuarto grupo. Nada nuevo supone, efectivamente, comprobar, en primer lugar, que los ámbitos personales de aplicación de la normativa reguladora de las relaciones entre los barrios queden esencialmente definidos por notas fácticas.

Así, algunos textos, como el que contuvo el mandato de Luis I Hutín, el 30 de diciembre de 1314, al Gobernador de Navarra de que hiciese destruir las fortificaciones realizadas por la Población de San Nicolás frente al Burgo de San Saturnino (208), emplean nociones tales como la de habitor, es decir, nociones claramente de hecho referidas al establecimiento de hogar, por un lado, y a la relación con un concreto te

(207) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 250-252.

(208) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 209.

territorio o localidad así determinada, por otro. En efecto, el texto alude en concreto a las malas relaciones entonces existentes entre habitatores burgi Sancti Saturnini y habitatores populationis Pampilone.

En otros casos, sin embargo, la delimitación del término y su contenido es menor, y las alusiones personales se centran en términos genéricos o abstractos, cuya concreción necesariamente ha de fundamentarse en referencias territoriales complementarias (209). De esta manera se expresan, por ejemplo, la prohibición de Sancho el Fuerte, el 23 de agosto de 1214, a los homines de Nauarraria Pampilone y a los homines de populacione Sancti Nicholay de construir fortificación contra los homines de burgo Sancti Saturnini (210); o, con posterioridad y en torno al mismo tema, el dictamen de 19 de julio de 1254 de los alcaldes de Teobaldo II considerando que el rey Sancho el Fuerte no obró en conformidad a Derecho consintiendo a los del burgo de Sant Cernin levantar un muro en tierra de los de la poblacion (211). La identidad de contenido y significación de ambos tipos de terminología (abstracta y genérica) se manifiesta en el hecho de que un mismo texto haga referencia a un único colectivo humano empleando indistintamente una u otra; así, en la

(209) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2. Emplean la, denominada, terminología genérica los siguientes textos: priv. nº 17 (homines de), págs. 141-142; priv. nº 18 (homines de) págs. 142-143; priv. nº 19 (homines de), págs. 144-145; priv. nº 31 (omnes de), págs. 159-160; priv. nº 40 (bons omnes de), pág. 171; priv. nº 43 (bons omnes de), págs. 175-176; y priv. nº 48 (omnes de), págs. 182-183.

Emplean la, denominada, terminología abstracta los siguientes textos: priv. nº 25 (los de), págs. 151-152; priv. nº 30 (los de), págs. 158-159; priv. nº 31 (les de, los de, als del), págs. 159-160; priv. nº 40 (les de), pág. 171; priv. nº 48 (los de), págs. 182-183; y priv. nº 85 (los de), págs. 266-271.

(210) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 141-142.

(211) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 158-159.

redacción del dictamen de julio de 1254 de los alcaldes nombrados por Teobaldo II a tal efecto, se afirma que el rey Teobaldo I no obró en justicia al consentir als de la Poblacion construir muro y portal en tierra que fue dada als del borc de Sant Cernin, realizándose con ello fuerza contra'ls omnes del borc (212).

Para concluir, sólo destacar que también participan de esta naturaleza fáctica aquellos términos que hacen referencia a una cualidad personal dependiente de la cualidad y condición territorial propia de la localidad en que se habita. La afirmación de que tales términos son, igualmente, términos de hecho deriva del análisis textual de las redacciones en que aparecen incluidos, en la medida en que revela que nociones personales tales como burgués (213) o ciudadano (214) simplemente aluden a una situación de pertenencia a una comunidad asentada en un burgo o en una ciudad. Así, por ejemplo, en Marzo de 1215, ante la tensa relación existente entre los burgenses Sancti Saturnini y los nauarrros de Nauarreria, el Obispo de Pamplona prohíbe a los homines de Nauarraria Pampilonensi y a los homines de populatione Sancti Nicholay construir fortaleza defensiva contra homines de burgo Sancti Saturnini; manifestándose, pues, la obvia identificación entre la noción burgenses Sancti Saturnini y el término homines de burgo Sancti Saturnini (215).

2. En lo que se refiere al empleo de formulaciones colectivas en los textos al señalar las personas destinatarias de su contenido, nuevamente, junto a términos que, aludiendo a la representación comunitaria ejercida por ciertos órganos o personas, se refieren, así, indirectamente a toda la comunidad municipal, aparecen otros de directa referencia a ésta en una consideración global y unitaria.

En efecto, ante las quejas que dos procuradores por los XII jurados et por el conceillo de la Poblacion de Ponplona habían formulado

(212) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 159-160.

(213) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2. Emplean la noción de burgués los siguientes textos: priv. nº 18, págs. 142-143; priv. nº 19, págs. 144-145; priv. nº 42, págs. 173-174; y priv. nº 57, págs. 210-211.

(214) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2. Emplea la noción de ciudadano (civis) el priv. nº 41, p. 172-173.

(215) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 142-143.

a los alcaldes nombrados por Teobaldo II, éstos, tras comprobar los hechos y atender a ambas partes, dictaminan, el 19 de julio de 1254, que Sancho el Fuerte obró injustamente al permitir al Burgo de San Saturnino levantar un muro en tierra de la Población de San Nicolás (216). De esta manera, queda fijada una concreta alusión a la escala de carácter representativo establecida en la estructura organizativa del municipio: los procuradores actúan en nombre de los XII jurados y éstos, a su vez, representan al concejo en calidad de defensores de los intereses generales de la comunidad municipal, y el concejo no es sino esa misma comunidad considerada en su vertiente orgánica.

La misma realidad, en este supuesto con mayor evidencia y claridad, recoge la terminología empleada por el texto de comunicación, el 23 de abril de 1257, al Obispo de Pamplona de la sentencia dictada por los jueces conocedores del pleito entre el Burgo de San Saturnino, de una parte, y la Población de San Nicolás y la Navarrería, de otra, pidiéndole que proceda a su cumplimiento y ejecución. En efecto, al hacer mención del pleito planteada el texto emplea una fórmula similar a la incluida en el analizado con anterioridad, y alude directamente a la comunidad municipal por el empleo del término latino correspondiente al castellano comunidad: in causa que inter juratos et comune Sancti Saturnini Pampilone, ex parte una, ac juratos et comunia Ciuitatis et populationis Sancti Nicholay Pampilone ex altera (217).

Igualmente directas han de considerarse las referencias colectivas incluidas en el texto de la orden de Luis I Hutín, el 22 de Febrero de 1315, al Gobernador de Navarra para que indague sobre las edificaciones realizadas por la Población de San Nicolás contra el Burgo de San Cernín (218); y en la redacción de las ordenanzas reguladoras y unifica

(216) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 158-159.

(217) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 173-174.

(218) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 210-211.

doras de las comunidades del Burgo y la Población, dictadas por Carlos III el 20 de Diciembre de 1390 (219). En el primer caso se incluyen, una vez más, alusiones a las relaciones entre ambas comunidades con referencias a éstas mediante términos, de carácter individual en algunos supuestos y de naturaleza colectiva en otros, que implican connotaciones fácticas (... inter ipsos - burgensses burgi Sancti Saturnini - ex vna parte et populum populationis de ville Pampilone ex altera...)(220). En el segundo de los textos, se plantea la existencia de ciertas discordias, a causa de algunos edificios construidos en San Nicolás y otras cuestiones, entre l'alcalde, jurados et consello con toda la vniuersidad et communitat del burgo de Sant Cernin de nuestra ciutat de Pomplo-
na, de la vna part, et l'alcalde, jurados, communitat et vniuersitat de la poblacion de nuestra dicta ciutat de Pomplona, de la otra part (221); todas las aludidas ordenanzas se dirigen a los del dicto burgo y los de la dicta poblacion, estableciéndose en una de ellas la transformación de ambas comunidades municipales en vn cuerpo et vna communitat et vniuersitat (222); así, parece apreciarse, también ahora, la referencia a nociones de carácter colectivo, junto a la enumeración de cargos y oficios municipales de representación, en la medida en que la representación lo es de la comunidad y ésta actúa, ejerce y se obliga por medio de aquéllos; en cualquier caso, la configuración de las nociones comunitarias queda, necesariamente, cualificada por las relaciones fácticas, tal como se desprende del hecho de que el texto se dirija a las colectividades municipales comunitariamente consideradas, y la normativa concreta se destine subjetivamente a los de la población y el burgo; por

(219) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 266-271.

(220) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 210.

(221) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 266.

(222) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 269.

Último, la reducción de ambas comunidades a una sola, supuso trasladar al ámbito de las relaciones personales, consideradas desde la unidad derivada de la participación en unos mismos intereses surgidos de la convivencia, la unidad que tradicionalmente había existido en la realización de tareas ejecutivas entre ambas comunidades; persistiendo, sin embargo, una cierta autonomía municipal, confirmada en la distinción de dos términos municipales independientes.

3. En lo que se refiere al empleo de nociones personales de posible caracterización jurídica, tres son los términos que, nuevamente en este grupo de textos, pueden analizarse: vecino, súbdito y natural.

El término vecino, esencialmente, se utiliza: primero, para realizar concretas alusiones a la condición personal de pertenencia a una comunidad municipal; y, segundo, para concretar las garantías que de esa pertenencia se derivan en el momento de asegurar una actuación individual correcta y conforme a los intereses colectivos en aquellos supuestos en que éstos, de una u otra forma, queden implicados.

En el primer supuesto se incluirá la referencia contenida en el texto en que Sancho el Fuerte y el Obispo de Pamplona, el 28 de julio de 1222, restablecen la paz entre el Burgo de San Cernin, de una parte, y la Población de San Nicolás, la Navarrería y el Burgo de San Miguel, de otra (223); en efecto, se fija la obligación del juramento de la paz entre los hombres de los cuatro barrios mediante nociones personales de hecho y se establece que semejante obligación vinculará, igualmente, a quien desee establecerse (commorari) en cualquiera de ellos, fijándose, por otro lado, para quien no observase la paz acordada, la pena, entre otras, de la expulsión de la vecindad (...et omnibus qui uellent in supradictis villis commorari facerent similiter fideliter observari. Et si quis forte supradictarum partium predicto modo pacem observare nonluerit, omnes se iuuent pariter bona fide, sine fraude et malo ingenio, ad ipsum de vicinia expellendum et penites desolandum (224)); De tal ma-

(223) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 144-145.

(224) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 145.

nera que esa vecindad no puede sino identificarse con la comunidad conformada en cada uno de los barrios, y cuyos miembros, considerados siempre como tales conforme a criterios fácticos de incorporación, quedaban sometidos a la obligación de observar la paz acordada, precisamente en razón a su misma pertenencia a la comunidad. En idénticos términos puede ser considerada la terminología empleada en la declaración que dos monjes de Iranzu realizaron el 30 de abril de 1258 sobre el juramento que ellos, y otros muchos, debieron prestar en el Burgo de San Cernín de la paz acordada en 1222 entre los cuatro barrios pamploneses (225); pues, al hacer alusión a los entonces obligados al juramento, cuyo acto de prestación ellos contemplaron en algún caso, se habla de vezins del borc (226). Asimismo, la razón de identificación de una persona como miembro de una comunidad (ya se trate de uno de los cuatro barrios pamploneses, o de la ciudad de Pamplona unitariamente considerada) se manifiesta nuevamente en el texto de delimitación de los términos del Burgo de San Saturnino y la Población de San Nicolás, realizada el 8 de mayo de 1408 por el rey Carlos III, al citarse una viña mediante referencia nominal a su propietario, e identificarse comunitariamente a éste por su condición de vezino de Pomplona (227).

En relación al segundo supuesto ha de ser destacado el texto de 20 de diciembre de 1390 en que el rey Carlos III, para solventar las diferencias y enfrentamientos entre el Burgo de San Saturnino y la Población de San Nicolás, dicta ordenanzas para el régimen de ambas comunidades, declarando su unidad en una misma universidad; pues, en efecto, la caracterización de los procuradores encargados de conocer y recibir del rey el texto de las citadas ordenanzas, queda establecida en torno a su condición de vezinos del dicto burgo y vecinos de la dicta población, respectivamente (228).

(225) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 175-176.

(226) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 176.

(227) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 271-275.

(228) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 266-271.

Para finalizar el análisis correspondiente al empleo de esta noción, sólo resaltar aquellos supuestos en que ésta aparece junto a cierta terminología personal de carácter, evidentemente, fáctico delimitando el ámbito subjetivo de aplicación de las normas incorporadas por el correspondiente texto. Así, cuando el 20 de Julio de 1334 los jurados y concejos de San Saturnino y San Nicolás confirman, en su tradicional encuentro en la iglesia de San Nicolás, el procedimiento de renovación anual, el día de Santa Magdalena, de las treguas entre ambos barrios hacen alusión a éstas mediante la fórmula: totes les tregoes que son entre vezins et abitantz; y, a lo largo del texto, otras referencias de carácter personal utilizan expresiones como: vezins o abitantz, totz les vezins et les abitantz, etc. (229). Y lo mismo se confirma al comprobar que el texto en que Felipe de Melun concede, el 14 de julio de 1342, su protección personal a la Navarrería se dirige textualmente a: todos los vecinos, habitantes et pobladores qui son o seran por tiempo en la dicta ciudat de la Nauarrería de Pomplona (230). De manera tal que, como ya ha habido oportunidad de comprobar en otros supuestos, las determinaciones directas y expresas del ámbito personal de aplicación de los textos incluyen una sucesión de términos que, al emplear sintácticamente bien conjunciones copulativas bien adversativas, obliga a considerar la más general de las nociones empleadas como determinante de la extensión subjetiva del Derecho vigente en una localidad; y, obviamente, el carácter de esa noción determinante resulta esencialmente fáctico, aludiendo a una acción personal (ya individual ya colectiva) que recae sobre un concreto territorio.

En lo que a la naturaleza de las nociones súbdito y natural se refiere, sólo puede señalarse que el empleo conjunto de ambos términos, en dos de los tres textos que lo emplean (231), parece reafirmar su con-

(229) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 232-234

(230) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 234-235.

(231) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2. Emplean estos términos los siguientes textos: priv. nº 57 (subditi nostri), págs. 210-211; priv. nº 85 (nuestros bien amados súbditos et naturales) pág. 266-271; y priv. nº 86 (nuestros súbditos et naturales), págs. 271-275.

figuración como nociones muy cercanas. Y el contenido material de las fórmulas en que ambos términos aparecen incluidos, induce a defender su referencia a situaciones de vinculación personal con el monarca; situaciones que, en estos casos, parecen derivar, a su vez, de una concreta vinculación a localidades o territorios pertenecientes al Reino de su soberanía.

3. El Fuero de Pamplona.

1. Como ya se ha indicado en otro lugar, el Fuero de Pamplona no fue sino la redacción navarra del Fuero de Jaca; y en cuanto Derecho navarro nunca quedó incorporado a un texto de otorgamiento directo. En este sentido, las versiones pamplonesas del texto jacetano no delimitan, ni personal ni espacialmente, su ámbito de aplicación. Y ello no resulta irrelevante si se toma, nuevamente, en consideración el fraccionamiento territorial que caracterizó a la ciudad de Pamplona en aquel momento, y el diverso status que sus habitantes disfrutaron; de tal manera que cualquier referencia local o personal recogida en el texto ha de someterse, necesariamente, a una reinterpretación a la luz del contenido y extensión fijados en el correspondiente documento de concesión.

Así, en el exámen e interpretación de la terminología empleada en el Fuero han de tenerse presentes los resultados obtenidos en el análisis ya realizado de los textos de privilegios y concesiones otorgados a Pamplona en el período considerado y que tienden a la conclusión de que los criterios determinantes del núcleo personal de aplicación del Derecho Local Pamplonés de entonces queda, fundamentalmente, caracterizado por notas fácticas.

2. Dependiendo del contenido material de cada uno de los cinco Libros de que consta el Fuero (primero "De la fidelitat deuïda al seynnor rey et de les coses que pertaynnen a Deus et a la glesia", segundo "Del dreyt de marit et muyller et dels parenz et dels filz", tercero "De contrast, de alienamenyz et de conquestes o de bezinales", cuarto "Dels mals faitz et dels mals faytors e de les penes d'eles", y

quinto "De les coses neccessaries en judici e de coses semellantes a estas") (232) las referencias personales se diversifican en el empleo de diferente terminología alusiva al status de que la persona goza, ya sea en virtud de su vinculación a hechos y circunstancias de relevancia para el Derecho establecido por el texto o de su participación en una concreta relación jurídica. En efecto, junto a las referencias personales, ya analizadas e interpretadas en otras ocasiones, mediante nociones genéricas (233), abstractas e indeterminadas (234), ahora aparecen, en segundo lugar, alusiones a los estados jurídicos derivados de la situación personal de dependencia o independencia (235). En tercer lugar, puede apreciarse el empleo de referencias personales relativas a la pertenencia a una u otra religión (236) en la medida en que de ella se hacía de

(232) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág 89.

(233) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 289, 291, 292, 296, 297, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 311, 314-327, 329, 330, 333-335, 337-340, 342, 343, 346, 348, 350-360, 362-366, 368, 369, 371, 374, 376-378, 382, 383, 385, 387, 388, 390-392, 394, 395, 398, 402, 403, 406-408, 410-413, 416-424, 427-435, 437-442, 444, 447, 450, 451, 453, 454, 456-459, 462, 463, 466-470, 472-476, 478, 483, 485, 486, 488-494, 497, 504, 505, 508, 514-516, 518-522.

(234) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 331, 339, 341, 344, 347, 354, 361, 367, 372-375, 377, 378, 380-383, 386-389, 393-397, 400, 401, 403, 409, 411-413, 416, 418, 421, 423, 434, 438, 439, 444, 447, 448, 454, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 479, 481, 488, 518, 521.

(235) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 298, 299, 312, 362, 373, 490, 506, 519.

(236) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 299-303, 380, 385-387, 393, 394, 415, 456, 460, 465, 467, 468, 486, 497.

penden la posesión de un concreto estatuto social y jurídico; en esta misma línea, resulta de importancia la consideración de la terminología personal relativa a la pertenencia a una concreta clase social, y la inclusión en alguna de las específicas subclases en ella integradas (237). También, en cuarto lugar, pueden comprobarse las variantes jurídicas establecidas por el texto como base en la incorporación o no al estado religioso (238). Un quinto grupo de referencias personales terminológicas incluiría las relativas a la posición ocupada en el seno de la familia, en cuanto origen de paralelas posiciones jurídicas diversas (239). En sexto lugar podrían analizarse las alusiones a las situaciones jurídicas derivadas del desempeño de una concreta actividad, así como del ejercicio de un determinado oficio o cargo de carácter público (240). En séptimo lugar, se constituiría el grupo integrado por los términos personales utilizados para designar la concreta posición ocupada por un individuo en una actuación o relación de carácter jurídico, ya pública ya privada (241); así como la situación en que alguien puede colocarse

-
- (237) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 288-298, 300-306, 308, 309, 311, 313, 314, 319, 325, 334, 348, 350-352, 356, 359, 362-364, 366, 371, 373, 375-377, 379, 380, 390, 392, 394, 399, 402, 408, 409, 413, 424-427, 429, 444, 446, 453, 466-468, 470, 473, 474, 485, 487, 514.
- (238) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 300, 325, 333.
- (239) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 297, 307-313, 315-327, 333, 344-349, 373-376, 379, 398, 416, 418, 427, 432, 433, 459, 472, 478, 486, 487, 491, 500, 504-507, 515, 516, 518.
- (240) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 301, 337-341, 371, 384, 385, 390, 405-407, 410, 411, 413-415, 417, 426, 434, 449, 454, 457, 462, 466, 470, 472-477, 479-482, 484, 485, 491-497, 499-501, 504, 506, 508, 509, 515, 516, 518, 520.
- (241) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 333, 337, 347, 371, 384, 385, 390, 405-410, 412-418, 420-422, 427, 429-431, 434, 435, 438-443, 447, 462, 466, 469-471, 473, 475, 476, 480, 491, 495-497, 500-503, 509, 513-515, 519, 521.

frente a la comunidad y su ordenamiento, bien en virtud de la responsabilidad personal que su actuación entraña bien a causa de las obligaciones y responsabilidades derivadas de su concreta condición (por ejemplo, la condición de propietario) (242). Finalmente, y en octavo lugar, se considerarían aquellas nociones personales directamente vinculadas a la consideración del territorio, bien por referencia al carácter propio de la localidad a que se pertenece bien por alusión a la existencia misma de tal pertenencia (243).

Sin embargo, resulta especialmente relevante comprobar la ausencia, en términos absolutos, de cualquier noción personal de hecho que, aludiendo concretamente a una vinculación territorial, incluya, simultáneamente, referencia terminológica a algún tipo de consideración definidora de la forma y carácter de esas concretas vinculación y pertenencia personales al territorio. Con esto se pretende hacer alusión, precisamente, a aquel tipo de terminología, tan reiteradamente empleada en los textos hasta aquí analizados, que aludía, por un lado, al acto mismo de la ocupación del territorio y, por otro, al establecimiento e integración en la comunidad local constituida en base a ella y organizada en torno a las concesiones normativas realizadas (poblador, habitador, habitante, morador). No resultaría ni lógica ni coherente la interpretación del texto sobre la exclusión de tal terminología, sobre todo si se tiene en cuenta que ya se constató su empleo, de forma prioritaria, a la hora de determinar el ámbito personal de aplicación de su contenido, por los textos pamploneses de concesiones y privilegios. Habrá, pues, de entenderse que si no aparecen nociones personales de hecho referidas al citado tipo de vinculación con el territorio se debe, precisamente, a que el texto del Fuero no fija su ámbito personal de aplicación.

(242) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 341-343, 363-365, 389, 391-394, 397, 402, 403, 417, 426, 428, 430, 434-438, 441, 445, 447, 448, 458, 470, 472-475, 479, 480, 484, 485, 499, 505, 507-509, 515, 516, 520, 521.

(243) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 293, 330, 332, 362, 367, 371, 373, 375, 376, 379, 395, 484, 515.

3. En lo relativo al empleo de nociones personales que, alejándose en principio de una pura caracterización fáctica, pudiesen precisar ciertas definición y delimitación jurídicas, el Fuero recoge los términos vecino y natural.

La incorporación de la noción de vecino hace referencia, también en este caso, a tres situaciones personales incluidas en una misma realidad colectiva. En efecto, el texto alude a los vecinos, en primer lugar, al tomar en consideración la pertenencia a una comunidad local (244). Y, por referencia a esta realidad comunitaria, emplea, en segundo lugar, la noción al aludir a los miembros de esa colectividad en cuanto parte en una relación con relevancia jurídica surgida de la propia participación en la vida comunitaria (245). En tercer y último lugar, el texto alude a esta misma situación, considerando en este caso, la integración personal en la comunidad como garantía mínima de la realización de los intereses y valores generales: e incorpora, pues, la noción en la exigencia de que la condición de miembro de la comunidad concurra en el individuo que asume la posición de garante en ciertas actuaciones de carácter jurídico, especialmente procesal y obligacional (246).

En un intento de hacer derivar de la normativa contenida en el Fuero el contenido y carácter de la institución de vecino, son varios los preceptos que, sin recoger definición alguna de aquélla ni expresa referencia a su posible régimen jurídico, pueden colaborar a su delimitación conceptual.

En efecto, el Fuero recoge una norma muy similar a algunas incorporadas por otros textos, cuya estructura sintáctica y gramatical ha servido de apoyo a parte de la doctrina (247), como ya se ha indicado con anterioridad, para defender el carácter autónomo y estrictamente jurídico de la noción, así como para establecer su definición en torno a la residencia cualificada por el transcurso de un periodo de tiempo mí-

(244) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 293, 362, 367, 471, 477, 515, 520.

(245) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 335, 363, 365, 410, 425, 520.

(246) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, págs. 500 y 519.

(247) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 51.

nimo (en este supuesto, año y día):

Texto incorporado a la redacción en versiones correspondientes a los siglos XIV, XVI y XVIII: --

"For antic et laudat es que si un omne se muda de una uilla ad altra per estage, no es tengut de pagar res en taylla ni en questa de rey nin d'altre ome si no estat an et dia en la uilla. Pero non se deu nin pot escusar d'anar en ost o en caualgada -- quant ses uezins yran que no y uaya".

Texto incorporado a la redacción versión correspondiente al siglo

XIV: "Lo uieill for d'Aragon, -- que es laudat, a mandat que cant algun ome se muda d'una vila ad altra per estar, entroa que aya estat un an et l dia no es tengut de dar res en eyta ni en questa de rei ni d'altre seynnor. Pero entre tant non se pot escusar de ost ni de caualgada que non y uaya ab ses uezins." (248)

Así, ha podido mantenerse que la vecindad suponía la residencia por año y día, y que, consiguientemente, el vecino era un residente cualificado. Pero, sin embargo, en estricta interpretación del texto transcrito, sólo puede afirmarse que la exención tributaria durante ese tiempo existía, posiblemente para favorecer el asentamiento y arraigo, sin que resulte posible ir más allá condicionando la existencia de un concreto status comunitario; especialmente si se toma en consideración el carácter de estabilidad e inatacabilidad que, tradicionalmente en el Derecho de Jaca, confería a una situación jurídica el transcurso de un año y un día. Por otra parte, al establecerse, en el último párrafo de la norma, una excepción, relativa al cumplimiento de la obligación de prestaciones personales de carácter militar, a la exención general establecida, el texto emplea la expresión ses uezins al aludir a la equiparación de status de tal manera que la utilización del adjetivo posesivo obliga, sintácticamente, a considerar que, aún sin transcurrir el tiempo fijado, el estager o residente establecido formaba parte de la comunidad vecinal.

Ahonda en esta interpretación la consideración de otro precepto del texto y, sobre todo, la comparación de la terminología empleada en el mismo, en una u otra de las versiones del Fuero analizadas:

(248) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 363.

Texto incorporado a la redacción en versiones correspondientes a los siglos XIV, XVI y XVIII: --

"Moltes uez auen que omne que no es hereder nin estager de uilla o de castel or hy a dones infançones, uol peynorar en aquela uilla. Et per ço qu'i uoldra peynorar faga-les primer as-saber - que con l'aytorgament d'eles puyra segurament peynorar. Et si non les fa as-saber et peynora - sens lur uolontat, per for et -- tengut de darles LX soz de calonia."

Texto incorporado a la redacción en versión correspondiente al siglo XIV: "Si omne que non es --

ereder o uezin del logar, uol -- peynorar en uilla o en castel or dones y a infançones, primera- - ment les faga assaber, et ab lur oltreyament peynnoria. Mays si sens lur mandament peynora, perfor, LX soltz les deu de calonia." (249).

Puede apreciarse, pues, cómo la necesaria identificación del núcleo personal de aplicación del precepto en una y otra redacción conlleva la asimilación de los términos estager y uezin, siendo precisa la caracterización de la noción de vecino en torno a los criterios fácticos (establecimiento-residencia) configuradores de la de estager. El uso indistinto, y en este sentido materialmente asimilable, de las nociones queda igualmente de manifiesto al comprobar que, paradójicamente, la versión del precepto en las redacciones de los siglos XIV, XVI y XVIII presenta una titulación que incluye el término vecino: "D'om qui no es uezin et uol peynorar en altruy uilla".

En idéntico sentido, merecen destacarse la apreciación y comparación, en las diversas redacciones del Fuero, de un precepto relativo a la obligación colectiva, presente en el Derecho Penal Local de la época, de entrega del homicida a las correspondientes autoridades reales:

Texto incorporado a la redacción en versiones correspondientes a los siglos XIV, XVI y XVIII: --

"Si algun es mort en uilla o en castel o en lur terminat, si los omnes del logar or sera mort non prenen l'omizidier, et lo leuen al bayle del rey diz (X) dies, - d'aquí adeuant tenguz son de donar l'omizidi al rey".

Texto incorporado a la redacción en versión correspondiente al siglo XIV: "Si algun es mort en --

la villa o el castel o en lur terminat, si les omnes del logar or sera mort non prenen a l'omeçier et non lo liuran al bayle del -- rey antz de X dies, d'aquí en -- auant tenutz son de donar homeci di al rey." (250).

(249) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 446.

(250) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 375.

En efecto, ambos textos emplean nociones personales de hecho (configuradas sobre términos personales genéricos con concreción de carácter territorial) para aludir al colectivo vinculado por la obligación establecida, si bien al tratarse de una obligación específicamente municipal, ha de considerarse que la referencia a los hombres del lugar implica la lógica alusión a la comunidad municipal. Por otra parte, y como ya se puso de relieve al analizar el precepto anteriormente considerado, la terminología personal empleada en el encabezamiento o titulación de la norma en la redacción incorporada a textos de los siglos XIV, XVI y XVIII ("Dels uezins que non prenen l'omizier") induce a afirmar la cercanía y similitud conceptuales entre las nociones hombres de y vecinos.

Así, y en base a los datos hasta aquí expuestos, puede concluirse que, en la medida en que las nociones personales consideradas (estager, vecino, hombre de) asumen la referencia a un mismo y único colectivo humano, todas ellas participan de una misma caracterización conceptual, que únicamente puede sustentarse sobre criterios fácticos de vinculación al territorio en cuanto localidad organizada.

Por último, cuando el Fuero castiga con la pérdida de la vecindad al perjurio probado ("De omne periurat prouat, les omnes de la uila lo deuen gitar de uezintat,...") (251), ha de interpretarse la noción conforme a criterios de hecho. Así, en la medida en que no parece lógico considerar que pueda decidir y ejecutar la privación de la condición de vecino quien carezca de ella, ha de entenderse que los hombres de la villa son vecinos de la villa y que, por tanto, la noción de vecindad habrá de ser considerada en conformidad a los mismos criterios fácticos que configuran la noción de hombre de. De tal manera que la privación de la vecindad no supondría sino la expulsión de la comunidad de moradores. Y son precisamente los hombres de la villa quienes han de proceder a su ejecución, en la medida en que se trata de una pena de origen comunitario y son ellos quienes integran la comunidad.

(251) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 515.

Solamente en una ocasión, y en una versión del Fuero correspondiente a una redacción del año 1330, aparece recogida en el texto la noción de natural del Reino (252); tratándose en concreto, de una norma de Derecho Penal que establecía una pena especial para el natural que comete homicidio, salvo que concurra un supuesto de defensa propia, dentro del término de las dos leguas de distancia del lugar en que morase el Rey, la Reina, el infante, o el Gobernador de Navarra. El empleo de la noción queda justificado, por un lado, en virtud de la vinculación personal que la naturaleza supone entre cada súbdito-natural y su señor-natural, y, por otro, en razón al propio carácter del agravante contemplado: la cercanía de la presencia física del señor y la consideración del margen del respeto a él debido.

VI. EL FUERO DE TUDELA.

1. Para finalizar el análisis del Derecho Local Navarro correspondiente al período considerado, resulta de interés el examen del texto, quizá, más representativo entre aquéllos de origen jurídico diverso al jacetano. En efecto, y como ya se destacó en la consideración de los textos de Derecho Local Altomedieval, fue Alfonso I el Batallador quien concedió hacia los inicios del siglo XII los Fueros de Sobrarbe a omnibus populatoribus in Tudela, et habitantibus in ea, ac etiam in Cervera, et Gallipienzo (253). Y el mismo monarca otorgó concesión y confirmación de fueros a Tudela en 1127, concediendo, entre otros, el privilegio de "Tortum per tortum" a totos populos qui estis populos in Totela, et á quantos veneritis in ea populare (254). Se trata, pues, de concesiones que delimitan, nuevamente, el ámbito subjetivo de aplicación de su Derecho mediante el empleo de términos personales de hecho configurados en torno a la vinculación a un concreto territorio; el se-

(252) J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2, pág. 517.

(253) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 418, 419.

(254) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 420-422.

gundo de los textos mencionados incorpora la noción de vecino en una ocasión, con clara significación relacional (contra suum vicinum) (255), y recoge, como otros textos ya analizados de la misma época, el término vicinalmente al regular el necesario planteamiento y conocimiento de los litigios entre los miembros de la comunidad de Tudela en el seno de la misma y ante quien en ella tenía conferido el poder jurisdiccional correspondiente (256).

Ahora, en el año 1330, se procede a la modificación de los Fueros de Tudela. El texto recoge la petición que, acordada en reunión de concejo (plegados á concello), es dirigida al monarca navarro por las autoridades, los representantes y el propio concejo (el concello de Tudela) de la villa de Tudela para que proceda al otorgamiento de ciertos privilegios y concreta normativa (257); de esta manera puede apreciarse un doble empleo, ya destacado en su vertiente material en otras ocasiones, del término concejo: por una parte, alude a la colectividad municipal en referencias globales, y, por otra, designa el órgano asambleario de decisión municipal integrado por los miembros de la comunidad local. Y así, halla explicación el hecho de que se utilice el término en el primero de los sentidos considerados otorgándole una calificación de referencia personal e individual a la Corona: humildes vasallos (258); efectivamente, la consideración del concejo de la villa como pueblo de Tudela, constituido en cuanto tal por individuos vinculados por su pertenencia a una misma comunidad local, hace posible el otorgamiento a la colectividad de una cualidad personal que recae sobre todos y cada uno de sus miembros, precisamente por serlo.

Al configurar la estructura orgánica de los oficios municipales, ya representativos, ejecutivos o judiciales, así como los procedimientos de elección y designación de los mismos, el texto exige que el alcalde sea persona suficiente vecino de la villa (259), que los jurados

(255) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 421.

(256) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 421.

(257) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 423-426.

(258) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 423.

(259) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 423.

sean de los mejores é de los mas sábios hombres de la villa (260), que los bailes de los términos de Tudela sean hombres buenos é raigados (261) y que los consejeros de los jurados sean de los mellores é mas sabios hombres de la villa (262). Así, se fijan dos tipos de requisitos: por una parte, los relativos a la calidad moral y personal de los elegidos, y, por otra, los referidos a su pertenencia e integración en la comunidad; pertenencia e integración que quedan, terminologicamente, aludidas en referencias de diverso carácter: dos meramente personales (vecino de la villa, hombre de la villa), y una de carácter patrimonial (raigado).

Tampoco en este caso la normativa del texto aporta datos o base que posibiliten la elaboración de un cierto concepto de vecino; pues en el caso mencionado más arriba, podría interpretarse, no sin fundamento, por comparación de los requisitos exigibles para el desempeño de cargo municipal en los demás supuestos, que la referencia a la condición de vecino no supone sino la alusión a quien estuviese, de hecho, integrado por la población, en la comunidad local. Por otra parte, la noción es empleada, precisamente para manifestar la garantía que se desprende de tal situación de integración, en la identificación de los testigos firmantes del documento que recoge el texto.

2. Por último, cuando dos preceptos de esta modificación de los Fueros de Tudela incorporan la noción de vecindat, y en la medida en que se carece de elementos que permitan la delimitación positiva de la noción, habrá de entenderse que, en principio, el término hace referencia, en este texto como en otros donde su configuración conceptual es más clara, al conjunto de obligaciones tributarias de carácter municipal que afectaban a la población del término:

(260) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 424.

(261) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 424.

(262) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 424.

"Item place al seinnor rey que todo vecino ó morador en Tudela, cristiano, que fará vecindat, ó vivirá en servicio de otro vecino ó morador por soldada, é por si morará haciendo vecindat, qui matará uno á otro, que muera;..." (263).

"Item si algun vecino ó morador de los sobredichos matara á otro que non sea vecino ó morador en Tudela, que non muera por razon del dicho paramiento, mas que sea punido segun sus feitos por el fuero, uso é costumbre de Tudela antiguament observado. ..." (264).

Efectivamente, y puesto que, aún en el supuesto de que alguna diferencia material pudiese establecerse entre la noción de vecino y la de morador, los dos preceptos fijan una misma consecuencia jurídica a un mismo supuesto de hecho tanto si el sujeto es vecino como si es morador, habrá de entenderse que en el primero de los preceptos la exigencia de hacer vecindad se dirige por igual al sujeto-vecino y al sujeto-morador. Y, en este sentido, resultaría incoherente con la letra del texto interpretar que el término vecindad alude a la condición personal del vecino o que ésta depende de la concurrencia de aquélla.

(263) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, págs. 425-426.

(264) T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección, t. I, pág. 426.

Capítulo III

EL DERECHO LOCAL DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA

I. INTRODUCCION.

1. Parte del territorio catalán, el que se conocería como la Cataluña Vieja, se separó tempranamente del dominio islámico, incorporándose políticamente a la Corona Franca (1). Esta incorporación supuso la plena aplicación en este territorio del principio de la personalidad de las leyes, vigente entre los francos (2). Sin embargo, la consideración de este principio jurídico ha de someterse, en todo caso, a la matización que sobre él provoca el criterio territorialista; pues si bien el principio personalista permitía que cada población se rigiese por su propio Derecho, éste se vinculaba espacialmente al lugar de población. Así, en el supuesto examinado, el Liber Iudiciorum se convertiría en el Derecho Local Personal de la población de la Cataluña Vieja (3).

El progresivo debilitamiento de la subordinación de este territorio al poder franco desembocó, un siglo después, en la independencia de

-
- (1) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 154; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 18-19; A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (Atti del Convegno di Varenna - 12, 15 giugno 1979 -), Milano, 1980, págs. 230-231.
- (2) E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, pág. 19; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho Histórico, 1982, págs. 154-155.
- (3) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 154; A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (Atti del Convegno di Varena - 12, 15 giugno 1979), Milano, 1980, págs. 230-233; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 126-127 y 158; Y en particular A. IGLESIAS FERREIROS, "La creación del Derecho en Cataluña, AHDE, 47, (1977), págs. 99-113.

los Condados Catalanes (4). El Derecho Público Franco deja de aplicarse, y los Condes han de proceder a su sustitución legislando en las Asambleas de Paz y Tregua (5). El aumento de la autoridad del Conde de Barcelona frente a la de los soberanos de los demás Condados, provocó su supremacía en lo que a la legislación jurídico-pública se refiere. Por otra parte, la realidad socio-política derivada de este proceso hacía urgente proceder a completar y matizar el contenido normativo del Liber Iudiciorum; por ello, se realizaron concesiones locales privilegiadas que, respondiendo a un sistema feudalizado, actuaban como Derecho Especial derogatorio parcialmente del ordenamiento jurídico general (el Liber Iudiciorum) (6).

El Derecho Local privilegiado surgido de esta evolución, se separa profundamente de los rasgos caracterizadores del Derecho Local vigente en aquel momento en otros territorios peninsulares (7), y ello por responder, obviamente, a necesidades y realidades diversas. En este momento el Derecho Local de Barcelona, contenido especialmente en el cuerpo de los "Usatges", comienza un proceso de firme e ininterrumpida extensión territorial (de carácter paralelo al experimentado por el poder político del Condado Barcelonés) que conduciría a su consolidación a me

(4) F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, pág. 158; A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (atti del Convegno di Varenna - 12, 15 de giugno 1979), Milano, 1980, pág. 231.

(5) E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, pág. 155.

(6) E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 20-21; E. GACTO FERNANDEZ et al., El Derecho histórico, 1982, págs. 155-156; A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (atti del Convegno di Varenna - 12, 15 de giugno 1979 -), Milano, 1980, págs. 232-233.

(7) A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (atti del Convegno di Varenna - 12, 15 de giugno 1979 -), Milano, 1980, pág. 235.

diados del siglo XIII como Derecho General del Principado (8).

2. Cuando comienzan las campañas reconquistadoras del resto del territorio catalán (la Cataluña Nueva), el panorama político, social y jurídico del Principado se ve alterado (9). En el momento de su conquista la Cataluña Nueva no responde a una configuración jurídica acorde con el Liber Iudiciorum, la influencia goda es inexistente, y su desarrollo social y económico dista mucho de cualquier intento feudalizante (10). La conquista de Tortosa en 1148 y la de Lérida un año después abren un proceso de evolución jurídica que supondrá que el Principado entre en la Baja Edad Media en un clima de profundo reajuste legal.

Los caracteres de la Cataluña Vieja, en torno a un Derecho influido por la tradición visigótica y la estructura feudal, por un lado; y los componentes jurídicos normativos del Derecho de la Cataluña Nueva, consolidados sobre costumbres y usos locales cercanos a los desarrollados en los demás territorios de los Reinos Peninsulares, por otro; retardaron la elaboración y desarrollo de los textos jurídico-locales extensos (11). Estos siguieron, por razón de simultaneidad, un proceso

(8) E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 22-25; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, págs. 158-159, 213.

(9) A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (Atti del Convegno di Varenna - 12, 15 giugno 1979 -), Milano, 1980, pág. 233.

(10) A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (Atti del Convegno di Varenna - 12, 15 giugno 1979 -), Milano, 1980, págs. 234-237.

(11) A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa (Atti del Convegno di Varenna - 12, 15 giugno 1979 -), Milano, 1980, pág. 237; F. TOMAS Y VALIENTE, Manual, 1981, págs. 214-217; E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1979, págs. 104-105.

de formación paralelo al del Derecho General del Principado, evitándose su oposición y contradicción materiales y asumiendo una clara influencia del Derecho Romano Canónico, porfundamente implantado ya en el Principado en aquel momento (12).

II. LAS CARTAS DE POBLACION Y FRANQUICIA.

1. Los textos no extensos de Derecho Local Catalán correspondientes a este período, participan de ciertas notas fundamentales, ya constatadas y analizadas en los cuerpos legales coetáneos de otros territorios. Sin embargo, las especificidades históricas que política y estructuralmente caracterizaron la evolución medieval del Principado, marcaron singularmente su trayectoria jurídica.

Así, pueden destacarse dos factores diferenciadores concurrentes en la formación jurídica catalana de la Baja Edad Media. En efecto, la influencia de la estructura feudal sobre la organización social y política de parte del territorio, así como la pronta y profunda recepción del Derecho Común en el Principado, condicionaron el contenido y formulación de las concesiones; provocando, por un lado, la polarizada atención de los textos hacia la ordenación de la tierra, y, por otro, la no incorporación por los mismos de un contenido jurídico materialmente original y completo.

En este momento, en la medida en que la conquista territorial se va completando y, por consiguiente, los intereses militares y meramente reconquistadores van dejando de ser prioridades condicionantes de la concesión y contenido de los textos de Derecho Local, se atiende especialmente a la ordenación y cobertura de los poderes feudales y a la organización y consolidación de las comunidades urbanas y rurales nacidas del proceso territorial precedente; instrumentándose, de esta manera y en esta doble dirección, el régimen de creación y aplicación del Derecho Local.

(12) A. GARCIA GALLO, "El Derecho Local y el Común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en *Diritto Comune e Diritto Locali nelle Storia dell'Europa* (Atti del Convegno di Varenna - 12, 15 giugno 1979), Milano, 1980, págs. 229-249.

2. En el marco de semejante realidad histórica, la labor de localización y selección de los materiales empleados es tributaria de la investigación en esta línea realizada por el Prof. J.M. Font Rius (13) y de los criterios por él establecidos al optar por una conceptualización amplia de los textos breves de Derecho Local Catalán durante la Edad Media, y que le conducen a incluir y considerar, con carácter general, "los instrumentos otorgados por el soberano o titular de un señorío jurisdiccional, y aún dominical, con objeto de fomentar la población de un lugar o la permanencia de su núcleo morador, mediante la fijación de las condiciones básicas de tenencia del suelo y de residencia en aquél, y en su caso, de las normas elementales para encauzar la vida de la nueva comunidad vecinal" (14).

En este sentido, podría procederse a la calificación, clasificación y selección de los textos correspondientes atendiendo a criterios diversos (15). Así, podría establecerse un orden meramente cronológico, que beneficiase el análisis de la trayectoria jurídico-local medieval de Cataluña. Podría, igualmente, atenderse a la calificación de su naturaleza jurídica, o al análisis de su estructura y contenido. Podría, quizá, considerarse preferentemente el destino y finalidad a que los textos responden, y de esta manera distinguir, por ejemplo, entre los

(13) El Prof. J.M. Font Rius ha realizado, en esta materia, una inmejorable labor de investigación, con dedicación de muchos de los años de su dilatada carrera docente e investigadora; labor marcada por la exhaustividad y rigor en la localización y manejo de materiales, y por la profundidad científica en el análisis.

J.M. FONT RIUS, "Chartes de peuplement et de franchises de la Catalogne" en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 5-10; J.M. FONT RIUS "Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella", en la obra citada, págs. 11-34; J.M. FONT RIUS, "Franquicias locales en la comarca del Alt Berguedà (Pirineo Catalán)", en la obra citada, págs. 35-54; J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, Madrid-Barcelona, 1969 y Cartas de Población y Franquicias de Cataluña II, Madrid-Barcelona, 1983.

(14) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, pág. XI.

(15) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, Introducción, págs. IX-XLIII; J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II, págs. 155-457.

dirigidos a una comunidad local ya constituida, los concedidos individualmente y aquéllos que se destinan a una comunidad en formación, precisamente por serlo; resultando, en este caso, necesario fijar la función concreta de la concesión y los motivos que la provocaron. Pero, en cualquier caso y a efectos de la investigación que nos ocupa, ninguna de las posibilidades indicadas presenta un destacado interés y una clara conveniencia metodológica sobre las demás.

Por ello, y en la medida en que se pretende establecer cuál fuese el núcleo personal de aplicación del Derecho Local Catalán durante la Baja Edad Media y concretar los criterios definidores de tal vinculación, se ha optado por el análisis general de las nociones determinantes de la extensión personal del Derecho y por el examen e interpretación preferente de aquellos textos que pudiesen incorporar elementos de juicio relevantes.

1. Nociones de hecho.

1. Se ha venido considerando, en análisis precedentes, como nociones personales de hecho o nociones personales fácticas las incorporadas por cierta terminología textualmente alusiva, con mayor o menor precisión y matización, al hecho de la vinculación de la persona a un territorio mediante su ocupación. Y, avanzando en la consideración de las nociones empleadas, se han matizado los conceptos en base a los factores de arraigo e integración.

La riqueza de los materiales ahora analizados radica en la variedad y singularidad que, con respecto a los ya considerados, aportan los textos catalanes de este período. Y ello aumenta el interés de la investigación en esta fase; en la medida en que, si los resultados hasta ahora obtenidos, sobre la caracterización esencialmente fáctica de la extensión personal del Derecho Local Medieval, se viesan nuevamente confirmados, ello supondría una garantía científica de generalidad y exactitud en las conclusiones.

También aquí, y con reiteración, se emplean nociones personales sin calificación jurídica, vistas y analizadas profusamente en otros supuestos, para delimitar el ámbito personal de aplicación de la normativa contenida en los textos.

En efecto, del examen de las fórmulas de concesión así como de las alusiones personales contenidas en la formulación de la normativa se desprende que, cualquier intento delimitador de los destinatarios del Derecho así creado, halla su fundamento en las denominadas nociones fácticas.

2. En primer lugar, se emplean términos como populatores, habitatores, habitantes o morantes. Se trata, pues, de nociones evidentemente fácticas alusivas a una misma actividad (la ocupación estable o asentamiento en un concreto núcleo territorial) y matizadas etimológicamente por referencias a determinados aspectos de esa única actividad (la población en el supuesto inicial del interés repoblador, la habitación como garantía del asentamiento en la constitución de un hogar, y la moranza en relación al establecimiento de un centro estable de vida).

De esta configuración conceptual participarían ciertos términos que aparecen ahora por primera vez y, así, constituyen el elemento de análisis más interesante en este primer grupo de nociones examinadas. Se trata de los términos estantes o stantes, y statores. Comenzando por su análisis morfológico, es preciso indicar que nos encontramos ante dos formulaciones diferentes de una misma realidad. En efecto, mientras los dos primeros términos recogidos responden a una forma verbal, participio de presente, indicadora de los que están o los que permanecen en un lugar, la tercera alude a ese mismo colectivo a través de una fórmula sustantivada.

Un segundo tipo de análisis responde a la clarificación conceptual de las nociones conforme a la función que asumen en el contenido de los textos en que aparecen. Así, cuando en la Carta de Población otorgada por el prior de San Vicente de Garraf al Valle de Porrera el 29 de agosto de 1201 (16) se recoge el término estantes, se está haciendo cla

(16) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 213, págs. 291-293.

ra referencia a los pobladores presentes de la villa del Valle; en efecto, el encabezamiento del citado texto, al determinar el núcleo personal destinatario de su contenido lo hace mediante la noción de populatores, concretando seguidamente su extensión a los pobladores presentes y futuros: vobis populatoribus de la villa de Valle Porraria et de terminis suis quem modo sunt estantibus et in antea venerint.

De igual modo, puede apreciarse esta asimilación de nociones al analizar la fórmula de concesión empleada por la Carta de Población que el 30 de julio de 1204 otorgase Bernardo de Anglesola a Golmès (17): omnibus populatoribus et habitatoribus sive statoribus ville de Golmers. La interpretación de la fórmula de concesión, necesariamente unitaria y global, obliga a la caracterización de los tres términos por ella empleados como delimitadores de un núcleo personal, definido por su relación con el territorio aludido, relación que, por su parte, se define indudablemente en torno a una vinculación fáctica. En segundo lugar, si bien es cierto que no puede concederse excesiva relevancia, en el examen de los textos medievales, a la diversa instrumentalización del lenguaje escrito; en este caso podría, simplemente, señalarse que el empleo de una conjunción copulativa entre populatoribus y habitoribus y el de una conjunción disyuntiva entre habitoribus y statoribus indica una mayor asimilación entre estos dos últimos términos, en cuanto incorporadores de una cierta referencia a la quietud tras el acto poblador de la ocupación.

Refuerza, además, esta interpretación el examen de las fórmulas empleadas en la Donación que, para poblar el lugar de Vandellós, realizaron Albert de Castellvell y Arnau de Fenollar a Ramón de Ruidoms el 20 de diciembre de 1191 (18). Resulta de interés aludir, aquí, a este texto, a pesar de su carácter altomedieval, porque, precisamente por

(17) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 218, págs. 299-301.

(18) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II, doc. 397, págs. 687-688.

responder a un acto esencialmente favorecedor de la repoblación en un momento (finales del siglo XII) en que ya se prestaba especial atención al carácter del colectivo repoblador, su examen puede ayudar a esclarecer la condición general de los destinatarios del Derecho Local. En efecto, en este supuesto, la concesión implica el encargo de establecer en el lugar populatores qui sint habitatores et statores illo predicto loco de Valdelor; y ello supone el establecimiento de ciertas garantías, que aseguren una población estable y arraigada.

Se trata, en realidad, de una exigencia constantemente repetida en los textos. La intención de establecer este tipo de garantías se lleva, efectivamente, a cabo a través de diversas vías, y del empleo de diferente terminología. En este sentido, la concesión de la Carta de Población de 13 de octubre de 1210 a Lledó por Gombaldo de Santa Oliva, obispo de Tortosa (19), se dirige a vobis omnibus habitatoribus de Ledone; y al establecer las limitaciones a la libre disposición de sus heredades por parte de los mencionados habitantes, se fija una restricción de carácter personal: sólo podrán disponer y enajenar con respecto a vestris consimilibus laboratoribus qui habitationem faciant in Ledone assidue. Tres son, por tanto, las condiciones que han de concurrir en el realizador del negocio con un habitante de Lledó sobre un bien inmueble sito en el término de la villa y perteneciente al mencionado habitor: primero, un status social de igualdad (de esa manera se protegía la soberanía del señor), segundo, la condición de trabajador (en la medida en que la concesión se hizo bajo obligación de los habitantes de fortificar la villa), y tercero, la condición de habitante asiduo. Finalmente, el texto recoge una fórmula de aceptación de la Carta por parte de los habitantes de Lledó, que se comprometen a guardar lealtad y fidelidad al obispo y a ser habitatores assidue in Ledone. Se aprecia así, la configuración fáctica del ámbito personal de aplicación de la Carta (habitatores) y su cualificación en torno a un elemento que funcione como revelador objetivo de la permanencia y arraigo en el lugar: la asiduidad en la habitación.

(19) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 232, págs. 324-325

Para finalizar, cualquier duda sobre la caracterización de los términos estantes-stantes-statores y su asimilación matizada a nociones como populatores-habitatores-morantes desaparece tras el examen de las expresiones que, contenidas en los textos, incorporan la concreción de la finalidad y compromiso a que las concesiones responden. Así, los beneficios concedidos por la Carta de Franquicias que el 21 de febrero de 1213 otorgó Pedro I a los habitantes de Salses (20) se dirigen, igualmente, a cualquier persona que llegase a la villa causa populandi et habitandi ibi; de esta manera, el compromiso e intención de poblar en Salses y establecer allí habitación condiciona la aplicación personal de las franquicias. La misma fórmula emplea, también, la Carta de Franquicias concedida el 12 de diciembre de 1233 por Nuño Sanç a los pobladores del castillo y villa de Clará (21). Con diferente expresión, pero aludiendo a la misma exigencia de permanencia, se manifiesta la Carta de Población de Uldecona concedida por Ramón de Moncada el 11 de abril de 1222 (22); en efecto, la concesión se dirige a todos los populatores de la villa, haciendo extensión expresa a los pobladores futuros mediante la fórmula: Ita ea omnia predicta et singula vobis predictis et vestris successoribus et omnibus aliis qui Uldicone venerint populari et stare, damus; nuevamente, por tanto, se condiciona la aplicación personal de la Carta al hecho de acudir a poblar y permanecer; condición que se repite en idénticos términos en la Carta de Población otorgada por Ramón de Urg a Pobla de Lillet el 13 de abril de 1297 (23). El mismo tipo de exigencia establece la Carta de Franquicias de Villa de Bagà concedida por Galcerán de Pinós el 17 de marzo de 1234 (24), al hacer extensión de su contenido a todos los que acudiesen a la villa para stare, habitare et populare.

(20) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicias de Cataluña I, doc. 237, pág. 330-333.

(21) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 261, págs. 374-377.

(22) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 242, págs. 340-342.

(23) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 361, págs. 531-535.

(24) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 262, págs. 377-380.

4. En segundo lugar, puede constatarse, también entre los textos ahora examinados, el empleo de cierta terminología genérica de carácter personal. En esta línea, la Carta de Franquicias que Ramón Berenguer de Ager y Ramón de Oller otorgasen el 26 de abril de 1212 a Vilanova de la Barca, Agullar y Castellpagès (25) aparece dirigida a vo-bis omnibus hominibus et feminabus de Zaguilar et de Castro Pagesio et omnibus illis hominibus et feminabus similiter qui habitabunt vel habituri erunt in loco illo, haciendo extensiva la concesión a todos aquellos que trajesen sus bienes y riquezas a Vilanova; seguidamente, el texto concreta la condición de estas últimas personas aludiendo a omnes habitatores predictae Ville Nove, en una ocasión, y a omnibus populatoribus predictae Ville Nove, en otra. De esta manera, el texto parece expresar la exigencia de un doble arraigo: el patrimonial y el personal, que, por otra parte, aparecerían lógicamente unidos en el caso de los pobladores-habitantes.

En este mismo sentido, resulta de interés el examen de la Carta de Franquicias otorgada por Pedro I a Salses el 21 de febrero de 1213 (26). En efecto, la concesión se dirige textualmente a los habitantes de Salses, tanto hombres como mujeres y tanto presentes como futuros; pero a continuación se amplía la fórmula de concesión mediante la referencia a las personas que acudiesen a Salses con la intención de poblar y habitar allí. De esta manera el texto realiza una ampliación genérica del ámbito personal de aplicación de la Carta, mediante la explicitación del proceso fáctico e intencional que convierte a cualquier persona en habitante. Es necesario destacar, igualmente, que a lo largo de su contenido el texto concreta su regulación refiriéndose indistintamente a habitatores castri et ville de Salsis y a homo vel femina de Salsis.

También hace uso de esta terminología, la Carta de Franquicias concedida por el mismo monarca, Pedro I, el 22 de febrero de 1213 a San

(25) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 236, págs.329-330.

(26) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 237, págs.330-333.

Lorenzo de Salancá (27), al dirigir la concesión a universos homines et feminas maiores et minores in villa et castro de Sancto Laurentino habitantes et habitaturos presentes et futuros. Así, y como puede comprobarse en el resto del texto de la concesión, vuelve a utilizarse una expresión personal genérica matizada por el establecimiento de una vinculación al territorio, en virtud de la cual surge la condición de habitator.

La Carta de Franquicias que otorgó Guillelma de Castellvell el 31 de octubre de 1208 a Martorell (28), incorpora en la fórmula de concesión nociones personales de carácter genérico matizadas por referencias al establecimiento en el territorio: homo...femina...stantes vel...venientes stare. Y el mismo tipo de formulación emplea la Carta de Población que Jaime I concede a Llívia el 12 de mayo de 1257 (29), al dirigir el otorgamiento a vobis universis et singulis hominibus de Livia, y hacer seguidamente alusión a su permanencia en el lugar mediante la expresión ibi stare et habitare.

Puede, por tanto, concluirse que el empleo de las nociones personales genéricas en la determinación del ámbito de aplicación del Derecho, participa de las notas que caracterizan el uso de nociones personales de hecho en supuestos análogos; y ello en la medida en que este tipo de terminología genérica aparece siempre territorialmente concretada. En efecto, en unas ocasiones se hace referencia a la vinculación persona-territorio mediante el empleo de la preposición de (hombres y mujeres de...); en otras, a través de la matización de la noción personal genérica por alusión a cierta actuación o situación referida al territorio (hombres que habitan, personas que pueblan, hombres habitantes, hombres stantes).

5. En tercer lugar, intentando completar las fases de análisis cubiertas en exámenes anteriores, ha de señalarse el empleo infrecuente

(27) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.238, págs.333-336.

(28) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II, doc.401, págs.692-693.

(29) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.301, pág. 441.

de alusiones personales de carácter colectivo. En efecto, es frecuente hallar en estos textos expresiones como la, ya destacada, de la Carta de Población otorgada a Llívia el 12 de mayo de 1257 por Jaime I: universis et singulis hominibus de Livia; se trata de una fórmula globalizadora de lo individual, comprensiva de todo el colectivo que integra el núcleo personal afectado por el Derecho incorporado por la Carta; pero en ningún caso puede considerarse como referencia a un grupo humano organizado en comunidad. Por el contrario, las alusiones de este tipo son escasas. Pocos textos recogen una mención que pueda resultar expresiva de la existencia de una comunidad local organizada e institucionalizada: la "Conventio inter Petrum de Berga et homines de Berga super intestia et exorquia militum et aliorum" de 14 de mayo de 1256 (30) incluye el reconocimiento de varios derechos señoriales por parte de los representantes de la comunidad de la villa para el caso, que actúan per nos et per totem universitatem ville Berge et per omnes successores nostros et successores totius universitatis; el texto, ya mencionado, de Llívia al dirigirse a universitati hominum de Livia; y el de la Carta de Franquicias concedida el 8 de noviembre de 1265 por Bernardo de Santa Eugenia a Torroella de Montgrí (31) cuando los enviados por la comunidad (que actúan como representantes ad hoc de la misma en esta ocasión) absuelven al señor de los males y violencias recibidos de él y sus predecesores: per nos et per totam universitatem populi Turricelle cuius locum habemus in loco casu.

De igual forma, puede también constatarse la ausencia de referencias comunitarias indirectas a la hora de determinar el núcleo personal de aplicación del Derecho. Efectivamente, aquellas alusiones colectivas realizadas de forma indirecta mediante referencias a representantes de la comunidad, que han sido analizadas frecuentemente en el marco de otros textos, no quedan incorporadas por los que ahora se examinan. En este sentido, las referencias a los prohomines o probihomines (32)

(30) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 439-440.

(31) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.314, págs.259-462.

(32) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 237, 238 y 320, págs. 330-336, 475-477.

son alusiones a principes inter pares en el colectivo local, pero no a representantes comunitarios.

2. Nociones personales referidas a una comunidad local.

1. Sí puede, sin embargo, destacarse el empleo de ciertas nociones personales que implican, en sí mismas, la existencia de un colectivo reunido en comunidad local, la existencia de una vida relacional derivada de la integración en el grupo.

De esta manera, ha de aludirse al uso de términos personales relativos a esta realidad colectiva. Se trata de nociones como vicinus, convicinus, conmorantes.

En efecto, la fórmula de concesión de la Carta de Población otorgada el 11 de mayo de 1252 por Bernardo de Salanova a Alcanar (33) se dirige a vobis Bernardo de Terraçola et Guillelmo de Castellaulino et Guillelmo Darocha et Berengario Martini et omnibus aliis vestris vicinis presentibus et futuri ratione poble et villa construenda atque populande. El empleo de la noción de vecino halla justificación en el propio carácter de la concesión; se trata, en efecto, y como prueba de la existencia de concesiones precedentes al mismo lugar y en similares términos, de un texto dirigido a una comunidad ya constituida. Puede hablarse, ciertamente, de vecino cuando existe una colectividad, cuyos miembros establecen, necesariamente, las relaciones propias de la unidad de intereses y convivencia; es el planteamiento de tales relaciones lo que convierte al co-poblador en vecino. Que ninguna diferencia hay entre las nociones de vecino y poblador, a no ser la intencionalidad de aludir en el primer caso a la vida en relación (derivada, por otra parte, de la actividad pobladora), queda de manifiesto en la caracterización que de los vecinos hace el propio texto; en efecto, la condición de vecino queda definida por los mismos requisitos que en cualquiera de los textos analizados han configurado el núcleo personal de aplicación

(33) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 294, págs. 431-432.

de la Carta en torno a pobladores o habitantes: ratione poble et villa construenda atque populiande. Ahondando más en este planteamiento de asimilación conceptual resulta de gran interés reproducir, aquí, la rúbrica que, al margen del texto, recoge su transcripción del siglo XIV: "Instrumentum concessionis, approbationis et franquitis populationis loci dell Canar factum populatoribus dicti loci".

Sin embargo, esta consideración puede verse cuestionada en base al contenido de algunos textos que parecen considerar al vecino como categoría conceptual autónoma con régimen jurídico propio. Así, la Carta de Población que Jaime I otorgase a Figueras el 21 de junio de 1267 (34) establece que: Item, volumus et statuimus quod nullus se possit tueri privilegiis nostris regalibus licet in dicta villa permaneat nec homines eiusdem ville eum iuvare teneantur donec iuraverit fidelitatem nobis et nostris, et quod aliquis licet fidelitatem nobis iuraverit ut est dictum, non habeatur pro vicino dicte ville nec deffendatur privilegiis nostris donec domum habeat in dicta villa et ibi suam faciat continue mansionem. En efecto, el texto parece apuntar la existencia de dos grupos locales diferenciados: primero, el de aquellos que permanecen en la villa, y segundo el de aquéllos que teniendo casa en la misma establecen allí su morada de forma continuada y juran fidelidad al rey. Sólo el segundo núcleo gozaría de los privilegios reales establecidos en la Carta, y sólo a él correspondería la atribución de la condición individual de vecino. Pero esta interpretación no resulta en absoluto coherente con el contenido y normativa del texto; por una parte, éste declara solemnemente, ya en la fórmula de concesión, que el goce del Derecho Privilegiado ahora concedido corresponde a pobladores y habitantes del lugar, sin excepción: omnes qui ibi populabunt seu habitabunt huiusmodi libertatibus et bonis consuetudinibus infrascriptis debeant congaudere; por otra parte, el desarrollo normativo de los privilegios aparece continuamente referido a categorías personales de índole, igualmente, fáctica: exenciones tributarias de carácter personal concedidas

(34) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 316, págs. 464-467.

a pobladores y habitantes, exenciones tributarias de carácter territorial otorgadas a pobladores, beneficios jurisdiccionales dirigidos a habitantes y hombres de la villa. No parece, por consiguiente, real ni justificado el elaborar y mantener la existencia de una categoría jurídica referida a un cierto núcleo personal de carácter local en base al empleo, en una sola ocasión, por el texto del término vecino; sobre todo teniendo en cuenta que el mismo párrafo que incorpora tal noción alude, claramente, al colectivo local mediante la expresión homines eiusdem ville.

En realidad, nada nuevo aporta el párrafo analizado, en la medida en que, primero, si el Derecho Privilegiado concedido por el rey tiene su destino subjetivo en los pobladores - habitantes de la villa; segundo, si la aplicación de aquél queda condicionada por el juramento de fidelidad al rey y por el establecimiento de morada continua en la villa; y tercero, si cualquier juramento de fidelidad al rey supone una renovación expresa del vínculo del súbdito, y éste puede nacer de la mera residencia en el Reino como consecuencia de la vinculación personal a un territorio sometido a la soberanía real; es preciso concluir que estos dos requisitos, juramento de fidelidad y morada en la villa con especial referencia a la tenencia y ocupación de una casa, funcionan como garantía objetiva de integración y arraigo del habitante en el territorio y en la comunidad local, pero no como datos configuradores de un status personal que, en el seno de la comunidad, se diferencie del de habitador y determine el ámbito personal de aplicación del Derecho Privilegiado.

De esta manera, el empleo de la noción de vecino halla justificación en un momento histórico como éste (finales del siglo XIII) en que es necesario garantizar el disfrute de los privilegios por quienes, efectivamente, constituyan la comunidad local; y, de ahí el establecimiento de garantías objetivas de la existencia de arraigo e integración. Así, el vecino se configura, nuevamente, como el habitante arraigado.

En conclusión, los textos utilizan la noción de vecino para hacer alusión a dos aspectos de una misma realidad: bien refiriéndose a la vertiente relacional surgida entre miembros de una misma co-

munidad local (35), bien refiriéndose a la identidad e identificación comunitaria de cada uno de ellos (36).

Es en este marco interpretativo en el que cobra sentido el empleo, por los textos, del adverbio vicinaliter en la descripción y regulación del modo en que han de realizarse ciertas acciones y actividades, precisamente cuando se trata de acciones y actividades a concluir en el seno de la comunidad local y entre sus miembros (37).

2. También en el contexto del examen y análisis del posible contenido y carácter de la noción de vecindad, conviene acudir en este momento a la consideración de la normativa sobre las obligaciones tributarias de los miembros de las comunidades locales. En esta línea, la Carta de Franquicias concedida a San Lorenzo de Salancá por Pedro I el 22 de febrero de 1213 (38) incorpora la noción de vicinitate entre las prestaciones enumeradas al objeto de establecer las correspondientes exenciones; y, seguidamente, se extiende la exención a todos los servicios, demandas y exacciones reales y vecinales excepto hueste y cabalgada; et ab omni servitio ac demanda et exactione qualibet regali et vicinali, preter hostem et cavalcatam. Exactamente la misma fórmula de exención (regali et vicinali), y otras muy semejantes (vicinático, Real y vehinál), son incorporadas por muchos de los textos examinados. Así, se establece la contraposición conceptual entre dos grupos de obligaciones tributarias, entre dos grupos de prestaciones: las de origen real o dominical y las de origen local. De tal manera que el análisis del propio término empleado para designar al segundo de los grupos (vicinali), conduce etimológicamente a considerar que las prestaciones a él incorpo

(35) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 219, 238, 287, 294, 295, 319, 320 y 361, págs. 301-303, 333-336, 416-419, 431-434, 473-477 y 531-535.

(36) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 316 y 379, págs. 464-467 y 565-566.

(37) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 234 (en normativa de carácter procesal), 224 (en preceptos sobre regímenes de bienes comunales), y 252 (en la regulación de las posibles enajenaciones de bienes locales), págs. 326-328, 344-346 y 358-360.

(38) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 238, págs. 333-336.

radas constituirían obligación de los vecinos, o (por mejor decir y para no prejuzgar los posibles contenidos de la noción de vecino) de los miembros efectivos de la comunidad local; como, por otra parte, es lógico, en la medida en que los comunes intereses y necesidades precisarían una cobertura, igualmente, común. En este punto es, por consiguiente, preciso determinar qué colectivo era el destinatario de las exenciones, para, así, llegar a establecer a quiénes correspondía la consiguiente obligación y, en esta medida, quién conformaba la comunidad.

Pues bien, la Carta de Franquicias concedida el 22 de febrero de 1213 a San Lorenzo de Salancá por Pedro I, dirige las exenciones a universos homines et feminas maiores et minores in villa et castro de Sancto Laurentio habitantes et habitaturos presentes et futuros. Por su parte, la Carta de Franquicias que Nuño Sanç concediese al castillo y villa de Clará el 12 de diciembre de 1233 (39), configura como beneficiarios de las exenciones mencionadas a omnibus populatoribus habitatoribus nostris castri et ville de Clerano, tam viris quam mulieribus presentibus et futuris. En el mismo sentido, la Carta de Franquicias que otorgó Jaime I el 21 de marzo de 1236 a Balaguer (40) exime de las prestaciones consideradas a omnes illos et singulos cum omnibus bonis suis, qui ad Balagarium venerint populare et habitare. Resulta significativa la fórmula empleada por la Carta de Franquicias que el mismo Jaime I concedió a Prats de Molló el 22 de octubre de 1245 (41); en efecto, se trata de una concesión privilegiada expresamente otorgada a nuevos pobladores, de tal manera que refiriéndose a éstos como a extraños se pone claramente el acento en el acto de población como determinante de la concesión de la exención tributaria durante los primeros cinco años: omnes homines extraneos venientes ad populandum in podio contiguo palatio nostro de Pratis, ita quod, a die qua ibi populati fuerint ad V. annos, sint franchi et liberi cum omnibus rebus suis et inumnes ab omni questia, alberga, exercitu et cavalcata, et eorum redemptione, et ab omni servitio et exactione regali et vicinali. Asimismo, la Carta de Franquicias que

(39) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.261, págs. 374-377.

(40) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.266, págs.384-386.

(41) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 285, pág. 414.

Jaime I concedió a Castro Opol o Salvaterra el 15 de mayo de 1246 (42), dirige la exención a omnibus vobis singulisque hominibus de Opido et de Prellons, omnibusque aliis habitatoribus et populatoribus dicti podii Salvaterre, presentibus et futuris. Cuando se recoge este tipo de exenciones en la autorización para poblar una villa cercana a Vilafranca del Conflent que Jaime I dirigió al abad de San Juan de Ripoll de 24 de mayo de 1260 (43), se hace en destino a homines vestros propios quos in ea populaveritis. Con el mismo sentido se expresa la Carta de Franquicias concedida a Gósol por Galcerán de Pinós el 28 de diciembre de 1273 (44), cuando exime a aliqui veniant ad populandum in dicto castro de operi castri pero no de opera vicinali dicte ville.

Puede, en conclusión, señalarse que la exención sobre prestaciones, patrimoniales o personales, se establece exactamente sobre el núcleo personal de aplicación del Derecho contenido en el texto. Son, de esta manera, también los pobladores y habitantes quienes asumían las obligaciones tributarias, reales o vecinales, y quienes, en su caso, gozaban de los privilegios de exención. Pudiéndose, así, asimilar el calificativo vecinal o comunal, y la noción de vecino a la de poblador-habitante cuando se pretende hacer expresa referencia a su arraigo y pertenencia efectiva a la comunidad local, y afirmar que ésta queda constituida por pobladores-habitantes. Es decir, forman parte de la comunidad local quienes "se establecen y permanecen".

3. En este intento de analizar y determinar el carácter de la terminología personal cuyo empleo implica la existencia de una comunidad local, es preciso examinar aquellas nociones que, desde el punto de vista morfológico y etimológico, suponen actividad conjunta, compañía o reunión.

Algunos textos incorporan este tipo de nociones en la misma fórmula de concesión. Así, Bernardo de Santa Eugenia concede a Torroella de Montgrí el 12 de septiembre de 1237 Carta de Franquicias (45) dirigida

(42) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.286, págs.415-416.

(43) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.309, págs.450-451.

(44) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.322, págs.479-481.

(45) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.271, págs.393-394.

a vobis omnibusque hominibus Turricellae maioribus, mediocribus et minoribus advenis et domesticis in eadem villa commorantibus; y con idéntica expresión encabeza el mismo señor la confirmación y adición que de esta Carta hiciese el 8 de noviembre de 1265 (46). Igualmente, cuando Galcerán de Pinós confirma a Faners el 20 de febrero de 1289 la Carta de Privilegios concedida al mismo lugar por los Condes de Cerdaña (47), se hace alusión a los destinatarios de esta antigua concesión con la fórmula predecessoribus vestris et vobis et vestris successoribus commorantibus sive habitantibus in loco nominato Franchea de Faners. Y, finalmente, la Carta de Población que concedió Ramón de Urg a Pobla de Lillet el 13 de abril de 1297 (48) recoge una fórmula nominal de concesión, calificando a los destinatarios como commorantibus et populatis in populatione nostra sive bastida que est constructa et edificata in loco de Puyoli.

Atendiendo al contenido de las fórmulas examinadas, la noción de commorantes queda, ante todo, asociada a las nociones personales de hecho repetidamente consideradas; en efecto, los textos de las Cartas de Torroella de Montgrí vinculan la noción de commorantes con la de hombres de, el de la Carta de confirmación a Faners recoge conjuntamente la noción de commorantes y la de habitantes, y la fórmula de concesión de la Carta de Pobla de Lillet asocia la noción de commorantes a la de pobladores.

Resulta, pues, concluyente la necesidad de afirmar la caracterización fáctica de la noción de commorante, que, de esta forma, asumiría el significado de la noción de morante en torno a los datos de establecimiento y permanencia. Pero, además, la función etimológica de la partícula con- obliga a considerar al con-morante como aquella persona que mora con...(49), y ello supone, obviamente, excluir la consideración in

(46) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.314, págs.459-462.

(47) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.353, págs.518-519.

(48) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.361, págs.531-535.

(49) Ello se aprecia, por ejemplo, cuando Bernardo de Salanova, comendador Hospitalario de Amposta, otorga el 11 de Mayo de 1252 Carta de Población a Alcanar, con consenso de sus hermanos de Orden, potestades de territorios sometidos a su comendación, aludiéndoles mediante la calificación de commorantes (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 295, págs. 433-434).

dividual y hacer referencia a un colectivo de morantes, a un grupo de pobladores-habitadores, en definitiva a una comunidad local. De ahí que la Carta de Población que Pedro de Mendoza concedió a Savallá el 7 de abril de 1497 (50) recoja, por ejemplo, alguna alusión a la actividad pobladora a realizar mediante expresiones como populare et stabilire o habitare et commorari.

Muy esclarecedora resulta, a este respecto, la consideración comparativa de las expresiones empleadas por diversos textos en la formulación de un precepto de carácter eminentemente comunitario. Efectivamente, son muchos los textos que establecen límites a la facultad dispositiva de los pobladores sobre sus heredades. Se trata de normas de carácter eminentemente comunitario porque, respondiendo a la necesidad de organizar la distribución territorial bajo la soberanía del señor del lugar, imponen la conservación de la titularidad y explotación de la tierra en manos de miembros de la comunidad local; prohibiendo que la titularidad, la explotación o la disposición pasen a extraños o a personas sometidas a jurisdicción diferente a la local (clérigos o militares u otros señores locales).

Así, la Carta de Población que el 29 de agosto de 1201 concedió el prior de San Vicente de Garraf a Valle de Porrera (51) concede a los populatores licencia para vender y pignorar sus heredades a vestris consimilibus laboratoribus. La misma norma recoge la Carta de Población otorgada el 25 de noviembre de 1205 por Poncio de Rígaldo a Batea (52), utilizando la expresión personal equalibus vicinis. La Carta de Población que Gombaldo de Santa Oliva concedió a Lledó el 13 de octubre de 1210 (53) regula la misma licencia mediante los términos vestris consimilibus laboratoribus qui habitationem faciant in Ledone assidue. El mismo precepto contiene el Establecimiento de las granjas de Clérvoles

(50) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 381, págs. 569-574.

(51) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 213, págs. 291-293.

(52) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 219, págs. 301-303.

(53) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 232, págs. 324-325.

y Fumada que el 18 de marzo de 1271 efectuó el abad de Poblet a favor de los hombres de Vilosell (54), mediante una fórmula más completa (por su referencia a los miembros de la comunidad local mediante la alusión a su carácter de iguales, vecinos, establecidos, conmorantes y domiciliados): dare vendere vel inpignorare nec alienare militibus nec sanctis nec alicui persone de mundo nisi tantum vestris consimilibus vicinis qui sint homines solidi et comorantes et domicilium habentes in villis vel terris monasterii Populeti. El Establecimiento de la dominica tura de la Torre de Alós realizada por el abad de Poblet el 26 de febrero de 1272 a favor de un grupo de habitantes de Bellcaire (55), recoge la limitación mediante los términos vestris consimilibus vicinis laboratoribus, non militibus aut sanctis (56). También la Carta de Población de Pedro de Tous a los pobladores de Algars el 23 de enero de 1281 (57) establece la restricción mediante la fórmula vestris consimilibus habitantibus in dicto loco, exceptis militibus atque sanctis.

Puede, por tanto, destacarse, en este tipo de normas, la reiteración de dos requisitos personales: el de la igualdad de condición y el de la pertenencia a una misma colectividad. Teniendo en cuenta que las fórmulas de concesión de los textos señalados recogen, sin excepción, nociones personales de hecho, es preciso considerar que la expresada relación de igualdad se establece sobre dos elementos: el puramente social, y el fáctico de la población y la habitación. Por otra parte, si la noción preferentemente empleada es la de consimiles, cuando idéntico

(54) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 319, págs. 473-475.

(55) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 320, págs. 475-477.

(56) Esta misma terminología (consimili vicino vestro) es empleada en la regulación normativa de esta limitación por el texto de la Carta de Población concedida por el Abad de Poblet a la Granja de Codoc el 21 de mayo de 1246 (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 287, págs. 476-477).

(57) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 344, págs. 505-507.

significado expresan la de similes o la de equales; si estas nociones aparecen asociadas, en la norma, a otras relativas a los diversos aspectos de la participación comunitaria, tales como laboratores, vicines o habitantes; y si las combinaciones entre estos términos, en las fórmulas de expresión de un mismo precepto, son diversas, en alusión a una realidad idéntica; es porque la condición personal referida en la norma participa de los propios rasgos caracterizadores de la comunidad, en cuanto colectivo vinculado por los nexos que se derivan del hecho de la co-población y de la co-habitación.

También la redacción de los otorgamientos de ciertas exenciones tributarias incluye, en algunos textos, la noción personal de conmorante. En efecto, este tipo de normativa (cuyo análisis ha sido realizado más arriba para acabar concluyendo su aplicación al mismo núcleo personal afectado por el Derecho Local) utiliza en algunas ocasiones tal terminología, precisamente, por dirigirse a los miembros de la comunidad local para otorgarles ciertos privilegios por su condición de tales. Así, la Carta de Franquicias que Geraldo de Cabrera concedió a Agramunt el 22 de marzo de 1224 (58) establece ciertas exenciones para los habitatoribus in Acrimonte et ibidem conmorantibus presentibus et futuris. Y la Carta de Franquicias otorgada a la villa de Camprodón por Pedro de Corts el 15 de octubre de 1248 (59) dirige la exención a omnes homines et feminas comorantes in dicta villa de Camporotundo tam presentes quam futuros. Más esclarecedor en lo que al carácter de la noción de conmorantes en el contexto de esta normativa se refiere, resulta el examen de las expresiones empleadas en la "Conventio inter Petrum de Berga super intestia et exorquia militum et aliorum" de 14 de mayo de 1256 (60):

(58) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 243, págs. 342-344.

(59) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 290, págs. 423-425.

(60) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, págs. 439-440.

si ab hac die in antea ullo tempore aliqui homines sive mulieres aliunde ab aliqua parte sive ab aliquo loco dominationis vestre ad villam Berge venerint et ibidem in dicta villa comorantes infra annum sue comorationis decesserint, in ipsis et rebus suis habeatis vos eandem petitionem sive demandam quam ante huius comorationem sive stationem haberetis super intestia et exorquia petendis sive etiam requirendis. Si, vero, post annum in eadem villa iamdicta residenciam facientes, decesserint, a predictis intestia et exorchia sin liberi, franchi, penitus immunes sicut alii homines ville Berge stantes in eadem et naturale eiusdem villa. Ita, videlicet, quod annum residencie sue sive etiam intestati et exorchi decesserint, nullam demandam possitis facere in bonis suis. ratione intestie vel exorchie sed omnes et singuli intelligantur in illa franchitate quam nobis et universitati ville Berge concessitis proput plenius et melius in instrumento franchitatis continetur.

El texto parece, en efecto, considerar el plazo de un año de residencia como relevante a la hora de objetivar el establecimiento y permanencia en la villa, el grado de arraigo e integración en la misma. Los hombres de Berga estaban exentos de satisfacer al señor local intestia y exorquia, desde el acto mismo del asentamiento en la villa (61), pero la Conventio considera que si ese asentamiento se prolonga por tiempo inferior a un año, el señor podrá exigir intestia y exorquia en las mismas condiciones y términos en que hubiese podido proceder con anterioridad al establecimiento de la residencia, es decir como si ésta no hubiese existido nunca. De esta manera, si la residencia se prolonga por más de un año la exención resulta efectiva desde el mismo momento de su fijación, pero si el residente lo es durante menos de 12 meses se crea la ficción jurídica de que en ningún momento gozó del privilegio de la exención. En definitiva, ha de concluirse que no es el tiem-

(61) El Prof. Font Rius entiende, sin embargo, que el derecho al disfrute de las exenciones nace tras el cumplimiento de un año de residencia (J.M. FONT RIUS, "Franquicias locales en la comarca del Alt Berguedà (Pirineo Catalán)", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 46).

po de permanencia y establecimiento en la villa lo que condiciona la aplicación del Derecho Local correspondiente, sino el mero hecho de la permanencia y establecimiento.

Por otra parte, el texto transcrito es especialmente claro en la asimilación conceptual de las nociones conmorantes, residentes (residen-
ciam facientes) y stantes.

Con base en los diversos aspectos del análisis precedente, queda establecida una configuración conceptual de este tipo de nociones, que justifica su empleo en otras ocasiones. En este sentido adquiere coherencia el uso del término convicinus en alusiones a las partes en un pleito, cuando éste se plantea entre miembros de la misma comunidad local (62); ningún matiz de concepto añade la noción de convicinus a la de vicinus (63), en la medida en que ambas expresan el status personal de pertenencia a una comunidad, si bien al añadir la partícula con- se está enfatizando sobre el status de relación interna en que la vida en comunidad coloca a sus miembros.

Con esta misma intencionalidad y función se incorpora el término conmorante en referencias a la regulación de ciertas obligaciones o derechos propiamente comunales (64). Y a idénticos objetivos responde el empleo de tal noción para proceder a identificar la condición de quien actúa como testigo en el acto de concesión de Carta o Privilegio (65).

4: Una vez realizada de forma positiva la delimitación cualitativa de quiénes y bajo qué condiciones constituyan la comunidad local, ha

(62) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 281 y 291, págs. 408-410 y 425-427.

(63) En el texto del Establecimiento de tierra realizado el 16 de diciembre de 1232 por Arnaldo Punyet a favor de Juan Dezcanós, en el término de Vallseca, la expresión convicinus illorum sería obviamente sustituible o intercambiable por la de vicinus illorum (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 259, págs. 371-372).

(64) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 288, págs. 419-421.

(65) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 387, págs. 380-381.

de procederse a un análisis de carácter negativo sobre la pertenencia personal a la misma y sobre los elementos condicionantes de esta pertenencia. Se trata, por consiguiente, de establecer los factores que determinaban la no pertenencia a la comunidad, quiénes no formaban parte de la misma, quiénes eran considerados extraños a ella.

Son numerosos los textos en que aparece recogido el término extraneus (66). Se trata de una noción, en principio, referida a quien es "externo" a la comunidad, es decir a quien carece de integración en la misma.

Cuando la Carta de Franquicias que concedió Pedro I a Salses el 21 de febrero de 1213 (67) regula la prohibición de proceder, en los procesos que tengan lugar en el castillo y villa de Salses o sus términos, al empleo de ciertos medios de prueba (batalla, fuego, etc.), hace concreta referencia a los pleitos inter habitatores ipsius castri et villa de Salsis vel inter extraneos ibi venientes. El mismo precepto se formula en la Carta de Franquicias concedida el 12 de diciembre de 1233 a Clarà por Nuño Sanç (68), mediante la referencia a causas inter habitatores et populos nostros ipsius castri et villa de Clerano, vel inter extraneos ibidem venientes in dominatione nostra. Por consiguiente, puede destacarse que, en este caso, los textos oponen la noción extraneus a las de habitator o populator en el lugar; de manera que el extraño a la comunidad local es quien no habita o puebla en la localidad.

En una disposición de carácter diferente, como es la de concesión de licencia para exportar trigo por mar, la Carta de Franquicias otorgada a Torroella de Montgrí por Bernardo de Santa Eugenia el 12 de septiembre de 1237 (69) hace referencia a la exportación realizada per

(66) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 233, 237, 261, 271, 290, 314, 316, 335, 337, 344, 359, 361, 366, 371, 374 y 384, págs. 308-310, 330-333, 374-377, 393-394, 423-425, 436-438, 459-462, 464-467, 495-498, 500-501, 505-507, 528-530, 531-535, 543-546, 550, 556-558, 576-578; J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II, doc. 403, págs. 694-695.

(67) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 237, págs. 330-333.

(68) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 261, págs. 374-377.

(69) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 271, págs. 393-394.

aliquem hominem extraneum vel istius villae. La misma norma se repite en la confirmación y adición a esta Carta que el mismo Bernardo de Santa Eugenia realizase el 8 de noviembre de 1265 (70), reproduciéndose prácticamente la misma expresión personal: per aliquem hominem extraneum vel villae Turricellae.

La fórmula de concesión de la Carta de Franquicias otorgada el 15 de octubre de 1248 a Camprodon por Pedro de Corts (71) aludía a habitatores eiusdem ville y a omnes homines et feminas comorantes in dicta villa de Camporotundo; y más adelante regulaba la exención de lezda, entre otras prestaciones, a éstos concedida, haciendo expresa declaración de que los "extraños" quedaban, sin embargo, obligados a su pago: damus et concedimus vobis et successoribus vestris semper, quod non teneamini nobis vel successoribus nostris de oleo, nec de piscibus, nec de ferro ciso vel fracto sive extracto, ullo tempore dare leudam sicut consuetum est, sed extranei teneantur inde nobis dare leudam; asimismo, el texto prohíbe que ningún extraneus establezca carnicería en la villa. De esta manera, la noción de extraneus es nuevamente utilizada en el reverso de los términos personales habitor y homines et feminas comorantes.

La Carta de Población que el rey Jaime I concedió a Figueras el 21 de junio de 1267 (72), y su confirmación realizada por Jaime II mediante concesión de Carta de Franquicias el 13 de enero de 1295 (73), contienen algunas normas reguladoras de la administración y ejecución de justicia en caso de agresiones cometidas en la villa por extraños en la persona de algún miembro de la comunidad local de Figueras. Y en expresión de esta relación oponen sucesivamente los términos aliquis extraneus - aliquem de dicta villa, u homo dicte ville - extraneus, o populator et habitator - extraneus, o habitor dicte ville - extraneus.

(70) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.314, págs.459-462.

(71) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.290, págs.423-425.

(72) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.316, págs.464-467.

(73) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.369, págs.528-530.

Muy significativa resulta, a estos efectos, la expresión empleada por el rey Pedro II en la Cartas de Población que otorgó a Tarroja, Calaf, Ivorra, Tornabous y Fuliola el 23 de junio de 1280 (74); efectivamente, el texto recoge la intención expresa del monarca de favorecer a los pobladores del lugar frente a los extraños: cum de gratia speciali volumus vos in populos dicti loci habere magis quam extraneos homines. De tal manera que, una vez más, queda identificada la noción de "extraño" con la de "no poblador".

En otras ocasiones, este tipo de terminología se emplea en disposiciones relativas a la organización de la tierra, al régimen del agua o a otras materias específicamente comunales. Este es el caso de la Carta de Población de Almatret, otorgada por Guillermo de Entenza el 21 de febrero de 1302 (75), que al regular algunas cuestiones de tal índole utiliza la noción de extraneus como contraria a las de populos o habitantes.

Finalmente, puede resultar de interés analizar, en este punto, el contenido de la orden expedida por Jaime II al batlle general de Cataluña el 18 de octubre de 1314 para que procediese a la incorporación de nuevos pobladores en Alós y Meyá (76). En efecto, se trata de incrementar la población de localidades ya pobladas, existiendo, por consiguiente, una comunidad local preconstituida. Así se explica que el mandato exprese la intención de que in dictis locis veniant ac venire proponant aliqui extranei ad populandum. De tal manera que quienes acudan a poblar serán extraños, precisamente, hasta el momento en que la población se produzca; y, por eso, el texto desarrolla las condiciones básicas de la población aludiendo, ya, a novis populatoribus o, simplemente, populos.

El análisis precedente conduce, pues, a la conclusión de que la condición de "extraño" se define negativamente por la no pertenencia a

(74) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.337, págs.500-501.

(75) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.366, págs.543-546.

(76) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.371, pág. 550.

la comunidad local. Por otra parte, la constatación del empleo por los textos, en disposiciones normativas de carácter y contenido muy diversos, de esta noción negativa por oposición a las nociones personales de hecho refuerza la interpretación, constantemente apuntada, de la pertenencia a la comunidad local, y por consiguiente el sometimiento a su Derecho Privilegiado, quedaba determinada por la concurrencia de dos elementos fácticos: uno de relación con el territorio (el acto de ocupación de la tierra en el proceso de población), y otro de relación con la comunidad constituida en el acto de co-población del lugar (la integración).

En este sentido cobra plena justificación y afianza los criterios interpretativos empleados, el considerar que otros textos, al excluir a los extraños de la posibilidad de actuar en ámbitos (patrimoniales o personales) específicamente reservados a la comunidad por su interés o relevancia, emplean nociones personales de hecho formuladas negativamente; siendo así que podrían haber empleado con idéntico significado la noción, ya analizada, de extraneus. Así, la Carta de Población y Franquicias que Nuño Sanç otorgó a Bellver el 26 de diciembre de 1255 (77), recoge una concreta prohibición de venta dirigida a qui inter vos non sit populator et habitator; e idéntica prohibición establece con respecto a qui habitator non sit vobiscum indicta villa sive podio, la Carta de Franquicias otorgada por Jaime I a la misma villa el 6 de enero de 1243 (78). Son normas especialmente relevantes en la determinación del ámbito personal y territorial de aplicación de las Cartas, en la medida en que definen expresamente su vigencia en el término de la villa correspondiente y entre la comunidad de habitantes (con exclusión expresa de los "no habitantes").

Cercanas a esta terminología personal de carácter fáctico que, formulada de manera negativa, hace especial referencia a los extraños al lugar y a la comunidad local, pueden considerarse otras expresiones;

(77) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.248, págs.353-355.

(78) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.279, págs.405-406.

se trata de expresiones personales de hecho formuladas de manera positiva y que, por su alusión a la pertenencia a una comunidad local extraña, cumplen igual función que las expresiones personales de hecho formuladas negativamente. En efecto, existen textos que reconocen al miembro de la comunidad un derecho de actuación frente a un extraño, precisamente por serlo. Así, la Carta de Franquicias concedida por Jaime I a Puigcerdá el 6 de enero de 1243 (79), la Carta de Franquicias otorgada por el mismo monarca a Bellver en la misma fecha (80), así como la Carta de Franquicias que él mismo otorgase en igual momento a Vilafranca de Conflent (81), y la Carta de Franquicias concedidas a Maranges por Roger el 19 de abril de 1250 (82), reproducen prácticamente una norma en virtud de la cual los destinatarios del Derecho privilegiado que el texto crea (los hombres y mujeres de ..., pobladores o habitantes de...) pueden proceder a compeler y pignorar a sus debitores extra villam comorantes, tras haber recurrido en tres ocasiones al oficial correspondiente, para conseguir que la deuda se satisfaga. De esta manera, se considera excluido de la comunidad local a quien morase fuera del término de la villa.

En este intento de determinación de los límites de vigencia personal y espacial del Derecho Local, es preciso destacar la existencia de textos que crean, para algunos supuestos precisados de regulación jurídica, una normativa especial y expresa para quienes, sin ser miembros de la comunidad local actuasen en el término de aplicación del Derecho Local. Así, la Carta de Franquicias concedida el 22 de febrero de 1213 por Pedro I a San Lorenzo de Salancá (83) establece: Si quis quippe mercator aut viator vel alia quelibet persona, qui non fuerit habitator de Sancto Laurentio, et forte decesserit et fecerit testamen-

(79) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.278, págs.403-404.

(80) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.279, págs.405-406.

(81) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.280, págs.406-407.

(82) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.292, págs.427-428.

(83) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.238, págs.333-336.

tum, valeat testamentum illud si legitime fuerit factum (84). Concretándose, pues, nuevamente, la constitución y existencia de la comunidad en base al hecho de la habitación.

Participan también lógicamente, de la caracterización jurídica de los extraños aquéllos a quienes las Cartas consideran transeuntes (85). Efectivamente, algunos textos recogen esta noción para hacer referencia a quien se encontraba de paso en la localidad; y, normalmente, se emplea el término en las disposiciones destinadas a garantizar la seguridad y protección a quien provisionalmente permaneciese allí, bien por razón de feria o mercado(86), bien por cualquier otro tipo de motivación.

5. Para finalizar este análisis del contenido de los textos, en un intento de esclarecer el carácter y los elementos determinantes de

(84) Según E.M. MEIJERS, "L'Histoire des principes fondamentaux du D.in ternational privé à partir du Moyen Age, spécialement dans l'Europe occidentale", Recueil des Cours, Académie de D.international de La Haye, t. 49 (1934-III), pp.600-601, fue Guillermo de CUNEO, hacia 1315-1316, quien partiendo de una concepción más amplia de las costumbres personales" formuló por primera vez la regla Locus regit actum. Pero el texto recogido, de 1213, evidencia que como tantas otras formulaciones doctrinales, en realidad ya había sido admitida en la práctica. Véase sobre el desarrollo histórico de la regla R. GENINMERIC, La maxime locus regit actum. Nature et fondement, París, 1976, especialmente págs. 30-35 (sistema de la personalidad del Derecho) y 43 y ss. Para A. LAINE, Introduction au Droit international privé, t. I, París, 1888, p. 123 y ss, el introductor de la regla locus regit actum en la teoría de los estatutos es Cino de PISTOIA. Pero como ha señalado E.M. MEIJERS, (op. cit., p. 601), en realidad este autor sólo sigue la exposición hecha por Guillermo de CUNEO en su Lectura Codicis, diviulgándola en Italia.

(85) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 223 y 254, págs. 308-310, y 362-363.

(86) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, docs. 223 y 262, págs. 308-310 y 377-380.

la comunidad local, como destinataria de la normativa privilegiada incorporada por el Derecho Local, únicamente destacar a modo de conclusión la limitación establecida por Galcerán de Pinós en la Carta de Franquicias que concedió a Gironella el 24 de octubre de 1450 (87): Retinemus, tamen, nobis et nostris et a presenti franquitate excluimus et exceptamus omnes alios homines et feminas nostros propios qui sunt vel fuerunt populati extra dictum lochum, villam seu castrum Gironelle sic quod non intelligantur nec comprehendantur in presenti franquitate. De esta manera, se excluye la aplicación de las franquicias concedidas, a todos aquéllos que poblasen fuera del ámbito territorial en que la Carta era otorgada; además, y teniendo en cuenta que la concesión del texto se dirige a homines et feminas habitantes intus locum seu villam ac castrum nostrum Gironelle, ha de concluirse: primero, que el ámbito personal de aplicación del Derecho Local queda determinado por la condición de habitante en el término al que la Carta se concede, segundo, que tal vinculación fáctica persona-territorio conlleva la perfecta correlación entre los ámbitos personal y territorial de vigencia del Derecho Local; y, tercero, que la comunidad local receptora en plenitud de la normativa así creada es una comunidad de habitantes en el lugar.

3. Referencia a criterios personales: domicilio y residencia.

A) Domicilio.

1. Sin lugar a duda la novedad de mayor interés y el dato más relevante, a efectos de la investigación planteada, que los textos examinados presentan, radica en el empleo de una noción de origen jurídico-romano alusiva a una forma concreta de quedar personalmente vinculado al territorio. En efecto, por primera vez hallamos, en algunos textos de finales del siglo XIII, las nociones de domicilio y domiciliado.

La Carta de Población que concedió Astrugo Ravaya a Palamós el 3 de diciembre de 1279 (88), se dirige a vobis universis et singulis homi-

(87) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.380, págs.566-569.

(88) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.335, págs.495-498.

nibus et mulieribus presentibus et futuris populatoribus portus regalis de Palamors, qui ad dictam poblam accesistis et accedetis et ibi domo habetis et habebitis pro domiciliis vestris, qui tamen ad dictum locum venistis postquam dictus locus fuit domini regis ut semper vos et vestri successores ibidem domicilium et residenciam facientes. Así, la de limitación del núcleo personal, al que se destina la concesión, aparece fundamentada una vez más en el factor de la población: quedan sometidos al Derecho de la Carta los pobladores presentes y futuros. Se trata, por consiguiente, del empleo de nociones personales de hecho; matizadas a continuación por dos factores: la tenencia de casa y el establecimiento de domicilio; para finalizar concretando que el sometimiento personal al Derecho Local permanecerá siempre y cuando se conserve el domicilio y la residencia en el lugar. De tal manera que, el texto intenta asegurar el disfrute de los privilegios creados a quienes acudiesen efectivamente a poblar, fijando criterios objetivos de establecimiento, permanencia y presencia en el lugar.

En el texto de la donación de un lugar perteneciente a la parroquia de San Julián de Fortiá, por el Conde de Ampurias al abad de San Pedro de Rodas el 31 de agosto de 1282, para edificar allí una nueva villa (89), el donante establece ciertas exenciones fiscales para los habitadores del lugar; pero, precisamente para evitar el recorte de sus ingresos por vía tributaria, prohíbe la admisión como habitantes del lugar, y por tanto privilegiados fiscalmente, de quienes sometidos a su señoría en otros lugares estuviesen obligados al pago de las prestaciones ahora eximidas; y así, establece: Ita, tamen, quod aliquis undecumque sit in quo nos habeamus et recipiamus predicta non possit domicilium suum mutare nec transferre in dicto loco nec vos possitis vel vestri successores ibi eum recipere seu recolligere, causa habitandi. Se prohíbe, por consiguiente en los casos indicados, el cambio de domicilio y el establecimiento por razón de habitación. De tal manera que, también ahora en la formulación negativa del núcleo personal de aplicación del Derecho Local, se emplean los mismos criterios que en el texto

(89) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 347, págs. 510-511.

analizado anteriormente fundamentaban la pertenencia a la comunidad local y el consiguiente sometimiento al Derecho del lugar: habitación y domicilio. Y ello obliga a destacar, en primer lugar, el carácter fáctico de la terminología empleada para definir quiénes quedaban sometidos al mencionado Derecho; y, en segundo lugar, la incorporación de la noción de domicilio para cubrir dos tipos de alusiones, por un lado la referencia a la voluntariedad del establecimiento (referencia que se manifiesta en el hecho de que la noción se emplee al excluir la posibilidad de variar el lugar de habitación por libre voluntad y elección), y por otro la expresión de un efectivo establecimiento en el lugar así como la permanencia en el mismo. Por otra parte, el recurso a la prohibición de habitar en la villa, como medio para excluir el sometimiento al Derecho Local Privilegiado, manifiesta claramente la, ya apuntada, coincidencia entre los ámbitos personal y territorial de aplicación del Derecho Local de la época.

En el texto de la Carta de Franquicias que Jaime II concedió a Llívia el 3 de enero de 1305 (90), el propio monarca justifica la concesión aludiendo al carácter restringido de un otorgamiento anterior que él mismo realizase a parte del territorio de Llívia, en concreto al cerro. En efecto, se alude a la necesidad de hacer extensiva la concesión en este momento a todo el término de Llívia, necesidad derivada, por otra parte, de las dificultades que condicionaron y mediatizaron el proceso de población del cerro de Llívia: sed cum ipsis hominibus esset difficile morari in dicto podio et ibi sua domicilia in solidum tenere, nulli aut pauci homines suas habitationes facerent in podio supradicto; el texto parece, de este modo, definir el establecimiento poblador sobre el territorio en base a criterios diversos y cumulativos: primero la morada, segundo el domicilio estable, y tercer la habitación.

Habrã, pues, que cuestionar cuáles son las diferencias entre estos tres criterios, y plantear si la noción de domicilio añade algo nuevo a la configuración de la comunidad local hasta ahora mantenida. En primer lugar, la noción de morada incorpora un significado de cierta

(90) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 368, págs. 547-548.

permanencia, y por ello ha sido interpretada en relación al establecimiento de un centro estable de vida. En segundo lugar, la noción de domicilio estable no añadiría sino una expresa referencia a la voluntariedad en la elección del establecimiento. En tercer lugar, la noción de habitación supondría la garantía del arraigo y el establecimiento en la constitución de un hogar.

Esta diferente caracterización de las nociones hace preciso considerar que todas ellas participan en la descripción y referencia a una única realidad y a una misma relación persona-territorio, siendo preciso excluir su carácter cumulativo y afirmar su funcionamiento relacional; en efecto, se trata de poner en contacto aspectos diversos de una misma situación. Así, el domicilio añadiría a las nociones fácticas que completan la descripción (morada y habitación) la expresa referencia a la voluntariedad, que en aquéllas sólo aparecería de manera implícita o indirectamente inducible.

Por otra parte, el exámen preciso del texto transcrito conduce a considerar como noción especialmente relevante y globalizante la de habitación; pues la dificultad para establecer morada y domicilio en el lugar, conlleva, conforme al texto, la imposibilidad de fijar allí habitación, actuando, por consiguiente, aquellas nociones como condicionantes o participantes de ésta.

Por último, la relevancia, con vocación de exclusividad, y el carácter definitorio de las expresiones y situaciones personales de hecho en la determinación del ámbito subjetivo de extensión del Derecho Local, se confirma al comprobar que la concesión de la Carta de Franquicias dirigida al cerro de Llivia se destinaba a habitadores in podio de Livia, y que la extensión de estas Franquicias realizada en 1305 a todo el término de Llivia se dirige a hominibus de Livia et parrochie et castlannie eiusdem loci de Livia et aliorum locorum circumstantium.

La Carta de Franquicias que Jaime III otorgó a la villa y valle de Maranges el 9 de febrero de 1336 (91) supone la confirmación de las

(91) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 373, págs. 555-556.



Franquicias concedidas el 27 de enero de 1184 por Ramón de Castellbó a homines de villa Meranges et de Ierul (92), así como de aquéllas que otorgase Roger el 19 de abril de 1250 a homines et feminas de valle de Meranges (93). La confirmación se realiza, ahora, sin embargo, bajo la condición del traslado del domicilio a Prat Secha: confirmamus, volentes universisque et singulis habitatoribus ville et vallis predictarum presentibus et futuris sub modo qui subsequitur concedentes quod dictis privilegiis ac omnibus in ipsis instrumentis contentis plene gaudeant et utantur prout actenus usi sunt eisdem et nisi sint per usum contrarium abrogata, ita videlicet quod mox cum nos construxerimus seu construimus unum fortalitium seu turrem in quodam loco ipsius vallis vocato Prat Sécha, habitatores iidem sua domicilia transferre in ipsum locum procurent et transferrant cum effectu; de tal manera que la confirmación de los privilegios se dirige a los habitantes de la villa o el valle que trasladen efectivamente su domicilio a Prat Secha, y ¿no responde, lógicamente, este traslado de domicilio a un cambio en el lugar de habitación y establecimiento del centro estable de vida, para poder, así proceder a la construcción de la fortaleza proyectada por el monarca?; parece, pues, que la incorporación de la noción de domicilio tampoco en este supuesto añade nada a la configuración del núcleo personal de carácter local hasta ahora considerado.

Esta misma interpretación terminológica queda confirmada y evidenciada tras el análisis de la traducción catalana que realizase Mas sobre el texto original de la Carta de Población concedida por el vizconde de Cardona el 15 de septiembre de 1344 a Poble de Claramunt (94).

(92) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 170, págs. 237-238.

(93) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 292, págs. 427-428.

(94) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 376, págs. 559-562.

En efecto, la concesión de la Carta se produce tras la destrucción de Poble de Claramunt por las lluvias, quedando arrasados sos edificis, estades o habitacions, haciéndose el lugar inhabitable, y quedando sin habitación quienes allí tenían sus casas. Ante esta situación, varios representantes de la comunidad local suplicaron al señor, en...propis noms y dels altres que de ordinari habitaveu y teniau en dita Poble les habitacions ó hospicis, les concediera lugar seguro donde construir una fortaleza y garantizar a los habitans la defensa de la nueva Poble. Suplican, igualmente, la concesión de gracias y privilegios a aquells que habitarán ó poblarán á la mateixa Poble. El señor accede a las peticiones, designando el Castell de Claramunt como lugar para la reconstrucción por parte de los pobladors ó per los que vulguin habitar allí; concediendo facilidades de establecimiento a los habitantes de la antigua Poble, y exenciones durante 30 años a quienes acudiesen por primera vez a poblar la nueva Poble. Por último, se procede a la confirmación de los privilegios que gozaban los habitantes del término de Castell, para evitar que el cambio de domicilio, a la nueva Poble, les perjudicase de alguna manera: Ademés volen y concedim que si aquells que poblarán y habitarán en dita nova Poble que d'ordinari habitan are en lo terme de dit Castell, tinguin lo privilegi especial, immunitats ó franquicies donades y concedides á ells ó a llurs antecessors tant per nos com pels nostres predecessors y que per la transferencia de domicili no se'ls fassi ó causi cap perjudici, immutació ó derogació al mateix privilegi de franquesa é immunitats. En este supuesto no cabe, efectivamente, duda de que el cambio de domicilio se identifica y responde a un evidente cambio de lugar de habitación; siendo así, por tanto, que la noción de domicilio participa de la caracterización propia de las nociones fácticas que, como se ha constatado repetidamente, establecen la vinculación persona-territorio sobre la base de los actos de población-morada-habitación.

2. La noción de domicilio aparece, en los casos ya analizados, en expresiones que presentan cierto interés en la determinación del ámbito subjetivo de aplicación del Derecho Local. Pero, además, resulta incorporada en normas de contenido diverso. Así, en el Establecimiento de

las granjas de Clérvoles y Fumada que efectuó el abad de Poblet el 18 de marzo de 1271 a favor de los hombres de Vilosell (95), aparece empleada la noción en una norma, ya considerada, de contenido especialmente comunitario: dare vendere vel inpnignorare nec alienare militibus nec sanctis nec alicui persone de mundo nisi tantum vestris consimilibus vicinis qui sint homines solidi et comorantes et domicilium habentes in villis vel terris monasterii Populeti. El texto presenta tal acumulación de términos de referencia personal, que permite delimitar los caracteres propios de los miembros de la comunidad local; que por serlo quedan sometidos a la prohibición de enajenar o disponer sobre sus inmuebles en el término a favor de señoría diversa a la local, o a favor de persona ajena a la comunidad local. Los factores determinantes de la pertenencia a ésta serían la morada estable en el lugar y el establecimiento allí del domicilio; teniendo en cuenta que la consideración conceptual del domicilio no podría, en ningún caso, ir más allá de la exigencia de residencia constante y fijación libre de un centro estable de vida en la localidad, es preciso concluir que la incorporación de la noción en el precepto no añade una nueva consideración o definición de los miembros de la comunidad local, a no ser la expresa referencia a la voluntariedad en el establecimiento. Voluntariedad que, por otro lado, ha de considerarse implícitamente contenida en las nociones personales de hecho, empleadas en el otorgamiento y contenido de este tipo de textos, en la medida en que el móvil de las concesiones privilegiadas siempre fue la atracción de población.

3. También la normativa reguladora de privilegios y exenciones tributarias, reiteradamente considerada e interpretada, emplea en algunas ocasiones la noción ahora examinada. Así, la Carta de Población que Astrugo Ravaya concedió el 3 de diciembre de 1279 a Palamós (96), establece: Item, quod quilibet piscator qui venerit ad dictam poblam et ha-

(95) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 319, págs. 473-475.

(96) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 335, págs. 495-498.

bebit ibi domicilium suum non teneatur dare nisi duos solidos tantum pro barcha quolibet anno; de esta manera, el privilegio se concede a los allí domiciliados. Más adelante se dice: Item, quod quilibet populator habens ibi domicilium et faciens continuam residentiam sit immunis et liber; una vez más, el empleo de la noción de domicilio junto a expresiones claramente fácticas (población y residencia), inclina a su consideración en torno a los mismos elementos de relación que éstas.

Esta misma conclusión se alcanza en la consideración de la Carta de Población concedida el 12 de julio de 1312 por Jaime II a Vilanova de Meyá (97). En efecto, este texto establece exención de tributos reales durante cinco años a qui ad dictum locum de Villanova de Meyano vel ad quemcumque alium de termino ipsius venerint populatum et inibi cum bonis et rebus suis se et domicilium transtulerint. Por consiguiente, la exención se concede a quien acuda a poblar el lugar y allí se establezca definitivamente, exigiéndose nuevamente el acto de ocupación-población y el efectivo establecimiento.

4. Para finalizar el análisis de la normativa y expresiones que incorporan la noción de domicilio, ha de señalarse que el término domiciliado aparece en algunos textos, como la Carta de Franquicias otorgada el 24 de octubre de 1450 por Galcerán de Pinós a Gironella (98), para calificar e identificar a los actuantes como testigos del acto de concesión.

5. En conclusión, ha de afirmarse que la noción de domicilio, o la correlativa de domiciliado, no es nunca empleada por los textos con carácter autónomo, de manera que pudiese atribuírsele un contenido jurídico diferenciador y cualificador de las situaciones y relaciones aludidas; por el contrario, la noción aparece, constantemente, utilizada junto a otros términos, ya analizados suficientemente, referentes a situaciones y relaciones jurídicas de carácter fáctico.

(97) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 369, pág. 548.

(98) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 380, págs. 566-569.

En segundo lugar, el término aparece incorporado en preceptos que, reiterándose sustancialmente en muchos de los textos de la época, adquieren formulaciones diversas, aunque similares, con la inclusión de nociones personales asimismo diferentes. Por ello, es coherente interpretar que, si el contenido de los preceptos es equivalente, también el sentido de las nociones personales empleada habrá de ser equivalente..

En tercer lugar, puede inducirse que el empleo de la noción de domicilio responde a una nueva formulación jurídica que viene a expresar una realidad coincidente con la situación jurídica anterior.

El considerar la incorporación de esta nueva terminología como una nueva formulación jurídica, sin variación de contenidos, encuentra explicación satisfactoria, además, si se toma en cuenta el momento en que tiene lugar semejante cambio. En efecto, no puede comprobarse la inclusión de esta noción hasta textos de finales del siglo XIII; es decir, en un momento en que el Derecho Romano-Canónico había logrado profunda difusión y asimilación en Cataluña. Es entonces cuando se produce la penetración de los Derechos Locales Catalanes por el Derecho Romano, y ello produce, junto a la incorporación de instituciones y regulaciones de origen romano, la nueva formulación de instituciones y regulaciones procedentes de los usos y costumbres locales.

De ahí que haya de interpretarse que el domicilio catalán no es sino el domicilio romano (99), entendido como habitación con voluntad de establecimiento permanente.

B) Residencia.

1. Ya al proceder al examen del empleo, por los textos, de nociones personales de hecho, pudo apreciarse y destacarse la aparición, por vez primera, de algunos términos expresivos del hecho de la perma-

(99) M.F.C. DE SAVIGNI, Sistema del Derecho Romano actual, t VI, Madrid, 1879, págs. 146-176; F. DE CASTRO BRAVO, Derecho Civil de España, t. II, Madrid, 1952, págs. 382-383, 445-456; E. ROCA Y TRIAS, "Un-

nencia y estancia personal en el territorio; en efecto, hubo oportunidad de referirse a las nociones personales de estantes o stantes y statores, y a la formulación verbal de la correspondiente acción: stare.

La referencia a esta misma realidad queda jurídicamente institucionalizada cuando aparece un criterio objetivo, formalmente desvinculado de la realidad y de la actividad meramente personales. Esta evolución, en cuanto manifestación del proceso de abstracción conceptual que caracteriza el paso de los sistemas jurídicos primitivos a los más elaborados, responde al desarrollo cronológico y técnico del Derecho Catalán del momento.

En efecto, inicialmente las formulaciones de esta terminología, expresiva del estar y el permanecer en un lugar, eran exclusivamente formulaciones de una realidad personal: la de los stantes o statores; formulaciones que, participando del carácter del resto de la terminología personal empleada, aparecen en textos altomedievales, y ya durante la Baja Edad Media en textos de los primeros años del siglo XIII.

Seguidamente, esta realidad personal queda plasmada en una noción abstracta y objetiva, etimológicamente derivada de los términos personales aludidos: la de statica o statiga.

Y, finalmente, en un tercer momento, junto a esa noción y designando la misma realidad, se hace uso de otra, igualmente abstracta y objetiva: la de residencia (ressidentia, reçidencia).

de Cathalanus quasi in Cathalonia stans. - La condición de catalán en el Derecho Histórico - ", RJC, t. 77, año LXXVII, núm. 1, 1978, pág. 14.

<u>Textos</u>	<u>Año</u>	<u>Nociones Personales</u>	<u>Nociones Abstracción</u>	<u>Nociones Personales</u>
1. Carta de Población del V. de Porrera	1201	<u>estantibus</u>		
2. Carta de Población de Golmés	1204	<u>statoribus</u>		
3. Carta de Población de Pinell	1207		<u>staticam +</u> <u>vicinaticum</u>	
4. Carta de Franquicias a Martorell	1208	<u>stantes</u>		
5. Carta de Población de Refalgarí	1242		<u>staticam</u>	
6. Carta de Población de Cabanès	1243		<u>residenciam</u>	
7. Carta de Población de Punta de la Ràpita	1251		<u>residenciam</u>	
8. Carta de Franquicias a Cervera	1269		<u>statica +</u> <u>residencia</u>	
9. Carta de Población de Algars	1281		<u>ressidentiam</u>	
10. Carta de Franquicias a Pulgreig	1281		<u>residenciam</u>	
11. Donación de lugar al abad de San Pedro de Rodas	1282			<u>residentium</u>
12. Carta de Franquicias a San Feliú de Guíxols	1287			<u>residentibus</u>
13. Carta de Franquicias a Castellar de N'Huc	1292		<u>residentiam</u>	
14. Establecimiento de Coma Bardina a favor de Pere y Elvira Morell	1294		<u>staticam +</u> <u>residenciam</u>	
15. Carta de Población de Pobla de Lillet	1297		<u>residentiam</u>	
16. Carta de Población a Almatret	1302		<u>recidenciam</u>	
17. Carta de Población de Adar	1314		<u>residencia</u>	
18. Carta de Población de Pobla de Claramunt	1344		<u>residencia</u>	
19. Carta de Población de Savallà	1497		<u>stada +</u> <u>residencia</u>	

En el cuadro anterior (100) puede apreciarse la evolución indicada. De tal manera que la noción statica/statiga aparece como derivación abstracta, de correspondencia exacta a las nociones personales utilizadas en textos algo anteriores; incorporándose, a las redacciones, en un primer momento, en solitario, sin vincularse a otra noción - residencia - aún desconocida por los textos.

Es preciso, asimismo, observar que (al igual que sucediese en el análisis del empleo de las nociones domicilio-domiciliado) la terminología personal derivada de la noción residencia, que se concretaría en el término residente, es empleada, únicamente, con posterioridad a la consolidación del uso de la noción residencia y de manera, en extremo, infrecuente. De suerte que se produce el proceso inverso al sufrido por la incorporación de las nociones stantes-statica; en efecto, en este caso fue el término personal (stantes) el que, tras su consolidación, derivó la abstracción manifestada en el empleo de la noción statica; mientras que es la noción residencia la que atrae, sólo por derivación y con escasa aceptación, un cierto empleo del término residente.

Podría de todo ello inducirse que la terminología personal de carácter fáctico empleada por los textos, sin excepción, supone la expresión del interés en regular y dirigir jurídicamente una realidad en la que lo más relevante es la efectiva habitación y la continuidad y estabilidad en la misma. Este juego de intereses no se ve alterado, sino confirmado, en el hecho de que el proceso jurídico de abstracción conceptual responda a esa misma caracterización fáctica; de ahí que los textos que incorporan la noción de statica/statiga no recojan ya la terminología personal stantes, pero sigan determinando, en sus fórmulas de concesión, el ámbito subjetivo de aplicación del Derecho a través de las nociones personales de hecho populator-habitans-habitator. Y son preci

(100) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, (los textos citados se corresponden, respectivamente con los documentos y páginas siguientes), docs. 213, 218, 222, 401 (Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II), 382, 281, 293, 317, 344, 345, 347, 351, 355, 405 (Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II), 361, 366, 370, 376 y 381; págs. 291-293, 299-301, 306-308, 692-693 (Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II), 574-575, 408-410, 429-431, 467-470, 505-507, 510-511, 515-517, 520-523, 696-699 (Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II), 531-535, 543-546, 549-550, 559-562 y 569-574.

samente estas mismas nociones las que configuran el núcleo personal de vigencia del Derecho Local incorporado por los textos que, para referir se a la misma realidad designada por el término statica/statiga, emplean ahora la noción de residencia. Si se toma en consideración que esta noción comienza a emplearse a mediados del siglo XIII, y que en algunas ocasiones se establece un uso conjunto de los términos residencia y statica (statica, stada), puede explicarse su incorporación en base a la penetración del Derecho Común en Cataluña: en efecto, la residencia vendría a formular un contenido fáctico preexistente, y preformulado con otras nociones directamente surgidas en el nacimiento, contexto y plasmación del Derecho Local. No se trataría, pues, sino de dos diversas expresiones de una misma realidad jurídicamente considerada.

En definitiva, la interpretación del contenido y función de la noción de residencia queda vinculada a una situación de continuidad de las soluciones jurídicas precedentes, en lo que se refiere a la determinación de la extensión subjetiva del Derecho Local y a la caracterización de la situación personal sobre la que tal determinación se asienta.

2. Esta conclusión queda, asimismo, de relieve en el análisis del contenido de los textos que emplean este tipo de terminología.

Así, la Carta de Franquicias que Pedro de Roncada concedió a Puigreig el 28 de julio de 1281 (101) dirige sus privilegios a los pobladores del lugar; y al establecer, como otros muchos textos en otras ocasiones, la garantía de la efectiva población y real asentamiento en el territorio, lo hace a través de la exigencia de establecer residencia: damus, concedimus et confirmamus omnibus illis populatoribus qui venire ad dictum locum de cetero voluerint populatum et fecerint continuam residenciam ibidem ac se fecerint homines proprii Templi.

En el examen del texto de la donación de lugar, perteneciente a la parroquia de San Julián de Fortià, que realizó el conde de Ampurias

(101) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 345, págs. 507-508.

a favor del abad de San Pedro de Rodas el 31 de agosto de 1282 (102), se hace referencia al colectivo personal destinatario de los privilegios incorporados por la donación mediante el empleo de dos términos distintos: habitatores y personas residentes. En efecto, el donante se compromete a no exigir ciertas prestaciones personales ab habitatoribus predicti loci, y a la exención de ciertas cargas patrimoniales sobre los bienes personarum ibi residentium.

Esta misma asimilación y coincidencia de contenidos entre ambas nociones puede apreciarse en la fórmula sancionadora de la Carta de Franquicias que Gilaberto otorgó a San Feliú de Guíxols el 1 de agosto de 1287 (103): Has autem libertates et immunitates damus et concedimus ac concedere intendimus, tantum hominibus et mulieribus habitantibus seu residentibus personaliter in villa predicta.

Igualmente relevante, en este intento de inducir el carácter de la noción de residencia en la determinación de la extensión subjetiva del Derecho Local, es el análisis de la fórmula de concesión de la Carta de Franquicias que Ramón de Urg concedió a Castellar de N'Huc el 28 de agosto de 1292 (104): damus et concedimus... tradimus atque concedimus ... vobis Raimundo Cavallerii et omnibus aliis hominibus et mulieribus et personis in presenti habitantibus et in posterum habitaturis et etiam venientibus ad faciendam residentiam in dicto castro de Castellar et in barriis eiusdem. De esta manera, se procede nuevamente a la asimilación de las nociones de habitación y residencia, como referidas a una misma y única relación persona-territorio.

La Carta de Población que Pedro Arnaldo de Cervera concedió el 29 de marzo de 1314 a Adar (105), emplea una fórmula nominal de otorgamien-

(102) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 347, págs. 510-511.

(103) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 351, págs. 515-517.

(104) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 355, págs. 520-523.

(105) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 370, págs. 549-550.

to, y concreta, sin embargo, la finalidad de la concesión aludiendo a la obligación de construir casas y de hacer residencia personal en el lugar como aspectos singulares y matizados de la acción general que se pretende (la población): pera poblarlo de modo que allí edificasen casas y fesen residencia personal. Además, resulta de interés destacar que a lo largo del texto se hace continua referencia al núcleo personal así configurado, y por ello destinatario de la concesión, mediante el término poblador.

Para finalizar el análisis de los textos que recogen la noción de residencia en las fórmulas directamente expresivas de la delimitación personal del ámbito de aplicación de su Derecho, es preciso acudir al examen de la Carta de Población que el vizconde de Cardona otorgó a Poble de Claramunt el 15 de septiembre de 1344 (106). En efecto, este texto evidencia y confirma que es la actividad pobladora la que determina con exclusividad las condiciones personales de sujeción al Derecho Local. La concesión de esta Carta de Población se produjo, tras la destrucción de la Poble de Claramunt, para proceder a su nueva ubicación y construcción; por ello, la normativa creada por el vizconde de Cardona en su otorgamiento responde a realidades personales diversas: primero, la de aquéllos que habitaban la antigua Poble, segundo, la de aquéllos que acudiesen ahora a poblar la nueva, y tercero, la de aquéllos que habitasen anteriormente el lugar de la nueva ubicación de la localidad de Poble de Claramunt. Para referirse al segundo de estos grupos, el texto establece: També volém y ab plé coneixement establím y concedit que tots y cada un dels forasters que certament no son del nostre domini que vinguin al objecte de poblar la nova Poble, que sían franchs y lliures per deu anys comptadors en avant, desde'l dia que poblarán y comensarán a habitarhi y que sían franchs de tot allotjament, cavalcada y redempcions tinguin lo nom que tinguin, excepció feta de sortir al so. Amés a la vostra humil súplica dalt citada per nos y tots los nostres presents y futurs volém y d'especial gracia a grat sient y a posta concedim a tots

(106) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 376, págs. 559-562.

y à cada un dels habitants y als que poblaràn en la sobre farà en la ja dita nova Pobla que qualsevol d'ells ab tal de que tinga casa ó residencia continua... . De esta manera se equipara, conforme al segundo punto del párrafo transcrito, la condición de todos los que acudan a poblar y habitar, fijando las garantías de la efectividad del asentamiento en la tenencia de casa o el establecimiento de residencia continuada; y se crea, conforme al primer punto del mismo párrafo, una situación jurídica "puente" (cuyo contenido es coincidente con el de disposiciones semejantes, continuamente reiteradas en los textos de la época) para los forasteros que acudan a poblar: se trata de atraer pobladores y favorecer la población (sin fijación de plazos, tiempo mínimo de residencia, o especial condición personal) tal como lo demuestra el que se haga referencia a la aplicación de los privilegios a quien acuda a poblar siendo hombre de otro señor (forasters que no son del nostre domini).

En este sentido, halla explicación, confirmándose además la validez y conveniencia de la vía de interpretación empleada, que en la Carta de Franquicias que el vizconde de Cardona concedió el 10 de octubre de 1269 a Cervera (107), al fijarse a favor de los hombres y mujeres de Cervera la aplicación de privilegios concernientes al régimen de tenencia de ciertas tierras en el término de Tarroja, les eximiese, entre otras de residencia et statica y de vicinali petitione. Efectivamente, los hombres de Cervera, por serlo, tendrían su residencia en Cervera y, también por ello, se hallarían integrados en la comunidad local de Cervera; siendo éste, por tanto, el lugar de su efectivo asentamiento, y ésta la comunidad en que se desarrollan sus efectivas relaciones de vecindad. Su propiedad y posesión sobre tierras de otro término (el de Tarroja) implican la existencia de una relación jurídica de índole diversa a la que condiciona la aplicación de un concreto Derecho Local.

En otro grupo de textos se recoge la noción de residencia en la expresión de una obligación de comportamiento que, estando implícita en las nociones de población y habitación, determina ahora expresamente el

(107) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 317, págs. 467-470.

ámbito de extensión del Derecho creado. En efecto, difícilmente puede admitirse la existencia de un poblador o habitador sin residencia en el lugar que puebla o habita; por ello, la incorporación de la exigencia del establecimiento de residencia no responde, una vez más, sino a la necesidad de garantizar que el Derecho privilegiado cubra los objetivos con que fue creado, mediante su aplicación a quien efectivamente se establezca y arraigue en el lugar.

Así, la Carta de Población concedida a Pinell por Bernardo de Ceguñoles el 15 de marzo de 1207 (108) se dirige a los populatores presentes y futuros del lugar, y recoge por parte de la Orden Templaria un compromiso de protección hacia aquéllos et unusquisque faciatis ibi staticam et vicinaticum. En la medida en que la definición general y reiterada del núcleo personal de aplicación del texto se concreta en torno a la noción de poblador, es preciso interpretar que la exigencia de statica y vicinaticus queda incorporada a la noción de población, constituyendo una expresión fragmentada de la actividad pobladora.

Más clara se revela la obligación de establecer residencia en la Carta de Población de Refalgarí, concedida por Guillermo de Moncada el 13 de mayo de 1242 (109), pues el otorgante ordena a los destinatarios que statigam ibidem faciatis. Y en la Carta de Población que el obispo de Tortosa concedió a Cabanes el 19 de junio de 1243 (110); pues, tras hacer donación del territorio, de forma nominal, a los pobladores presents y, de manera abstracta y diferida, a los futuros, encomienda a aquéllos el establecimiento en la villa de octuaginta populatores qui in ipsa villa hereditatem et suas habeant mansiones, continúa residenciam facientes ibidem. Una vez más se está, por tanto, pretendiendo la efectiva población, a través del establecimiento de garantías del arraigo personal, y del arraigo patrimonial en cuanto expresión del personal.

(108) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 222, págs. 306-308.

(109) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 382, págs. 574-575.

(110) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 281, págs. 408-410.

La inclusión implícita de la obligación de residencia en la condición de los pobladores-moradores-habitadores queda, sin duda, de relieve al analizar el contenido de la Carta de Población que el abad de San Cugat del Vallés otorgó el 9 de mayo de 1251 a Punta de la Ràpita (111). En efecto, el concedente hace donación nominal del territorio para que los donatarios procedan a su población, morada y habitación; de tal manera que las condiciones de la concesión giran en torno a estas tres nociones. Por su parte, los donatarios hacen aceptación expresa de la concesión y de sus condiciones, comprometiéndose, en concreto, a in loco predicto nostram maiorem residenciam faciemus. Así, la necesaria coincidencia entre las condiciones exigidas y las condiciones aceptadas, obliga a afirmar la cercanía conceptual de las nociones, y, en cualquier caso, su idéntica caracterización y su referencia a una misma condición personal.

Expresiva de esta realidad es la norma recogida por la Carta de Población de Algars de 23 de enero de 1281 (112), en virtud de la cual el poblador que cesase en su residencia podría ser sancionado por el comendador por la desposesión de sus bienes raíces y la asignación de los mismos a quien efectiva residencia quisiese hacer: Preterea, volumus quod vos et vestri successoris teneamini semper facere in dicto loco continuam ressidentiam personalem, et ille vel illi qui in dicto non fecerint ressidentiam ut est dictum, comendator Miraveti qui pro tempore esset, possit possessiones et honores quos ipsi ibi haberent et tenerent, aliis ibidem volentibus ressidentiam facere, dare seu etiam assignare. Tal sanción supondría, evidentemente, la imposibilidad de la habitación y la exclusión práctica de la comunidad local.

La asimilación de las nociones analizadas y la necesidad de proceder a su interpretación conjunta, en cuanto indicadores normativos de una misma realidad jurídicamente considerada, vuelve a aparecer cuando el prior de la Cartuja de Scala Dei realiza establecimiento de Coma Bardina a favor de Pere y Elvira Morell el 19 de abril de 1294 (113); pues

(111) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.293, págs.429-431.

(112) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc.344, págs.505-507.

(113) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña II, doc.405, págs.696-699.

el concedente fija un plazo para la construcción y establecimiento de la habitación, obligando a partir de entonces a fijación de residencia y statica: Item addicimus speciali pacto quod hinc ad duos annos prooxime et continue completos feceritis ibidem hospicium ad habitandum ex tunc ibidem facere teneamini vos et vestri continuam residenciam et staticam personalem. Y la misma asimilación se deriva de la redacción de la Carta de Población que Guillermo de Entenza concedió el 21 de febrero de 1302 a los populatores de Almatret bajo condición de que ibi personalem residentiam faciatis et habitetis ibidem (114).

La obligación de residir se concreta, en ocasiones, en la prohibición de abandonar la población y enajenar los bienes raíces sitos en la misma mientras no se haya cumplido un plazo mínimo de residencia y establecimiento. Se trata, por consiguiente, de una disposición encaminada a forzar y garantizar la constitución de una población efectiva mediante la seguridad del establecimiento y arraigo. Así, la Carta de Población que Ramón de Urg concedió a Pobla de Lillet el 13 de Abril de 1297 (115) excluye de la licencia de libre mutación de establecimiento y enajenación a hominibus et mulieribus qui vel que ex locis nostris propriis se populaverint et venirent in dicto loco sive populatione, quos vel quas retinemus nos quod habeant stare et residentiam facere in dicta populatione sive bastida nostra per spatium decem annorum.

Finalizando este análisis, en un intento de síntesis y conclusión de todo lo hasta ahora expuesto, es preciso examinar un texto cuyos contenido y redacción ofrece interés en lo que al empleo de los diversos términos en disposiciones de diferente contenido se refiere: se trata de la Carta de Población que Pedro de Mendoza concedió a Savallá el 7 de abril de 1497 (116). El otorgante expresa la intención de populare el lugar y stabilire allí agricultores. Seguidamente se concretan ambas actividades en base a los siguientes elementos: acudir al lugar, ocupar

(114) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 366, págs. 543-546.

(115) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 361, págs. 531-535.

(116) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 381, págs. 569-574.

allí casa y tierras, y, así, hacer establecimiento de hogar ("foch"-fuego) y residencia: los dits pagesos seran vassalls del dit monestir e ferreran en les dites cases e loch, fosch e stada e continua residencia. Para finalizar considerando y denominando habitant a cada uno de los miembros del colectivo así creado. En efecto, sobre los habitantes recae la posibilidad de permutar entre ellos y sin carga los bienes antes del transcurso de cinco años desde el establecimiento de la normativa de concesión, así como la obligación de transmisión preferente de las tierras a quien fuese, igualmente, habitante en el lugar: negun habitant en lo dit loch de Çavella no guos dexar terras de lauro a nengu que no sie habitant del dit loch e terme sens que primer no sien fadigats tots los del terme e que dins cinch anys contadors del dia que seran firmats los presents capitols puguen permutar ells ab ells lurs propietat o alguna de aquelles. Asimismo a los habitantes corresponde la posibilidad de ser sancionados con la desposesión por no cumplir la obligación de establecimiento: e si dins lo dit temps no feyen foch e stada e continua residencia en tal cas dit senyor abbat e covent purguen stablir dita casa o cases ab sa heretat o heretats a qui ben vist los sera com a cosa propria sens fretureiar de altre retiment o comis ni aprehensio no haventhi just impediment; desposesión que, evidentemente, haría imposible la habitación, sobre todo si se tiene en cuenta que recae directamente sobre la casa, rompiéndose, de este modo, el vínculo primario y definidor de la vinculación personal al territorio y de la pertenencia a la comunidad local (que condicionan, a su vez, el sometimiento al Derecho Local).

3. Esta interpretación en torno a las nociones de statica y residencia, así como las consideraciones realizadas sobre la caracterización de los términos personales stantes-statores, en nada se ven modificadas o matizadas por el hecho de vincular, como se ha venido haciendo doctrinalmente desde otro tipo de investigación (117), el empleo de esta ter-

(117) L. GARCIA DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Madrid, 4ª ed. 1975, pág. 353.

minología a la expresión de la especial relación o "adscripción" que en el sistema feudal catalán unía al colono con la tierra. En efecto, si el empleo de estos términos pueden revelar una concreta relación persona-territorio, no es menos cierto que esa misma relación puede resultar determinante en la fijación del ámbito personal de extensión del Derecho Local. De manera que, independientemente de las obligaciones y derechos que hacia el señor de la tierra y hacia ésta pudiesen vincular en los diversos supuestos a cada ocupante, poblador o habitador, resulta obvia la relevancia que el dato fáctico de la mera ocupación, población o habitación asumió en la determinación de los márgenes de vigencia del Derecho Local.

III. DERECHO LOCAL DE BARCELONA. DERECHO LOCAL DE GERONA.

Los textos extensos de Derecho Local correspondientes a las ciudades de Barcelona y Gerona responden a la estructura y configuración propias de la denominada Cataluña Vieja, durante la Baja Edad Media.

El marco histórico en el que se produjo la evolución jurídica en estos territorios ayuda a concretar los objetivos e intereses a que ésta respondió de forma singular. El paso del Liber Iudiciorum hacia una normativa jurídica de carácter local (118) queda determinado, no sólo por la falta de respuesta de aquel texto positivo a las realidades propias de una sociedad feudalizada (119), sino también, y en contraste, por la consolidación de los primeros intentos de reacción superadora de la estructura feudal. En efecto, la influencia de la Cataluña Nueva (120) y

(118) J.M. FONT RIUS, "Franquicias Urbanas Medievales de la Catalunya Vella", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 11-34.

(119) F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, Barcelona, 1984, págs. XXIII-XXIV (en adelante F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona); J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 15.

(120) J.M. FONT RIUS, "Franquicias Urbanas Medievales de la Catalunya Vella", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 19.

del resto de los territorios peninsulares reconquistados, la influencia de una realidad transformada por el Derecho Privilegiado constitutivo de formas sociales ancladas sobre relaciones de poder mucho menos dependientes, provoca el surgimiento de un Derecho Local intermedio entre la realidad jurídica feudal y la realidad jurídica municipal (121).

1. Los Usatges de Barcelona.

1. Se ha investigado profundamente sobre la procedencia y carácter de los distintos preceptos que integran, en su redacción final, el Código de los Usatges de Barcelona. Sea cual fuere el desarrollo concreto que se proponga para explicar la evolución producida hasta su configuración en 174 disposiciones, lo que resulta evidente es que esa evolución existió, que el texto es fruto de un proceso, que responde a diversos momentos jurídico-históricos, y que ello determina la culminación en un texto legal jurídicamente mixto (122). Es innegable la acción de diversas influencias; así, junto a disposiciones de origen visigótico, aparecen preceptos de influencia franca, regulaciones de carácter feudal, fórmulas derivadas de usos y costumbres locales, o normas de influencia romanista (123).

La primitiva redacción y promulgación de los Usatges de Barcelona se realizaría en el siglo XI (en 1068), bajo el mandato de los Condes Ramón Berenguer I y Almodís. Desde ese momento, y hasta mediados del siglo XIII, el texto sufriría sucesivas adiciones, modificaciones y confirmaciones, hasta adoptar una versión definitiva. Versión que iría adquiriendo progresiva vigencia en las tierras del Principado bajo la autoridad expansiva del Condado de Barcelona, y pasaría a configurar el núcleo fundamental del Derecho General de Cataluña (124).

(121) B. OLIVER, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, vol. II, Madrid, 1878, págs. 16-21 (especialmente la 21).

(122) F. VALLS TABERNER, "El problema de la formació dels Usatges de Barcelona", en Los usatges de Barcelona, págs. 9-17.

(123) J. FERNANDEZ VILADRICH y M.J. PELAEZ, "Prólogo", en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. V-XXXVI.

(124) J. FERNANDEZ VILADRICH y M.J. PELAEZ, "Prólogo", en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. XXVII-XXVIII.

El contenido y sistemática del Código de los Usatges de Barcelona, tal y como hoy se conoce, aparecen fijados conforme a las versiones, latinas o catalanas, formuladas a principios del siglo XV (125).

2. La consideración de este texto en cuanto fuente del Derecho Local plantea un factor diferenciador en lo que al proceso de creación se refiere. En efecto, tanto en este caso como en el de los textos extensos de Derecho Local Medieval de otros territorios peninsulares, ya analizados, existe un origen consuetudinario; pero mientras en los territorios peninsulares examinados el poder reposa en la comunidad local y el acto de sanción real del Derecho Local supone una limitación del poder del rey y el sometimiento de éste a aquél.

De ahí que en el territorio catalán se tendiese a la asimilación entre los ámbitos de vigencia (ya personal, ya territorial) del Derecho Local y el ámbito de la soberanía del Conde. De tal manera que, la extensión de la vigencia del Derecho Local Barcelonés seguirá una vía paralela a la de la extensión de la soberanía del Conde de Barcelona sobre el resto del Principado Catalán (127).

3. Teniendo presentes estos datos y este contexto, halla explicación, no sólo el contenido material del texto de los Usatges de Barcelona, sino también su estructura y sistemática. En lo que a estructura

(125) F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 71-72.

(126) J. FERNANDEZ VILADRICH y M.J. PELAEZ, "Prólogo", en F. VALLS Y TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. VI.

(127) J. FERNANDEZ VILADRICH y M.J. PELAEZ, "Prólogo", en F. VALLS Y TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. XXVII-XXVIII; P.N. VIVES Y CEBRIA, Traducción al castellano de los Usages y demás Derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles, t. I, Madrid-Barcelona, 1861, págs. 3-18 (en adelante, P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña).

se refiere, carece de fórmulas de concesión y sanción, resultando, por tanto, imposible hallar en el propio texto una delimitación general del ámbito personal y territorial de aplicación de su Derecho.

Y en lo relativo a su contenido material, los Usatges de Barcelona incluyen disposiciones de carácter penal, regulación de aspectos procesales, legislación política, preceptos sobre ordenación de las relaciones feudales, y algunas normas sobre relaciones privadas. Tal composición pone de manifiesto: primero, los objetivos eminentemente públicos de la normativa creada; segundo, la práctica inexistencia de un ámbito jurídico-privado, sobre todo en la medida en que los preceptos referidos a relaciones privadas se encuentran profundamente penetrados de aspectos obligacionales de carácter público; y tercero, la ausencia de una normativa sobre organización interna de la comunidad local, debido esencialmente a la escasa relevancia que la consideración de la comunidad local en cuanto colectividad organizada e institucionalizada podía tener en el contexto social, político y jurídico del Condado Barcelonés del momento (128).

4. La materia regulada condiciona y determina, como es obvio, el carácter de la terminología de referencia personal empleada. De esta manera, las nociones recogidas, aluden a la posición ocupada por cada persona en la estructura de la realidad social y relacional del Condado de aquel momento.

Así, en primer lugar, aparecen términos relativos a la condición personal, determinante de la pertenencia a los diversos grupos sociales, diferenciados tanto jurídica como políticamente. Se establece una estructura social jerarquizada, recogiendo, en primer lugar, la distinción general entre hombres nobles (129) y hombres no nobles. Dentro de

(128) J.M. FONT RIUS, "Orígenes del régimen municipal de Cataluña" y "Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal de Catalunya" (especialmente los números 4 y 5), en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 281-560 y 577-597.

(129) Usatges 61, 64, 69, 76, 91, 112, 124, 144, y 145, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 87-89, 91, 93, 98, 105, 108, 116 y 117.

la nobleza se alude a la situación y status correspondiente a los nobles de primera categoría: es decir, a los magnates (130) que detentaban el gobierno del territorio (potestades (131), príncipes (132), conde (133), vizconde (134), comitor (135), vasvassor (136)) y a los altos cargos eclesiásticos (obispos y abades); también queda plasmada la normativa reguladora de la situación y relaciones de los nobles por asimilación, en base a su condición de caballeros (137). Al margen de la nobleza, se hace referencia a la clase social constituida por hombres libres en su condición de ciudadanos (138) y burgueses (139); es preciso señalar, en

-
- (130) Usatges 24, 29, 46, 69, 76, 79, 93, 96, 124, 128, 133, 144, 172 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 81, 85, 88, 91, 93, 94, 99, 100, 108, 109, 111, 116, 131, 138-140.
- (131) Usatges 11, 62, 72, 73, 93, 94, 95, 102, 114, 122 y 123, en F. VALLS, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 88, 92, 100, 102, 105 y 108.
- (132) Usatges 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 91, 93, 96, 102, 121, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 137, 146, 172 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 88-96, 98-100, 102, 107, 108, 110-112, 117, 131 y 139.
- (133) Usatges 25, 80, 142, 172, 173, 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 95, 114, 131, 134, 140 y 141.
- (134) Usatges 23, 25, 80, 93, 122, 142, 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 81, 85, 95, 99, 108, 114, 140, 141.
- (135) Usatges 23, 25, 80, 93, 122, 142, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 95, 99, 108, 114.
- (136) Usatges 10, 25, 80, 93, 122, 142, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 79, 95, 99, 108, 114.
- (137) Usatges 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 25, 27, 29, 31, 44, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 68, 69, 70, 79, 93, 102, 107, 112, 115, 124, 142, 145, 172, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 75-77, 79-81, 84-86, 88, 90, 91, 94, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 114, 115, 117, 131.
- (138) Usatges 10, 112 y 144, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 105 y 116.
- (139) Usatges 10, 56, 69, 102 y 112, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 86, 91, 102 y 105.

este punto, que el empleo de estas dos nociones, como más adelante se destacará, se hace, no por referencia a una relación persona-territorio condicionante del sometimiento al Derecho Local, sino por referencia a un concreto status social derivado de la pertenencia fáctica a una comunidad local (pertenencia fundamentada, por otra parte, en el establecimiento de esa concreta relación persona-territorio); asimismo, el uso del término prohombre (140) hace referencia a la destacada posición que en tal comunidad ocupan algunos de sus miembros.

También constituía una situación socialmente privilegiada la pertenencia a la clase "eclesiástica" (141).

Entre la población libre se incluía, finalmente, a los payeses (142), hombres sin otra dignidad, configurando un grupo social de origen rural y vinculado especialmente, por razón de su trabajo, a la tierra que ocupa; si bien esta vinculación no tenía por qué suponer, al menos en principio, una limitación de libertad, aunque sí el sometimiento a ciertos compromisos obligacionales.

En algunas ocasiones el texto alude a la población no libre mediante los términos esclavo o cautivo (143).

Junto al criterio social, puede constatarse la incorporación, por los Usatges, de otros criterios personales diferenciadores. En es-

(140) Usatges 102 y 115, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 102-106.

(141) Usatges 82, 133, 142, 157, 158, 172, 173, 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 96, 111, 114, 119, 120, 131-137, 139-142.

(142) Usatges 8, 13, 24, 50, 53, 64, 93, 102, 107, 109, 112, 115, 117, 118, 145, 173 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 77, 79, 85, 86, 88, 99, 102-106, 117, 133 y 142.

(143) Usatges 21, 160 y 164, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 78, 120 y 121.

te sentido, el criterio religioso condicionaba el status social de una persona, y convertía al cristiano (144) en súbdito de mejor condición que al judío (145), y a éste que al sarraceno (146).

En base al contenido de ciertas relaciones de servicio, en una realidad feudalizada, algunas normas empujan nociones alusivas a la posición que en tales relaciones se ocupase. Así, aparecen, por ejemplo, los términos batlle (147) y castlan (148).

Igualmente, ha de señalarse la utilización de un criterio de diferenciación personal fundamentado en la participación en una relación jurídica de carácter bien patrimonial bien personal. En la normativa sobre relaciones patrimoniales se emplean, conforme al contenido material propio de la relación, términos como donante o donatario (149), ha de aludirse, especialmente, al uso de la noción de señor (150): cuando

(144) Usatges 13, 51, 64, 123, 129, 133, 137, 164, 171, 173, y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 77, 85, 89, 108, 110, 111, 113, 121, 124, 134-137.

(145) Usatges 11, 51, 64, 75, 129, 164, 171, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 85, 89, 92, 110, 121 y 124.

(146) Usatges 21, 63, 64, 75, 77, 116, 117, 123, 164, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 78, 88, 89, 92, 94, 106, 108, 121.

(147) Usatges 12, 102, 106, 115, 145, 146, 150, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 77, 102, 103, 105, 117, 118.

(148) Usatge 32, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 82.

(149) Usatge 33, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 82.

(150) Usatges 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 57, 67, 71, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 100, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 142, 143, 146, 149, 150, 151, 159, 160, 169, 170 y 173, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 78-79, 90, 93, 95, 96, 97, 101-113, 115, 117, 118, 120, 123 y 132.

se emplea esta terminología, los textos hacen referencia al detentador del derecho de propiedad, si bien, a causa de las singulares relaciones posesorias afianzadas en la sociedad barcelonesa del momento, las vertientes del derecho de propiedad abarcan aspectos jurídico-privados y públicos. Entre las relaciones de carácter personal puede señalarse la existencia de normas sobre relaciones sucesorias, familiares, y de protección, consideradas todas ellas en el texto en sentido amplio y normativamente vinculadas a relaciones jurídico-públicas; así, se hallan referencias a la condición de viuda (151), mujer, (152), marido (153), padre (154), madre (155), padres, hijo, (156), hermano (157), tutor, pupilo (158).

-
- (151) Usatges 147 y 173, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 117 y 133.
- (152) Usatges 40, 65, 108, 110, 111, 112, 138, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 84, 89, 104, 105 y 113.
- (153) Usatges 22, 77, 108, 110, 111, 112, 115, 138 y 147, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 94, 104-106, 113 y 117.
- (154) Usatges 22, 76, 77, 108, 115, 126, 127, 128, 167 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 93, 94, 104, 105, 109, 122 y 138.
- (155) Usatges 77 y 128, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 94 y 109.
- (156) Usatges 31, 40, 64, 76, 77, 101, 109, 115, 126, 127, 128, 138, 147, 167, 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 82, 84, 89, 93, 94, 101, 104-106, 109, 113, 117, 122 y 138.
- (157) Usatge 22, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 79.
- (158) Usatge 115, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 105, 106.

En las disposiciones de carácter penal, así como en aquéllas de cuyo contenido fuese presupuesto una calificación penal, aparece, evidentemente, cierta terminología personal derivada del propio tipo. Así, se recogen nociones como malhechores, bausadores, homicidas, calumniadores, falsificadores, ladrones, adúlteros (159).

En esta misma línea, la normativa procesal introduce nociones personales referidas a la función judicial y a la posición ocupada en las relaciones y acciones procedimentales: juez (160), litigantes (161), testigos (162), defensores (163), acusador (164), acusado (165).

Puede hallarse, también, alguna alusión personal derivada de la actividad profesional u ocupacional desempeñada: mercader (166).

Para finalizar este análisis de la terminología personal aparecida en el texto de los Usatges de Barcelona (en redacción del siglo XV), es necesario señalar el empleo de ciertos términos de carácter indefini-

-
- (159) Usatges 94, 100, 101, 103, 110, 133, 142, 144, 162, 164, 173 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 100-102, 104, 111, 114, 116, 121, 132, 134, 139, 140 y 141.
- (160) Usatges, 7, 28, 80, 88, 144, 160, 165, 167, 168, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76, 80, 81, 95, 98, 116, 120 y 122.
- (161) Usatges 10 y 167, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 76 y 122.
- (162) Usatges 85, 86, 88, 89, 144, 148, 164, 167, 168, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 97, 98, 116, 118, 121, 122, 123.
- (163) Usatge 88, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 98.
- (164) Usatges 85, 88, 89, 90, 144, 168, 173, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 97, 98, 116, 122 y 133.
- (165) Usatges 85, 144 y 170, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 97, 116 y 123.
- (166) Usatge 64, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 88.

do o genérico. En efecto, se utilizan términos como quien, aquél que (167), alguno (168), hombre (169), mujer (170): son términos que, en cuanto designan el ámbito personal de aplicación de cada norma o precepto, han de ser sometidos a un proceso de reinterpretación en base, a veces, a la predeterminación del ámbito subjetivo de vigencia general del texto, y, en otras ocasiones, a la fijación de la extensión del precepto en función del carácter de su contenido material. En algunos supuestos, el proceso de reinterpretación de tales términos no resulta necesario, pues la propia norma establece indicadores que perfilan y completan la noción: por ejemplo, se hace referencia a los hombres de a pie (171) (frente a la noción de caballero), o a los hombres nobles (frente a los no nobles), o a su hombre (por alusión al tipo de relación posesoria y de propiedad que entre dos hombres podía existir en la Barcelona feudal).

(167) Usatges 4, 5, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 82, 91, 134, 154 y 155, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 75, 82-85, 96, 99, 112 y 119.

(168) Usatges 6, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 43, 58, 59, 85, 100, 103, 149, 151, 156, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 173 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 75, 77, 78, 81, 82, 84, 86, 87, 97, 101, 102, 118-121, 123, 133, 134, 137, 138, 140.

(169) Usatges 6, 13, 15, 16, 23, 26, 27, 33, 35, 36, 42, 47, 48, 50, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 75, 76, 84, 93, 101, 102, 104, 105, 114, 115, 116, 122, 126, 128, 130, 133, 135, 137, 145, 150, 151, 163, 165, 172, 173 y 174, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Cataluña, 76, 77, 79, 80, 82-88, 90-94, 96, 97, 100-103, 105, 106, 108-113, 117, 118, 121, 131, 132, 134, 135, 137-139, 141 y 142.

(170) Usatges 22, 133, 163, y 172, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 79, 111, 121 y 131.

(171) Usatges 64, 68, 70, y 112, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, 89, 91, 105.

Puede, por tanto, concluirse que el texto de los Usatges de Barcelona, quizá por sus propios caracteres y objetivos, no ofrece elementos de juicio que permitan determinar los criterios definidores del sometimiento personal al Derecho por él establecido. Se trata de un texto esencialmente ordenador de relaciones de carácter público y de la organización política, en un intento de colocar en la persona del Conde el eje del poder frente a los señores territoriales, da respuesta a "relaciones entre desiguales" regulando de diversa manera una misma situación o relación jurídica dependiendo del status social de sus participantes. Se trata de un Derecho Local, circunscrito a un territorio y pendiente, sobre todo, de regular los aspectos jurídicos diferenciadores en las relaciones de poder entre las personas vinculadas a ese territorio.

La exigencia de esa vinculación persona-territorio en la determinación del ámbito subjetivo general de vigencia de este Derecho resulta evidente, al constatar alusiones personales de referencia general tales como tots los homens estants en lur terra (172), o sos habitants (173), o tots homens...en lur terra estants e de altre loc vinents (174), u homens aquí habitants o de aquí exints (175), o tots homens e fembras de tot lo dit comtat (176). Ahora bien, en qué consistiese y cómo se estableciese esa vinculación es algo que no puede inducirse del contenido y redacción del texto. Sin embargo, y a juzgar por el tenor literal de estas expresiones podría mantenerse, como más probable, la configuración fáctica de la vinculación persona-territorio, en torno a los datos de habitación y asentamiento.

(172) Usatge 63, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág.88.

(173) Usatge 64, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 88-89.

(174) Usatge 64, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, págs. 88-89.

(175) Usatge 145, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 117.

(176) Usatge 172, en F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 131.

5. En la búsqueda de elementos relevantes para una posible determinación de los límites del marco personal de sometimiento al Derecho Local de Barcelona, sólo un precepto (el Usatge nº 10) puede ser destacado. Sin embargo, su importancia resulta, en este sentido, muy relativa, en la medida en que no deriva ni del contexto normativo, ni de su redacción, ni de su contenido material, sino de la posterior elaboración doctrinal.

En efecto, la fórmula empleada por el Usatge nº 10 de los de Barcelona, conocido como "Cives autem": Cives autem et burgenses sint inter se iudicati, placitate atque emendati sicut miles. Ad potestatem vero sin emendati sicut vasvessores (177), se tomó como pretexto para toda una construcción doctrinal sobre la función y contenido de las nociones personales ciudadanos (cives-ciutadans) y burgueses (burgenses-burgesos).

En principio, sin embargo, la interpretación literal, así como la derivada de su contexto histórico y normativo, no plantean problemas. La aparición de los cives y burgenses deriva del nacimiento, en el siglo XI, de los centros urbanos de población; centros que, respondiendo a concretos intereses político-militares, económicos y repobladores, fueron fundados sobre el privilegio y el favor; era preciso fomentar la población en esos centros territoriales, y para ello fue necesario otorgar a sus pobladores seguridades, garantías y beneficios de los que carecían las clases rurales. Así, nació una nueva clase social: la de los cives y burgenses. La consideración de su origen explica que no quepa definir a los ciudadanos y burgueses sino como habitantes de la ciudad y habitantes del burgo, respectivamente (178). La configuración conceptual de tales nociones ha de ser, necesariamente, de carácter fáctico; pues la población, la habitación y el asentamiento de hecho fue-

(177) F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 76.

(178) J.M. FONT RIUS, "Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Catalunya", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 5/9.

ron los objetivos perseguidos en el proceso que desembocó en el nacimiento de esta nueva clase social. Por todo ello, el Usatge nº 10 de los de Barcelona (que, además, forma parte del núcleo inicial, nacido en 1068, de este cuerpo legal) responde a la necesidad de establecer las diferencias procesales e indemnizatorias que, como clase social privilegiada e intermedia entre la nobleza y la payesía, le correspondían (179). El precepto responde, por consiguiente, a la mera consideración de la ciudadanía y la burguesía en cuanto concreta y diferenciada clase social.

Habría de esperarse al siglo XIV para que surjan construcciones doctrinales que pretenden plantear diferencias entre la condición del ciudadano y la del burgués (180); acudiendo en ocasiones a la consideración del origen personal y del nacimiento, o negando, incluso, el contenido de la propia norma, como hizo Jaume Callís, en base al establecimiento de diferencias de clase expresa y textualmente excluidas por el precepto. (181)

(179) De ahí que también el Usatge 56 de los de Barcelona (F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, pág. 86; P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. 1, pág. 253: Costumbre VI del título I del Libro IV) regule el valor del juramento de los burgueses en cuanto prueba, igualándolo al de los caballeros en caso de litigio por valor de 5 onzas o menos, y exigiendo la defensa en batalla, como correspondía a los peones, en supuestos en que junto a los burgueses se incluye a los ciudadanos.

(180) E. ROCA Y TRIAS, "Unde Cathalanus quasi in Cathalonia stans. - La condición de catalán en el Derecho histórico -", RJC, t. 77, año LXXVII, núm. 1, 1978, págs. 9-13.

(181) E. ROCA I TRIAS, "Unde Cathalnus quasi in Cathalonia atans. - La condición de catalán en el Derecho histórico -", RJC, t. 77, año LXXVII, núm. 1, 1978, pág. 11.

El distanciamiento temporal entre la creación de la norma y las construcciones doctrinales aludidas, hace surgir la sospecha de que fue se la formación romanista de los juristas lo que provocase su empeño en buscar o forzar la aparición en Derecho Catalán de instituciones asimilables al origo (182), dotándoles, además y como en Derecho Romano, de relevancia en la determinación del núcleo personal sometido al Derecho de la ciudad. De esta manera se explica que estos autores, teniendo un punto de partida común e indiscutido, como es la primitiva consideración de los ciudadanos como habitantes de la ciudad y los burgueses como habitantes del burgo, hagan derivar sus interpretaciones hacia posiciones diversas uniendo y valorando datos y elementos de diferente carácter, que les conducen a conclusiones sobre la condición de ciudadanía y burguesía que nunca podrían haberse inducido del contenido y expresión del Usatge nº 10 de Barcelona (183).

Conforme al texto parece absolutamente injustificada la afirmación de la existencia de diferencias en la aplicación del privilegio contenido en el precepto, como base en supuestas diversidades de carácter personal en el núcleo de habitantes de la ciudad. Resulta más coherente interpretar que todos los habitantes de Barcelona gozasen del privilegio por razón de territorio, es un privilegio concedido a Barcelona; y es este carácter territorial de la concesión lo que justifica su aplicación a quien tuviese la condición de habitante en el término barcelonés, en base a la concreta relación persona-territorio que se establece en el hecho de la habitación.

(182) M.F.C. SAVIGNY, Sistema del Derecho Romano actual, t. VI, Madrid, 1879, págs. 146-176.

(183) No ha habido oportunidad, en el presente examen, de analizar a fondo la doctrina de aquellos autores. Únicamente se han considerado las referencias y el estudio realizado por la Profa. Encarnación Roca, ya citado; un posterior estudio en profundidad sobre el tema podría llevar a la confirmación o necesaria modificación de la conclusión, siempre provisional, aquí manifestada.

2: Las Costumbres de Gerona.

1. Los intentos privados recopiladores del Derecho Local de Gerona durante la Baja Edad Media tienen sus orígenes en el siglo XIII (184). No obstante, su primera compilación se redactó, más tarde, a finales del siglo XIV (185). Se trata de un texto que recopila e incorpora preceptos procedentes de los siglos XII, XIII y XIV (186); posteriormente, ya durante el siglo XV, se procedió a realizar algunas adiciones normativas, elaborándose nuevas versiones que determinaron que la vigencia del texto se prolongase hasta el momento en que se impuso el cuerpo legal elaborado por Tomás Mieres (187).

Efectivamente, la labor compiladora sólo llega a culminarse por el trabajo que a mediados del siglo XV realizó el citado jurista, Tomás Mieres: se concluye un primer texto en 1430, y se procede a la promulgación de un texto revisado y definitivo en el año 1439 (188).

La diversidad de elementos jurídicos que concurren en el Derecho Local de Gerona, con independencia de la compilación que se considere, responde, como asimismo se comprobó en el examen del Derecho Local Barcelonés, al proceso histórico de influencias y dependencias múltiples que experimentó la Cataluña Vieja durante la Edad Media. Así, junto a elementos jurídicos de origen visigodo, coexisten normas surgidas de la costumbre local de Gerona, o del Derecho de Barcelona, o del sistema jurídico feudal, o del proceso de recepción del Derecho Común (189).

(184) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 5.

(185) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 18 y 33.

(186) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 34-38.

(187) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 37-38.

(188) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 19, 89-92.

(189) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 92-93.

2. La compilación elaborada en el siglo XIV se conoce a través de redacciones recogidas en manuscritos del siglo XV, y puede ser definida con propiedad, y según expresión de Jaime Cots y Gorchs, como un "código feudal" en sentido estricto (190). La normativa en ella contenida se refiere esencialmente a los aspectos jurídicos derivados de las relaciones de poder y dependencia en que la realidad feudal se asentaba. En efecto, los principios informadores de la normativa sobre el régimen y contenido de las relaciones personales feudales impregnan tanto la regulación de carácter público como privado. En este sentido, se establece la organización política del territorio, así como los ámbitos jurisdiccionales; se concretan las obligaciones patrimoniales y personales que caracterizan las relaciones personales dependientes; la concepción feudal del derecho de propiedad exige, en el texto, la primordial regulación de los aspectos jurídico-públicos de cualquier manifestación de las relaciones de propiedad y posesión; también el contenido de la normativa sobre matrimonio, filiación o sucesiones se ve afectado por la estructura e intereses del tipo de sociedad existente, comprobándose la práctica ausencia de contenidos jurídico-privados.

Estas consideraciones explican que la terminología personal incorporada por el texto responda a referencias sobre la condición de la persona, de cada persona, en la estructura feudal, y sobre la posición ocupada en las relaciones y situaciones que se contemplan. Careciéndose, por otra parte, de alusiones al presupuesto general de determinación del ámbito personal afectado por este cuerpo legal; presupuesto cuya expresión hubiera hecho posible clarificar la realidad personal sobre la que tales diferencia se establecían.

Por ello, puede constatarse el empleo de las hasta ahora denominadas nociones personales indefinidas o indeterminadas (qui, aliquis, quilibet, nullus): así como de nociones personales genéricas (persona, vir-homo-masculus, mulier-femina); y de términos referidos a la pertenencia

(190) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 5, 8 y 34.

a una concreta clase social, o a la ostentación de una determinada condición social (nobiles: princeps, comes, vicecomes, miles; por oposición a la condición de los miles o caballeros, se hace alusión a homo de pede; clerigo, prepositus, prior; civis; iuvenis homo; rusticus - pagens); y de nociones expresivas de la posición ocupada en las relaciones personales de servicio (castlan, baiulum); así como de los términos que aluden a la condición personal derivada del establecimiento de relaciones personales dependientes, dentro del sistema feudal de organización territorial y personal (feudatarius, subditus, vassallus); o de nociones referidas a la existencia de una relación jurídica de carácter patrimonial (arrendator-locator, inquillinus; emptor; debitor; fideiussor; emphiteota; possessor; en este punto, es necesario destacar el singular carácter que el derecho de propiedad, su régimen y configuración, adquirió en el sistema jurídico feudal, destacando especialmente sus connotaciones iuspublicistas: dominus, propietaria); y de términos relativos a la participación en relaciones jurídicas de carácter sucesorio (testator, sucesor-heres, testes); así como de nociones referidas a las situaciones familiares contempladas por el Derecho (familia, uxor, maritus, avus, avia, mater, pater, filius, filia, frater, soror, descendentes, ascendentes, parentes); y de las expresiones personales de la posición ocupada en una situación o relación jurídica de protección (viuda, pupillus, tutor); o, por último, de las nociones personales que aluden a la función judicial y a la posición que se ocupa en las situaciones y relaciones jurisdiccionales o procedimentales (iudex, actor, reo, partes, testes).

Aún ante la imposibilidad de determinar, en base a la compilación cuál fuese el marco general de vigencia personal del Derecho Local de Girona, sí debe señalarse que el texto hace continuas referencias a la vinculación persona-territorio al concretar los elementos de aplicación de cada norma. Ello no puede, en absoluto, sorprender si se tiene en cuenta que un código feudal no puede sino ser un código territorial. De ahí que se recojan expresiones como pupillis existentibus et residentibus in parroquia (191), o iuvenis homo ... faciat habitationem (192), o aliquis

(191) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 46 (Cap. III).

(192) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 46, (Cap. IV).

extraneus fecit domicilium suum (193), o la obligación de prestar juramento y homenaje al señor del lugar donde se mora: domini loci ubi moratur (194).

3. La compilación realizada, bajo iniciativa real, por Tomás Mieres en el siglo XV, que se promulgó en el año 1439 (195) con el título "Usantie et Consuetudines Civitatis et Diocesis Gerundae, a libris peritorum et usibus utentium observata et a Thoma Mieres licenciato patrono causarum in unum collectae sub certis titulis. MCDXXXIX" (196), se conoce actualmente en base a las redacciones contenidas en diversos manuscritos de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX (197).

Tomando como base la compilación elaborada en el siglo XIV y recogiendo los mismos elementos jurídicos que ésta en cuanto configuradores del Derecho Local, se procede a la redacción de un nuevo cuerpo legal que, desde la fijación, sistematización y revisión de la normativa, cubriese mejor y con mayor seguridad las necesidades jurídicas planteadas.

El contenido de este texto se corresponde con las materias y relaciones que incorporaba, como ya se ha analizado, la compilación primitiva; por ejemplo, tampoco en el cuerpo legal elaborado por Tomás Mieres se establece una regulación de carácter penal. De esta manera, la

(193) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 78 (Cap. 131.M).

(194) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 86 (Cap. 155 M).

(195) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 91-92.

(196) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 92.

(197) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 119-125.

terminología personal ahora empleada reproduce los contenidos personales que con anterioridad han sido señalados. Sólo es de destacar, en este sentido, la consignación de expresiones personales referidas a la ostentación de un cargo público, tanto civil como eclesiástico: sagiones, ofitiales, scriptores, scriba, notarius, minister, inquisitor, prepositi, prior, prelati, episcopus, vicarius, abbatis; así se pone de relieve el probable aumento de la organización administrativa y burocrática.

También en este caso, el texto repite la consideración de algunas situaciones personales que, referidas a una concreta relación con el territorio, fijan el punto de partida común en el ámbito territorial, tanto en lo que a la concesión feudal de la jurisdicción y la potestas se refiere como en lo relativo al sometimiento personal a ellas. Así, vuelve a aparecer la expresión pupillis existentibus et residentibus (198), o la noción homines locorum (199), u homines de feudo regio vel locorum religiosorum (200), u homines terminis castri (201), o la obligación de prestar juramento de fidelidad y homenaje, por razón de territorio, al señor del lugar donde se mora: domino castri ubi moratur (202); o la expresión omnibus habitantibus in castro (203); o la noción de domiciliatus (204);, o, finalmente, las alusiones a la habitación en expresiones como aliquis extraneus habitaverit in castro alicuius (205);

(198) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929,, pág. 129 (Cap. I, Rúbrica I).

(199) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 145 (Cap. VIII, Rúbrica XIII).

(200) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 171 (Cap. I, Rúbrica XXX).

(201) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 179 (Cap. II, Rúbrica XL).

(202) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 191 (Cap. I, Rúbrica XLIX).

(203) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 180 (Cap. III, Rúbrica XL).

(204) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 161 (Cap. II, Rúbrica XXIII).

(205) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona,

resulta de interés detenerse en la apreciación de los términos empleados en esta fórmula, pues, si se comparan con los utilizados por la compilación primitiva al recoger la misma norma: aliquis extraneus fecit domicilium suum in castro alicuius (206), puede comprobarse, una vez más, la asimilación de contenidos entre la acción aludida por la noción hacer domicilio y la referida por el término habitar, confirmándose de este modo la configuración fáctica del tipo de asentamiento que el domicilio supone.

3. La denominada "cláusula de año y día" en los Derechos Locales de Barcelona y Gerona.

1. En el contexto de la investigación planteada, merece especial atención y mención particular el examen de una disposición que aparece tanto en el Derecho Local de Barcelona como en el de Gerona. Se trata de una norma que, originándose en el Derecho privilegiado barcelonés, aparece contenida en el capítulo LIII de la costumbre de Barcelona conocida como Recognoverunt Proceres, y en el texto de algunos manuscritos de la compilación del Derecho Local de Gerona elaborada en el siglo XIV, así como en el capítulo único de la Rúbrica LV de la compilación gerundense de Tomás Mieres.

En efecto, cuando en enero de 1283 el rey Pedro II concedió a la ciudad de Barcelona el privilegio Recognoverunt Proceres, estableció en su capítulo LIII que:

Item que qualquiera forastero que estuviere en Barcelona un año y un día, se tenga por ciudadano, y no pueda ser reclamado por el señor de cuyo dominio fue oriundo (207).

En la compilación primitiva del Derecho Local de Gerona se reproduce, entre otros preceptos del privilegio barcelonés también incorpora

1929, pág. 133 (Cap. V, Rúbrica III).

(206) Vid. nota núm. 192.

(207) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 72.

dos, esta misma norma. Y en el texto de Tomás Mieres se contiene, en la Rúbrica LV:

Item, quicumque fforensis qui steterit in Gerunde per unum annum et unum diem, habetur pro cive, (et) non potest peti a domino de cuius dominio fuerit oriundus, nisi sibi iuramentum homagie et solidantie prius prestitisset, vel infra annum predicta interpellatus a domino suo fuisset, saltem in capite vicarie iuxta formam generalem constitutionis Catalonie (208).

2. En el análisis de tal precepto la doctrina ha venido inclinándose, sin hacer cuestión de ello, a considerar que esta norma supone una regulación del acceso a la condición de ciudadano, interpretando, seguidamente, que de este acceso depende el sometimiento al Derecho Local (209).

Ambas afirmaciones doctrinales pueden sorprender, habida cuenta los resultados parciales obtenidos de los análisis realizados anteriormente en el presente trabajo. En efecto, y conforme a ello, ninguno de los textos considerados, ni en Derecho Catalán ni en alguno de los Derechos Locales de los territorios peninsulares durante la Edad Media, incorpora una normativa de este tipo, capaz de ser interpretada con semejantes criterios.

En este sentido, es preciso intentar determinar, por otras vías externas al contenido de la propia norma, cuál fuese la función y el significado de la noción de civis en el Derecho Local de Barcelona y en el de Gerona.

3. En primer lugar la fórmula de concesión del Recognoverunt Proceres es categórica al dirigir el privilegio a todos los ciudadanos y habitantes de Barcelona presentes y futuros (210). Asimismo, la compilación del Derecho Local de Gerona realizada en el siglo XIV, al reco

(208) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 193.

(209) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, pág. 118.

(210) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 46.

ger ciertos capítulos de este privilegio barcelonés en algunos de sus manuscritos, lo hace reproduciendo el siguiente epígrafe: Istes generales consuetudines servantur in tota Catahalonia quas confirmavit Dominum Rex Petrus secundus, universis civibus atque habitatoribus Barchinone, et sunt XXI (211). Estas expresiones formulan, claramente, la extensión personal del privilegio sobre la base de criterios territoriales; así, el rey dirige la concesión a la ciudad de Barcelona y, en la medida en que, en principio, ciudadanos no son sino los habitantes de la ciudad, habrá de plantearse cuál es el sentido de añadir a esta noción la de habitantes. Podría, quizá, sostenerse que el término ciudadano se corresponde a la extensión personal en el ámbito territorial de aplicación circunscrito a la ciudad de Barcelona, y que el empleo de la noción de habitante responde al ámbito de vigencia personal referido a la extensión del privilegio al resto del territorio comprendido en el término barcelonés. Sin embargo, el examen del contenido del privilegio inclina a considerar la imposibilidad de su aplicación a la vida de relación rural de carácter feudal de la Barcelona de aquella época, y a sostener su concesión estricta al territorio urbano: a la ciudad de Barcelona (212).

Podría, de otra parte, entenderse que ambos términos aluden a dos colectivos diferentes, pero igualmente incluidos entre la población urbana de Barcelona; considerándose, por tanto, que el ámbito personal de aplicación del privilegio quedaría constituido, con carácter general, por estos dos grupos humanos.

En cualquier caso, por consiguiente, resulta obligado interpretar que el empleo conjunto de las dos nociones en la fórmula de conce-

(211) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona 1929, pág. 71.

(212) En este sentido, ha de interpretarse el recurso al carreratge para convertir a algunos centros de población ficticiamente en carrers (calles) de Barcelona, y así asegurar la aplicación del Derecho de la ciudad barcelonesa. Se trata de una clara manifestación del carácter territorialista de este Derecho y de su estricta aplicación, al menos en principio al territorio urbano barcelonés.

sión exige determinar los requisitos personales de aplicación del privilegio en base al contenido material de la más general de las nociones. En efecto, el carácter eminentemente fáctico y general de la noción de habitante (frente a la más restrictiva de ciudadano) obliga a mantener que el núcleo personal de aplicación de este Derecho Local queda configurado por el establecimiento de habitación. Así se explica que los textos de extensión del privilegio a otros centros de población no constituido en ciudad dirijan la concesión, en su ámbito personal a los habitantes del lugar (213).

4. En segundo lugar, la comparación de ciertas disposiciones en el análisis de ambos cuerpos legales, el barcelonés y el gerundense, hacen sospechar un empleo indiscriminado de los términos ciudadano y habitante al establecer quiénes fuesen los destinatarios de cada norma. Así, es difícil encontrar una explicación coherente a las razones en que se basa la utilización de cada una de estas nociones, atendiendo al contenido material del precepto en que aparecen. Por ejemplo, no se entiende por qué ciertas obligaciones y exenciones tributarias, que, lógicamente y en cuanto obligaciones y exenciones locales, deberían afectar al mismo colectivo humano, recaen a veces sobre los ciudadanos, a veces sobre los habitantes y a veces sobre ambos (214). Tampoco parece justificable que el tratamiento que el capítulo LII del privilegio (215) y el capítulo I de la Rúbrica LVI de la compilación de Tomás Mieres (216)

(213) Un ejemplo de ello es el texto de la concesión que, del Derecho privilegiado barcelonés, hizo a Igualada D. Pedro III el 30 de agosto de 1381 y D. Juan el 20 de diciembre de 1392 (P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 47).

(214) Recognoverunt Proceres, capítulos XXXVII, LXXXIV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XCIII, LXXIX y LXXXIII (P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, págs. 57, 79, ídem. 80, ídem. 82, 78 y 79, respectivamente).

(215) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 72.

(216) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 194.

prestan al delito de injuria corporal a ciudadano de Barcelona o Gerona, no se extienda a todos los habitantes de la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta el carácter territorial de la concesión y el carácter de la norma en cuanto destinada a favorecer a los miembros de la comunidad ciudadana y a proteger el mantenimiento de la paz y el orden en la misma.

Por otra parte, son muchos los preceptos dirigidos a ciudadanos y habitantes, o a ciudadanos o habitantes. En este sentido, resulta de gran interés analizar una disposición que, recogida en el Recognoverunt Proceres y repetida en las Costumbres de Gerona, permite apreciar, mediante la comparación de la redacción y la terminología empleadas en cada texto, la necesaria asimilación de contenido entre la noción de ciudadano y la de habitante:

Capítulo LXXI Recognoverunt P.: "Item que cualquier ciudadano de Barcelona pueda moler su trigo en cualquiera parte que quisiere sin impedimento de alguno, excepto los horneros y panaderos que deben moler en los molinos Reales" (217).

Capítulo I, Rôbrica LVII, Costumbres de Gerona: "Item, quod quilibet cives vel habitator Gerunde, potest molere bladum suum ubicumque voluerit, exceptis fforneriis, flaqueriis, et iudeis, qui debent molere ad molendina regia" (218).

Esta interpretación favorable a la posible identidad de contenido de ambas nociones se ve, igualmente, reforzada al constatar que otras normas, reguladoras de esta misma materia, emplean en un caso el término habitantes y en otro ciudadano:

Capítulo XC Recognoverunt P.: "Item concedemos que en cuanto a harinas se observe a la ciudad y sus habitantes el que puedan llevar y vender la harina en su casa o donde quisieren, sin pagar lezda, y molendo donde quisieren, así como de tiempos antiguos se ha acostumbrado" (219).

(217) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 76.

(218) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 194.

(219) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 81.

Capítulo XCIII Recognoverunt P.: "Item concedemos que cualquier ciudadano de Barcelona pueda vender aceite en su casa, y que ningun medidor de aceite se atreva á vender aceite" (220).

5. En tercer lugar, no puede olvidarse, entre los elementos a considerar en este análisis, que la noción de civis indicaba en el Derecho Catalán del momento una concreta condición social: la de pertenecer a una clase social libre y privilegiada intermedia entre la nobleza y la payesía. Condición social que, además, determinó la configuración de un tercer estamento participante en los procesos de creación y ejecución del Derecho.

Como ya se ha destacado en otra ocasión, el nacimiento de esta nueva clase no responde sino a las motivaciones y objetivos que determinaron la fundación de centros urbanos de población, sobre la base de la ocupación, población y habitación de los mismos. De esta manera, la doble consideración de la noción, en cuanto referida a una concreta relación persona-territorio y en cuanto expresión de la pertenencia a una clase social determinada, queda fundida en la común participación de la acción pobladora y habitadora.

Así, cuando el capítulo C del Recognoverunt Proceres recoge ciertas garantías de procedimiento en las tareas investigadoras que, llevadas a cabo por oficiales reales con motivo de un hecho criminal, recaigan sobre los ciudadanos de Barcelona, está concretando un privilegio por razón de ciudadanía (221). La exigencia de la presencia de un jurisperito y de dos prohombres supone la búsqueda de dos seguridades diferentes: por una parte una seguridad técnico-jurídica y por otra una seguridad comunitaria; apareciendo, por consiguiente, una vez más la relevancia de la pertenencia a la comunidad local en la determinación del sometimiento personal al Derecho Local privilegiado.

Igualmente, y de manera más evidente, el capítulo XXXIX de la Compilación Primitiva de las Costumbres de Gerona emplea el término cives al hacer alusión a un privilegio de clase, en concreto a la exen-

(220) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 82.

(221) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 83.

ción de "intestia" y "exorquia": Sed ista intestia et exorquia ad nobiles, et milites, et cives homines villarum non extenditur (222). El que, además, se emplee la expresión homines villarum parece concretar la igualdad social de los hombres de los centros urbanos, se tratase o no de ciudades; el carácter fáctico de tal expresión aumenta la proximidad de contenidos entre la noción de civis y las nociones personales de hecho reiteradamente consideradas.

Esta proximidad conceptual puede considerarse confirmada al comprobar que el capítulo I de la Rúbrica XLIV de la Compilación gerundense de Tomás Mieres establece la obligación de acudir a hueste y cabalgada dirigiéndose a omnes homines civitatis et vicarie Gerunde cuiuscumque domini sint (223). Igualmente, considerando ahora las relaciones rurales y no las urbanas, el empleo de indicadores fácticos para determinar la sumisión personal al Derecho Local puede constatarse al comprobar que el capítulo V de la Rúbrica III del mismo cuerpo legal extiende los derechos de las clases rurales, que capítulos anteriores establecían, a quien acudiese a habitar en el territorio en condiciones dependientes: aliquis extraneus habitaverint in castro alicuius (224).

6. Puede, pues, concluirse que los textos no recogen disposición alguna de la que quepa inducir que la noción de ciudadano fuese una noción jurídica de carácter autónomo, con contenido y régimen propios. Sí hay, sin embargo, algún precepto que podría suponer el conferir una cualificación a la noción de ciudadano frente a la de habitante, en base a la función y relevancia que la norma le otorga: por ejemplo, el capítulo XLII del Recognoverunt Proceres establece "que los prohombres de Barcelona y los ciudadanos juzgan los hombres en las causas criminales" (225); pero la inexistencia de cualquier otra norma que permita concretar algo

(222) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 58.

(223) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 187-188.

(224) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona 1929, pág. 133.

(225) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. IV, pág. 58.

más esta posible cualificación, impide su admisión, al menos en principio. En cualquier caso, los textos no ofrecen duda sobre la falta de relevancia de la noción de ciudadano como determinante del ámbito personal de aplicación del Derecho por ellos incorporado.

7. Una vez establecidos los presupuestos y dificultades en la interpretación de la noción de civis, se ha de retomar el análisis del capítulo LIII del Recognoverunt Proceres y del capítulo único de la Rúbrica LV de las Costumbres de Gerona en la versión de Tomás Mieres.

Si se colocan estos preceptos en concreta relación, respectivamente, con el Título 32, Libro 4º del Volumen 1º de los Usages de Cataluña (sobre la institución de la redención) (226); y con el capítulo IX de la Rúbrica III (sobre la misma institución) (227) y el capítulo II de la Rúbrica XII (sobre la adquisición de la plena libertad por residencia durante un año y un día en ciudad o villa de Cataluña) de las Costumbres de Gerona (228); ha de concluirse que aquellas disposiciones incorporan, exclusivamente, una norma de prescripción posesoria (229), suponiendo la concreción territorial (para Barcelona y Gerona, respectivamente) de la norma general (para toda Cataluña) contenida expresamente en el capítulo II de la Rúbrica XII de las Costumbres gerundenses de Tomás Mieres.

Tal interpretación resulta, además, coherente con el carácter jurídico posesorio que, desde el Fuero de Jaca de 1064 tuvo la cláusula de año y día; como se comprueba en otras muchas normas de Derecho Local Catalán, por ejemplo el capítulo XVIII de la Rúbrica XIX de las Costumbres de Gerona (230) sobre la relevancia del plazo de año y día en la

(226) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. II, págs. 135-142.

(227) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 136.

(228) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, pág. 143.

(229) E. ROCA I TRIAS, "Unde Cathalanus quasi in Cathaloniam stans. - La condición de catalán en el Derecho histórico", RJC, t. 77, año LXXVII, núm. 1, 1978, págs. 18-20

(230) J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1979, págs. 153-154.

posible pérdida del feudo por el feudatario.

De esta manera, el contenido de ambas normas ha de interpretarse en el sentido de que el señor de cuyo dominio fuese oriundo el ahora residente en Barcelona o Gerona tiene sobre éste un derecho (con redención o no) vinculado, asimismo y directamente, al territorio de su jurisdicción, pero pasado el plazo de año y día desde el establecimiento, en Barcelona o Gerona, el derecho de reclamo prescribe.

Durante ese plazo de año y día, ¿cuál ha sido la situación y el status jurídico del residente? - ha de afirmarse su sometimiento pleno, durante ese tiempo, al Derecho Local de Barcelona o Gerona (231), en la medida en que tal Derecho se dirige a todos los habitantes presentes y futuros de la ciudad. Pero pasado el tiempo de residencia de año y día su condición se consolida, se hace inatacable; y es, precisamente, esta consolidación lo que los textos manifiestan a través de la expresión ha-beatur pro cive, que no supone sino una explicación (entre comas y que perfectamente podría haberse suprimido del texto, como demuestra el hecho de que la inclusión de la conjunción et no apareciese en el texto original, sino que se deba a adiciones de intérpretes posteriores en un intento de facilitar la comprensión de lo que, a su juicio, suponía el precepto), una concreción de la condición de residente (232). De esta

(231) Vid. en una consideración análoga, la interpretación que, en el examen del contenido de los textos breves de Derecho Local Catalán Bajomedieval, se otorgó a la norma sobre la exención de intesta y exorquia concedida a los hombres de Berga en la Conventio de 14 de mayo de 1256. Y la opinión recogida en la nota número 61.

(232) No puede considerarse como argumento contrario a esta tesis interpretativa el análisis del título que, en la traducción castellana de Vives y Cebrià, encabeza el texto del Cap. LIII del Recognoverunt Proceres. En efecto, este autor transcribe el título "Dentro que tiempo se tiene por ciudadano de Barcelona al forastero que permanece en ella", que se corresponde con el título latino contenido en las Constitutions y Altres Drets de Catalunya de 1704.

Pero ha de considerarse que el manuscrito original del Recognoverunt Proceres de 11 de enero de 1284, contenido en el Archivo de Aragón y publicado en la Colección de Documentos Inéditos del ACA

forma, tras la residencia de año y día la integración en la comunidad local de la ciudad y en la clase social correspondiente es plena, y así va a serlo en el futuro mientras se mantenga la habitación en el lugar; si bien, desde el mismo momento del establecimiento en la ciudad el residente ha quedado sometido al Derecho Local, como ciudadano.

Si, por el contrario, ese plazo de residencia no llega a cumplirse, mediante el reclamo del antiguo señor, el residente dejará de estar sometido al Derecho de la ciudad, precisamente porque se verá obligado a abandonar su habitación en la misma.

Por otra parte, y para finalizar, admitir que la condición de ciudadano dependiese de la residencia por año y día no sería coherente ante la ausencia, en los textos, de una normativa paralela sobre aquéllos que no accediesen a la ciudadanía por residencia, sobre aquéllos a quienes el residente se igualaba tras el cumplimiento del plazo. Es decir, no resultaría justificable entender que el texto regula la situación de un ciudadano de peor condición, al menos en lo que a su origen se refiere, guardando silencio sobre la situación de aquellos ciudadanos que se rían de mejor condición, por serlo desde siempre. Es preferible, por ello, considerar, en el contexto de los cuerpos legales analizados, que no existían ciudadanos de diverso origen o de diversa situación, en lo relativo a la aplicación del Derecho Local, porque la circunstancia fáctica de la habitación les igualaba a todos.

(vol. XLIII, Barcelona, 1971, págs. 11 y 12), no recoge en su texto la disposición del cap. LIII como capítulo aparte, apareciendo la norma sin título alguno.

Por consiguiente, la incorporación del mencionado encabezamiento no corresponde al texto original, sino que se debe a alguna adición realizada por algún compilador o comentarista posterior.

(Debemos la aportación de estas referencias sobre el tema a la gentileza del Prof. Dr. Tomás de Montagut i Estragués, de la Universidad Central de Barcelona. Conste aquí, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por su colaboración e interés).

IV. DERECHO LOCAL DE LERIDA. DERECHO LOCAL DE TORTOSA.

Una vez más se hace preciso acudir a la distinción entre la realidad bajomedieval de la Cataluña Vieja y la de la Nueva, para poder centrar los rasgos y contenidos caracterizadores de la evolución jurídica en este territorio en aquel tiempo (233). En efecto, la reconquista de los territorios de la Cataluña Nueva se produce bajo condicionantes y circunstancias muy diferentes a los que influyeron en la constitución y organización de los núcleos de población de la Cataluña Vieja.

Tras un prolongado sometimiento al Islam y en un contexto jurídico histórico más cercano, en algunos aspectos, a otros territorios peninsulares que al resto de Cataluña, las poblaciones de la Cataluña Nueva son incorporadas al dominio cristiano a mediados del siglo XII, en un momento de progreso económico, social y jurídico. No era posible, ya, así, similar la situación jurídica y organizativa de estos centros de población al sistema semi-feudal aún imperante en los territorios de la Cataluña Vieja; y ello, no sólo porque la realidad de partida respondiese a un estadio más avanzado, sino también porque para favorecer la inmigración desde otras zonas de Cataluña era preciso ofrecer a los nuevos pobladores condiciones que mejorasen su status de origen (234).

Así, los textos de Derecho Local, tanto los breves como los extensos, de la Cataluña ahora reconquistada se dirigen y adecuan a una realidad compleja, en la que concurren factores de diverso carácter; factores que, a su vez, condicionan el contenido normativo de aquellos textos, recogiendo y regulando, junto a un sistema municipal fortalecido, ciertos aspectos e instituciones derivados del sistema jurídico y político de la Cataluña Vieja; no podía ser de otra forma dada la pre-

(233) P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, t. I, págs. 7-9; J. COTS Y GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929, págs. 11, 12; J.M. FONT RIUS, "Franquicias urbanas medievales de la Cataluña Vella", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 13-14.

(234) J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 55-57; J.M. FONT RIUS, "La comarca de Tortosa a raíz de la Reconquista cristiana (1148)", en la obra citada, págs. 75-76.

sencia de numerosos repobladores procedentes de aquella tierra, así como el sometimiento al dominio de un mismo soberano.

1. Las Costumbres de Lérida.

1. La reconquista de Lérida fue llevada a cabo por los Condes Ramón Berenguer IV de Barcelona y Ermengol VI de Urgel en octubre de 1149.

Esta responsabilidad militar compartida, no sólo por estos dos soberanos sino también por alguna otra potestad, supuso que, aunque Lérida y su término fuesen incorporados al Condado de Barcelona, el dominio del territorio se ejerciese de forma compartida: se establecen distintos señorios jurisdiccionales, ejerciendo la soberanía directa el Conde de Barcelona y el dominio feudatario el Conde de Urgel. La unificación bajo el poder de la Corona no se producirá hasta el siglo XIII, por obra del monarca Jaime I (235).

Esta situación de sometimiento múltiple, a través del establecimiento de fórmulas feudales de regulación del poder público, condiciona la forma de gobierno de la ciudad y el término de Lérida. Así, la ciudad queda dirigida y gobernada por oficiales cuyos cargos se duplicaban de conformidad con el poder de elección y designación del Conde de Barcelona y el de Urgel, respectivamente (236).

2. Las condiciones de repoblación de Lérida, así como la organización y régimen jurídico de la ciudad y sus habitantes, quedan establecidos conforme a la Carta de Población concedida en enero de 1150 por los soberanos conquistadores. Se trata de un estatuto jurídico cuyo contenido incorpora un verdadero Derecho privilegiado, tanto respecto a

(235) J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 57.

(236) J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 57.

las personas como las cosas, y afronta la regulación de aspectos de Derecho Privado, Penal y Procesal. Este texto constituirá la base de todo el Derecho Local de Lérida durante la Baja Edad Media (237).

En efecto, este cuerpo legal altomedieval, cuya normativa, superiora del sistema feudal, surgió bajo una influencia jurídica múltiple (Derecho Visigodo, Derecho Germánico, Derecho Franco y Derecho Local), reguló la vida ciudadana durante más de 70 años e inspiró el nacimiento de nuevos elementos jurídicos consuetudinarios. En estas condiciones se llega a una situación en que la necesidad recopiladora, unificadora y sistematizadora de este Derecho Local se hace imperiosa (238).

Producto de este proceso de formación jurídico-positiva será la elaboración, y promulgación en el año 1228, de las "Consuetudines Ilerdenses" por el jurisconsulto local Guillermo Botet. Es un texto extenso de Derecho Local que, participando de las mismas influencias jurídicas que el cuerpo legal primitivo y reproduciendo sus principios y contenidos fundamentales, incorpora, además, disposiciones posteriores y elementos procedentes de la práctica local consuetudinaria, de los Usatges de Barcelona y de Derecho Romano-Canónico (239).

El análisis del contenido de este texto puede realizarse gracias al conocimiento que de él se tiene actualmente, en base a manuscritos procedentes de los siglos XIV y XV.

3. El examen general de la redacción y contenido de las "Consuetudines Ilerdenses" aporta un primer elemento destacable: los textos aparecen redactados en primera persona del plural, siendo los propios

(237) J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 59-63 y 70.

(238) J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 62-73.

(239) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 7-9.

destinatarios de las normas los que formulan la concesión y contenido de cada uno de los preceptos. Así, el Libro Primero, en su número I, reproduce el contenido de la Carta de Población de 1150, formulando la redacción no desde el origen personal de la potestad concedente de la normativa, sino desde los sujetos que por su vinculación e integración en el territorio quedaron sometidos a ella. De tal manera que mientras el texto de 1150 establece que ... ego Raimundus, comes Barchinonensis ..., et ego Ermengaudus, comes Urgelli..., donamus vobis omnibus populatoribus et habitatoribus sive statoribus Ilerde civitatis tam presentibus quam futuris... totam civitatem Ilerde... . Etiam damus vobis totum territorium civitatis Ilerde,..., cum omnibus terminis et pertinentiis, ... per cartas nostre donationis, per alodium proprium..., cum prole et sine ea,..., ad dandum vel vendendum sive impignerandum quibuscumque velitis, exceptis militibus et sanctis (240); el de 1228 incorpora el mismo contenido mediante la siguiente formulación: Donat nobis comites Barchinone et Urgelli totam ciuitatem Illerdensem cum omnibus terminis et pertinenciis suis et totum territorium pre proprium alodium sicut dabunt eas nobis per cartas donacionis sue cum prole et sine ea, ad uenduntum dandum uel impignorandum cuilibet exceptis militibus atque sanctis (241).

De la comparación de estos dos textos, y en lo que a la determinación de su ámbito personal de aplicación se refiere, ha de concluirse que el pronombre personal nobis, empleado en la redacción de 1228, hace referencia directa, en cuanto destinatarios de la norma, a omnibus populatoribus et habitatoribus sive statoribus Ilerde civitatis tam presentibus quam futuris.

Esta asimilación interpretativa queda plenamente confirmada a lo largo del análisis del contenido de esta versión bajomedieval de la Carta de Población de 1150, en base a la constatación de dos datos diferentes. En primer lugar, son varios los preceptos en los que, como en el

(240) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, págs. 129-132.

(241) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 19, (Libro I, I, II).

caso anterior, puede apreciarse el empleo de nociones personales fácticas por el texto altomedieval, mientras la versión del siglo XIII incorpora el pronombre nobis en lugar de aquéllas (242). Y, en segundo lugar, junto a tales preceptos aparecen otras normas que en ambas redacciones determinan su ámbito personal de aplicación sobre idénticos indica-

-
- (242) Así, al regularse el pago al curia, en los casos de litigios por deudas ante éste, del correspondiente a la tercera parte de la cantidad adeudada según lo establecido en el pleito, en el texto de 1150 se dice: Si quis vero fuerit debitor aut fideiussor alicui habitatori vel statori Ilerde et ad terminum noluerit eum paccare, si clamor de eo venerit ad curiam, cogatur debitor ille vel fideiussor totum ei reddere debitum, et tatum curie de suo proprio dare, quantum fuerit tertia pars illius debiti (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, pág. 131); mientras que en el mismo precepto el texto de 1228 establece: Si quis fuerit nobis debitor aut fideiussor, et in termino nolit paccare, si clamor venerti ad curiam de illo cogatur totum et reddere debitum, et tantum de suo proprio curie dare quantum fuerit illius debiti pars tertia (P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 21-22).

Igualmente, al fijar la asunción, por parte de los príncipes otorgantes, del compromiso de observancia del texto y de protección de los habitantes de Lérida, el texto de 1150 establece: Et nos prescripti comites Barchinonensis et Urgellensis, convenimus vobis omnibus habitatoribus Ilerde omnia suprascripta tenere firmiter et attendere bona fide sine vestro engan, et manutenebimus et defensabimus corpora vestra, et omnia vestra in omnibus locis maris et terre ubi potentiam habeamus contra omnes homines et feminas sicut nostros propios atque karissimos homines (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, págs. 131-132); mientras que en la redacción de 1228 puede leerse: Promitunt quidem nobis prefati principes prefata omnia firmiter observare et corpora nostra et omnia nostra ubicumque possint defendere et manutenere contra omnes personas sicut suos propios atque homines karissimos (P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 23).

Finalmente, al exponerse la promesa de los destinatarios de este Derecho privilegiado de guardar fidelidad a los soberanos concedentes y a la ciudad, en el texto de 1150 se dice: Et nos omnes pariter populatores atque statores Ilerde civitatis, maiores et minores, convenimus vobis senioribus nostris, Raimundo comiti Barchinonensi et Ermengaudo comiti Urgellensi, quod ab hac die in antea simus vobis fideles in omnibus directis, iustitiis vestris, bona fide et sine aliqua fraude nobis scientibus, et quod adiuve-

dores de hecho; por ejemplo ambos textos permiten a habitori Ilerde el establecer prenda sobre los bienes del deudor o el fiador cuando el curia no quiera o no pueda ejecutar sobre aquéllos (243); y asimismo, se alude a la posible solución pactada, previa y en su caso excluyente de la actuación del curia, en supuestos de injurias y daños entre habitatores Ilerde (244).

Consiguientemente, es preciso concluir que la vigencia que el texto de Guillermo Botet reconoció a la normativa creada por la Carta de 1150, implica la continuidad de soluciones en lo que a la fijación del ámbito personal de aplicación de la misma se refiere. Las nociones personales determinantes del sometimiento al Derecho Local no sólo siguen manteniendo el carácter fáctico, sino que además son textualmente reproducidas: habitatores Ilerde. Esta conclusión presenta gran relevancia en el intento de interpretar otras nociones personales empleadas en el resto de los preceptos de las "Consuetudines Ilerdenses", en la medida en que éstas, en cuanto cuerpo legal único, han de dirigirse con carácter global a un único colectivo humano.

4. Las restantes normas de este cuerpo legal, todas ellas posteriores cronológicamente a los preceptos originarios de la Carta de Población de 1150, incorporan dos nociones personales especialmente relevantes. Se trata de los términos civis y vicinus.

mus vos tenere et conservare civitatem et villam Ilerde, secundum posse nostrum (J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, pág. 132), mientras que la redacción de 1228 establece que: Similiter nos promittimus dominis dictis quod simus iuvemus eos servare et tener civitatem Ilerde secundum posse nostrum (P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 23).

(243) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 22 (Libro I, I, XII); J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, pág. 131.

(244) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 32, (Libro I, III, XXI); J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, pág. 131.

Un examen detenido de los preceptos que incluyen la noción de ciudadano revela en su empleo una doble función. Pues el término aparece, en unas ocasiones, haciendo referencia a la pertenencia personal a la comunidad local de Lérida y, en otras, indicando la condición personal privilegiada que se deriva de la inclusión en la nueva clase social burguesa. Podría señalarse que, en cualquier caso, ambas referencias aluden a distintos aspectos de una misma y única realidad, en la que la segunda de las condiciones personales aludidas depende y deriva de la primera; en la medida en que, como puede apreciarse claramente en el contenido de la Carta de 1150, el nacimiento de una nueva clase social libre y urbana responde a los objetivos y necesidades cubiertos por la creación de estos núcleos urbanos de población.

Cuando, en el prólogo de la obra, Guillermo Botet introduce y explica las razones y el desarrollo del proceso recopilador, alude a la iniciativa y opinión favorable a la realización del proyecto compartidas por muchos ciuium Illerdensium; igualmente, en este mismo contexto introductorio, el autor se refiere a ciues nostri (245). De esta manera, se hace incuestionable la existencia de una comunidad de ciudadanos, comunidad que, además, era local porque era Illerdensis; destacándose, asimismo, las relaciones nacidas entre sus miembros a través del empleo de un adjetivo posesivo: nostri; y con ello vuelve a surgir, en este momento y en este texto, la idea de que las nociones personales que impli-can una vida de relación (uicinus, ciuis) están haciendo referencia simultáneamente a la comunidad en la que se vive y al territorio origen y soporte de su formación e institucionalización.

La misma conclusión puede alcanzarse tras el análisis de un precepto de contenido específicamente comunitario y especialmente privilegiado. En efecto, la norma X del número IV del Libro Primero (246) recoge amplias exenciones tributarias concedidas a los hombres de Lérida, ya en sus personas ya en sus bienes; y establece, por otra parte y como

(245) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 17.

(246) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 36-37.

si de un contrapeso se tratase, en su segundo párrafo una obligación inexcusable para omnes ciues de apoyarse, socorrerse y defenderse mutuamente, contribuyendo a todos los gastos y servicios comunes en proporción al patrimonio personal. Se trata en realidad de una norma especialmente privilegiada porque configura uno de los aspectos más relevantes en la constitución de la casa burguesa: la exclusión de muchos tributos que gravaban a las clases rurales, más o menos dependientes; en segundo lugar, aparece como una norma específicamente comunitaria por regular con carácter general las obligaciones personales y patrimoniales que com prometían a los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad local. Este segundo aspecto adquiere especial relevancia en una primera consideración de la noción de ciudadano, pues al incorporarse esta terminología a la regulación de tales obligaciones pero no a la de las exenciones tributarias, y en base al propio carácter del contenido jurídico de ambos párrafos, convendría inclinarse hacia una configuración amplia y no estricta de la noción; pareciendo más defendible la hipótesis de que la ciudadanía no implicase una cualificación sobre la habitación, de que los ciudadanos no constituyesen una élite entre los residentes-habitantes, sino una formulación específica (en razón del lugar de habitación y de los privilegios derivados del asentamiento) de la condición de habitante en ese centro de población. Otra interpretación no explicaría coherentemente la realidad social de la ciudad, pues no resultaría justificable que, por ejemplo, los gastos de obras comunitarias (o comunales) recayesen exclusivamente sobre una parte de los habitantes: los ciudadanos.

El precepto número IIII del Libro Segundo (247) incorpora una norma, en virtud de la cual se tendrá por convicto y confeso a quien, habiendo matado o herido a ciuem Ilerdensem, no se presentase en el plazo de diez días tras haber sido reclamado por pregón en la ciudad. El texto no recoge ninguna norma que, paralelamente a ésta, regulase el mismo supuesto cuando la víctima fuese un no ciudadano; si bien sí se

(247) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 40.

establecen consecuencias jurídicas diversas para un mismo supuesto homicida según la víctima fuese miles o rusticus (248). Y, en efecto, esta consideración adquiere relevancia en la medida en que en Derecho Medieval la regulación sobre penas e indemnizaciones en casos de homicidio es un indicador preciso de las valoraciones desiguales, ya personales ya territoriales, entre los hombres; y por esa razón, tales normas resultan especialmente representativas a la hora de determinar los factores de diferenciación en lo que a la aplicación personal del Derecho se refiere. De ahí que pueda considerarse que el precepto ahora examinado añade un factor más a favor de la igualdad jurídica de todos los habitantes de la ciudad ante el Derecho Local, considerando que a éstos se refiere el texto cuando alude a ciues; en efecto, se trata de una norma destinada a garantizar el orden ciudadano y a asegurar la imposición de una pena al agresor de uno de los miembros de la comunidad local (ciuen Ilerdensem).

Con un mismo sentido, relacional, ha de ser interpretado el texto que prohíbe el establecimiento de relaciones de dependencia, personal o patrimonial, características del sistema feudal entre los hombres de Lérida. Así, en el número VIII del Libro Segundo se establece: Statutum est, quod ciuis noster non recipiat ad hominem conciuem suum, nec ab eo censum recipiat uel tributum nisi pro re ad censum data (249). Puede apreciarse, en un primer momento, el empleo del adjetivo personal noster, que, unido a la noción de ciuis, hace referencia a la participación en la misma condición de miembros de la comunidad local ciudadana, y, en un segundo momento, la utilización de la noción de conciuis representativa de esa misma realidad común en una implicación relacional derivada de la integración en el mismo grupo humano, organizado e institucionalizado. Por otra parte, y poniendo en relación el contenido material del precepto con las nociones personales empleadas en el mismo, ha de afirmarse una vez más que el empleo del término ciudadano responde a

(248) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 71.

(249) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 41.

contenidos materiales privilegiados y constitutivos de la nueva clase social libre formada por los habitantes de centros urbanos, ciudades o villas.

Esta alusión a la condición social es la que implica, asimismo, la referencia que a los ciudadanos hace la norma L del Libro Segundo (250), en cuanto estamento participante, junto al clero y la nobleza, en Curia General constituida cerca de Lérida por el rey D. Pedro. Y lo mismo sucede cuando el precepto 125 del Libro Tercero establece que los ciues et burgenses serán creídos por, sólo, juramento, sin recurso a las distintas pruebas de desafío judicial (torna), en litigios cuya cuantía no supere los X morabetinos (251), se trata del reconocimiento y regulación de ciertos privilegios procesales que, en base a la dignidad y honor propios de la clase social a la que pertenecían, correspondían a los ciudadanos y burgueses; de ahí que el mismo precepto aluda, posteriormente, a las distinciones que en la materia venían aplicándose consuetudinariamente según se tratase de miles o pedon (252). Y por ello, el número 128 de este Tercer Libro (253) toma, en este mismo tema, como punto de partida un status de igualdad entre todos los ciudadanos de Lérida, en cuanto miembros de esa nueva clase social burguesa; pero sobre ese plano de igualdad pueden concurrir circunstancias personales (de ocupación, de patrimonio) que, sin modificar la condición ciudadana, afecten al valor personal conforme al cual se establece la torna (permitiendo hablar, por ejemplo, de inferiores ciues).

5. Con la consideración de la norma 106 del Libro Tercero (254)

(250) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 51.

(251) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs.60-61.

(252) Vd. también el Usatge 56 de los de Barcelona (F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona, p. 86), asimismo recogido en la cost. VI, Tit. I, Libro IV de los Usages de Cataluña (P.N. VIVES Y CEBRIA, Usages y demás Derechos de Cataluña, pág. 253).

(253) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs.61-62.

(254) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs.53-54.

se abre el análisis de los supuestos en que aparece la noción de uicinus. En efecto, este precepto establece las líneas generales de la competencia judicial del curia de la ciudad de Lérida; estableciendo las especificidades jurisdiccionales propias del clero, de los caballeros, y de los sarracenos. Pero el párrafo de mayor interés, a los efectos del presente estudio, es aquél en virtud del cual Uicini uero milites si habeant hic possessiones, et habemus causam cum eis, coguntur sicuti alii ciues in omnibus respondere. Cabe, efectivamente, una interpretación de la norma plenamente coherente con las conclusiones parciales que sobre las nociones de ciudadano y vecino se han apuntado con anterioridad, en otros supuestos; así los vecinos caballeros, de la ciudad de Lérida, son ciudadanos precisamente por ser vecinos de la misma. La vecindad revela una situación de asentamiento en el territorio y de integración en la comunidad local, de manera tal que la exigencia de la titularidad posesoria en el lugar actúa, no sólo como una garantía procesal, sino también como una prueba objetiva del asentamiento. Así, la condición de ciudadano deriva de esa misma situación de integración, social y territorial; y la mención a la condición social de miles carece de relevancia local-ciudadana, en la medida en que todos los ciudadanos quedan igualmente sometidos al Derecho Local, no aludiendo la condición social de caballero sino a privilegios estrictamente de clase, sin vínculos territoriales. En conclusión, la noción de ciuis en cuanto referida a una consideración personal de carácter territorial-local, y al margen de sus consideraciones estrictamente sociales, opera en el contexto jurídico local como una noción de contenido similar a la de uicinus de la ciudad.

El texto contiene una norma que, al igual que sucede con la interpretación de normas similares en otros cuerpos legales, por recoger una cierta definición de la noción de vecino ha venido siendo doctrinalmente interpretada como delimitadora del ámbito personal de vigencia del Derecho Local. Ciertamente, tal interpretación responde más a la consideración de criterios actuales que a fundamentaciones derivadas del sistema jurídico al que pertenecen y responden las "Consuetudines Ilerdenses" de 1228. En efecto, el número XXXVIII del Libro Segundo establece:

Uicinus noster est, qui iurauit nostram uicinitatem, et in exercitu iuit, et in comune mitit de omni mobili suo et possessionibus quas hic habet, et manet hic, et tenet domum, et facit ignem, et tenet uxorem et suam familiam. Si uero non habet uxorem, faciat hic ignem et totum uicinaticum et habeat hic maius capud suum (255); puede apreciarse que, partiendo de una expresión personal de carácter relacional: uicinus noster, el texto configura la noción de vecino sobre datos fácticos esencialmente: (la posesión, la permanencia, el fuego u hogar, la familia, el centro de vida e intereses). Se trata, por consiguiente, de elementos que en la práctica configuran, constituyen y aseguran el asentamiento y la residencia; y que en la letra de la ley actúan como meros indicadores que objetivan la real existencia del asentamiento y la residencia.

Pero, conceptualmente ¿dónde podría encontrarse la diferencia entre esta noción de vecino y la noción de habitante? - parece que, en principio, sólo existiría una distinción etimológica, en virtud de la cual, y refiriéndose ambas nociones a una misma realidad personal, el término habitante recogería una expresa referencia al territorio y el término vecino incorporaría una alusión expresa a la comunidad constituida sobre aquel territorio.

Avanzando algo más es preciso plantear la posibilidad de que la hipotética cualificación de la vecindad frente a la habitación se halla se contenida en las expresiones iurauit nostram uicinitatem, in exercitu iuit, y faciat hic...totum uicinaticum.

En lo relativo a la jura de la vecindad ha de cuestionarse cuál fuese el compromiso que de ese juramento se derivaba y cuál el contenido de la vecindad que daba nombre al mismo. El texto de las "Consuetudines Ilerdenses" no regula, directa o expresamente, la prestación y contenido del juramento, ni siquiera vuelve a hacer mención al mismo a lo largo de su normativa; únicamente puede hallarse una aproximación a la solución de esta cuestión mediante el análisis del compromiso formulado

(255) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs.53-54.

y manifestado por los destinatarios de la Carta de Población de 1150 (256), y reiterado en el Libro Primero, número I, norma XVII del texto de Guillermo Botet (257). En efecto, los populatores atque statores illerde civitatis realizaron, en la fórmula de aceptación de la Carta a ellos concedida por los condes de Barcelona y Urgel, un compromiso de doble vertiente (258): por un lado, prometían fidelidad a los soberanos, y, por otro, aseguraban el cuidado y defensa de la ciudad de Lérida y su término (en una fórmula cercana a la delegación, en el sentido de que los pobladores parecen adquirir el compromiso de servicio al soberano en un encargo específico: el cuidado y defensa de Lérida, lugar a ellos confiado por el señor del territorio en su calidad de pobladores residentes); esta misma promesa, realizada por sus antecesores, vincula a los posteriores habitantes de Lérida, y por ello aparece recogida en el texto local de 1228. En este sentido, parece adecuado interpretar que el contenido de esta primitiva promesa constituye, asimismo, el compromiso adquirido en el "juramento de vecindad" aludido en la norma XXXVIII del Libro Segundo del texto bajomedieval. Tal interpretación se revela, además, coherente con la regulación que de este tipo de juramento hace, y el carácter que al mismo otorga, el texto de las Costumbres de Tortosa, como más adelante se comprobará; pues en el cuerpo legal tortosino la jura implicaba el compromiso de establecer residencia en Tortosa y de guardar fidelidad al soberano y a la ciudad, así como la afirmación del nuevo vecino de no acudir a Tortosa buscando la defraudación de los derechos sobre él adquiridos con anterioridad por otra potestad; este intento de evitar el fraude parece también aludido en la Carta de Población de Lérida de 1150, cuando en la fórmula de promesa examinada los pobladores se comprometen a guardar fidelidad a los soberanos sine aliqua fraude nobis scientibus.

(256) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 79, pág. 132.

(257) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 23.

(258) J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre els Drets in Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 63 y 69.

De esta manera, puede concluirse que el juramento de vecindad no supone sino la expresión formal de las obligaciones personales que, en cuanto miembro de una comunidad local, vinculan al residente. En efecto, la condición de vecino depende del establecimiento de la residencia, son vecinos de Lérida los que allí han fijado su habitación efectiva. El juramento no condiciona la adquisición de la vecindad, y, en la medida en que supone la aceptación y compromiso del sometimiento a una nueva potestad local en razón del asentamiento en su territorio, sólo habrán de realizarlo los nuevos residentes; pues, tras el momento de la repoblación inicial, carece de sentido su exigencia con respecto a los que habitan la ciudad "desde siempre".

En lo que al servicio en el ejército (in exercitu iuit) se refiere, la norma XXXVIII del Libro Segundo de las Costumbres de Lérida no plantea cuestión alguna, porque la obligación de hueste y cabalgada en el Derecho Medieval de todo el territorio peninsular vinculaba al súbdito con el soberano en base al establecimiento de la habitación.

Por último, tampoco pueden deducirse del texto datos concluyentes que permitan determinar el contenido de la expresión faciat hic... totum uicinaticum; si bien, acudiendo a los elementos, ya destacados, extraídos de otros textos de Derecho Local de la misma época, podría considerarse que, sea cual sea el contenido concreto de la noción uicinaticus, el término alude probablemente a las obligaciones ya personales ya patrimoniales que vinculaban al miembro de una comunidad local por el hecho de serlo. Únicamente en otra ocasión aparece empleada esta terminología en el texto ilerdense, pero con un sentido evidentemente distinto; efectivamente, el precepto XLIII de este mismo Libro Segundo (259) utiliza la noción al aludir al conjunto de villas que constituyen el término de Lérida. Por consiguiente, puede destacarse una primera consideración, en virtud de la cual habría de otorgarse a la expresión, al menos, dos acepciones: una de carácter personal referida a un cierto comportamiento o una concreta forma de estar en la comunidad humana local, y otra de carácter estrictamente territorial relativa a la

(259) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 49.

configuración "vecinal" del término municipal.

En los demás supuestos en que este cuerpo legal emplea el término vecino lo hace, reiterando el esquema ya constatado en el análisis de otros muchos textos, bien con carácter relacional aludiendo a las situaciones jurídicas derivadas de los contactos establecidos entre quienes comparten la condición de miembros de la comunidad local, bien en relación a la identificación individual o aislada de cualquiera que ostente tal condición frente al extraño.

6. En definitiva, ha de señalarse que el examen de este texto a los efectos de determinar la cualidad personal condicionante del sometimiento al Derecho en él contenido, ofrece dos elementos relevantes. En la primera parte del texto la determinación del ámbito personal de aplicación de la normativa gira, indudablemente, en torno al hecho de la habitación. Posteriormente, y a lo largo del desarrollo normativo realizado, la noción de habitante desaparece, para dar paso al empleo de otras nociones personales susceptibles de cierta definición jurídica. No hay, sin embargo, ni un solo precepto que pueda indicar que esas nociones sustituyen a la de habitante en lo que se refiere a la delimitación del núcleo personal de vigencia del Derecho; existiendo, por otra parte, elementos de análisis suficientes para justificar la caracterización fáctica de las nociones de ciudadano y vecino, en torno, igualmente, al hecho de la habitación.

De esta manera, resulta coherente con la interpretación del sistema jurídico dibujado en las "Consuetudines Ilerdenses" sostener que las nociones personales habitante, ciudadano y vecino responden, quizá a momentos diferentes de la evolución jurídica del lugar, y aluden, sin duda, a aspectos diversos, a facetas distintas, de una misma realidad y condición personal, configurada en todo caso sobre el eje de una relación fáctica entre la persona y el territorio. De ahí que la noción de extraño aparezca, en el texto, como contrapuesta a la de habitante, en unas ocasiones, o a la de ciudadano, en otras, o a la de vecino, finalmente.

No se trata, no obstante, de negar categóricamente una posible formulación bajomedieval, al menos en el contexto del cuerpo legal aho-

ra analizado, de un concepto jurídico autónomo de ciudadano o de vecino (aunque parezca improbable); sino de afirmar, sin lugar a duda, que, aún en el supuesto de que esa construcción conceptual existiese, ni la ciudadanía ni la vecindad entrañan y configuran criterios jurídicos de conexión de la persona con el Derecho Local.

7. Para finalizar, señalar que el resto de la terminología personal incorporada en el texto responde al planteamiento y regulación de las relaciones, situaciones e instituciones jurídico-materiales contempladas. Así se reproduce el esquema general tantas veces señalado; utilizándose nociones personales indefinidas o indeterminadas (quis, qui, aliquis, nullus, nemo (260)); así como nociones personales de carácter genérico (personas (261), homines (262), vir (263), femina (264), mulier (265)), o ciertos términos referidos a la condición personal derivada de la pertenencia a una clase social determinada (princeps (266), comites (267), nobiles (268), miles (269), obisopus, sanctis, religiosis,

(260) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 21, 22, 32-36, 41-47, 49-51, 54, 58-61, 63, 68, 70.

(261) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 23, 28, 54 y 60.

(262) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 23 y 27.

(263) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 22 y 74.

(264) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 22 y 63.

(265) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 63, 66 y 70.

(266) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 23, 27, 28 y 30.

(267) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 26, 28, 29 y 69.

(268) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 30, 31, 51, 53, 54, 59, 70 y 71.

(269) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 30.

clericus (270), civis, (271), rusticus (272)); y nociones que aluden a la posición personal ocupada en una relación de servicio de carácter público, incluyéndose en este apartado las referencias a la ostentación de cargos públicos, referencias que, en comparación con el contenido de otros textos examinados, experimentan un aumento considerable, revelador de la existencia de un aparato de poder más estructurado e institucionalizado (señor (273), castlan (274), vicarius (275), baiulus (276), consul (277), consiliari (278), singuli (279), potestad (280), officiales (281), saiones (282), scriptor (283)); así como cierta terminología referida a la existencia de relaciones generales de dependencia política (rex (284), subditus (285), dominus (286)); o términos que definen la participación en una relación jurídica de carácter patrimonial (fideius-

(270) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 31, 51, 53, 70 y 72.

(271) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 41, 51, 60-62.

(272) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 57, 61, 71.

(273) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 20.

(274) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 20, 28 y 29.

(275) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 20 y 35.

(276) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 20, 27, 31 y 74.

(277) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 29, 30, 39, 41, 50, 57 y 72.

(278) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 29.

(279) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 30.

(280) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 34.

(281) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 34.

(282) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 50.

(283) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 45.

(284) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 29 y 30.

(285) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 34.

(286) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 23, 29, 30 y 74.

sor (287), debitor (288), emphiteota (289), creditor (290), venditor (291), revenditor (292), possessor (293), dominus (294): indicando la relación jurídica de propiedad, en algunas ocasiones con matices propios de la institución feudal de la propiedad); así como nociones personales que aluden al establecimiento de una relación jurídica de carácter sucesorio (heredes (295)); o términos personales propios de la existencia y funcionamiento jurídico de la institución familiar (uxor (296), mulier (297), maritus (298), familia (299), filia familias (300), filium (301), matrimonio (302)); y nociones que aluden a una relación jurídica personal de protección (pupilo, tutor (303)); o términos referidos a la pertenencia a una concreta confesión religiosa, pertenencia de la que derivan diferencias jurídicas de carácter personal (sarraceno (304), judío (305), cristiano (306)); y nociones relativas al desempeño de una cier-

-
- (287) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 21, 27, 39, 54, 55, 59, 70 y 71.
- (288) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 21, 27, 39, 40, 54, 60, 69, y 71.
- (289) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 31, 64, y 65.
- (290) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 39, 40, 46, 51, 59, 62, 64, 66, 68-71.
- (291) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 42 y 45.
- (292) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 43.
- (293) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 62.
- (294) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 25, 26, 31, 32, 42, 47, 54, 57, 64 y 65.
- (295) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 67.
- (296) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 22.
- (297) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 64.
- (298) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 64.
- (299) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 38.
- (300) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 65.
- (301) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 66.
- (302) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 65.
- (303) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 62.
- (304) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 54, 59, 62 y 71.
- (305) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 59, 60, 62 y 71.
- (306) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 59.

ta profesión u oficio (macellum-macella (307), carnifex (308), molendinum (309), hostalerius (310), corredor (311), pictor (312)); o términos personales referidos a la función judicial, o similar, y a la posición que se ocupa en situaciones y relaciones jurisdiccionales y procedimentales (homo clamas et veniens (313), iudex (314), testes (315), querelantis (316), conquerens (317), actor (318), advocatus (319), condempnatus (320), convictus (321), reos (322), procurator (323), accusator (324), accusatus (325), arbitrator (326)); y nociones relativas a la calificación personal del tipo penal (raptor (327); violatores pacis et treugue et lese magestatis (328)); y finalmente, algunas nociones referidas direc-

-
- (307) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona 1946, pág. 32.
 (308) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 43.
 (309) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 44.
 (310) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 47.
 (311) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 48.
 (312) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 49.
 (313) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 24 y 51.
 (314) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 31, 34, 40, 41, 51, 54-58, 60, 61, 64, 67, 68 y 70.
 (315) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 41, 56, 58, 61-63 y 66.
 (316) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 51.
 (317) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 54.
 (318) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 54-58, 60 y 70.
 (319) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 57.
 (320) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 66 y 68.
 (321) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 66.
 (322) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 34.
 (323) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 67.
 (324) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, págs. 71 y 72.
 (325) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 71.
 (326) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 56.
 (327) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 66.
 (328) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 34.

tamente a la configuración, organización y funcionamiento de la comunidad local institucionalizada (universitas (329), probi homines civitatis (330), prudentum virorum (331))

2. Las Costumbres de Tortosa.

1. El Conde de Barcelona Ramón Berenguer IV reconquistó Tortosa en el año 1148. Aunque parece que la localidad recibió, casi inmediatamente, Carta de Población, la concesión del verdadero estatuto jurídico de la ciudad no se produjo hasta el 30 de Noviembre de 1149 (332); es este texto jurídico de la Carta de Población de Tortosa de 1149 el que se otorgó, asimismo, a Lérida, conquistada con posterioridad a Tortosa, en 1150.

Como ya se ha señalado con anterioridad, la realidad de las ciudades de Tortosa y Lérida en el momento de su conquista era muy similar; y, paralelamente, también guardaron gran semejanza sus procesos de incorporación y organización bajo el dominio cristiano.

Los pactos militares que desembocan en la toma de Tortosa, obligaron al conde barcelonés a organizar la ciudad bajo un poder diversificado. Se establecieron diversos señoríos jurisdiccionales, eclesiásticos y laicos, en el término; y la ciudad se configuró en señorío compartido por la Orden del Temple y la Casa de Montcada, hasta la recuperación del poder pleno por la Corona en el siglo XIII (en el año 1294 por el Monarca Jaime II) (333).

(329) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 57.

(330) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 72.

(331) P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, pág. 74.

(332) J.M. FONT RIUS, "La comarca de Tortosa a raíz de la Reconquista cristiana (1148)", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 79.

(333) J.M. FONT RIUS, "La comarca de Tortosa a raíz de la Reconquista cristiana (1148)", en Estudis sobre els Drets i Institucions Local en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 81-87.

Será esta compleja distribución del poder, delimitada, además, por el ejercicio de la soberanía condal y por la presión de una comunidad municipal fuerte, la causa de prolongados conflictos jurisdiccionales, que determinaron un proceso jurídico bajomedieval más lento que en Lérida. En efecto, si bien Lérida fue jurídicamente tributaria del Derecho Local Altomedieval de Tortosa, vivió aquélla una evolución más rápida y unánime que ésta hacia la elaboración bajomedieval de un texto jurídico local extenso.

2. La Carta de Población de 1149 otorgaba a la ciudad cierto poder jurisdiccional, enmarcado en una autotutela judicial de los derechos y relaciones jurídicas de sus miembros. Esta concesión se oponía, abiertamente, a las pretensiones señoriales de la Orden del Temple, especialmente, y de la Casa de Montcada, defensoras de una estructura jurídica de dependencias feudales (334). Así, el desencadenamiento de los conflictos entre la ciudad y sus señores no se hizo esperar; desde finales del siglo XII se vive una situación permanente de tensión, con intentos de solución mediante el recurso a diversas vías: desde autorizados dictámenes (el del Rey Pedro I en 1199), o intervenciones arbitrales (la del Obispo de Lérida en 1241), que cristalizó en la denominada "Sentencia de Flix"), hasta mediaciones papales (las de Urbano IV y Gregorio X) (335).

Ante el fracaso de todos los intentos realizados, se optó por recurrir a una solución estrictamente local del pleito, a través de los contactos directos entre las partes litigantes. Tal acuerdo quedó plasmado en la "Composició d'en Gallart de Josá" de 1272, que contiene un reconocimiento básico de las funciones judiciales de ambas partes y preve la redacción por escrito de las costumbres y privilegios vigentes

(334) J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa" en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 145-147; J.M. FONT RIUS, Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa, en la obra citada, págs. 164-167.

(335) J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa",

en la ciudad (336). La elaboración de esta compilación fue llevada a cabo por los juristas locales Pere Tamarit y Pere Gil, finalizándose el 28 de noviembre de 1272; este texto de las "Consuetudines Dertuse civitatis" fue examinado, en cuanto proyecto básico, por una comisión mixta que concluyó su trabajo por sentencia de 15 de mayo de 1277. En base a la labor aportada por la comisión, se procedió a una redacción definitiva del Derecho Local, aceptada por todos, que entraría en vigor antes del año 1279 bajo la denominación de "Llibre de les Costums de Tortosa" (337).

Se trata de un cuerpo legal de mayor perfección científica y técnica que el resto de los textos jurídicos hasta ahora examinados. Su contenido incluye aspectos de Derecho Público y Privado; apreciándose en su formulación material, junto a la normativa propiamente tortosina, influencias de Derecho Visigótico, de Derecho Local de la Cataluña Vieja, y de Derecho Común (338).

3. El análisis del texto de las Costumbres de Tortosa revela un contenido jurídico de gran desarrollo, en el que las instituciones, procesos y relaciones se regulan con mayor precisión terminológica y delimitación conceptual.

Esta riqueza se manifiesta, asimismo, en la inclusión de definiciones jurídicas de nociones personales; siendo este extremo el que mayor relevancia adquiere en el marco del presente estudio. La gran aportación de este cuerpo legal radica, por consiguiente, en la posible interpretación del juego, función y significado que tales nociones incor-

en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 147-152; J.M. FONT RIUS, "Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa", en la obra citada, págs. 167-174.

(336) J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 155-161; J.M. FONT RIUS, "Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa", en la obra citada, págs. 182-186.

(337) J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, p. 156-159; J.M. FONT RIUS, "Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa", en la obra citada, pág. 182-186.

(338) J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa", en Estudis so-

poran en la delimitación del ámbito personal de aplicación del "Llibre de les Costums de Tortosa".

El examen ha de centrarse en torno a tres términos: vecino, ciudadano y habitador, cuyas definiciones legales aparecen contenidas en los números XIII, XIV y XV, respectivamente, de la Rúbrica IV del Libro I (339).

El número XIII establece que todo hombre extraño que quiera ser vecino de Tortosa podrá serlo, cualquiera que fuera su lugar de origen, sin necesidad de especial prestación, personal o patrimonial, a hombre o potestad alguna. Sólo se le exige prestar fianza de que no pretende el acceso a la vecindad tortosina con objeto de defraudar el cumplimiento de ciertas obligaciones previas, que pudiesen vincularle con algún otro señor; así como la prestación del denominado "juramento de vecindad".

Al juicio de los ciudadanos que se encontrasen, a la sazón, en la Corte correspondía la admisión del extraño al trámite del juramento e incorporación como vecino; sin que cupiese atender a la oposición de cualquier otro hombre o potestad. Fijado el día y la hora del juramento, éste se realizaba ante la Corte revistiendo gran solemnidad y formalismo.

El nuevo vecino colocaba sobre el Libro Sacramental una señal, como fianza, que correspondía a los Sayones de la Corte; el juez, ciudadano, receptor del juramento comunica solemnemente al nuevo vecino que no contará con los privilegios derivados del respaldo y protección de la Ciudad y sus Señores con respecto a sus actuaciones y relaciones anteriores, y que, sin embargo, a partir de la prestación del juramento quedará bajo el amparo propio de la organización y Derecho de Tortosa al

bre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 159-161.

- (339) B. OLIVER, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, vol. IV, Madrid, 1881, págs. 31-39 (Libro I, Rúbrica IV "Del Offici de l'Escriua de la Cort").

igual que el resto de los vecinos; y le pregunta si jura establecer su mayor residencia (estatge) en Tortosa, y guardar fidelidad a la Señoría y ciudadanos de Tortosa.

Prestado juramento, en estos términos, sobre los Cuatro Evangelios, el nuevo vecino goza de todas las franquicias y libertades de los otros ciudadanos de Tortosa. Finalizado el acto de la jura, el interesado puede solicitar del Escriba de la Corte la inscripción de su nombre, como vecino, mediante pago de una señal, en el Libro de la Corte; registro que hacía prueba pública de la condición de vecino.

En el segundo párrafo de este mismo precepto se establece que todo hombre extraño que acuda a Tortosa y allí contraiga matrimonio con hija de algún ciudadano o habitador, o ciudadana de Tortosa o sus términos, estableciendo seguidamente aquí su residencia (estatge), será tenido por vecino de Tortosa. Y, sin necesidad de juramento alguno, goza de igual condición que los otros ciudadanos o habitantes de Tortosa; beneficiándose de todas las franquicias de la ciudad y de todas las libertades que a los ciudadanos de Tortosa corresponden; sin quedar obligado a más prestación que aquélla que vincule a los otros ciudadanos de Tortosa.

En el número siguiente, la costumbre XIV de la citada Rúbrica, puede leerse: Ciutada es dit qui es nat en Tortosa o en sos termes. Atressi; es dit o es ciutada tot altre hom qui en la Ciutat o en sos termes aura estat o habitat per X ans o pus. Estableciéndose en su segundo párrafo que estas tres últimas categorías de ciudadanos (por matrimonio, por nacimiento, por residencia) no han de prestar juramento de vecindad, al que sólo quedan obligados los hombres extraños que quieran ser vecinos de Tortosa.

A continuación, el número XV define al habitador como todo hombre que de corazón y voluntad quiera establecer en Tortosa o sus términos su casa o habitación, haciendo aquí su mayor estatge y su mayor residencia.

El examen y consideración de estas tres normas (340) manifiestan que, a pesar de la triple terminología empleada (vecino, ciudadano, habitador), el texto únicamente contempla dos categorías personales diferentes. En efecto, del contenido del segundo párrafo de la costumbre XIV se deduce la asimilación entre las nociones de vecino y ciudadano; en la medida en que se alude a cuatro maneras de acceso a la condición de ciudadano, de las cuales sólo una requiere el juramento de vecindad.

Podría, por ello, distinguirse entre dos grupos de miembros de la comunidad local de Tortosa: los ciudadanos (vecinos, ciudadanos), por un lado, y los habitantes, por otro. Pero, esta distinción que parece tan evidente en la letra de la norma ¿qué contenido material ofrece?, ¿responde realmente a la coexistencia de dos status personales diversos en el seno de la comunidad local? De la respuesta que se dé a los interrogantes planteados dependerá la fijación de los límites del ámbito personal de aplicación del Derecho contenido en el "Llibre de les Costums de Tortosa"; siendo necesario, para ello, recurrir al análisis del empleo que de las tres nociones hace el contenido normativo del texto.

Considerando, en primer lugar, el texto de la costumbre XIII de la Rúbrica IV del Libro I, puede apreciarse una cierta confusión terminológica derivada del empleo indiscriminado, al menos en apariencia, de las nociones. Así, tras prestar juramento de vecindad, el nuevo vecino goza de igual condición que el resto de los vecinos y se beneficia de aquellas franquicias y libertades que disfrutaban los otros ciudadanos de Tortosa. Y, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de este mismo precepto, el extraño accede a la condición de vecino de Tortosa tanto si contrae matrimonio con hija de ciudadano de Tortosa como si lo hace con hija de habitador en Tortosa o en sus términos, y aquí establece su residencia. De esta manera, el texto parece reconocer iguales derechos a vecinos, ciudadanos y habitantes, reconociendo, por lo tanto, igual condición y status a unos y otros. Por otra parte, si en

(340) B. OLIVER, op. cit., vol. II, Madrid, 1878, págs. 35-40.

el acceso a la ciudadanía por matrimonio igual condición transmite el ciudadano de Tortosa que el habitador en ella, habrá de afirmarse que ambos participan de la misma condición jurídica.

4. Esta misma interpretación podría explicar el empleo que en el texto se hace de la noción de vecino. Son pocas las normas que incorporan este término personal, que en el contexto parece asumir dos acepciones diversas, aunque conectadas. En unas ocasiones hace clara referencia a la cercanía, identificando al vecino con aquél que vive en los alrededores, con aquél junto al que se habita, y con quien, por razón de esta proximidad, se establecen relaciones de carácter jurídico. En otras ocasiones, la noción parece identificar al miembro de la comunidad frente al extraño. El término es utilizado con esta segunda acepción, especialmente, en preceptos sobre competencia judicial y procedimiento; así, el número XXXI de la Rúbrica I del Libro III (341) alude a las querellas interpuestas por hombre extraño contra vecino de la Ciudad; y el número XIII de la Rúbrica II del Libro VII (342) regula el procedimiento de mandamiento judicial dirigido al demandado ausente, distinguiendo entre el supuesto de que éste sea vecino de la Ciudad o extraño (es decir, hombre que hace su residencia - estatge - en otra tierra); igualmente, la costumbre XXII de la Rúbrica V del Libro VIII (343) otorga al ciudadano o vecino de Tortosa la posibilidad de pignorar sobre bienes de hombre extraño, cuando, tras la solución de un pleito por deudas, se produzca la negativa por parte de la Corte de aquel lugar de donde el hombre extraño sea Ciudadano o habitador a dar curso a la solicitud de ejecución. En otro orden de cosas, el número II de la Rúbrica IX del Libro IX (344) establece que todo vecino o ciudadano de Tortosa y de su término, que quiera ser Escribano en Tortosa, acuda a

(341) B. OLIVER, op. cit., vol IV, Madrid, 1881, págs. 104-113.

(342) B. OLIVER, op. cit., vol IV, Madrid, 1881, págs. 309-310.

(343) B. OLIVER, op. cit., vol IV, Madrid, 1881, pág. 340.

(344) B. OLIVER, op. cit., vol IV, Madrid, 1881, pág. 382.

la Corte y sea examinado por el Veguer y por los Ciudadanos, que estuvieran en aquella hora en la Corte, y si se encuentra que fuese conveniente, jure allí en presencia del Veguer y de aquellos Ciudadanos, estableciéndose a continuación en la costumbre número VII (345) la separación del cargo de escribano de la Corte por traslado de residencia (estatge) a otro lugar.

Señalando, además, que la Carta de Población de 1149 establecía con carácter general la competencia judicial local sobre los habitadores Tortose (345), y que la costumbre número IX de la Rúbrica I del Libro I (347) del texto local extenso lo hace sobre ciudadnas e'ls habitants de la ciutat de Tortosa et del terme; ha de afirmarse, en atención a todos los datos examinados, que la condición de vecino de Tortosa se hace depender exclusivamente de la residencia en el lugar. De forma que tanto los ciudadanos como los habitantes de Tortosa serían vecinos, en la medida en que todos ellos fuesen residentes en Tortosa.

En este planteamiento habrá, por consiguiente, de interpretarse que el procedimiento de acceso a la comunidad local contenido en la costumbre XIII de la Rúbrica IV del Libro I, supone una exención de la obligación de residencia actual; bien en base a razones de interés de la propia comunidad, enjuiciadas por los ciudadanos de la Corte, pero bajo condición de asumir en juramento el compromiso de establecer residencia habitual en Tortosa en adelante; bien por razón de matrimonio con mujer miembro de la comunidad local, y, asimismo, bajo condición de establecer residencia habitual en el lugar. Así, este procedimiento implicaría, no el acceso a la vecindad (a no ser en la medida en que implica el acceso a la residencia), sino una de las formas de adquisición de la ciudadanía.

(345) B. OLIVER, op. cit., vol. IV, Madrid, 1881, pág. 384.

(346) J.M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña I, doc. 75, págs. 121-124.

(347) B. OLIVER, op. cit., vol. IV, Madrid, 1881, págs. 10-19.

5. También el análisis de las normas que incorporan la noción personal de ciudadano muestra un doble empleo del término, fijándose dos posibles funciones y utilizaciones legales de la noción. En muchas ocasiones a lo largo del texto, y casi siempre en un empleo conjunto con el término habitador, la noción aparece determinando el ámbito personal de aplicación del Derecho Local de Tortosa. En otros casos, la noción se emplea directamente vinculada a las funciones jurisdiccionales asumidas por la Corte de Tortosa, aludiendo expresamente a los miembros de la comunidad local que en cada momento formaban parte de la misma y realizaban funciones judiciales y administrativas, ya compartidas con el Veguer ya sin presencia de este oficial delegado del soberano(348).

En lo que se refiere a la primera de las acepciones mencionadas, tresson los elementos de análisis tendentes a una caracterización fáctica de la noción. En primer lugar, un argumento histórico derivado del hecho de que el núcleo personal de aplicación de la Carta de Población de Tortosa de 30 de noviembre de 1149 quedase, indudablemente, configurado en torno al establecimiento de habitación; creándose un colectivo humano fuertemente privilegiado, en su condición, en el conjunto de omnibus habitatoribus Tortose. En segundo lugar, el recurso al contenido material de los preceptos que emplean en el texto de 1279 la noción, revela que, por coherencia de la normativa, habrá de entenderse que al menos en algunos supuestos, el término ciudadano hace alusión a cualquier miembro de la comunidad local; así, cuando la costumbre V de la Rúbrica IV del Libro III (349) establece que si algún hombre extraño tiene pleito con algún ciudadano, y no tiene abogado ni lo puede encontrar, la Corte y los Prohombres se lo dan o se lo hacen dar, con que él lo pague, es preciso asimilar el término ciudadano con la referencia a cualquiera que quedase sometido a la autoridad de la Corte de Tortosa, en cuanto juez natural, es decir, a cualquier miembro de la comunidad local tor-

(348) J.M. FONT RIUS, "Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal", en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 642.

(349) B. OLIVER, op. cit., vol IV, Madrid, 1881, págs. 114-116.

tosina (ciudadanos y habitantes). En tercer lugar, aún en el supuesto de que pudiese considerarse la existencia de alguna diferencia sustancial entre las nociones de ciudadano y habitador, habrá de afirmarse la extensión a todos los residentes en Tortosa de cada una de las normas que aparecen destinadas a los ciudadans e'ls habitants de la ciutat de Tortosa et del terme, pues el carácter general y fáctico del término habitador frente al término ciudadano obliga a considerar que esta noción queda asumida o contenida en aquélla a los efectos de delimitar la vigencia personal de la norma. Por otra parte, y aunque el texto no ofrece datos concluyentes al respecto, cabría plantearse la posibilidad de que las normas que ofrecen una construcción paralela de los indicadores persona-territorio, que se concreta en la formulación ciudadano/habitador-ciudad de Tortosa/término de Tortosa, estén haciendo referencia a todos los habitantes de Tortosa mediante la distinción entre ciudadano como habitante de la ciudad y habitante como residente en cualquier lugar del término municipal de Tortosa; y así, se concretaría una distinción espacial, pero no cualitativa, entre ambas nociones personales.

En lo que a la segunda de las acepciones del término ciudadano se refiere, son muchos los preceptos que incluyen claramente la referencia a estos ciudadanos miembros de la Corte de Tortosa como miembros sobresalientes de la comunidad local, recurriendo incluso en muchas ocasiones al empleo de letras mayúsculas. Por ejemplo, cuando la costumbre, anteriormente citada, número II de la Rúbrica IX del Libro IX establece que todo vecino o ciudadano de Tortosa y de su término, que quiera ser Escribano en Tortosa, acuda a la Corte y sea examinado por el Veguer y por los Ciudadanos, que estuvieran en aquella hora en la Corte, y si se encuentra que fuese conveniente, jure allí en presencia del Veguer y de aquellos Ciudadanos (350), incorpora un doble empleo de la noción acudiendo a grafías diversas: ciudadano, al aludir al miembro de la comunidad local contemplado por el presupuesto de la norma, y Ciudadano, al aludir al miembro de la Corte de Tortosa. En este sentido, el término

(350) Vid. nota número 343.

Ciudadano se asimila a la noción tradicional de Prohombre, como lo demuestran, entre otros, el texto de la propia Carta de Población de 1149 (351) y el contenido del número V de la Rúbrica IV del Libro III de la redacción de 1279. (352)

En esta línea interpretativa, los supuestos de ciudadanía recogidos en las costumbres XIII y XIV de la Rúbrica IV del Libro I serían los condicionantes del acceso a la Corte de Tortosa. Concluyéndose, de esta manera, que la distinción entre las categorías personales ciudadano y habitador responde, en estos casos, a la referencia a dos status personales internos diferentes, a dos formas de pertenecer a la comunidad local, suponiendo la primera de ellas una cualificación (basada en la búsqueda por diversas vías de la garantía del arraigo, personal y patrimonial) sobre la segunda; pero careciendo de relevancia en la determinación del ámbito subjetivo de aplicación del Derecho Local, que continua fundamentándose en criterios de asentamiento fáctico.

(351) J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa" en Estudis sobre els Drets i Institucions Locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, pág. 144.

(352) Vid. nota número 348.

Conclusions

I. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXPRESAN LA VINCULACION DE LA PERSONA CON LOS DERECHOS LOCALES.

1. Población, habitación y moranza en el lugar. Los hombres del lugar.

A) Población.

1. La noción de población aparece en los textos de Derecho Local Medieval incorporando la más importante de las nociones personales determinantes del ámbito de aplicación de la normativa en ellos creada. No podía, en realidad, ser de otra manera, pues los textos de Derecho Local encuentran su origen y su propia razón de ser en la acción pobladora, o mejor repobladora, constitutiva del objetivo esencial de la regulación del momento.

La noción presenta un contenido estrictamente fáctico, acorde con su significación etimológica. Cuando se emplea el término pobladores para designar los destinatarios de los privilegios concedidos, es precisamente porque se alude a quienes, respondiendo a una oferta de beneficios y favores de régimen jurídico, en una condición personal de vida favorable o tomando una iniciativa marcada por estos mismos intereses, acuden a ocupar un territorio con la finalidad de establecer un centro de población estable, una comunidad local.

2. El carácter general de su empleo y contenido se manifiesta en el hecho de que aparezca en textos de todos

los Reinos Peninsulares cubriendo, además, un espacio temporal comprendido entre los siglos IX y XV. Así, desde la referencia a la acción pobladora como condicionante de la aplicación del Derecho Privilegiado en los Fueros asturianos de Vaipuesta, otorgados por Alfonso el Casto el 21 de diciembre del 804, hasta el empleo de la noción personal de pobladores en versiones extensas bajomedievales de textos de Derecho Local y pasando por numerosas redacciones que emplean esta terminología -- matizando paulatinamente su función cualificadora y su régimen jurídico de funcionamiento -- la noción experimenta un proceso evolutivo de carácter lineal, manteniendo siempre un fundamento fáctico caracterizado por lo que podría denominarse fijación de establecimiento poblador en un lugar.

En efecto, en un principio cualquier limitación legal al asentamiento personal en el territorio que se pretendía poblar carecía de sentido, de manera que los textos acuden, durante toda la Alta Edad Media, a nociones personales de hecho -- y por ello de gran amplitud conceptual -- para determinar el disfrute y aplicación de los privilegios. Entre estas nociones destacó la de poblador, por responder a la falta estricta de consideración de cualquier requisito de condición personal que no fuera el de la mera ocupación repobladora del territorio.

Sin embargo, poco a poco los textos han de hacer frente a la necesidad de asegurar que los privilegios bene-

ficien y determinen una condición personal más favorable e independiente para aquéllos - y únicamente para aquéllos - que en realidad se encuentren en la concreta relación persona-territorio, perseguida - en cuanto objetivo de política legislativa - por su normativa. De ahí que el Fuero de Logroño de 1095 o el de Miranda de Ebro de 1099, entre otros, empiecen a hacer referencia en algunos de sus preceptos a los pobladores con casa y heredad en la villa. Este mismo proceso se revela en el hecho de que algunos textos posteriores determinen el marco de vigencia personal del Derecho utilizando, junto a la noción de poblador, otras nociones igualmente personales y fácticas, que contengan incluso en su etimología referencias a un cierto grado de arraigo y asentamiento. Por ejemplo, los Fueros de Belorado de 1116 hacen alusión a morador vel poblador; el Fuero de Teruel de 1176 se concede a habitadores et pobladores; las diversas versiones del Fuero de Estella se dirigen a hominibus de Stella concediéndoles los privilegios que desde el momento de la población habían disfrutado, y la Carta de Población de Lérida de 1150 se otorgó a populatoribus et habitatoribus sive statoribus.

3. Por todo ello ha de concluirse el carácter global y generalizado del empleo de la noción como determinante de la extensión personal de la vigencia del Derecho local, matizando progresivamente su contenido hacia fórmulas de garantía objetiva del arraigo. De manera que, en muchos ca-

sos, el término poblador sigue empleándose por razones tradicionales y consuetudinarias, haciéndosele adición de otros términos o matices personales que respondan a las nuevas exigencias, ya algo alejadas de la mera repoblación, mediante el recurso a criterios igualmente fácticos pero garantizadores de un grado suficiente de arraigo; si bien, en cualquier caso, el término poblador seguiría siendo adecuado para designar con carácter individual, y ya no general, a cualquiera que siendo extraño a la comunidad local ya constituida acudiese a la localidad para poblar en ésta e integrarse en aquélla.

B) Habitación.

1. Se trata de una noción que presenta gran cercanía conceptual con respecto a la de población. Participa de la configuración fáctica de ésta, en la medida en que manifiesta expresamente algunos elementos materiales que sólo podían inducirse de la noción de población, mediante el recurso a la interpretación de los objetivos perseguidos por los textos locales que la incorporaban. En efecto, el término población implica una situación personal de nueva planta, consistente en la consumación del acto poblador, y referida al movimiento traslativo que implica el acudir a poblar; mientras que el empleo de la noción de habitación supondría la referencia a la permanencia y constancia en la población. Sin embargo, como se acaba de indicar, esta re-

ferencia a la estabilidad se hallaba implícita en la noción de población porque la finalidad de los textos que incluían esta noción pasaba, necesariamente, por el entendimiento y exigencia de la pretensión de un establecimiento e instalación personal de carácter permanente.

La noción mantiene su significado y carácter en todos los textos en que aparece, empleándose como condicionante y determinante del sometimiento personal al Derecho Local. Su utilización se extiende desde el siglo IX al XV en cuerpos normativos de todos los territorios políticos de la Península.

2. La noción de habitación viene a cubrir, sobre un fundamento de hecho idéntico al de la población, un aspecto conceptual que derivando de la acción pobladora impone su concreción. El propio término habitación hace referencia a una situación fáctica de población, contemplada desde su contexto intrínseco; en efecto, ambas nociones implican la relación con un concreto territorio, pero mientras el término poblar reconduce a una acción directa sobre aquél, el término habitar añade la consideración a un asentamiento personal que se concreta en la fijación del "hogar".

Esta nueva matización explica que el primer texto que, entre los examinados, emplea la noción homo habitans no sea una Carta de Población. Pues las Cartas Pueblas, aunque empleen en ocasiones nociones personales diversas a

las de poblador, haciendo referencia a diversos aspectos de una misma situación de concreta relación entre la tierra y el hombre, siempre presentarán el término poblador como el más utilizado puesto que responde con mayor propiedad a la realidad personal del sujeto que acude a poblar o repoblar (siendo ésta la consideración más relevante en el contenido de cualquier Carta de Población). De ahí que el término homo habitans aparezca por primera vez en un texto de Donación de inmuebles: es la Donación de varias iglesias, monasterios, villas y heredades realizada a la Iglesia de Oviedo por el Rey Ordoño I el 20 de abril del 857, donde se hace referencia a los destinatarios de los privilegios personales que el texto otorga empleando la fórmula homo habitans en los territorios sometidos a la jurisdicción de la Santa Iglesia de Oviedo.

La incorporación de la noción personal de habitante o habitador resulta muy frecuente en aquellos textos locales que contienen un verdadero estatuto jurídico. Pues son éstos los textos que, con independencia de su destino a una comunidad local constituida o en proceso de constitución, toman como eje central de la realidad que regulan no tanto la acción pobladora como la garantía de la consolidación de un núcleo local organizado e institucionalizado. Así, cuando el Fuero de Teruel de 1176 emplea, como ya se indicó, en su fórmula de concesión ambas nociones: habitadores et pobladores, a lo largo de su normativa determina el ámbito

personal de aplicación de los preceptos empleando a veces uno de estos términos y a veces el otro. La justificación de este empleo radica en que, refiriéndose al mismo grupo humano, la noción de poblador indica con carácter general el colectivo privilegiado por el Fuero (en la medida en que la población constituye la razón última de su existencia), y la noción de habitador hace referencia a ese mismo grupo a la hora de regular determinados aspectos de la organización cotidiana de la comunidad local; pues es en estos aspectos en los que el poblador es protagonista en su condición de habitador.

Esta consideración interpretativa se revela nítida a lo largo del análisis de los textos de Derecho Local Catalán Bajomedieval, por tratarse de cuerpos legales de carácter diverso, entre los que destacan, junto a meros pactos o contratos agrarios y simples donaciones y establecimientos, textos que incluyen auténticos estatutos jurídicos. Las diferencias entre la terminología personal empleada por unos u otros textos confirma la caracterización de la noción de habitador expuesta, hasta el punto de que cuando Albert de Castellvell y Arnau de Fenollar hacen donación del lugar de Vandellòs el 20 de diciembre de 1191 para poblarlo a Ramón de Ruidoms formula el encargo de que establezca en el lugar populatores que sint habitatores et statores illo predicto loco de Valdelor; pudiéndose inducir, claramente, que el grupo humano que se estableciese en el lugar sería un grupo

de populatores en el momento de la ocupación y población del territorio, convirtiéndose en habitatores por razón de la constante población y del arraigo que esta permanencia supone.

No puede, sin embargo, afirmarse en base a los textos examinados que el empleo de ambas nociones responda a criterios de base temporal. Es decir, que hagan alusión, respectivamente, a dos momentos cronológicos diversos en el proceso interno de consolidación de la estructura y sistema de población de una concreta localidad. Se trata, en realidad, de alusiones a una misma realidad, destacándose en cada caso, el aspecto que en esa única situación alcanza interés. De manera que los textos consideran poblador y habitante al mismo individuo en un mismo momento; pues la población como acto histórico, que halle su comienzo y término en el mismo acto de la ocupación del territorio, carece de sentido si no se asegura la permanencia y voluntad de asentamiento e integración que la habitación implica.

3. Las fórmulas de concesión de los textos locales van empleando progresivamente con más frecuencia la noción de habitador que la de poblador. Son muchos los textos bajo medievales que se dirigen a los habitantes de la localidad: los Usatges de Barcelona del siglo XIII, las Costumbres de Lérida de 1228, las Costumbres de Tortosa de 1279, las Costumbres de Gerona del siglo XV. Y en definitiva, la noción concreta la sujeción personal al Derecho Local sobre la ba-

se de criterios fácticos manifestados en el establecimiento donde se concreta el arraigo personal: fuego u hogar, familia, casa poblada.

Se ha señalado con anterioridad que en algunas ocasiones las fórmulas de concesión de los textos emplean conjuntamente diversas nociones personales, que participan de un mismo carácter fáctico: habitantes y pobladores; pues bien, existen otras concesiones que, junto a la noción de habitador, incorporan algún término personal que en cierta manera escapa a una definición meramente fáctica; por ejemplo, el privilegio barcelonés del siglo XIII conocido como Recognoverunt Proceres fue concedido a todos los ciudadanos y habitantes de Barcelona. Tal fórmula afianza la extensión personal del privilegio sobre criterios fácticos de base territorial, pues aún en el supuesto de admitirse que el término ciudadano corresponda a un concepto jurídico autónomo, la mayor generalidad y amplitud conceptual de la noción de habitante obliga a determinar la aplicación del Derecho Local en torno al establecimiento y el arraigo de hecho.

C) Moranza.

1. Algo posterior cronológicamente aparece la incorporación de la noción de moranza en los textos de Derecho Local Medieval de los Reinos Peninsulares. En efecto, habrá de esperarse al siglo XI para hallar entre los textos examinados en el presente estudio alguna referencia a la no

ción personal de morador. Entre los textos que incorporan el término destacan los "Decreta Alfonsi Regis et Geloyre Regine", surgidos de la celebración del Concilio de León de 1020, que en su Decreto número XX introducen la noción por primera vez. Este texto adquiere una gran relevancia, en este momento, por recoger una expresa delimitación del ámbito personal de aplicación del Derecho Local considerado:

Establecemos que la cibdat de Leon que fu despoblada é presa de moros en tiempo del Rey don Vermudo mio padre, que se poble por estos fueros de susodichos, é que sean ganados é tenudos firmemiente en todos tiempos, é que nunca sean crebantados. Mandamos que todo ome quier forero, quier non ó bibere heredit ayena, que venga á morar á Leon, que non lo saquen ende.

2. Nuevamente resulta necesario recurrir a la consideración del carácter y contenido de las nociones de poblador y habitador para poder construir un concepto definidor de la categoría personal correspondiente a la situación de moranza; pues el texto transcrito establece una importante vinculación entre el hecho de la población y el de la moranza a la hora de determinar el ámbito de vigencia personal del Derecho. En efecto, el Fuero parece integrar ambas nociones en una misma consideración, porque si el proceso repoblador queda sometido a las disposiciones del texto, el grupo de pobladores quedará personalmente sujeto a esa normativa; de ahí que el texto del Decreto número XX parezca

referirse a la población en cuanto acto de acudir a morar a León, y a la moranza en cuanto establecimiento derivado del propósito poblador.

Tal interpretación supone una argumentación paralela a la seguida en el caso del análisis de la noción de habitación. El recurso al examen etimológico puede conducir a la conclusión de que población, habitación y moranza son nociones evidentemente fácticas (por carecer de definición jurídica alguna) alusivas a una misma actividad: la ocupación estable o asentamiento en un concreto núcleo territorial, y son nociones matizadas etimológicamente por referencias a determinados aspectos de esa única actividad: la población en el supuesto inicial del interés y atracción repobladores, la habitación como garantía del asentamiento en la constitución de un hogar y la moranza en relación al establecimiento de un centro estable de vida.

Esta interpretación implica considerar la población como móvil de la actividad normativa de carácter local, y como global consideración y valoración de una situación personal vinculada directamente a la existencia de una comunidad humana organizada en base a una regulación normativa estrictamente territorial. En este contexto, las nociones de habitación y moranza aludirían a los aspectos intrínsecos y extrínsecos, respectivamente, de esa vinculación territorial y comunitaria: respondiendo a la configuración de un status personal único que determina el sometimiento al Dere

cho Local correspondiente.

3. Desde ese primer momento, la noción de morador se incorporará a diversos textos de los diferentes Reinos sin que la normativa ni el espíritu de ninguno de ellos modifique la caracterización ahora expuesta. Así, desde el texto leonés considerado hasta la redacción del Derecho local catalán extenso del siglo XV, el término morador se empleará para hacer referencia al habitante integrado en la comunidad local que ha establecido en ella su centro de vida e intereses.

Se expresa, de este modo, un proceso terminológico que revela un planteamiento y una formulación más complejos de la realidad jurídica. Pues si bien es cierto que las tres nociones personales de carácter fáctico analizadas coexisten durante siglos en las redacciones del Derecho Local de nuestros Reinos, también es verdad que su origen y nacimiento responden, respectivamente, a momentos de general y progresivo afianzamiento y consolidación de las estructuras comunitarias y organizativas de carácter jurídico-local.

D) Los hombres del lugar.

1. Son muchos los textos de Derecho Local Medieval que emplean esta noción, tanto al determinar con carácter general el ámbito personal de aplicación del Derecho como al concretar la extensión subjetiva de cada uno de los precep-

tos.

La noción carece en principio de algún indicador que permita determinar ciertos rasgos de su propio contenido. En efecto, los términos poblador, habitador y morador contenían en sí mismos una referencia directa al régimen y delimitación de las nociones y acciones pobladora, habitadora y moradora, pero el término hombre de no incluye sino una noción personal genérica: hombre, y una preposición que igualmente puede indicar origen, pertenencia o referencia: de. Sin embargo será el análisis de la función y calificación introducidas por esta preposición lo que aportará los elementos necesarios para la consideración conceptual del término; pues, cuando los Fueros de Brañosera de 15 de octubre de 824 se refieren a omes de villa Brania Ossaria, o cuando el Fuero de Castrojeriz del año 974 alude a homines de Castro, y cuando las diversas redacciones del Fuero de Estella dirigen su normativa a homines de Estella, así como cuando a lo largo de toda la Edad Media muchos textos de los diversos Reinos Peninsulares incorporan el término en formulaciones semejantes, están sin duda estableciendo una clara vinculación relacional entre un concreto territorio y un determinado grupo de personas.

Por tanto, nos encontramos ante el empleo de nociones personales genéricas, concretadas territorialmente. Y ello encuentra clara explicación y coherencia en la consideración general del carácter del sistema jurídico medie-

val: un sistema de base territorial, de concesiones legales directamente dirigidas y otorgadas a un concreto territorio y de aplicación personal mediata, en la medida en que los destinatarios de la normativa lo eran en virtud de su concreta relación y vinculación al territorio considerado.

2. Por consiguiente, para concretar el ámbito personal de vigencia de estos textos será necesario determinar cuál fuese el contenido y carácter de la vinculación persona-territorio aludida por el término hombres de. Al respecto, baste señalar que el Fuero concedido a la villa de Sahagún por el Abad del Monasterio en el año 1110 se otorga ad vos homines de poblacione, tam illis qui populant ibi, quam illi qui venerint ad populandum. Y la fórmula de sanción del Fuero concedido a Estella en 1164 (y que se reitera en los textos de las versiones correspondientes a los siglos XIV, XV y XVI) establece que Hoc suprascriptum forum uel donatium dono uobis et concedo et confirmo omnibus hominibus de Estella, tan maioribus quam minoris, tam futuris quam presentibus, et filiis hac filiabus uestris, siue uestre generationi et omni uestre posteritati, uel uestri successoribus qui in Estella populauerint. Asimismo, la Carta de Franquicias otorgada por Pedro I a Salses el 21 de febrero de 1213, concreta a lo largo del texto su regulación refiriéndose indistintamente a habitatores castri et ville de Salsis y a homo vel femina de Salsis.

Estos ejemplos, entre otros muchos que podrían destacarse, muestran una clara identificación de contenidos entre la noción ahora analizada y las nociones personales de hecho que se han revelado como nociones básicas en la fijación de la extensión subjetiva del Derecho Local considerado. Tal identificación implica que en los textos en que la noción hombres de se incorpora en el contenido de los preceptos concretos - mientras que la fórmula general de concesión delimita el núcleo personal de destinatarios mediante términos estrictamente fácticos - aquella noción reproduce el contenido del término personal empleado en la fijación de la vigencia subjetiva general de la normativa. Y en aquellos otros textos en que la noción hombres de actúa como noción básica de sujeción personal al Derecho Local ha de procederse a una interpretación estrictamente fáctica del término, dotando a la preposición de de una función cualificadora y determinante de la pertenencia y arraigo en la comunidad local y del asentamiento en el territorio correspondiente.

2. Vecinos, conmorantes y cohabitadores.

1. Es la de vecino la primera de las nociones personales empleadas en los Derechos Locales que podría, al menos terminológicamente, no ser una noción estrictamente fáctica, e implicar una concreta definición jurídica. No puede constatarse el empleo de la noción hasta mediados del si

glo X, cuando Fernán Armentales hizo concesión de Fueros a Melgar de Suso en el año 950. Y desde ese momento, el término aparece en textos de todos los Reinos y durante todo el período temporal considerado, hasta el siglo XV.

Durante toda la Alta Edad Media el término vecino queda enmarcado en el ámbito estricto de la cercanía derivada de una misma situación personal de población y habitación. La vecindad aparece como la relación existente entre pobladores, por su cualidad de moradores de un mismo lugar, y como la expresión de su identidad en cuanto comunidad local frente a los extraños a la misma. Como manifestación de esta vida de relación, la noción de vecino incorpora ciertas connotaciones de integración, estabilidad y arraigo que sólo parcialmente derivaban del empleo de términos como poblador, habitador o morador. Y ello supone la apreciación de un proceso terminológico en el contenido de los textos medievales orientado hacia expresiones determinantes de un mayor grado de integración y arraigo: la habitación expresa un grado de incorporación mayor que la población, pero menor que la moranza, y la vecindad determina una superior graduación que todas ellas. Pero este proceso no responde a la evolución de la situación personal dentro de una comunidad local, sino que responde a la propia evolución general de carácter comunitario; de forma que los textos emplean indistintamente, en muchas ocasiones, los términos personales, pero el propio nacimiento terminológico de la noción se co-

responde con un concreto momento histórico de la institución y organización comunitarias. Ello explica que el empleo de la noción de vecino sea en Cataluña menos frecuente y más tardío, por tratarse de una sociedad en que las formas locales comunitarias surgieron más tarde que en el resto de los territorios peninsulares y con caracteres propios.

Puede afirmarse, tras el análisis del contenido de textos como el Fuero de Villavicencio, el de Nájera, el de Jaca de 1064, el de Logroño de 1095, entre otros muchos, que la cualidad de poblador, habitador o morador recae sobre las mismas personas que la de vecino, utilizándose esta última noción para hacer referencia al morador que se encuentra en una situación de concreta relación de vecindad, cuando la vida cotidiana le coloca en relación con los demás moradores y con las instituciones de la organización comunitaria local; consagrándose de esta manera su integración en la comunidad y la consolidación de su arraigo.

Prueba de que el vecino no ostentaba en la comunidad un status de mejor condición que el poblador-habitador-morador y de que la vecindad no contenía una institución jurídica autónoma con contenido y régimen propios, es que dos textos que en sus redacciones del siglo XI incorporaban la noción de vecino con carácter relacional (Fuero de Jaca de 1064 y Fuero de Sahagún de 1084), en sus versiones del siglo XII no recogen el término, sino que exclusivamente se refieren a nociones personales estrictamente fácticas (Confirma-

ción del Fuero de Jaca en 1134 y Fueros concedidos a Sahagún en 1110).

2. Semejante caracterización de la noción de vecino explica el uso que del término se hace, en ocasiones, para identificar al morador en el lugar como miembro de la comunidad local frente al extraño a la misma. Estas coordenadas interpretativas del contenido de la noción justificarán los diversos empleos que de la misma se hacen en los textos bajomedievales de Derecho Local. Así, en el Fuero de Teruel de 1176 esta terminología se emplea: 1. de forma indirecta, en la determinación general del ámbito personal de aplicación del Fuero, como noción conceptualmente cercana a la de poblador, 2. al buscar la identificación de los miembros de la comunidad local de Teruel en oposición a los extraños a ella, configurándose la comunidad local como comunidad de habitadores y pobladores, 3. al hacer referencia a situaciones de relación entre los miembros de la comunidad, y 4. al buscar en el vecino la garantía que su arraigo e integración ofrecen en una actuación de confianza o control de un resultado.

En el Fuero de Estella, y conforme a un examen comparativo de sus diversas redacciones, se constata el empleo de la noción de vecino: 1. para aludir al arraigo en la población, 2. en la regulación del proceso de incorporación a la comunidad, identificando al vecino con el poblador, 3. en

la consideración de la ejecución de decisiones del juez natural, estableciendo gran coincidencia conceptual entre el vecino de Estella y el hombre de Estella, y 4. como noción sustitutoria de las nociones personales de hecho, básicas en la determinación del ámbito personal de aplicación del Fuero.

También las Costumbres de Tortosa de finales del siglo XIII hacen referencia al vecino en cuanto miembro de la comunidad local tortosina, regulando el juramento de vecindad como compromiso de establecimiento de residencia en el territorio, y como compromiso de fidelidad a la propia comunidad y a las instituciones y poderes locales.

3. Esta consideración del carácter de la vecindad, como situación de relación derivada de la participación personal en una misma realidad comunitaria y jurídica, coloca a otras nociones personales, de empleo no muy frecuente, como la de conmorante o la de cohabitante en un supuesto conceptual prácticamente idéntico. En efecto, la incorporación de las partículas con- o co- a términos personales de hecho, supone la referencia a una situación personal de participación y compañía en la moranza y en la habitación de un concreto lugar.

4. Por todo ello - partiendo de la aplicación y vigencia de los textos sobre la consideración de criterios fácticos, que implican el arraigo y la estabilidad en la población - algunos preceptos, por responder directamente a

los objetivos y fundamentos del concreto Derecho Local, han de perseguir la garantía y la seguridad objetiva de que ese arraigo y esa estabilidad existen realmente. Son preceptos que emplean la noción de vecino para hacer referencia general a una integración fáctica en la comunidad, y que establecen ciertos requisitos que aseguren una situación personal de auténtica pertenencia a la misma. Son estas condiciones, incorporadas al texto de la norma, las que la doctrina ha venido considerando como requisitos de vecindad; afirmando, además, que de su cumplimiento deriva el pleno sometimiento personal al Derecho Local. Pues bien, esta opinión, mantenida por autores como A. García Ulecia o J.M. Lacarra, viene a confundir los requisitos de vecindad con los que no son sino presupuestos de aplicación de cada norma. Puede que tales condiciones actúen efectivamente como determinantes de un concreto status personal condicionante, en la comunidad, de una determinada relación jurídica, o del disfrute de un concreto derecho, o del sometimiento a cierta obligación, pero en ningún caso determinan el ámbito de vigencia subjetiva del Derecho Local, de cada Derecho Local. Como se manifiesta en el hecho de que las fórmulas de concesión que incluyen la noción de vecino lo hagan siempre conjuntamente con nociones personales fácticas.

3. Residencia y domicilio en el lugar.

A) Residencia.

1. Al concluir un análisis sobre la noción de residencia, en el marco del presente estudio, es preciso distinguir dos vertientes en el proceso de utilización del término por los textos de Derecho Local. La primera, cubriría un ámbito temporal comprendido entre los siglos IX y XV, y un marco territorial extendido a los Reinos de Aragón y Navarra y al Principado de Cataluña. En efecto, durante ese tiempo, son muchos los textos locales de estos Reinos que emplean cierta terminología alusiva a la estancia y permanencia en el lugar; son términos referidos a la quietud física sobre un concreto territorio, y etimológicamente derivados del verbo latino stare. La segunda, cubriría un espacio temporal comprendido únicamente entre los siglos XIII y XV, y un marco territorial limitado al Principado de Cataluña; concretándose en el empleo de los términos residencia y residente.

Esta terminología supone una consideración jurídica de una realidad estrictamente fáctica. Y, al igual que sucederá con el empleo de la noción de domicilio, el término residencia aparece concretando legalmente el aspecto fáctico más relevante y común de todas las nociones personales de hecho, determinantes del sometimiento al Derecho Local: el efectivo establecimiento en el lugar y la continuidad y

permanencia en el mismo. De ahí, que los textos continúen formulando el otorgamiento del Derecho Privilegiado mediante nociones personales de hecho, incorporando la noción de residencia en la formulación de la obligación de proceder al asentamiento estable; obligación que actúa como condicionante necesario y suficiente del sometimiento personal al Derecho Local.

2. La expresión de esta obligación se incluye, por ejemplo, en el texto de la Carta de Franquicias que Pedro de Moncada concedió a Puigreig el 28 de julio de 1281: damus, concedimus et confirmamus omnibus illis populatoribus qui venire ad dictum locum de cetero voluerint populatum et fecerint continuam residentiam ibidem. Así como en la fórmula de concesión de la Carta de Franquicias que Ramón de Urg concedió a Castellar de N'Huc el 28 de agosto de 1292: damus et concedimus ... tradimus atque concedimus ... vobis Raimundo Cavallerii et omnibus aliis hominibus et mulieribus et personis in presenti habitantibus et in posterum habitaturis et etiam venientibus ad faciendam residentiam in dicto castro de Castellar et in barriis eiusdem.

La asimilación conceptual, bajo una caracterización fáctica, entre las nociones personales de hecho y la noción de residente se manifiesta con claridad en el texto de la Carta de Franquicias que Gilaberto otorgó a San Feliú de Guíxols el 1 de agosto de 1287: Has autem libertates et in-

munitates damus et concedimus ac concedere intedimus, tantum hominibus et mulieribus habitantibus seu residentibus personaliter in villa predicta.

En la medida en que las condiciones personales de sujeción al Derecho Local se concretan con exclusividad en el contenido propio de la actividad pobladora-habitadora-moradora, la obligación expresa de hacer residencia en el lugar pretende garantizar la efectividad en el asentamiento. Pero esa obligación, se hallaba implícitamente incorporada en la noción de población, y sobre todo en las de habitación y moranza; y la residencia no supone sino la formulación jurídico-romana de una situación precedente.

B) Domicilio.

1. La noción de domicilio surge en el Derecho Local Medieval de los Reinos Ibéricos con unos límites temporales y espaciales muy concretos; pues aparece incorporado exclusivamente al contenido de los textos de Derecho Catalán, y sólo a partir de finales del siglo XIII. Será la consideración de estos factores de limitación lo que determinará los rasgos definidores del concepto y de su función en el contexto del Derecho Local de la época.

El domicilio se manifiesta como una noción jurídicamente definida, respondiendo a un concreto contenido de origen romano. Así, el domicilio de los textos de Derecho Catalán Bajomedieval no es sino el domicilio del Derecho Romano.

2. El término se emplea en cuerpos legales - breves o extensos - del Principado Catalán, elaborados entre los siglos XIII y XV. Su utilización responde a un intento positivo de concretar, objetivar y asegurar el contenido fáctico de las nociones personales de hecho, que continúan apareciendo con carácter unánime y exclusivo en las fórmulas generales de determinación de la extensión personal de la normativa local. Por ejemplo, cuando la Carta de Población de Palamós de 3 de diciembre de 1279 se dirige a los pobladores del lugar, concreta la condición de éstos en torno a varios criterios: la tenencia de casa, el establecimiento y conservación de domicilio, y la permanencia en la residencia. Y cuando la Donación de un territorio perteneciente a la Parroquia de San Julián de Fortiá realizada al abad de San Pedro de Rodas el 31 de agosto de 1282 incluye ciertas exenciones fiscales destinadas a los habitadores del lugar, hace referencia a su concreta relación con el territorio aludiendo al domicilio y el establecimiento por razón de habitación. Asimismo, las dificultades que condicionaron y mediatizaron el proceso de población de Llívia obligaron a Jaime II a extender a todo el término la concesión restringida de franquicias realizada por él mismo con anterioridad, y se procede a su otorgamiento el 3 de enero de 1350 haciendo referencia a aquellas dificultades mediante la expresión siguiente: sed cum ipsis hominibus esset difficile morari in dicto podio et ibi sua domicilia in solidum tenere, nu-

lli aut pauci homines suas habitationes facerent in podio supradicto.

3. Por consiguiente, puede observarse la vinculación terminológica que los textos establecen entre población y domicilio, habitación y domicilio, y morada y domicilio. Tal vinculación puede caracterizarse, de acuerdo al contenido material de los textos, en torno a dos elementos fundamentales: 1. Las nociones personales básicas y relevantes en la determinación de la vigencia subjetiva del Derecho Local Catalán continúan siendo las denominadas nociones personales fácticas, y 2. La noción de domicilio viene a matizar el contenido fáctico de aquéllas en torno a los factores de voluntariedad, efectividad y permanencia en el establecimiento.

Ha de concluirse, por tanto, que a pesar de tratarse de una noción jurídicamente definida, su incorporación no implica una modificación de los caracteres del sometimiento personal al Derecho Local. Pues, además de que el término no es empleado directamente en las fórmulas generales de concesión personal, su contenido participa básicamente de los criterios fácticos de arraigo e integración en la habitación. Manifestándose, así, como una nueva formulación jurídica, expresiva de una realidad coincidente con la situación jurídica anterior.

Por otra parte, el momento histórico de su inicial inclusión en los textos (finales del siglo XIII) revela que

su empleo deriva directamente de la influencia decisiva que sobre el Derecho Catalán tuvo, en aquel momento, el proceso de Recepción del Derecho Común Romano-Canónico.

4. Ciudadanos y burgueses.

1. Resulta indudable que, en un primer momento, el empleo de las nociones personales ciudadano y burgués en los textos de Derecho Local Medieval implica exclusivamente una calificación espacial, una especificidad derivada de la cualidad concreta del lugar que se habita. Así, ciudadano no sería sino el habitante de la ciudad, y burgués no sería sino el habitante del burgo. Si en algún supuesto la condición de ciudadano o burgués implicase una posición especialmente favorable o privilegiada, ello derivaría estrictamente de la situación de especial privilegio o consideración que la ciudad o el burgo ostentase en el contexto general de la realidad histórica y política del Reino; precisamente, ese especial interés y esa concreta relevancia de la localidad era lo que determinaba su fundación sobre la consideración de ciudad o burgo.

Este carácter de las nociones consideradas explica que el término ciudadano aparezca por primera vez incorporado al Fuero concedido por Alfonso VII en 1118 a Toledo. Y que la noción de burgués se recoja primeramente en el texto de la Concesión a Jaca por el rey D. Ramiro el Monge en 1134

de las franquicias que disfrutaban los burgueses de Montpellier. Especial relevancia presenta, en este sentido, el análisis de los textos propios del Derecho Pamplonés Medieval; pues mientras Pamplona se configura globalmente como ciudad, su distribución en barrios distinguía entre burgo, población y villa; de manera que la terminología personal relativa a la pertenencia a cada una de las comunidades locales existentes respondía, correlativamente, a esas diferencias de constitución.

2. Los problemas interpretativos sobre el carácter y funcionamiento de ambas nociones se plantean durante la Baja Edad Media, en relación al contenido de los cuerpos legales extensos de Derecho Catalán. En efecto, también en estos supuestos aparece clara la configuración conceptual expresada, aunque parece atribuirse a las nociones - especialmente a la de ciudadano - una significación de mayor trascendencia.

Parece evidente que el origen y los rasgos organizativos y jurídicos de ciudades y burgos provocaron el nacimiento de una nueva clase social, libre y privilegiada; y que la incorporación a ese nuevo status social derivaba de la integración personal en la comunidad ciudadana nacida de la habitación en una población constituida en ciudad o burgo. De ahí que muchos preceptos de los textos catalanes aludan en concreto a los derechos y situaciones de privilegio que los ciudadanos y burgueses ostentaban; siendo desta

cable la especial relevancia que esa diferencia social adquirió en el Principado Catalán, en comparación a la situación del resto de los territorios peninsulares, en razón a la singular estructura social imperante en aquél, marcada por una fuerte jerarquización y la permanencia de relaciones y estructuras feudales socialmente dependientes.

En este punto hallaría fin el examen del contenido, sentido y significación de la noción de burgués, pero en lo que al término ciudadano se refiere es preciso avanzar algo más. En efecto, la noción aparece recogida en el privilegio barcelonés del Recognoverunt Proceres, así como en el texto de los Usatges de Barcelona, en el de las Consuetudines Diocesis Gerundensis, en el de las Costumbres de Lérida, y en el de las Costumbres de Tortosa.

En los textos del Recognoverunt Proceres y de las Costumbres de Gerona se hace concesión de privilegios y Derecho a los ciudadanos y habitantes del lugar; expresión que ha de conducir a la conclusión de que, aún en el supuesto de que pudiera considerarse la noción de ciudadano como concepto jurídico autónomo sometido a un régimen jurídicamente definido, ello no condicionaría en modo alguno los criterios de delimitación del ámbito de aplicación personal del Derecho Local hasta ahora considerados. Pues el empleo, con carácter conjunto, de una noción general y fáctica, como la de habitante, obliga a considerar que, en cualquier caso, el sometimiento personal al Derecho depende de la con

currencia de datos fácticos, carentes de calificación jurídica alguna.

Por otra parte, el texto de las Costumbres de Tortosa, parece emplear a lo largo de su normativa la noción de ciudadano como identificadora, en algunos supuestos, de la condición comunitaria de los prohombres, es decir, aquellos miembros de la comunidad local que por razón de su relevancia personal adquirirían un status de princeps inter pares, asumiendo tareas de potestad y representación.

II. LA RELEVANCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL.

1. El carácter territorialista de los Derechos Locales Medievales examinados se manifiesta en el establecimiento del ámbito personal de aplicación de su normativa; pues, en efecto, éste se concretó sobre elementos de objetiva vinculación territorial. Ha quedado expuesto cómo la fijación de los límites subjetivos de aplicación del Derecho Local Altomedieval de los territorios peninsulares, y del Derecho Local Bajomedieval de Aragón, Navarra y Cataluña se realizó sobre la consideración de la actividad pobladora-habitadora-moradora. Esta actividad alcanzó expresión legal mediante el uso de las que se han denominado nociones fácticas, ya en su formulación personal ya en su formulación referida a esa misma actividad. Nociones fácticas, en el sentido de

que carecen de definición jurídica alguna y se hace preciso recurrir a elementos extralegales para determinar cuál fuese su régimen y contenido; si bien, tales factores extralegales alcanzan relevancia, en el sentido mencionado, precisamente por afectar y condicionar, de manera diferida, una concreta regulación jurídico-positiva. Por contraposición a estas nociones fácticas, se denominan nociones jurídicas aquéllas que presentan una concreta definición jurídica, con expresión positiva o sin ella; si bien, en el Derecho Local Medieval considerado, esa definición jurídica se fundamenta, asimismo, en criterios esencialmente fácticos.

2. Esta caracterización general sobre la correlativa aplicación territorial-personal del Derecho Local Medieval, se comprueba en el concreto examen de la normativa sobre atribución de la competencia judicial. Así, cuando la Carta de Franquicias que Ramón Berenguer III otorgó a los habitantes del castillo de Olérdola, el 26 de noviembre de 1108, establece que si contentio fuerit vel placitum inter homines de castellania et alios homines qui non sint sui, seniores eorum faciant directum, et unusquisque senior proprios distingat suos homines, está regulando la castellania en cuanto unidad jurisdiccional, y atribuyendo competencia judicial exclusiva sobre los habitantes del núcleo territorial de la misma al señor del lugar; de tal manera que la competencia es de carácter territorial y el señor del lugar ostenta potestad jurisdiccional sobre los habitantes de su

término precisamente en base a la vinculación existente entre éste y aquéllos en torno a la acción habitadora.

El Fuero concedido a Zaragoza por Alonso I el Batallador en 1119 y el otorgado por el mismo Monarca a Tudela en 1127 recogen la siguiente norma: mando vobis quod habeatis vestros iudicios inter vos ipsos vicinalmente et directamente ante mean iustitiam, qui fuerit ibi per me. Si se considera que ambos textos establecen como destinatarios de su contenido a los populadores del lugar, es preciso concluir que el pronombre vobis se refiere a éstos, y que el adverbio vicinalmente se utiliza, precisamente, por aludir a pleitos entre miembros de una misma comunidad local. De ahí que la competencia judicial del iustitia designado por el soberano sea de carácter territorial, y él actúe como juez natural de los pobladores de ese territorio. Estableciéndose, así, una clara coincidencia entre el ámbito de competencia judicial y el ámbito de aplicación del Derecho.

Este mismo sistema puede comprobarse en el examen de la normativa que, en esta materia, incorporan las diversas redacciones del texto del Fuero de Estella. Puesto que los alcaldes de Estella aparecen como jueces naturales de los hombres de Estella. Estos han de pleitear obligatoriamente ante aquéllos. Y, como complemento de este sistema de exclusividad competencial, el Fuero no contempla más ejecución que la derivada del cumplimiento de las decisiones adoptadas,

conforme al Fuero, por las autoridades judiciales de la villa en virtud de la competencia que el propio Fuero les concede.

- RELACION DE TEXTOS DEL DERECHO LOCAL
EXAMINADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO

- I. Textos del Derecho Altomedieval citados en el Cap. Unico de la Sección 1ª.
- II. Textos del Derecho local de Aragón citados en el Cap. I de la Sección 2ª.
- III. Textos del Derecho local de Navarra citados en el Cap. II de la Sección 2ª.
- IV. Textos del Derecho local de Cataluña citados en el Cap. III de la Sección 2ª.

- BIBLIOGRAFIA

- I. Colecciones de textos del Derecho local de los siglos IX-XV.
- II. Obras generales y trabajos monográficos sobre Historia del Derecho Español.
- III. Obras generales y trabajos monográficos sobre Derecho internacional privado y Derecho interregional.

RELACION DE TEXTOS DEL DERECHO LOCAL
EXAMINADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO

I. TEXTOS DEL DERECHO ALTOMEDIEVAL.

1. Capítular del Emperador Carlomagno, en la que recibe bajo su inmunidad y defensa los godos e hispanos de la ciudad de Barcelona y del Castillo de Tarrasa, que se le habían sometido libremente, y regula su situación jurídica (hacia el 801).
2. Donación y fueros de Valpuesta otorgados por el rey D. Alfonso el Casto (21 de Diciembre del 804).
3. Fueros de Brañosera dados por el conde Munio Nuñez (13 de Octubre del 824).
4. Capítular del rey Carlos el Calvo a los godos e hispanos de la ciudad de Barcelona y castillo de Tarrasa, así como a los hispanos de todo el condado barcelonés (11 de Junio del 844).
5. Donación de varias iglesias, monasterios, villas y heredades hechas por el rey Ordoño I a la Santa Iglesia de Oviedo, y privilegios a sus pobladores (20 de Abril del 857).
6. Carta de población de Vifredo I, conde, al Castillo de Cardona (hacia el 880-886).
7. Donación del monasterio de Javilla por el conde Fernan Gonzalez, mujer e hijos, al abad y monges del monasterio de Cardena (941).
8. Fueros de Melgar de Suso, dados por su señor Fernan Armentales, con el asenso del conde Garci Fernández (hacia el 950).
9. Declaración de los Fueros de S. Zadornín, Berbeja y Barrio, en presencia del conde Fernan Gonzalez (29 de Noviembre del 955).
10. Fuero de Castrogeriz (974).

11. Carta de población y franquicias otorgada por Vivas, obispo de Barcelona, con el asenso de su clero, del conde Borrell y del pueblo de Barcelona (17 de Abril del 974).
12. Carta de población y franquicias otorgada por Vivas, obispo de Barcelona, con el asenso de su clero, del conde Borrell y del pueblo de Barcelona a los habitantes del castillo de Montmell (17 de Abril del 974).
13. Carta de población otorgada por Borrell, conde, a los habitantes del castillo de Cardona (23 de Abril del 986).
14. Carta de población y franquicias otorgada por Vivas, obispo de Barcelona, a los habitantes del castillo de Bell-Lloc o de Ribas (6 de Mayo del 990).
15. Teresa monja, sobrina de San Rosendo, confirma en el año de 1000 la libertad, que sus abuelos, padres del santo, habían dado á sus familias de criacion de Presares.
16. Donación de varias heredades hecha por el conde Sancho de Castilla al monasterio de S. Salvador de Oña (1011).
17. Fueros de Nave de Albura, declarados y confirmados en tiempos del Conde Sancho de Castilla (1012).
18. Concilium Legionense (1020).
19. Fueros de Villavicencio (posteriores a 1020).
20. Carta de franquicias otorgada por Berenguer Ramón I, conde de Barcelona, a los habitantes de la ciudad y condado de Barcelona (8 de Enero de 1025).
21. Carta de población de Villanueva de Pampaneto, otorgada por el rey Sancho el Mayor, de Navarra (1032).
22. Privilegios de franquezas concedidos por el conde Ermengol y su mujer la condesa Costanza a los vecinos de Santa Liciña (1036).

23. Fueros de los lugares de jurisdicción del monasterio de Cardeña, concedidos por D. Fernando I (1039).
24. Fueros y privilegios de Santa María del Puerto, dados por D. García, rey de Navarra y de Castilla (8 de Abril de 1042).
25. Privilegios concedidos por D. Fernando I al monasterio de Santa Juliana (1045).
26. Copia romanceada del privilegio otorgado por D. Fernando I al monasterio de Santa Juliana (1045).
27. Donación de las villas de Villafraía y Orbaneja, hecha por D. Fernando I al monasterio de Cardeña, y fueros que otorgó a las mismas (1045).
28. Carta de franquicias concedida por Arnaldo Mir de Tost a los habitantes de la villa de S. Julián de Régula, en términos del castillo de Ager (2 de Mayo de 1049).
29. Concilium Cojacense (1050).
30. Fuero de Santa Cristina, otorgado por D. Fernando I (1062).
31. Privilegios del monasterio de San Martín de Tera, obispado de Astorga, otorgados por D. Fernando I (1063).
32. Carta de población de Longares, dada por el obispo de Nájera D. Gómez, y el prior y monjes del monasterio de Albelda (1063).
33. Privilegios de los pobladores del monasterio de San Andrés, dados por D. Gómez, obispo de Nájera (1063).
34. Fuero de Jaca, otorgado por el rey D. Sancho Ramírez (1064).
35. Carta de Población de San Anacleto, dada por D. Gómez, obispo de Nájera (1065).
36. Fueros y Privilegios de la ciudad de Toledo (1067-1100).

37. Carta de franquicias otorgada por Ermengol IV, conde de Urgel, a los habitantes del valle de Lord (10 de Enero de 1068).
38. Fueros y Privilegios de la Iglesia y villa de Alquezar, otorgados por D. Sancho Ramírez, rey de Aragón y Navarra (1069).
39. Fueros y Privilegios de la ciudad de Burgos (1073-...).
40. Fuero de Nájera (1076).
41. Donación del castillo de San Vicente otorgada por Andrés, abad de San Cugat del Vallés, a Ramón Mager, esposa, hijos y su hermano Gerardo (13 de Enero de 1082).
42. Fueros de la Alberguería de Burgos, concedidos por el rey D. Alfonso VI (1085).
43. Fuero dado por D. Alfonso VI a los pobladores de la villa de Sahagún (1085).
44. Cartas de franquicia otorgadas por Lucía, Condesa de Pallars, y Ledgardis, Abadesa de Santa Cecilia de Elins, a los habitantes de Castelló, de 18 de abril de 1085.
45. Privilegios y fueros de los clérigos de la Catedral de Astorga, otorgados por el rey D. Alfonso VI (1087).
46. Carta de población otorgada por Guillermo Ramón, Conde de Cerdeña, a los habitantes de Vilafranca de Conflent (hacia 1088-1092).
47. Fueros y Privilegios del monasterio de San Juan de la Peña, otorgados por D. Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra (1090).
48. Copia romanceada del Fuero de Arguedas, concedido por D. Sancho Ramírez (1092).
49. Fuero de Valle, concedido por el conde D. Ramón, marido de la Infanta Dña. Urraca (1094).

50. Carta de franquicias otorgada por Gerrardo Poncio, a favor de los vecinos de Ager (hacia 1094).
51. Fuero de Logroño, concedido por el rey D. Alonso VI (1095).
52. Donación del lugar de Puig Giró, en término de Montasaña, Condado de Pallars, otorgada por Pedro, Conde de Pallars Jossá y su hijo Roger, para edificarlo y repoblarlo (hacia 1098-1114).
53. Fuero concedido por D. Alfonso VI a Miranda de Ebro (1099).
54. Privilegio de población de Barbastro, dado por D. Pedro I de Aragón (1100).
55. Avenencia entre la orden de Santiago y el concejo de Castrotorafe, sobre los fueros de este pueblo, aprobada por D. Fernando II de León (¿? 1100-1200).
56. Privilegio de D. Alfonso I el Batallador, confirmando los de la ciudad de Barbastro (¿? 1100-1200).
57. Privilegio otorgado a los mozárabes de Toledo por el rey D. Alfonso VI (1101).
58. Fueros de Caparroso, concedidos por el rey D. Pedro Sánchez de Navarra. (1102).
59. Fuero de Santa Cara, concedido por el rey D. Pedro Sánchez (posterior a 1102).
60. Carta de franquicias otorgada por Ramón, Abad de San Vicente de Cardona, junto con Bernardo, Vizconde de Cardona, a los habitantes de la Villa de Cardona (hacia 1102-1125).
61. Carta de franquicias concedida por Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona, a los habitantes del Castillo de Olérdola, de 26 de Noviembre de 1108.
62. Confirmación de los fueros de León, hecha por la reina Dña. Urraca (10 de Septiembre de 1109).

63. Confirmación y adiciones a los antiguos Fueros de León y Carrión, hechas por la reina Dña. Urraca (22 de Septiembre de 1109).
64. Carta de franquicias concedida por Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona, y los Castlanes de Olérdola, a los habitantes de la Torre Susana, de dicho Castillo, de 25 de Noviembre de 1109).
65. Fueros dados a Sahagún por D. Diego, abad del monasterio (1110).
66. Carta de Población de la villa de Ejea (1110).
67. Fueros y privilegios del monasterio de Cillaperil, concedidos por el rey D. Alfonso VII (1110).
68. Carta de población otorgada a Agramunt por Armengol y Dulcia, condes de Urgel (1113).
69. Fueros concedidos a los pueblos del obispado de Compostela, por el obispo D. Diego Gelmírez (1113).
70. Fuero del Burgo Nuevo de Alquezar, otorgado a sus pobladores por el rey de Aragón D. Alonso el Batallador (1114).
71. Pactos que se otorgaron entre el rey D. Alonso el Batallador y los moros de Tudela, al tiempo de su conquista (1115).
72. Fueros de Tudela, Cervera y Galípiezo, otorgados por D. Alonso el Batallador (1115-1120).
73. Fueros de Belorado en la Rioja, otorgados por D. Alonso el Batallador (1116).
74. Carta de población de la villa de Belchite en Aragón, otorgada por D. Alonso el Batallador (1116).
75. Carta de franquicias concedida por Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona, a los hombres de Tárrega, de 5 de Febrero de 1116.

76. Fueros de la villa de Medinaceli, dados por el concejo de la villa con el beneplácito de D. Alfonso el Batallador (1117-1124).
77. Carta de población concedida por Ermengol VI, conde de Urgel, con asenso de Geraldo, vizconde de Cabrera y de Odón, obispo de Urgel a un grupo de hombres de Balaguer (29 de Junio de 1118).
78. Fuero dado a los mozárabes, castellanos y francos de la ciudad de Toledo, por el rey D. Alfonso VII (1118).
79. Privilegio otorgado por la reina Dña. Urraca concediendo a los vecinos de Burgos el que no fuesen jueces contra su voluntad (1118).
80. Fueros de Funes, Marcilla y Peñalen, concedidos por el rey D. Alfonso el Batallador (1120).
81. Fuero de Sangüesa, otorgado por D. Alfonso el Batallador (1122).
82. Privilegio del rey D. Alfonso VII, en el que confirma y adiciona los fueros de Burgos (1124).
83. Fuero de Cabanillas, concedido por D. Alfonso VII (1124).
84. Fuero de Araiciel, concedido por D. Alfonso VII (1125).
85. Fuero concedido por D. Alfonso VII a los pobladores de S. Martín de Madrid (1126).
86. Fuero de Zaragoza, otorgado por D. Alfonso el Batallador (1126-1131).
87. Fuero dado a la ciudad de Zaragoza por D. Alfonso el Batallador, vulgarmente llamado el Privilegio de los Veinte (1126-1131).
88. Fueros que el rey D. Alfonso el Batallador otorgó a los pobladores y vecinos de Tudela (1127).
89. Fuero de Castrotorafe, concedido por D. Alfonso VII (1129).
90. Fuero de población del barrio de San Saturnino, o San Cernín de Pamplona (1129).

91. Fueros de Encisa, en Navarra, otorgados por D. Alfonso el Batallador (1129).
92. Carta de franquicias otorgada por Roberto, Príncipe de Tarragona, con el asenso del Conde de Barcelona, a los habitantes de Tarragona y su territorio (hacia 1129).
93. Fuero de Marañón, en Navarra, dado por D. Alfonso el Batallador (1130).
94. Franquezas concedidas a la población de Cacabelos, en Galicia, por el rey D. Alfonso VII (1130).
95. Privilegios dados a los pobladores de Orense por su obispo, D. Diego III (1130).
96. Fuero de Escalona, dado por Diego y Domingo Alvarez, a virtud de orden de D. Alfonso VII (1130).
97. Fueros de Orense, otorgados por D. Alfonso VII (1131).
98. Fuero de Calatayud, otorgado por D. Alfonso el Batallador (1131).
99. Carta de franquicia otorgada por Ramón Berenguer IV, a los habitantes de la Ciudad de Barcelona (hacia 1131-1162).
100. Fuero de Asín, en Aragón otorgado por D. Alfonso el Batallador (1132).
101. Fuero de los pobladores mozárabes de Mallen, en Aragón, otorgado por D. Alfonso el Batallador (1132).
102. Fuero de Guadalajara, concedido a sus vecinos por D. Alfonso VII (1133).
103. Carta de población de Artasona, en Aragón, concedida por D. Alfonso el Batallador (Febrero de 1134).
104. Privilegio del rey de Aragón D. Ramiro el Monje, en que confirma a los de Jaca los fueros que les otorgó su padre D. Sancho Ramírez, y concede a sus habitantes las franquezas de los burgueses de Montpellier, y la exención de lezda (1134).

105. Privilegio de D. Ramiro el Monje, por el que confirma y adiciona los fueros de Jaca (1134-1187).
106. Fuero de Lara, otorgado por D. Alfonso VII (1135).
107. Privilegio de D. Alfonso VII, concedido a los mozárabes, castellanos y francos de la ciudad de Toledo eximiéndoles de los derechos de Portazgo y de Alexor (1137).
108. Fuero de los pobladores del castillo de Oreja, concedido por el rey Alfonso VII (1139).
109. Privilegio del rey Alfonso VII, por el que dona al obispo D. Bernardo y Canónigos de la Iglesia de Sigüenza los pobladores de la misma, a los que concede el fuero de Medinaceli (1140).
110. Fuero de Calatalifa, dado por el rey Alfonso VII (1141).
111. Fuero de la ciudad de Daroca dado por D. Ramón Berenguer, conde de Barcelona (Noviembre de 1142).
112. Carta de población otorgada por Gregorio, Abad de Cuixá, con el asenso del Conde Ramón Berenguer IV y otros Magnates, a los habitantes de Codalet (hacia 1142).
113. Fuero de la villa de Roa, concedido por el rey Alfonso VII (1143).
114. Fuero de Peralta, otorgado por D. García, rey de Navarra (1144).
115. Carta de franquicias otorgada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los vecinos de las parroquias de San Pedro de Osor, Santa Cruz de Horta y San Daniel de Manfre (21 de Enero de 1144).
116. Donación del Lugar de Puig Ricart, otorgada por Ermengol, Abad de San Cugat del Vallés, a grupo de diez pobladores, de 28 de enero de 1145.
117. Carta de población concedida por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Almenar, de 13 de Abril de 1147.

118. Carta de donación de un cerro sobre Capellades, en término del Castillo de Claramunt , Condado de Barcelona, efectuada por Pedro Bernat y Berenguer, Hermanos, al Monasterio de San Cugat del Vallés, de 27 de Abril de 1147.
119. Convenio propuesto por Roberto, Conde de Tarragona, a Bernardo de Tort , Arzobispo Tarraconense, sobre la dominación y gobierno de Tarragona y su Territorio, de 4 de Enero de 1148.
120. Donación de la Ciudad y Territorio de Tarragona por Bernardo de Tort , Arzobispo de Tarragona, a Roberto, Príncipe, de 9 de Febrero de 1149.
121. Donación del Cerro de Mangons, en territorio de Tarragona, efectuada por Poncio de Timor, a favor de los hermanos Guillermo de Vilafranca y Ramón, Arnaldo y Berenguer del Om, para edificarlo, mejorarlo y fortificarlo, de 9 de Abril de 1149.
122. Carta de franquicias concedida por Roberto, Príncipe de Tarragona, a los habitantes de Tarragona, de 3 de Septiembre de 1149.
123. Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Tort , Arzobispo de Tarragona, y Roberto, Príncipe, a los habitantes de Tarragona, de 3 de Septiembre de 1149.
124. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Tortosa, de 30 de Noviembre de 1149.
125. Carta de población otorgada a los habitantes de Santa Linya (hacia 1150).
126. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, Príncipe de Aragón, y Ermengol IV, Conde de Urgel, a los habitantes de Lérida, de Enero de 1150.
127. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los hombres de Tárrega, pobladores de Vinaixa, de 23 de Agosto de 1151.

128. Donación para poblar una heredad en Castellidans, otorgada por Pedro de Cartellá, Comendador Templario de Gardeny, a favor de Gerberto y Bernardo Ferrer y sus descendientes, de 25 de Agosto de 1151.
129. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Vimbodí (hacia 1151).
130. Fueros otorgados a los burgueses de Sahagún por D. Alfonso VII y el abad D. Domingo (1152).
131. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Ciurana, de 29 de Abril de 1153.
132. El rey D. Alfonso VII, confirma y transcribe varias cláusulas de los fueros antiguos de Toledo (1155).
133. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Cambrils, de 5 de Fe
brero de 1155.
134. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Duas Aquas y de Vilavert, de 29 de Abril de 1155.
135. Donación de una "parellada" de tierra en el lugar de Preixana, término de Verdú, Condado de Barcelona, otorgada por Bernardo de Angle
sola, a favor de Berenguer Teixidor, de 16 de Junio de 1155.
136. Privilegio de D. Alfonso VIII, concedido a los de Burgos que el Concejo no responda de los homicidios que se hicieran en la ciudad, si
no sólo el que los cometiere (1157).
137. Carta de población otorgada por Ermengol VII, Conde de Urgel, con Bernardo Estopañá y demás señores del lugar, a los habitantes de Abella, de 30 de Agosto de 1157.
138. Carta de población otorgada por Gerberto de Anglesola junto con Pedro de Cartellá y otros Freires Templarios a los habitantes de Avinavita, de 24 de Abril de 1158.

139. Carta de franquicias concedida por Iofredo, Abad de Ripoll, a favor de los habitantes de Tossa, de 11 de Diciembre de 1158.
140. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Prades, de Mayo de 1159.
141. Carta de Población otorgada por Guillermo de Torroja, Obispo de Barcelona, a los moradores de las villas de Bráfim, de 10 de Septiembre de 1159.
142. Carta de población otorgada por Hugo de Barzalón, Maestre del Temple, a los habitantes del lugar de Avisenlo, de Marzo de 1161.
143. Carta de población otorgada por Ermengol VII, Conde de Urgel, a los habitantes de Agramunt, de 13 de noviembre de 1163.
144. Carta de población otorgada por Ermengol VII, Conde de Urgel, a los habitantes de Menarguens, de Diciembre de 1163.
145. Carta de población otorgada por Hugo de Cervelló, Arzobispo de Tarragona, a los habitantes de Villa Constantina, de 13 de Mayo de 1164.
146. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los habitantes de Horta, de Enero de 1165.
147. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, junto con Alberto de Castellvell, a los habitantes de Uldemolins, de 31 de Enero de 1166.
148. Donación de un alodio, situado en término del Castillo de Montblanch, condado de Barcelona, efectuada por Ramón de Cervera a favor de un grupo de catorce hombres y su descendencia, de 22 de Marzo de 1166.
149. Privilegio de D. Alfonso VIII eximiendo a los de Burgos de pena o calumnia por los homicidios casuales (1168).

150. Carta de población otorgada por Ramón y Bernardo de Gavalgand y Berenguer de Cambrils, a los moradores de Alforja, de 11 de Enero de 1170.
151. Donación del lugar de Escornalbou efectuada por Alfonso I, Rey, con asenso de Alberto de Castellvell, a favor de Juan de San Boy, para restaurarlo y repoblarlo (hacia 1170).
152. Donación del lugar de Rocabruna, en territorio de Tarragona, efectuada por Guillermo de Torroja, Arzobispo de Tarragona, y Alfonso I, Réy, a favor de Pedro de Vilagrasa, para fortificarlo y repoblarlo, de 16 de Noviembre de 1171.
153. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los moradores de la Torre de Mirón Torbaví, de 3 de Octubre de 1173.
154. El rey D. Alfonso VIII confirma e inserta los fueros de la ciudad de Toledo (1174).
155. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los hombres de Alguaire, de 1 de Febrero de 1174.
156. Carta de población otorgada por Ermengol VII, Conde de Urgel, a los habitantes de Balaguer, de 13 de Julio de 1174.
157. Carta de población otorgada por Ermengol VII, Conde de Urgel, en su nombre y en el del Rey, Alfonso I, a un grupo de cincuenta moradores de Castellblanch, en la Litera, de 13 de Noviembre de 1174.
158. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los habitantes de Vilanova de Prades, de Enero de 1175.
159. Fernando II de León confirma los fueros que los reyes sus progenitores concedieron a los vecinos de Lugo (1177).
160. Fuero de Castrotorafe, concedido por D. Pedro Fernández, maestre de Santiago, confirmado por D. Fernando II de León (1178).

161. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los habitantes de Cambrils, de Diciembre de 1178.
162. Carta de población otorgada por Berenguer de Vilademuls, Arzobispo, de Tarragona con el asenso de Alfonso I, Rey, y de Beltran de Caste llet, a los moradores del lugar de Montroig, de 13 de Agosto de 1180.
163. Donación del lugar de Ortó, efectuada por Guillermo de Cervera y Bernardo de Montpaó a favor de Pedro de Bellester, para poblarlo, de 10 de Febrero de 1181.
164. Carta de franquicias otorgada por Bernardo, Abad de San Feliú de Guíxols, a los moradores de la Villa de San Feliú de Guíxols, de 1 de Junio de 1181.
165. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los moradores de Riu de Algars y Batea, de 30 de octubre de 1181.
166. Carta de franquicias otorgada por Alfonso I, Rey, a los habitantes de Puigcerdá, de 31 de Octubre de 1181.
167. Carta de Franquicias otorgada por Alfonso I Rey, a los habitantes de Puigcerdá, de 11 de Junio de 1182.
168. Carta de población otorgada por Ermengol VII, Conde de Urgel, con su esposa Dulcia y su hijo Ermengol, a los moradores del Castillo y Villa de Bellicaire, de 25 de enero de 1183.
169. Carta de población otorgada por Bernardo de Bell-Lloch a los habitantes de Reus, de 5 de Agosto de 1183.
170. Carta de franquicias otorgada por Ramón de Castellbó, Vizconde de Cerdaña y Conflent, a los habitantes de Maranges y Gerul, de 27 de Enero de 1184.
171. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, y Pedro de Besora, a los moradores de Vilosell, de mayo de 1184.

172. Carta de franquicias otorgada por Berenguela de Cervera a los vecinos de Verdú, de 18 de Septiembre de 1184.
173. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, a los habitantes de Vilagrasa, de Abril de 1185.
174. Carta de población otorgada por Juan de San Boy, Camarero de la Iglesia de Tarragona, con asenso del Prelado y Cabildo, a los moradores de Reus, de 2 de Junio de 1186.
175. Privilegio de D. Alonso II de Aragón, confirmando y adicionando las costumbres y fueros de Jaca (1187).
176. Carta de población con franquicias otorgada por Ramón de Berga, Abad de Rippoll, a los habitantes de Tossa, de 10 de Mayo de 1187.
177. Carta de población con franquicias otorgada por Alfonso I, Rey, a los habitantes de Sampedor (hacia 1190-1192).
178. Carta de población con franquicias otorgada por Ramón de Castellvell, Obispo de Barcelona, a los moradores de Creixell, de 22 de Marzo de 1190.
179. Donación de la población de Montsant efectuada por Dña. Sancha, Reina de Aragón y Condesa de Barcelona, a favor de los hermanos Juan y Miguel Navarra, de 26 de Mayo de 1190.
180. Carta de población otorgada por Bernardo de Montpalau y Berenguer de Luna, en su nombre y de orden de Guillermo de Cervera y Bernardo de Montpañ, a un grupo de hombres de Preixens, nuevos moradores de Torreblanca, de 13 de Octubre de 1190.
181. Fuero de Santa Cara, otorgado por D. Sancho el Sabio de Navarra (1191).
182. Donación de Vilafranca del Panadés, efectuada por Alfonso I, Rey, a Berenguer de Vilafranca y tres caballeros más, de mayo de 1191.
183. Carta de población otorgada por Pedro de Deu a los pobladores de Falset, de 5 de mayo de 1191.

184. Carta de población concedida por Poncio de Rígaldo, Maestre del Temple, a los habitantes de Horta, de 10 de Enero de 1192.
185. Carta de población otorgada por Fr. Poncio de Rigaldo, Maestre del Temple, y Fr. Bernardo de Claret, Preceptor de Gardeny, a los moradores de Gandesa, de 13 de marzo de 1192.
186. Privilegio de D. Alfonso VIII, concediendo a los pobladores del Hospital de San Pedro de Barrioeras los fueros de los collazos de Burgos (1194).
187. Carta de población otorgada por Poncio de Rigaldo, Maestre del Temple y Guillermo de San Paulo, Preceptor de Tortosa y Miravet, a los moradores de Gandesa, de abril de 1194.
188. Carta de población del alodio de Castellet, en término de Vilafranca del Panedés, concertada entre Alfonso I, Rey, y Beltran de Castellet, de Julio de 1194.
189. Carta de franquicias concedida por Alfonso I, Rey, y Juan de San Boy, Paborde de la Iglesia Tarraconense, sede vacante, a los habitantes de la ciudad de Tarragona, de Julio de 1194.
190. Carta de población otorgada por Alfonso I, Rey, con el asenso de Odón, Prior de San Pedro de Riudevittles, a los moradores de Cabra, de Octubre de 1194.
191. Carta de franquicias otorgada por Pedro de Castelló, Paborde de la Iglesia Celsonense, a los habitantes de la Villa de Solsona, de 27 de Diciembre de 1195.
192. Carta de franquicias otorgada por Arnaldo de Castellbó, Vizconde, a los habitantes de Castellbó, de 9 de Enero de 1196.
193. Carta de población otorgada por Pedro de Colenys, Comendador Templario de Tortosa y Miravet, a los moradores de Pinell, de 1198.

194. Carta de franquicias otorgada por Ermengol VIII, Conde de Urgel, a los habitantes de Agramunt, de 27 de Febrero de 1198.
195. Carta de población otorgada por Gombaldo de Ribelles a los moradores de Rufeá, de 19 de mayo de 1199.
196. Privilegio de D. Alfonso VIII, concediendo ciertas exenciones a los collazos de la Iglesia de Toledo (¿? Hacia 1200).

II. TEXTOS DEL DERECHO LOCAL DE ARAGON.

197. Fuero de Jaca, concedido por el rey D. Sancho Ramírez (hacia 1063-1064).
198. Privilegio del rey de Aragón, D. Ramiro el Monge, por el que se con firma a los de Jaca los Fueros que les otorgó su padre D. Sancho Ra mírez, y concede a sus habitantes las franquicias de los burgueses de Monpeller (1134).
199. Privilegio del rey de Aragón, D. Ramiro el Monge, por el que se con firman y adicionan los Fueros de Jaca (¿? Posterior a 1134).
200. Fuero concedido por D. Alfonso, Rey, a Teruel (1176).
201. Privilegio del rey D. Alfonso II de Aragón, confirmando y adicionan do las costumbres y Fueros de Jaca (1187).
202. Redacciones aragonesas del Fuero extenso de Jaca (s. XIII).

III. TEXTOS DEL DERECHO LOCAL DE NAVARRA.

203. Fuero concedido a Estella por Sancho Ramírez (1090).
204. Sancho Ramírez y Pedro I confirman a Santa María de Pamplona todas sus posesiones (28 de Octubre de 1092).
205. Alfonso el Batallador concede a Puente la Reina el Fuero de Estella (Junio de 1122).

206. Fuero de Pamplona (redacciones navarras del Fuero extenso de Jaca, incorporadas a manuscritos de los ss. XIV, XVI y XVIII).
207. Alfonso el Batallador concede a los francos de San Saturnino de Pamplona el Fuero de Jaca (Septiembre de 1129).
208. García Ramírez concede a Olite el Fuero de Estella (1147).
209. García Ramírez concede a Monreal el Fuero de Estella (1149).
210. Sancho el Sabio confirma a San Saturnino de Pamplona el Fuero de Jaca (1155-1156).
211. Sancho el Sabio confirma a San Saturnino de Pamplona el Fuero de Jaca (Julio de 1158).
212. Fuero otorgado a Estella por Sancho el Sabio (1164).
213. Fuero concedido a San Sebastián por Sancho el Sabio (hacia 1180).
214. Los burgueses de San Saturnino de Pamplona se comprometen a observar estrictamente el Fuero otorgado por Alfonso el Batallador (Agosto de 1180).
215. Sancho el Sabio concede a los pobladores de su parral de Estella el Fuero de esta localidad (Marzo de 1187).
216. Sancho el Sabio concede a los pobladores del Arenal de Estella el Fuero de esta localidad (Junio de 1188).
217. Sancho el Sabio extiende a la Navarrería de Pamplona el fuero de San Saturnino (Octubre de 1189).
218. Confirmación del Fuero de San Sebastián por Alfonso VIII (16 de Agosto de 1202).
219. Sancho el Fuerte prohíbe a los vecinos de la Navarrería y de San Nicolás levantar fortalezas contra el Burgo de San Saturnino (23 de Agosto de 1214).

220. Espárago, obispo de Pamplona, prohíbe a los vecinos de la Navarrería y de San Nicolás levantar fortalezas contra el Burgo de San Saturnino (Marzo de 1215).
221. Sancho el Fuerte y Remiro, obispo de Pamplona, restablecen la paz entre los barrios (28 de Julio de 1222).
222. Los jurados de la Navarrería y los de San Nicolás convienen en disfrutar a medias los chapiteles encavados entre ambos núcleos (Julio de 1236).
223. Teobaldo I confirma a San Saturnino de Pamplona los fueros otorgados por sus predecesores (9 de Febrero de 1238).
224. Alfonso X el Sabio toma bajo su protección el Burgo de San Saturnino (12 de Octubre de 1253).
225. Teobaldo II toma bajo su protección el concejo de la Población de San Nicolás (27 de Noviembre de 1253).
226. Los procuradores del rey declaran haberse negado los representantes de San Nicolás y la Navarrería a asistir a examinar las demandas de los del Burgo de San Saturnino (Abril-Junio de 1254).
227. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de exigir peaje a los vecinos de San Saturnino (Junio de 1254).
228. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de exigir el peaje de Pamplona a los vecinos de San Saturnino (Junio de 1254).
229. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de exigir la "mala tolta" de Maya y Lecumberri a los vecinos de San Saturnino (Junio de 1254).
230. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de exigir el peaje de Pamplona a los vecinos de la Población de San Nicolás (17 de Julio de 1254).

231. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de que los vecinos de San Saturnino erigieran un muro en tierra de los de San Nicolás (19 de Julio de 1254).
232. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de que los vecinos de San Nicolás erigieran un muro y un portal en el espacio dado a los de San Saturnino (Julio de 1254).
233. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan que Teobaldo I actuó injustamente al hacer "emparanzas" en el Burgo de San Saturnino (Julio de 1254).
234. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de prohibir que los del Burgo de San Saturnino tuvieran tabla de cambio durante los 40 días que el rey tenía la suya (Julio de 1254).
235. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de hacer pagar ciertas tasas a los del Burgo de San Saturnino (Agosto de 1254).
236. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan que Sancho el Sabio obró injustamente al hacer construir casas en terrenos del Burgo de San Saturnino (Diciembre de 1254).
237. Los alcaldes nombrados por Teobaldo II dictaminan la injusticia de prohibir a los de San Saturnino que tiñeran fuera de la "tintura" del rey (Febrero de 1255).
238. Los jurados de la población de San Nicolás confirman el juramento prestado por sus enviados a Teobaldo II (10 de Noviembre de 1255).
239. Pedro, obispo de Pamplona, y Jofre, senescal de Navarra, nombran alcalde, almirante y baile del Burgo de San Saturnino (22 de Febrero de 1256).
240. Jofre, senescal de Navarra, ordena a los vecinos de San Saturnino que aguarden hasta la venida del rey para tratar de su querella con los de San Nicolás (30 de Mayo de 1256).

241. Los jueces condenan a los de San Nicolás a retirar la cadena colocada en perjuicio de los de San Saturnino (19 de Febrero de 1257).
242. Los jueces comunican a Pedro, obispo de Pamplona su sentencia en el pleito del Burgo de San Saturnino con los de la Navarrería y San Nicolás (23 de Abril de 1257).
243. Dos monjes de Iranzu declaran haber jurado la paz acordada (30 de Abril de 1256).
244. Teobaldo II concede a Tiebas el Fuero de Estella (23 de Enero de 1264).
245. Teobaldo II concede a Torralba el Fuero de Estella (27 de Febrero de 1264).
246. Teobaldo II exime a los francos de Estella de los homicidios casuales (23 de Abril de 1266).
247. Los jurados de San Saturnino, San Nicolás, la Navarrería y San Miguel acuerdan no hacer valer las sentencias que se dicten por las disputas habidas entre ellos (20 de Junio de 1266).
248. Teobaldo II aclara ciertos artículos del Fuero de Estella (5 de Octubre de 1269).
249. Enrique I jura a los 20 jurados de la villa de Pamplona que mantendrá sus fueros y privilegios (1 de Marzo de 1271).
250. Enrique I jura mantener los fueros de Estella (11 de Marzo de 1271).
251. Enrique I acoge bajo su protección a los 20 jurados y al pueblo de la villa de Pamplona (23 de Mayo de 1272).
252. Pedro Sánchez de Monteagudo, gobernador de Navarra, manda fortificarse a los vecinos de San Saturnino y a los de San Nicolás (3 de Mayo de 1275).

253. Alfonso X de Castilla manda a las autoridades de su reino que dejen circular libremente a los mercaderes de Navarra (26 de Marzo de 1281).
254. Los jurados de San Saturnino y los de San Nicolás acuerdan formar una sola comunidad (13 de Julio de 1287).
255. Felipe el Hermoso manda que se permita a los vecinos de Pamplona disfrutar de los pastos que frecuentaban antes de la destrucción de la Navarrería (23 de Abril de 1290).
256. Felipe el Hermoso acuerda con el obispo Miguel y la iglesia de Pamplona compartir la jurisdicción de los cuatro núcleos de la ciudad (Diciembre de 1290).
257. Proyecto de reforma del Fuero de Estella (elaborado en el s. XIII).
258. Rodrigo, arzobispo de Tarragona, insta a Miguel, obispo de Pamplona, a ejercer de manera efectiva su jurisdicción sobre la ciudad (16 de Abril de 1300).
259. Acta notarial de la entrevista entre los veinte jurados y el obispo de Pamplona sobre el estatuto jurídico de la ciudad (26 de Junio de 1301).
260. Bonifacio VIII manda citar al obispo Miguel y al cabildo de Pamplona (19 de Diciembre de 1301).
261. Luis Hutín jura mantener los Fueros de Estella (8 de Noviembre de 1307).
262. Enguerrand de Villiers, gobernador de Navarra, aprueba para cinco años la ordenanza del concejo de Estella de que quien mate que muera (8 de Junio de 1310).
263. Luis Hutín manda destruir las fortificaciones de San Nicolás (30 de Diciembre de 1314).

264. Luis Hutín manda que se indague sobre las fortificaciones alzadas en detrimento del Burgo de San Saturnino (22 de Febrero de 1315).
265. Miles de Noyers y Alfonso de Robray, enviados del rey de Navarra, prorrogan por cinco años la ordenanza de que quien mate que muera (25 de Marzo de 1315).
266. Felipe el Largo aprueba el acuerdo de sus procuradores con el obispo Arnaldo y el Cabildo de Pamplona, renunciando éstos a su jurisdicción sobre la ciudad (Septiembre de 1319).
267. Joffre de Moretayna, Lugarteniente del gobernador de Navarra, prorroga por cinco años la ordenanza de que quien mate que muera (16 de Mayo de 1320).
268. Felipe el Largo ordena ejecutar el acuerdo con el obispo y el cabildo de Pamplona, asignando a éstos 500 Libras de renta anual (26 de Diciembre de 1320).
269. Los procuradores del obispo y el cabildo de Pamplona entregan a los comisarios del gobernador de Pamplona la jurisdicción temporal sobre la ciudad (6 de Abril de 1321).
270. Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, acuerda cierta composición acordada por el concejo de Estella entre dos facciones rivales (25 de Mayo de 1322).
271. Súplicas elevadas al rey de Navarra por los vecinos de la nueva población de la Navarrería de Pamplona (Mayo de 1322 - Mayo de 1324).
272. Carlos el Calvo da normas para completar la repoblación de la Navarrería, y concede a sus vecinos el Fuero de Jaca (Junio de 1324).
273. Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, prorroga por cinco años la ordenanza de que quien mate que muera (14 de Mayo de 1325).
274. Requerimiento hecho a Miguel de Meoz, Almirante de San Nicolás, para que se abstenga de ejercer sus funciones en el área jurisdiccional de la Navarrería (21 de Junio de 1325).

275. Felipe III confirma a los burgueses de Pamplona la libertad de tránsito por Valcarlos (15 de Abril de 1329).
276. Modificación de los Fueros de Tudela (1330).
277. Felipe III y Juana II eximen a los vecinos de San Saturnino, San Nicolás y la Navarrería de la lezda del pescado seco y de la carne (26 de Diciembre de 1330).
278. Felipe III y Juana II eximen a los vecinos de San Saturnino de la lezda del pescado seco y de la carne (26 de Diciembre de 1330).
279. Enrique de Sully, gobernador de Navarra, prorroga por treinta años la ordenanza de que quien mate que muera (23 de Mayo de 1332).
280. Los jurados del Burgo de San Saturnino y de la Población de San Nicolás corroboran el procedimiento seguido para renovar anualmente las treguas entre los vecinos (20 de Julio de 1334).
281. Felipe de Melun, lugarteniente del rey de Navarra, toma bajo su protección a los vecinos de la Navarrería (14 de Julio de 1342).
282. Juan de Conflant, gobernador de Navarra, manda a los jurados de Pamplona que presten juramento según la fórmula del "Libro de la Veintena" (14 de Julio de 1346).
283. Juan de Conflant, gobernador de Navarra, manda nuevamente a los jurados de Pamplona que presten el juramento acostumbrado (14 de Agosto de 1346).
284. Acta de las quejas presentadas por el Burgo de San Saturnino ante el Gobernador de Pamplona sobre la negativa de los jurados de San Nicolás de prestar el juramento acostumbrado (25 de Agosto de 1346).
285. Carlos II permite que durante dos años no se cobre al Burgo de San Saturnino y a la Población de San Nicolás el homicidio debido por no entregar los delincuentes a los oficiales del rey en el plazo fijado (15 de Abril de 1355).

286. El infante D. Luis manda a los jurados de San Nicolás que se congreguen en veintena con los de San Saturnino (16 de Junio de 1358).
287. Carlos II prorroga por treinta y nueve años la ordenanza de que quien mate que muera (5 de Marzo de 1365).
288. Carlos II libera a la Navarrería de Pamplona de todos los censos y dispone que su importe se destine a las obras de fortificación de la ciudad (5 de Diciembre de 1366).
289. Carlos II perdona a la Navarrería lo debido por los fuegos no declarados (6 de Diciembre de 1368).
290. Carlos II manda a sus oficiales que respeten los fueros y privilegios de Pamplona (13 de Febrero de 1369).
291. La reina Juana, esposa de Carlos II, concede a los vecinos de San Saturnino y de San Nicolás que descarguen donde quieran el pescado fresco (14 de Diciembre de 1369).
292. La reina Juana, concede a los mercaderes de Pamplona exención de peajes por todo el reino por dos años (22 de Enero de 1372).
293. Carlos II concede al Burgo, la Población y la Navarrería celebrar anualmente una Feria de diez días (Febrero de 1382).
294. Carlos II confirma las ordenanzas del Burgo, la Población y la Navarrería sobre la entrada de vino y uva en la ciudad (11 de Diciembre de 1387).
295. Carlos III declara unidos en una sola universidad el Burgo de San Saturnino y la Población de San Nicolás (20 de Diciembre de 1390).
296. Confirmación, otorgada por Enrique III, del Fuero de San Sebastián (14 de Abril de 1403).
297. Carlos III delimita los términos del Burgo de San Saturnino y de la Población de San Nicolás (8 de Mayo de 1408).

298. Carlos III ordena a los alcaldes y jurados de la Navarrería, el Burgo y la Población que se atiendan recíprocamente cuando les requieran a dar tregua a los vecinos de una comunidad que hayan herido a los de otra (12 de Diciembre de 1421).
299. Carlos III ordena que en adelante todos los moradores de la ciudad de Pamplona están aforados al Fuero general de Navarra (11 de Septiembre de 1423).
300. Confirmación, concedida por Enrique IV, del Fuero de San Sebastián (15 de Junio de 1457).

IV. TEXTOS DEL DERECHO LOCAL DE CATALUÑA.

301. Usatges de Barcelona (versión definitiva hacia mediados del s. XIII; elaborada sobre la base del núcleo promulgado por Ramón Berenguer el Viejo, en 1068).
302. Carta de Población otorgada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Tortosa (30 de Noviembre de 1149).
303. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, príncipe de Aragón y Ermengol VI, conde de Urgel, a los habitantes de Lérida (Enero de 1150).
304. Carta de franquicias otorgada por Ramón de Castellbó, vizconde de Cerdaña y Conflent, a los habitantes de Maranges y Gerul (27 de Enero de 1184).
305. Donación para poblar el lugar de Vandellós, en término del castillo de Tivissa, otorgada por Albert de Castellvell y su castillán Arnau de Fenollar, a favor de Ramón de Riudoms (20 de Diciembre de 1191).

306. Carta de población otorgada por Arnaldo, prior de San Vicente de Garraf, a los moradores del Valle de Porrera (29 de Agosto de 1201).
307. Carta de población otorgada por Bernardo de Anglesola, con el asenso de Berenguer y Pedro de Anglesola, a los moradores de Gólmés (30 de Julio de 1204).
308. Carta de población otorgada por Poncio de Rigaldo, maestre del Temple, a los moradores de Batea (25 de Noviembre de 1205).
309. Carta de población otorgada por Bernardo de Ceguñoles, comendador templario de La Rápita, a los habitantes de Pinell (15 de Marzo de 1207).
310. Carta de franquicias otorgada por Pedro I, rey, a los habitantes de Colliure (24 de Agosto de 1207).
311. Carta de franquicias otorgada por Guillelma de Castellvell a los habitantes de Martorell, en el término urbano que se delimita (31 de Octubre de 1208).
312. Carta de población concedida por Gombaldo de Santa Oliva, obispo de Tortosa, a los habitantes del lugar de Lledó (13 de Octubre de 1210).
313. Carta de franquicias concedida por Pedro I, rey, a los ciudadanos de Balaguer (16 de Septiembre de 1211).
314. Carta de franquicias concedida por Ramón Berenguer de Ager, preceptor de Gardeny y Corbins, y Ramón de Oller, procurador de Corbins, con asenso del Maestre templario Pedro de Monteagudo, a los pobladores de Vilanova de la Barca y lugares contiguos de Aguilar y Castellpagès (26 de Abril de 1212).
315. Carta de franquicias concedida por Pedro I, rey, con asenso de Nuño Sanç, a los habitantes de Salses (21 de Febrero de 1213).

316. Carta de franquicias otorgada por Pedro I, rey, con el asenso de Nuño Sanç, a los habitantes de San Lorenzo de Salancá (22 de Febrero de 1213).
317. Carta de población otorgada por Ramón de Moncada, con el asenso de Folch de Cornell, maestro del Hospital, a los habitantes de Ulldecona (11 de Abril de 1222).
318. Carta de franquicias otorgada por Geraldo de Cabrera, conde de Urgel, a los moradores de Agramunt (22 de Marzo de 1224).
319. Carta de población otorgada por Bernardo de Campanies, preceptor templario de Miravet, a los moradores de Villalba (10 de Abril de 1224).
320. Carta de población y franquicias otorgada por Nuño Sanç, conde de Rosellón y Cerdaña, a los habitantes de Bellver, en el Baridá (26 de Diciembre de 1225).
321. Carta de franquicias otorgada por Seré y su familia a los habitantes de Belltall (19 de Noviembre de 1227).
322. Consuetudines Ilerdenses (elaboradas por Guillermo Botet y promulgadas en 1228).
323. Carta de franquicias otorgada por Poncio, conde de Urgel, a los moradores de la villa y Término de Ager (14 de Abril de 1228).
324. Carta de franquicias concedida por Berenguer de Cervera a los habitantes de Grañanella (13 de Mayo de 1230).
325. Establecimiento de tierra efectuado por Arnaldo Punyet a favor de Juan Dezcanós, en el término de Vallseca (16 de Diciembre de 1232).
326. Carta de franquicias otorgada por Nuño Sanç, conde de Rosellón y Cerdaña, a los habitantes del castillo y villa de Clará (12 de Diciembre de 1233).

327. Carta de franquicias otorgada por Galcerán de Pinós a los nuevos pobladores de la villa de Bagá (17 de Marzo de 1234).
338. Carta de franquicias otorgada por Jaime I, rey, a los nuevos pobladores de Balaguer (21 de Marzo de 1236).
329. Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Santa Eugenia a los moradores de la villa de Torroella de Montgri (12 de Septiembre de 1237).
330. Carta de población del lugar de Refalgarí, otorgada por Guillermo de Moncada, a favor de tres individuos y sus familiares (13 de Mayo de 1242).
331. Carta de franquicias concedida por Jaime I, rey, a los habitantes de Puigcerdá (6 de Enero de 1243).
332. Carta de franquicias concedida por Jaime I, rey, a los habitantes de Bellver (6 de Enero de 1243).
333. Carta de franquicias concedida por Jaime I, rey, a los habitantes de Vilafranca de Conflent (6 de Enero de 1243).
334. Carta de población otorgada por Poncio de Torrella, obispo de Tortosa, a los habitantes de la villa de Cabanes (19 de Junio de 1243).
335. Carta de franquicias otorgada por Jaime I, rey, a los nuevos pobladores de Prats de Molló (22 de Octubre de 1245).
336. Carta de franquicias otorgada por Jaime I, rey, a los nuevos pobladores de Castro Opol o Salvaterra (15 de Mayo de 1246).
337. Carta de población otorgada por Berenguer de Castellots, abad de Poblet, a los moradores de la Granja de Codoç (21 de Mayo de 1246).
338. Carta de franquicias otorgada por Gerarda de Anglosema, vizcondesa de Bas, como tutora de su hija Sibila, a los habitantes de la villa y valle de Ridaura (18 de Febrero de 1248).

339. Concesión efectuada por Ramón de La Bisbal, abad del monasterio de San Juan de las Abadesas, al rey Jaime I, de una tierra del mismo sita en la parroquia de San Pablo de Segúries, para edificar una nueva población (24 de Julio de 1248).
340. Carta de franquicias concedida por Pedro de Corts, abad del monasterio de Camprodón, a los habitantes de la villa de Camprodón (15 de Octubre de 1248).
341. Carta de población concedida por Poncio de Torrella, obispo de Tortosa, con el cabildo de su Iglesia, a los habitantes de las alquerías de Beniayxó de Tahalfazar (5 de Marzo de 1250).
342. Carta de franquicias otorgada por Roger, conde de Foix y vizconde de Castellbó, a los habitantes de Maranges (19 de Abril de 1250).
343. Carta de población otorgada por Pedro, abad de San Cugat del Vallés, a cuatro moradores de la Punta de la Rápita y sus sucesores (9 de Mayo de 1251).
344. Carta de población otorgada por Bernardo de Terrazola, Guillermo de Castellolí y Guillermo Darocha a los moradores de Alcanar (11 de Mayo de 1252).
345. Carta de población otorgada por Bérnardo de Salanova, comendador hospitalario de Amposta, a los moradores de Alcanar (11 de Mayo de 1252).
346. Carta de franquicias otorgada por Arnaldo de Gurb, obispo de Barcelona, a los habitantes de Granollers (Diciembre de 1252).
347. Carta de población y franquicias concedida por Pedro de Berga a los habitantes de la villa de Berga (? Anterior a 1256).
348. Conventio inter Petrum de Berga et homines de Berga super intestia et exorquia militum et aliorum (14 de Mayo de 1256).

349. Carta de población otorgada por Jaime I, rey, a los habitantes de Llívia (12 de Mayo de 1257).
350. Autorización concedida por Jaime I, rey, al abad y monasterio de San Juan de Ripoll, para poblar una villa en lugar cercano a Vilafranca del Conflent (24 de Mayo de 1260).
351. Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Santa Eugenia a los moradores de Torroella de Montgrí (8 de Noviembre de 1265).
352. Carta de población otorgada por Jaime I, rey, a los habitantes de Figueras (21 de Junio de 1267).
353. Carta de franquicias otorgada por Ramón, vizconde de Cardona, a los hombres de Cervera, poseedores de heredades en el término de Tarroja, llano de la Cardosa (10 de Octubre de 1269).
354. Establecimiento de las granjas de Ciérvoles y Fumada, efectuado por Arnaldo de Uliola, abad de Poblet, a favor de los hombres de Vilosell, para poblarlas y cultivarlas (18 de Marzo de 1271).
355. Establecimiento de la dominicatura de la Torre de Alós, efectuado por Arnaldo de Uliola, abad de Poblet, a favor de un grupo de habitantes de Bellicaire (26 de Febrero de 1272).
356. Llibre de les costums de Tortosa (elaborado sobre la compilación realizada por Pere Tamarit y Pere Gil, de 28 de Noviembre de 1272; entraron en vigor con anterioridad a 1279).
357. Carta de franquicias otorgada por Galcerán de Pinós a los pobladores de Cósol (28 de Diciembre de 1273).
358. Carta de población con franquicias otorgada por Astrugo Ravaya, Batlle de Pedro II, rey, a los habitantes de Palamós (3 de Diciembre de 1279).
359. Cartas de población otorgadas por Pedro II, rey, a los moradores de Tarroja y a los de Calaf, Ivorra, Tornabous y Fuliola (23 de Junio de 1280).

360. Carta de población otorgada por Pedro de Tous, preceptor templario de Miravet, a los moradores de Algars (23 de Enero de 1281).
361. Carta de franquicias otorgada por Pedro de Moncada, maestre templario de Aragón y Cataluña, a los pobladores de Puigreig (28 de Julio de 1281).
362. Donación de un lugar sito en la parroquia de San Julián de Fortiá, por Poncio Hugo, conde de Ampurias, a Ramón, Abad de San Pedro de Rodas, para edificar una nueva villa (31 de Agosto de 1282).
363. Recognoverunt Proceres (concedido a la ciudad de Barcelona, por el rey Pedro II en Enero de 1283).
364. Carta de franquicias otorgada por Gilaberto, abad del monasterio de San Feliú de Guíxols, a la villa de San Feliú de Guíxols, para reedificarla y poblarla después de su destrucción en la guerra con Francia (1 de Agosto de 1287).
365. Carta de franquicias otorgada por Galcerán de Pinós a los moradores de Faners, en la parroquia de San Andrés de Aspar (20 de Febrero de 1289).
366. Carta de franquicias otorgada por Ramón de Urg, señor de Mataplana, a los pobladores de Castellar de N'Huc (28 de Agosto de 1292).
367. Establecimiento de Coma Bardina otorgado por fray Tomás, prior de la Cartuja de Scala Dei, a favor de Pere Morell y su esposa Elvira (19 de Abril de 1294).
368. Carta de franquicias otorgada por Jaime II, rey, a la villa de Figueras (13 de Enero de 1295).
369. Carta de población con franquicias otorgada por Ramón de Urg, señor de Mataplana, a los moradores de Pobla de Lillet (13 de Abril de 1297).

370. Carta de población otorgada por Guillermo de Entenza a los moradores de Almatret (21 de Febrero de 1302).
371. Carta de franquicias otorgada por Jaime II, rey de Mallorca, a los habitantes de Llívia (3 de Enero de 1305).
372. Carta de población otorgada por Jaime II, rey, a los moradores de Vilanova de Meyá (12 de Julio de 1312).
373. Carta de población otorgada por Pedro Arnaldo de Cervera a los moradores de Adar (29 de Marzo de 1314).
374. Orden expedida por Jaime II, rey, a Guillermo de Citgers, Batlle general de Cataluña, para que proveyera al establecimiento de unos pobladores forasteros en los lugares de Alós y Meyá (18 de Octubre de 1314).
375. Carta de franquicias otorgada por fray Ferrer de Montrodó, abad de Santa María de Amer, a los habitantes de la villa de Amer (6 de Enero de 1336).
376. Carta de franquicias concedida por Jaime III, rey de Mallorca, a los habitantes de la villa y valle de Maranges (9 de Febrero de 1336).
377. Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Gurb, señor de Solterra y de la Rovira, a los nuevos moradores de la cellera de San Hilario de Sacalm (26 de Mayo de 1337).
378. Carta de población otorgada por Hugo, vizconde de Cardona, con el asenso de su madre y tutora Beatriz, a los moradores de la Poble de Claramunt (15 de Septiembre de 1344).
379. Carta de franquicias otorgada por Juan I, rey, a los habitantes de la ciudad de Vich (25 de Noviembre de 1388).
380. Consuetudines Episcopatus Gerunde (compilación primitiva elaborada en el s. XIV).

381. Usantiae et Consuetudines Civitatis et Diocesis Gerundae a libris peritorum et usibus utentium observatae et a Thoma Mieres licencia to patrono causarum in unum collectae sub certis titulis. MCDXXXIX.
382. Carta de franquicias otorgada por Galcerán de Pinós a los habitantes de Gironella (24 de Octubre de 1450).
383. Carta de población otorgada por Pedro de Mendoza, abad de Santa Creus y su comunidad, a los moradores del término de Savallá (7 de Abril de 1497).
384. Constitutiones i altres Drets de Catalunya (1704).

BIBLIOGRAFIA

I. COLECCIONES DE TEXTOS DEL DERECHO LOCAL DE LOS SIGLOS IX-XV.

- J. COTS Y FORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis, Barcelona, 1929.
- J.M. FONT RIUS, Carta de Población y Franquicia de Cataluña, vol. I, Madrid-Barcelona, 1969; vol. II, Madrid-Barcelona, 1983.
- E. GACTO FERNANDEZ, Temas de Historia del Derecho. Derecho medieval, Sevilla, 1979.
- A. GARCIA GALLO, Manual de Historia del Derecho español, 9ª ed., vol. II, Madrid, 1982.
- M. GOROSCH, El Fuero de Teruel, Estocolmo, 1950.
- J.M. LACARRA (con la colaboración de A.J. MARTIN DUQUE), Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 1: Estella, San Sebastián, Pamplona, 1969.
- J.M. LACARRA y A.J. MARTIN DUQUE, Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2: Pamplona, Pamplona, 1975.
- P. LOSCERTALES, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946.
- M. MOLHO, El Fuero de Jaca, Zaragoza, 1964.
- T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de los Reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, t. I, Madrid, 1847.
- B. OLIVER, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, vol. IV, Madrid, 1881.
- F. VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, Barcelona, 1984.

- P.N. VIVES Y CEBRIA, Traducción al castellano de los Usages y demás Derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles, t. I, Madrid-Barcelona, 1861.

II. OBRAS GENERALES Y TRABAJOS MONOGRAFICOS SOBRE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL.

- M.L. ALONSO, "La perduración del Fuero Juzgo y el Derecho de los castellanos de Toledo", AHDE, 1978, págs. 335-337.
- J. CERDA, voz "Fueros municipales", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Editoria Seix, t. X, Barcelona, 1971, págs. 395-476.
- B. CLAVERO, Temas de Historia del Derecho. Derecho de los Reinos, Sevilla, 1980.
- H. COING, Las tareas del historiador del Derecho (Reflexiones metodológicas), Sevilla, 1977.
- J. FERNANDEZ VILADRIKH y M.J. PELAEZ, "Prólogo" a la obra de F. VALLS TABERNER, Los usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, Barcelona, 1984, págs. v-xxxvi.
- J.M. FONT RIUS, "Chartes de peuplement et de franchises de la Catalogne", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 5-10.
- J.M. FONT RIUS, "Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 11-34.
- J.M. FONT RIUS, "Franquicias locales en la comarca del Alt Berguedà (Pirineo Catalán)", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, págs. 35-54.
- J.M. FONT RIUS, "Orígenes del Régimen Municipal de Cataluña", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 281-560.

- J.M. FONT RIUS, "Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal de Catalunya", en Estudis sobre el Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 577-592.
- J.M. FONT RIUS, "La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico", en Estudis sobre el Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 55-74.
- J.M. FONT RIUS, "La comarca de Tortosa a raíz de la Reconquista cristiana (1148)", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 75-92.
- J.M. FONT RIUS, "El procés de formació de les Costums de Tortosa", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 141-162.
- J.M. FONT RIUS, "Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 639-658.
- J.M. FONT RIUS, "La carta de seguridad de Ramón Berenguer IV a las morerías de Ascó y Ribera del Ebro (siglo XII)", en Estudis sobre els Drets i Institucions locals en la Catalunya Medieval, Barcelona, 1985, págs. 561-576.
- E. GACTO FERNANDEZ, J.A. ALEJANDRE GARCIA y J.M. GARCIA MARTIN, El Derecho histórico de los pueblos de España, Madrid, 1982.
- J.A. GARCIA DE CORTAZAR y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Barcelona, 1985.
- E. GARCIA GALLO, Manual de Historia del Derecho español, 7ª ed., vol. I, Madrid, 1977.
- A. GARCIA GALLO, "El Derecho local y el Derecho común en Cataluña, Valencia y Mallorca", en Diritto Comune e Diritto locali nelle Storie dell'Europa (Atti del Convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979), Milano, 1980, pp. 230-302.

- A. GARCIA ULECIA, Los factores de diferenciación entre las personas en los Fueros de la Extremadura castellano-leonesa, Sevilla, 1975.
- L. GARCIA DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones Españolas, 4ª ed., Madrid, 1975.
- A. IGLESIA FERREIROS, "La creación del Derecho en Cataluña, en AHDE, XLCII, (1977) págs. 99-423.
- J. LALINDE ABADIA, Iniciación histórica al Derecho español, 2ª ed., Barcelona, 1978.
- B. OLIVER, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, vol. II, Madrid, 1878.
- J.M. PEREZ PRENDES, Historia del Derecho español. Parte general, Madrid, 1973.
- F. TOMAS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho español, 3ª ed., Madrid, 1981.
- F. VALLS TABERNER, "El problema de la formació dels Usatges de Barcelona", en Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, Barcelona, 1984, págs. 9-17.

III. OBRAS GENERALES Y TRATADOS MONOGRAFICOS SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DERECHO INTERREGIONAL.

- M. AGUILAR NAVARRO, Derecho internacional privado, vol. I, t. I., Madrid, 1970.
- M. ALBALADEJO, Derecho civil, I, vol. 1ª, Barcelona, 1985 (vecindad civil, págs. 317 y ss.).
- R. BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, "Comentario al art. 14 del C.c.", en Comentarios a las Reformas del Código Civil, Edit. Tecnos, vol I, Madrid, 1977, págs. 703 y ss.

- R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, "Comentario al art. 14 del C.c.", en Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, EDESA, t.I, Madrid, 1978, págs. 478 y ss.
- R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, "La vecindad civil en los estatutos de Comunidades autónomas", R.J.C., 1981, págs. 366 y ss.
- R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, "Vecindad civil y nacionalidad", A.D.C., 1983, págs. 1149-1167.
- A. BORRAS RODRIGUEZ, Calificación, reenvío y orden público en el Derecho interregional, Bellaterra, 1984.
- F. DE CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de España, t. II, Madrid, 1952 (La vecindad civil, págs. 467-478).
- A. CELAYA IBARRA, "Comentario al art. 5º de la Compilación de Vizcaya y Alava", en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, t. XXV, Madrid, 1979.
- M. COCA PAYERAS, "Vecindad administrativa y vecindad civil. Génesis de un concepto legal", R.J.C., 1981, págs. 133-178.
- M. COCA PAYERAS, "Condición política, vecindad administrativa y vecindad civil balear (En torno a los arts. 6º y 7º del Estatuto de Autonomía", Cuadernos de la Facultad de Derecho, Palma de Mallorca, 1935, págs. 9-50.
- J. DELGADO ECHEVERRIA, "Los Derechos civiles forales en la Constitución", en Estudios sobre la Constitución española de 1978, Zaragoza, 1979, págs. 323-352.
- J.C. FERNANDEZ ROZAS, "Nacionalidad, vecindad civil y vecindad administrativa: consideraciones sobre el desarrollo constitucional", R.E.D.I., 1981, págs. 141-159.
- L. GARAU JUANEDA, "Comunidades Autónomas y Derecho interregional", en Constitución, Comunidades autónomas y D. internacional, Santiago de Compostela, 1983, págs. 111-167.

- R. GENIN-MERIC, La maxime locus regit actum. Nature et fondement, París, 1976.
- J.D. GONZALEZ CAMPOS, Curso de D. internacional privado, I, (polycopiado, Universidad Autónoma de Madrid), Madrid, 1984.
- S.L. GUTERMAN, "The Principle of Personality of Law in the early Middle Ages: a chapter in the evolution of Western Legal Institutions and Ideas", U. Miamis, L.R., vol. 21, 1966, págs. 261-345.
- V. LACARRA, Instituciones de Derecho civil navarro, Pamplona, 1965.
- A. LAINE, Introduction au Droit international privé, t.I, París, 1983.
- J. LALINDE ABADIA, "De la nacionalidad aragonesa a la regionalidad", R.J.C., 1973, págs. 537-580.
- C. LASARTE, Autonomías y Derecho privado en la Constitución Española, Madrid, 1980.
- E.M. MEIJERS, "L'histoire des principes fondamentaux du Droit international privé dans l'Europe occidentale", en Recueil des Cours, Académie de D. international de La Haye, 7. 49 (1934-III), págs.547-683.
- E.M. MEIJERS, Etudes d'Histoire du Droit international privé, París, 1967.
- J. PERE RALUY, "La prueba de la vecindad civil", R.J.C., 1970, págs. 159-173.
- E. PEREZ VERA, Derecho internacional privado. Parte especial, Madrid, 1980.
- J.M. PUIG SALELLA, "La recuperació de l'autonomia legislativa de l'àmbit del Dret privat", R.J.C., 1978, págs. 1055 y ss.
- I. RIBAS ALGUERO, Delimitación jurídica del concepto de vecindad civil y su problemática actual, Tesis doctoral, U. Autónoma de Barcelona, 1984.
- I. RIBAS ALGUERO, La vecindad civil: problemática en torno a su régimen jurídico y a su prueba, Barcelona, 1984.
- E. ROCA I TRIAS, "Unde Cathalanus quasi in Cathalonia stans. La condición de catalán en el Derecho histórico", en RJC, t. 77, año LXXVII, núm. 1, (1978), págs. 7-44.

- J. SAPENA TOMAS, "Vecindad civil y conflictos interregionales", en Curso Monográfico sobre la Ley de Bases para la Modificación del Título Preliminar del Código Civil, Valencia, 1975, págs. 207-287.
- F.C. DE SAVIGNY, Sistema de Derecho romano actual, t. VI, Madrid, 1879, traducción de J. MESIA Y M. POLEY, de la ed. francesa de M.CH. QUENOUX.
- J. STOUFF, "Etude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au XIIe siècle", R. Bourguingnonne, 1894, págs. 1-65, 273-310 (traducción italiana, en D. internazionale, 1967, págs. 80-134).
- V.L. SIMO SANTONJA, Aportación al estudio de los estatutarios españoles, Valencia, 1959.
- E. VITTA, "Interlocal Conflict of Laws", vol. III, Cap. 9 de la International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen, 1985.

REUNIDO EL TRIBUNAL QUE SUYERBE EN EL DIA DE
LA FECHA ACORDA CALIFICAR LA PRESENTE TESIS
DOCTORAL CON LA CENSURA DE Apto. cum laude

MADRID 6 de junio de 1936

~~Francisco Valera~~

Yodriguez y Carile

E. Pina Vela

~~Alfonso Jara~~

